

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nº 955

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA
DURANTE EL EJERCICIO 2009 POR LAS ENTIDADES ESTATALES QUE,
DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en sesión de 20 de diciembre de 2012, el **Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las Entidades estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas**, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido en el artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento.

ÍNDICE

I. CONSIDERACIONES GENERALES	1
II. INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA Y LA REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS	2
III. TRÁMITE DE ALEGACIONES.....	2
IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN	3
IV.1. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN.....	4
IV.1.1. Instituto Cervantes.....	6
IV.1.2. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.....	9
IV.2. MINISTERIO DE JUSTICIA	11
IV.2.1. Mutualidad General Judicial	12
IV.2.2. Agencia Española de Protección de Datos.....	14
IV.3. MINISTERIO DE DEFENSA	17
IV.3.1. Instituto Social de las Fuerzas Armadas.....	20
IV.3.2. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas	22
IV.3.3. Servicio Militar de Construcciones.....	24
IV.3.4. Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas	26
IV.3.5. Cría Caballar de las Fuerzas Armadas	28
IV.3.6. Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa	29
IV.3.7. Centro Nacional de Inteligencia	31
IV.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.....	32
IV.4.1. Comisionado para el Mercado de Tabacos.....	36
IV.4.2. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas	38
IV.4.3. Instituto de Estudios Fiscales	38
IV.4.4. Instituto Nacional de Estadística.....	40
IV.4.5. Parque Móvil del Estado.....	41
IV.4.6. Consorcio “Aletas”	43
IV.4.7. Agencia Estatal de Administración Tributaria.....	43
IV.4.8. Comisión Nacional de la Competencia	46
IV.4.9. Comisión Nacional del Mercado de Valores	49
IV.5. MINISTERIO DEL INTERIOR	52
IV.5.1. Dirección General de Tráfico.	55
IV.5.2. Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.....	57
IV.5.3. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.....	59
IV.6. MINISTERIO DE FOMENTO	60
IV.6.1. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas	77
IV.6.2. Centro Nacional de Información Geográfica	78

IV.6.3. Agencia Estatal de Seguridad Aérea	79
IV.7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN	80
IV.7.1. Consejo Superior de Deportes.....	82
IV.8. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.....	84
IV.8.1. Servicio Público de Empleo Estatal	89
IV.8.2. Fondo de Garantía Salarial.....	95
IV.8.3. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.....	96
IV.8.4. Consejo Económico y Social	100
IV.9. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	103
IV.9.1. Centro Español de Metrología	106
IV.9.2. Instituto de Turismo de España	107
IV.9.3. Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.....	109
IV.9.4. Oficina Española de Patentes y Marcas	110
IV.9.5. Comisión del Mercado de Telecomunicaciones	112
IV.9.6. Comisión Nacional de Energía.....	115
IV.9.7. Consejo de Seguridad Nuclear	119
IV.10. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	122
IV.10.1. Confederación Hidrográfica del Cantábrico.....	139
IV.10.2. Confederación Hidrográfica del Duero	142
IV.10.3. Confederación Hidrográfica del Ebro	143
IV.10.4. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.....	145
IV.10.5. Confederación Hidrográfica del Guadiana	148
IV.10.6. Confederación Hidrográfica del Júcar	152
IV.10.7. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.....	154
IV.10.8. Confederación Hidrográfica del Segura	155
IV.10.9. Confederación Hidrográfica del Tajo.....	158
IV.10.10. Entidad Estatal de Seguros Agrarios	160
IV.10.11. Fondo Español de Garantía Agraria.....	161
IV.10.12. Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos	161
IV.10.13. Mancomunidad de los Canales del Taibilla	163
IV.10.14. Parque de Maquinaria.....	165
IV.10.15. Parques Nacionales.....	166
IV.10.16. Agencia Estatal de Meteorología	169
IV.10.17. Agencia para el Aceite de Oliva	169
IV.11. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	170
IV.11.1. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	172

IV.11.2. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado	173
IV.12. MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL.....	175
IV.12.1. Instituto Nacional de Administración Pública.	177
IV.12.2. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado	177
IV.13. MINISTERIO DE CULTURA	180
IV.13.1. Biblioteca Nacional	182
IV.13.2. Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	184
IV.13.3. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	185
IV.13.4. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	187
IV.13.5. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	189
IV.13.6. Museo Nacional del Prado.....	190
IV.13.7. Universidad Nacional de Educación a Distancia	194
IV.13.8. Consorcio de la Ciudad de Toledo.....	197
IV.14. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL	199
IV.14.1. Instituto Nacional de Consumo	203
IV.14.2. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	204
IV.14.3. Instituto de Salud Carlos III.....	206
IV.14.4. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.....	207
IV.15. MINISTERIO DE VIVIENDA.....	211
IV.16. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN	213
IV.16.1. Universidad Internacional Menéndez Pelayo	214
IV.16.2. Instituto de Astrofísica de Canarias	216
IV.16.3. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.....	217
IV.16.4. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.....	219
IV.16.5. Instituto Español de Oceanografía.....	221
IV.16.6. Instituto Geológico y Minero de España	222
IV.16.7. Consejo Superior de Investigaciones Científicas	224
IV.16.8. Consorcio para el Equipamiento y la Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.....	225
IV.17. MINISTERIO DE IGUALDAD	227
IV.17.1. Consejo de la Juventud de España	230
IV.17.2. Real Patronato Sobre Discapacidad	231
V. CONCLUSIONES.....	231

V.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS.....	231
V.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	232
V.3. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LAS FASES DE PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.....	233
V.4.- CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y DE LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS.....	234
VI. RECOMENDACIONES.....	235
VI.1. EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS	235
VI.2. EN RELACION CON LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	235
VI.3. EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LAS FASES DE PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS .	235
VI.4. EN RELACIÓN CON LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.....	236

ANEXOS

(1): Índice conforme a la organización administrativa fijada en el R.D. 542/2009, de 7 de abril

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AAO	Agencia para el Aceite de Oliva
AEAT	Agencia Estatal de la Administración Tributaria
AEMPS	Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AENOR	Asociación Española de Normalización y Certificación
AEPD	Agencia Española de Protección de Datos
AESA	Agencia Estatal de Seguridad Aérea
AESAN	Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
AGE	Administración General del Estado
BOE	Boletín Oficial del Estado
CEDEX	Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CEM	Centro Español de Meteorología
CES	Consejo Económico y Social
CHC	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
CHD	Confederación Hidrográfica del Duero
CHE	Confederación Hidrográfica del Ebro
CHG	Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
CHGa	Confederación Hidrográfica del Guadiana
CHJ	Confederación Hidrográfica del Júcar
CHMS	Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
CHS	Confederación Hidrográfica del Segura
CHT	Confederación Hidrográfica del Tago
CJE	Consejo de la Juventud de España
CMT	Comisión del Mercado de Tabacos
CNC	Comisión Nacional de la Competencia
CNE	Comisión Nacional de Energía
CNI	Centro Nacional de Inteligencia
CNIG	Centro Nacional de Información Geográfica
CNMV	Comisión Nacional del Mercado de Valores
CSN	Consejo de Seguridad Nuclear
DGT	Dirección General de Tráfico
DOCE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
ENESA	Entidad Estatal de Seguros Agrarios
ETAP	Estación de Tratamiento de Aguas Potables
FEGA	Fondo Estatal de Garantía Agraria
FOGASA	Fondo de Garantía Salarial
FROM	Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la pesca y Cultivos Marinos
ICAC	Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
IEF	Instituto de Estudios Fiscales
INC	Instituto Nacional Del Consumo
INE	Instituto Nacional de Estadística
INSHT	Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo
IPC	Índice de Precios al Consumo
IRMCDACM	Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
ISDEFE	Ingeniería de Sistemas para la Defensa Española
ISFAS	Instituto Social de las Fuerzas Armadas
IVA	Impuesto al Valor Añadido

LCSP	Ley de Contratos del Sector Publico
LFTCu	Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
LGP	Ley General Presupuestaria
LO	Ley Orgánica
LPE	Ley de Presupuestos del Estado
LRJAP	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
MCT	Mancomunidad de Canales de Taibilla
MEH	Ministerio de Economía y Hacienda
MF	Ministerio de Fomento
MIGD	Ministerio de igualdad
MITC	Ministerio de Industria Turismo y Comercio
MMAMRM	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
MSPS	Ministerio de Sanidad y Política Social
MTIN	Ministerio de Trabajo e Inmigración
MUFACE	Mutualidad General de Funcionarios civiles
MUGEJU	Mutualidad General Judicial
OAPM	Organismo Autónomo Parque de Maquinaria
OOAA	Organismos Autónomos
PME	Parque Móvil del Estado
PPT	Pliego/s de Prescripciones Técnicas
PPTP	Pliego/s de Prescripciones Técnicas particulares
RC	Reconocimiento de Crédito
RGLCAP	Reglamento General de la Ley de de Contratos de las Administraciones Publicas
RPD	Real Patronato sobre Discapacidad
SEPE	Servicio publico Estatal
TRLCAP	Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
TRLCSP	Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
UE	Unión Europea
UNED	Universidad Nacional de Educación a Distancia
UTE	Unión Temporal de Empresas

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El presente Informe se ha elaborado en cumplimiento de los artículos 11 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu), y 39 y 40 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), en los que se hace referencia expresa a la contratación celebrada por la Administración del Estado y demás entidades del sector público como una de las áreas a las que, de modo particular, deberá dirigirse la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.

La fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las Entidades del Sector Público Estatal sometidas a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas fue incluida en el Programa de Fiscalizaciones para el año 2011, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en la sesión celebrada el 24 de febrero del mismo año, y se ha elaborado conforme a las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno de 30 de junio de 2011.

Con independencia de que por el Tribunal se realicen fiscalizaciones de determinados contratos o de la contratación celebrada por una concreta Entidad y de que la actividad contractual esté indisolublemente comprendida en el conjunto de la gestión económico-financiera de las entidades del sector público, dentro de la actividad fiscalizadora del Tribunal ha venido siendo habitual la programación de fiscalizaciones extendidas a la contratación realizada por una parte importante de los organismos y entidades que integran dicho sector. A este planteamiento responde la denominada “Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las entidades estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas”.

El ámbito de esta fiscalización se extiende a la actividad contractual del sector público estatal, habiéndose examinado los contratos adjudicados por los órganos de la Administración General del Estado, organismos públicos y demás entidades sujetas a lo establecido en la LCSP. La fiscalización no incluye los subsectores públicos autonómico y local, que forman parte del Informe anual que sobre la actividad económico-financiera desarrollada por ambos subsectores elabora regularmente el Tribunal de Cuentas, y la de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, que es objeto de fiscalización separada, por acuerdo de su Pleno.

Para facilitar a las entidades el cumplimiento de lo establecido en los artículos 40.2 de la LFTCu y 29 de la LCSP, el Tribunal de Cuentas ha dictado la *Instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico*, aprobada por su Pleno en sesión de 26 de marzo de 2009, que sustituyó a la aprobada el día 30 de marzo de 2005, precisando la información y la documentación relativas a los contratos celebrados que los entes públicos deben remitir al Tribunal de Cuentas.

A tal fin, se requiere de todos los órganos de contratación, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidos, la remisión de una relación de todos los contratos celebrados en el ejercicio precedente, excluidos los contratos menores. Por otro lado, en concordancia con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, para las entidades que hayan de aplicar los procedimientos contemplados en dicho texto legal, se relacionan los contratos, según tipo y cuantía, de los que dentro de los plazos legalmente fijados habrá de enviarse al Tribunal un extracto de su expediente.

La Instrucción diferencia, por tanto, una doble remisión: una generalizada, a efectuar por todas las entidades públicas, que se materializa en la remisión al Tribunal de Cuentas de una relación anual de la contratación celebrada en el ejercicio precedente, así como de las incidencias en la ejecución de los contratos y otra restringida a los departamentos ministeriales, organismos y entidades

públicas cuya actividad contractual se encuentra sujeta íntegramente a la LCSP, que se concreta en el envío del extracto de los expedientes de los contratos celebrados en el ejercicio correspondiente, extracto que contendrá los documentos que señala la Instrucción.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 40.1 de la LFTCu, la fiscalización ha comprendido los distintos momentos de la preparación, perfección y adjudicación, así como, en su caso, la ejecución, modificación y extinción de los contratos. No obstante, teniendo en cuenta la amplitud del objeto material de la fiscalización, ésta se ha acotado mediante la aplicación de criterios de selección que han permitido delimitar las verificaciones a efectuar. A tal efecto, y dadas las significativas diferencias entre los distintos subsectores y organismos, en la determinación de la muestra analizada no se ha aplicado únicamente un criterio cualitativo y cuantitativo, conforme se detalla en el epígrafe IV.

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas, el objeto de la fiscalización ha sido comprobar los extractos de los expedientes de los organismos y entidades cuya actividad se rige íntegramente por la LCSP. Asimismo, se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y los pliegos de prescripciones técnicas (PPT), verificando su adecuación a la legalidad y a los fines de la contratación. La fiscalización se ha completado con el análisis de las principales incidencias producidas en la ejecución de los contratos analizados, finalizado en el ejercicio analizado.

II. INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA Y LA REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

La Instrucción General sobre remisión al Tribunal de Cuentas de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos celebrados en el ejercicio inmediato anterior establece los modelos en los que las entidades obligadas deberán relacionar los contratos celebrados con expresión de su modalidad, procedimiento de adjudicación e importe, así como de los plazos para su envío al Tribunal. Además, la Instrucción señala los documentos que integran el extracto del expediente de contratación que los órganos de contratación deben remitir al Tribunal de Cuentas, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del mismo.

La información contenida en las relaciones recibidas en el Tribunal de Cuentas correspondientes al ejercicio 2009, con expresión de los contratos adjudicados por las entidades que de acuerdo con la LCSP tienen la consideración de Administraciones Públicas, se detallan en el anexo con expresión del número de expedientes de contratos que se incluyen dichas relaciones, así como su importe.

Esta información proviene de las relaciones remitidas al Tribunal, si bien en algunos casos éstas no estaban completas, como se deduce del hecho de que se han recibido extractos de expedientes de contratos no incluidos en las mismas.

Por lo que se refiere a los expedientes remitidos en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la LCSP, el anexo ofrece una relación diferenciada por departamentos ministeriales y restantes entidades públicas estatales con indicación del número de expedientes, importe y procedimientos de adjudicación de los contratos.

III. TRÁMITE DE ALEGACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LFTCu, los resultados de la fiscalización incluidos en el presente Informe fueron remitidos a los responsables de cada una de las entidades fiscalizadas y a quienes ostentaron dicha condición durante el ejercicio 2009.

Los responsables de una parte de las entidades han formulado alegaciones, que, en su caso y cuando procedía, fueron tenidas en cuenta y modificado el texto del Informe en la parte correspondiente.

El Tribunal no ha tenido en cuenta las alegaciones que son meras explicaciones de las actuaciones de la entidad o plantean criterios, consideraciones y argumentaciones carentes de fundamento o no soportadas documentalmente.

IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

El análisis de los contratos se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los diversos tipos y formas de adjudicación, distinguiendo los contratos administrativos típicos (obras, consultoría y asistencia y de servicios, suministro, y gestión de servicios públicos) de los contratos administrativos especiales y de los contratos privados.

Dado el elevado número de contratos recibidos en el Tribunal de Cuentas, se ha estimado necesario efectuar una selección de los contratos que habían de ser objeto de examen. En este sentido, especificando los criterios cuantitativos contemplados en las Directrices Técnicas, se han fiscalizado, como actuación general, los contratos de obras de importe superior a 1.803, 901 y 450 miles de euros, según hubieran sido adjudicados mediante subasta, concurso o procedimiento negociado, respectivamente. Respecto a los contratos de consultoría y asistencia y de servicios, las cuantías para su selección han sido de 901 miles para los adjudicados mediante concurso y 300 miles para los adjudicados mediante procedimiento negociado, analizándose la práctica totalidad de los adjudicados mediante subasta, debido a su escasa incidencia. Finalmente, en relación con los contratos de suministro, se han examinado los adjudicados mediante concurso por importe superior a 901 miles y, si lo hubieran sido mediante procedimiento negociado, los superiores a 300 miles, fiscalizándose la práctica totalidad de los contratos de esta naturaleza adjudicados mediante subasta, por idéntica circunstancia que en los de suministro.

Respecto de la fiscalización de los contratos sujetos a la LCSP se han seguido los mismos criterios cuantitativos, si bien referidos, para cada tipo de contrato, a los procedimientos de adjudicación previstos en la LCSP, es decir, al procedimiento abierto con el precio como único criterio de adjudicación, al procedimiento abierto con más de un criterio de adjudicación, o al procedimiento negociado, respectivamente, equivalentes a la subasta, al concurso y al procedimiento negociado establecidos en el TRLCAP.

Por otro lado, con independencia de los criterios cuantitativos indicados anteriormente, se han incluido en la muestra aquellos contratos que sobresalen por la singularidad de la actividad u objeto a que se refieren, por los riesgos que pudieran presentarse en su cumplimiento, o por cualquier otra circunstancia significativa.

En consonancia con los criterios expuestos, en el análisis de la contratación de cada una de las entidades se detalla el ámbito, número e importe de la muestra seleccionada para su fiscalización.

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el examen de los contratos seleccionados, diferenciando en sucesivos epígrafes los correspondientes a los distintos departamentos ministeriales y organismos autónomos a ellos adscritos, agencias estatales y restantes entidades públicas estatales sometidas al régimen establecido en el TRLCAP y en la LCSP.

IV.1. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 34 expedientes de contratación, por importe de 24.553 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 18 expedientes por importe de 16.206 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	14	41	14.495	59
Suministros	2	6	961	4
Otros	2	6	750	3
TOTAL	18	53	16.206	66

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

Los Órganos de contratación del Ministerio han cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	401	80.192	34	24.553	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En el PCAP del contrato número 1 (servicios de telecomunicaciones del Ministerio) no se indicaron los medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Zona Europea, y en el PCAP del contrato número 2 (servicios de limpieza de las dependencias del Ministerio) no se establecieron

los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

En el pliego del contrato número 1 para la valoración del criterio de adjudicación “valoración económica” se estableció fórmula cuya aplicación hizo posible que ofertas económicas diferentes obtuviesen los mismos puntos. Esta fórmula supone atribuir al criterio precio un peso real distinto a su peso teórico lo cual es contrario al principio de economía que debe informar la actuación contractual del sector público.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

La documentación preparatoria del contrato número 2 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos no correspondiéndose con las exigencias en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

En el contrato número 2 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Ministerio, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

En los contratos números 1 y 2 no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

El informe de valoración técnica de las ofertas presentadas en el contrato número 2 carece de motivación, pues simplemente figura en el expediente un cuadro, con la puntuación global atribuida a cada criterio sin expresar las razones que condujeron a obtener las citadas puntuaciones no estando en consecuencia justificada la adjudicación de este contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto al contrato número 1 pues no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución. Respecto al contrato número 2, se ha remitido la documentación acreditativa de la prórroga del contrato hasta diciembre de 2011 pero a pesar de que el plazo de ejecución de este contrato ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su recepción.

IV.1.1. Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes ha remitido al Tribunal de Cuentas 5 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 3.979 miles de euros, habiendo sido fiscalizados en su totalidad, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	2	100	2.454	100
Servicios	3	100	1.525	100
Suministros	--	--	--	--
Otros	--	--	--	--
TOTAL	5	100	3.979	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el Instituto en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, el Instituto Cervantes ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 91 contratos por un importe global de 12.635 miles de euros. No obstante, en esta certificación la Entidad ha incluido indebidamente 11 incidencias de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, por importe de 1.538 miles de euros, cuando de acuerdo con la Instrucción del Tribunal de Cuentas, dichas incidencias deberían haber sido únicamente objeto de comunicación.

Esta información ha sido contrastada con los datos publicados a través de su página Web en su perfil de contratante, habiéndose comprobado que sólo figuran publicados 18 contratos adjudicados en el ejercicio 2009.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 5 contratos por importe de 3.979 miles de euros. Por el contrario, el Instituto no informó, durante el periodo fiscalizado, sobre las incidencias de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, ni sobre los contratos finalizados, como requiere la Instrucción del Tribunal, indicando en alegaciones que no hubo incidencia alguna y la finalización no se produjo en el ejercicio 2009. En ejercicios posteriores ha informado sobre dos prórrogas y una revisión de precios de contratos adjudicados en el ejercicio 2009.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del Instituto Cervantes de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
I.Cervantes	R	91	12.635	5	3.979			2	1
1	(a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato.								
2	R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.								

El Instituto publicó a través de su página Web su perfil de contratante, de acuerdo con el artículo 42 de la LCSP, en la que ofrece información sobre las convocatorias en curso, las adjudicaciones provisionales y definitivas. No obstante, la Entidad no difundió su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado (www.contrataciondelestado.es), tal y como exige el artículo 309 de la LCSP.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, verificando su adecuación a la LCSP y a las demás disposiciones legales aplicables, así como a los fines de la contratación. De su fiscalización, se han detectado las siguientes deficiencias:

En dos expedientes, los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyeron, entre los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, el curriculum, la titulación y los cursos del equipo de trabajo ofertado, cuando dichos elementos debían de haberse valorado en la fase previa de admisión a la licitación, con objeto de evaluar la aptitud de las empresas, de acuerdo con el artículo 67 de la LCSP. Precisamente, estos pliegos exigieron que se acreditase la solvencia técnica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 e) de la LCSP, que se refiere a las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

En ambos pliegos se estableció que la oferta más baja admitida no podría desviarse más de un 20% de la media aritmética de las ofertas presentadas. Esta valoración de las ofertas económicas en función de la media aritmética fue contraria al principio de economía que debe regir la ejecución del gasto público, y, además, no resultó acorde con el artículo 136 de la LCSP, al establecer el carácter desproporcionado de la oferta en atención a un solo criterio. Es criterio de este Tribunal que el carácter desproporcionado no ha de tener en cuenta un solo criterio aislado pues una oferta económica baja puede ser viable teniendo en cuenta que oferta el licitador respecto a otros aspectos del contrato.

Asimismo, los pliegos de prescripciones técnicas de un expediente detallaron la metodología de valoración de cada uno de los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, lo que resultó contrario con lo dispuesto en los artículos 67.2 y 68.3 del RGLCAP. En el caso de otro expediente, los pliegos de prescripciones técnicas se refirieron al objeto y duración del contrato.

El Instituto Cervantes no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyeron ninguna cláusula sobre la preferencia, en la adjudicación, de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las ofertas más ventajosas, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Las deficiencias detectadas en el análisis de los requisitos formales de los expedientes de contratación fiscalizados se exponen en este epígrafe, así como en un cuadro anexo, en el que se indica la documentación que no ha sido aportada.

La Entidad aportó como certificado de existencia de crédito el documento contable de retención de crédito, cuando ambos documentos difieren en su naturaleza. El artículo 93.3 de la LCSP preceptúa que se ha de incorporar al expediente de contratación el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, sin que el documento contable RC pueda sustituir al documento administrativo previo de existencia de crédito.

El envío del anuncio de la licitación de un expediente al DOCE se produjo con anterioridad a la resolución de aprobación del expediente por el órgano de contratación.

De acuerdo con las actas de las mesas de contratación de 20 de febrero y de 22 de junio de 2009, en dos expedientes, únicamente se procedió a la apertura pública de las ofertas económicas, práctica que es contraria al carácter secreto de las proposiciones, establecido en el artículo 129.2 de la LCSP. Como se ha señalado en anteriores Informes, el carácter secreto de las proposiciones comprende no sólo la oferta económica sino todos los aspectos susceptibles de ser valorados para la adjudicación, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración previamente establecidos.

En un expediente no quedó acreditado suficientemente con arreglo a qué criterios se contrataron los servicios de la empresa a la que le fue encomendada la elaboración del proyecto ejecutivo de obras, el asesoramiento en la elección de la empresa constructora así como la dirección y supervisión de las obras. Como motivos para efectuar la contratación de los servicios de una determinada empresa, la Entidad alude de forma genérica y sin más detalle al precio, al cumplimiento de los requisitos de la licitación, a la experiencia de dicha empresa y a anteriores servicios prestados al Instituto.

En un expediente los pliegos de cláusulas administrativas particulares atribuyeron, a los criterios cuya cuantificación dependía de un juicio de valor, una ponderación superior que a los criterios cuantificables mediante la aplicación de una fórmula. De conformidad con el artículo 134 de la LCSP, la valoración de los criterios subjetivos debía de haberse encargado a un comité de expertos, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato, u organismo técnico especializado y realizarse previamente a la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia. Sin embargo, en este expediente la valoración de los criterios de adjudicación se realizó en una fase única, sin la intervención de dicho comité, y mediante un informe técnico elaborado por uno de los miembros de la mesa de contratación. Asimismo, este informe no motivó las puntuaciones asignadas, limitándose a exponer lo que ofrecían cada uno de los licitadores, lo que vulneró los principios de publicidad y transparencia, propios de la contratación administrativa. La Entidad, en alegaciones, señala que los criterios cuantificables mediante una fórmula suponen en realidad un 60% del total, si bien para alcanzar ese porcentaje se incluyen las mejoras al

servicio, sin que de los pliegos ni del expediente se desprenda que esas mejoras hayan sido cuantificadas por medio de la aplicación de una determinada fórmula.

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional de un expediente se produjo sin respetar los plazos previstos en el artículo 135 de la LCSP.

En un expediente el contrato formalizado por las partes, a diferencia de lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares no contempló la posibilidad de prórroga, circunstancia que resultó contraria al principio de transparencia que deber operar en la contratación pública.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

Si bien en los expedientes analizados no constaban, inicialmente, ni las facturas ni los documentos acreditativos de los pagos efectuados, ni tampoco las actas formales de recepción de los contratos examinados, todos esos documentos fueron aportados por el Instituto en trámite de alegaciones.

IV.1.2. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 15 expedientes de contratación, por importe de 8.457 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 5 expedientes por importe de 3.311 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	3	38	2500	42
Suministros	1	20	561	28
Otros	1	50	250	56
TOTAL	5	33	3.311	39

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
AECID	R	202	47.755	15	8.457	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

El PCAP del contrato número 1 no tiene fecha y tampoco indica los medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras al contrato. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

La documentación preparatoria del contrato número 1 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genérico no correspondiéndose con las exigencias en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

El contrato número 1 se adjudicó mediante el procedimiento negociado sin publicidad con base en la causa prevista en el apartado d) del artículo 154 de la LCSP. Dicha causa consiste en que por razones técnicas, artísticas o relacionadas con la protección de derechos exclusivos, “*el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado*”. Sin embargo en el expediente no consta la acreditación de que el adjudicatario fuera el único que podía realizar la prestación contratada, por lo que no se encuentra justificada la celebración del contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

En cuanto a la fiscalización de la ejecución del contrato número 1 no ha sido posible realizar la misma pues a pesar de que el plazo de ejecución de este contrato concluyó en abril de 2011 no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su completa ejecución habiéndose aportado únicamente un certificado de recepción de diciembre de 2009 y su correspondiente factura de enero de 2010 por importe de 70.000 euros correspondientes a los servicios prestados en el primer año de los 3 años de ejecución del contrato.

IV.2. MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministerio de Justicia ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 59 expedientes de contratación, por importe de 138.997 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 26 expedientes por importe de 60.759 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	2	3	10.302	7
Servicios	23	39	49.026	35
Suministros	1	2	1.431	1
Otros	0	0	0	0
TOTAL	26	44	60.759	44

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

Los Órganos de contratación del Ministerio han cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	157	84.684	59	138.997	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En los PCAP de los contratos números 1 a 3 y 5 y 6 aunque se indicaron los medios establecidos en los artículos 64, 65 y 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Zona Europea, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

En los pliegos de los contratos números 2, 4 y 6 para la valoración del criterio de adjudicación "precio" se establecieron una serie de fórmulas por tramos cuya aplicación hizo posible que ofertas económicas diferentes obtuviesen los mismos puntos. Estas fórmulas suponen atribuir al criterio

precio un peso real distinto a su peso teórico lo cual es contrario al principio de economía que debe informar la actuación contractual del sector público.

En los pliegos de los contratos números 2 a 6 no se especificaron la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes al criterio de adjudicación “proyecto técnico”. Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En los contratos número 1 a 6 no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

La documentación preparatoria de los contratos 2 y 4 a 6 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas esta redactada en unos términos excesivamente genérico no correspondiéndose con las exigencias en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

En los contratos números 1, 2 y 6 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Ministerio, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

Los informes de valoración técnica de las ofertas presentadas en los contratos números 1, 3 y 5 carecen de motivación, pues simplemente figuran en los expediente unos listados o cuadros, con la puntuación global atribuida a cada criterio sin expresar las razones que condujeron a obtener las citadas puntuaciones.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto a los contratos números 4 y 6 pues a pesar de que el plazo de ejecución de estos contratos ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución. Respecto al contrato número 1 se han remitido 2 certificados de conformidad con los servicios prestados objeto del mismo pero no el acta de recepción y respecto al contrato número 2, contrato que constaba de 13 lotes, se han remitido 13 Comunicaciones al Tribunal de Cuentas de prórroga de los 13 lotes, encontrándose actualmente en fase de ejecución.

IV.2.1. Mutualidad General Judicial

La Mutualidad General Judicial (en lo sucesivo MUGEJU) ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 19 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 1.190 miles de euros, tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.2.1-1.

Este Tribunal ha analizado una muestra para su fiscalización de 3 contratos por un importe de 823 miles de euros que representan el 16% de los contratos remitidos y el 69% del importe total, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Servicios	2	67	801	72
Suministro	1	6	22	30
TOTAL	3	16	823	69

Los resultados obtenidos de la Fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por MUGEJU en el ejercicio 2009 se exponen a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento por MUGEJU de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
MUGEJU	R	50	1.825	19	1.190	--	--	1	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior MUGEJU ha remitido la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009. La información remitida por MUGEJU relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular en el Perfil de Contratante publicado en su propia sede electrónica y en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el BOE, con el siguiente resultado:

- MUGEJU ha cumplido la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP.
- Asimismo, este Tribunal ha comprobado que figuran en la relación certificada de contratos siete expedientes que, sin embargo, no aparecen publicados en el Perfil de Contratante, tal y como resulta obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Del análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas de los contratos, así como de los aspectos formales de los extractos de los expedientes de contratación, no se han observado incidencias significativas.

No obstante, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, MUGEJU no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Sin embargo, cabe citar un contrato cuyo PCAP incluyó una cláusula en la que se estableció la preferencia en la adjudicación, en caso de igualdad en la puntuación obtenida por las empresas licitadoras, a favor de las empresas con trabajadores minusválidos y de aquellas empresas que acreditasen tener distintivos de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, se trata de una posibilidad que figura prevista con carácter potestativo por la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el análisis del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, no se han observado incidencias reseñables.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Este Tribunal ha analizado el cumplimiento por MUGEJU de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que se hayan observado retrasos en los pagos.

IV.2.2. Agencia Española de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) remitió al Tribunal de Cuentas 8 contratos correspondientes al ejercicio 2009, 2 de ellos de oficio y los otros 6 a solicitud del Tribunal de Cuentas, por un importe total de 1.313 miles de euros, habiendo sido fiscalizados en su totalidad, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	--	--	--	--
Servicios	8	100	1.313	100
Suministros	--	--	--	--
Otros	--	--	--	--
TOTAL	8	100	1.313	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por la AEPD en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, la AEPD ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 21 contratos por un importe global de 2.072 miles de euros. Esta información ha sido contrastada con los datos publicados a través de su página Web en su perfil de contratante, habiéndose comprobado que todos los contratos publicados figuraban a su vez en la relación certificada.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 2 contratos por importe de 1.054 miles de euros. Sin embargo, la Entidad no ha remitido información sobre los contratos finalizados durante el periodo fiscalizado, así como las incidencias que se hubieren podido producir durante su ejecución, como requiere la citada Instrucción del Tribunal.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte de la AEPD de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones¹			
Entidad	R/C²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
AEPD	R	21	2.071	8	1.313				
1 (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato. 2 R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.									

La AEPD publicó a través de su página Web su perfil de contratante, de acuerdo con el artículo 42 de la LCSP, en la que ofrece información sobre las convocatorias en curso, las adjudicaciones provisionales y definitivas. No obstante, la Entidad no difundió su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado ("www.contrataciondelestado.es"), tal y como exige el artículo 309 de la LCSP.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, verificando su adecuación a la LCSP y a las demás disposiciones legales aplicables, así como a los fines de la contratación. De su fiscalización, se han detectado las siguientes deficiencias:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente exigieron, como medio acreditativo de la solvencia técnica, económica y financiera de los licitadores, el estar en posesión

de una determinada clasificación. Sin embargo, no concretaron estos medios para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, a pesar de que a éstas no les era exigible aportar clasificación, de acuerdo con el artículo 55 de la LCSP, limitándose a señalar que en este caso deberían acreditar su solvencia.

El cuadro de características de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de dos expedientes no precisaron los medios para acreditar la solvencia técnica, económica y financiera de los licitadores, como exige el artículo 67.7 del RGLCAP, a pesar de que los pliegos tipo remitían expresamente a ese cuadro para determinar los documentos que han de aportar las empresas. Los pliegos de un expediente tampoco señalaron el plazo de garantía, sin que se haya justificado en el expediente que no resultaba necesario, de acuerdo con el artículo 205 de la LCSP.

Los pliegos de otros dos expedientes preveían como procedimiento de adjudicación el negociado sin publicidad. Sin embargo, no incluyeron los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, habían de ser objeto de negociación con las empresas, como requiere el artículo 160 de la LCSP, señalando, en su lugar, unos criterios de valoración y una puntuación mínima exigible para la apertura de la oferta económica. La LCSP configura al procedimiento negociado, como un procedimiento de adjudicación con un menor grado de publicidad y de concurrencia competitiva, pero en el que los órganos de contratación han de negociar directamente con los empresarios invitados de acuerdo con los criterios indicados en los pliegos, para adaptar sus ofertas a los requisitos exigidos en los pliegos, circunstancia que no se ha observado en el expediente analizado.

Como criterios que han de servir de base para la adjudicación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de tres de los expedientes fiscalizados incluyeron el personal ofertado de los licitadores, la adecuación y los certificados de perfiles, cuando se trataban de extremos legalmente establecidos como criterios de admisión de los licitadores, que deben ser tenidos en cuenta previamente para evaluar la aptitud de la empresa adjudicataria, de acuerdo con el artículo 67 de la LCSP. En este mismo sentido, los pliegos de prescripciones técnicas establecían la necesidad de incluir en el sobre que contenía la proposición técnica la documentación relativa a la empresa y al equipo de trabajo, información toda ella que debe exigirse y servir para acreditar la solvencia de los licitadores y que, por tanto, debe ser conocida por el órgano de contratación en un momento anterior a la apertura del sobre que contiene la oferta técnica.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de otros tres expedientes preveían las “mejoras” presentadas por los licitadores, entre los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, sin precisar su contenido y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación. Por el contrario, son los pliegos de prescripciones técnicas del expediente 145/09 los que precisaron las mejoras objeto de valoración, contraviniendo el artículo 68.3 del RGLCAP, que no permite que los pliegos de prescripciones técnicas contengan cláusulas que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, los pliegos de prescripciones técnicas de tres expedientes se referían al contenido de las ofertas, a los criterios de adjudicación, a la duración del contrato o a los métodos de valoración, cuando el artículo 67.2 del RGLCAP prevé que estos extremos figuren en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Esta misma circunstancia se produjo en otro expediente cuyos pliegos de prescripciones técnicas hacían mención al objeto del contrato, cuando el artículo 67.2, apartado a) del RGLCAP prevé que este extremo figure en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Respecto de la oferta económica, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de dos expedientes consideraban las ofertas inferiores a 590 y 560 miles de euros, respectivamente, desproporcionadas o temerarias. Sin embargo, los pliegos de prescripciones técnicas de estos

misimos expedientes emplearon otros criterios para definir los valores anormales o desproporcionados.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de tres expedientes contenían una cláusula sobre la preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más ventajosas, de las proposiciones presentadas por aquellas empresas, dedicadas específicamente a la promoción e inserción social de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio. En esta disposición figuraban, entre otras, las mujeres desempleadas entre 16 y 45 años o las mujeres que prestaran servicios en profesiones y ocupaciones establecidas en la Orden ministerial de 16 de septiembre de 1998, para el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino. Sin embargo, la citada disposición había sido derogada por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En la resolución que acuerda el inicio de un expediente se indicaba que la Entidad precisaba contratar los servicios de asesoría de prensa durante un periodo de tiempo. No obstante, no se justificó documentalmente la necesidad que motivó la contratación del referido servicio.

La AEPD contrató un servicio adjudicándolo mediante el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el artículo 154.d) de la LCSP. En el mismo se entregaría un obsequio a los asistentes a una Conferencia Internacional organizada por la propia Entidad. Sin embargo, en el expediente no se justificó la selección del obsequio, a pesar de que se limitaba de tal modo el objeto, que sólo podía ser encomendado a un único empresario.

Tres de los expedientes examinados se adjudicaron mediante el procedimiento negociado sin publicidad, sin que se haya podido constatar que la Entidad haya negociado con las empresas invitadas.

IV.3. MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministerio de Defensa ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 708 expedientes de contratación, por importe de 1.255.145 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 245 expedientes por importe de 453.281 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	22	3	32.879	3
Servicios	130	18	284.777	23
Suministros	103	15	135.425	11
Otros	0	0	0	0
TOTAL	245	35	453.281	36

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

Han incumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados, los siguientes órganos de contratación: la Comandancia de Baleares, las Brigadas San Marcial y Alfonso XIII, el Cuartel General de la Armada, Intendencia de Ferrol, el Arsenal de Las Palmas, la Flota y la Fuerza de Infantería de Marina.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	3.862	1.448.087	708	1.255.145	0	0
¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.							
² R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.							

No ha sido posible realizar la fiscalización de los contratos números 1, 2, 3 y 8 pues de todos los documentos de remisión obligatoria según lo dispuesto en la Instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos celebrados, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de marzo de 2009 (BOE de 11 de abril) únicamente se han remitido el anuncio de licitación del contrato publicado en el BOE y la primera hoja del documento de formalización del contrato.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En el pliego del contrato número 4 no se previó que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no debían aportar clasificación, sino solvencia tal y como establece el artículo 63 de la LCSP. Esta deficiencia supuso una restricción a la concurrencia.

En el PCAP del contrato número 5 si bien se previó que las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea debían acreditar su solvencia con determinados medios, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de ellos para considerar solvente al licitador y en el PCAP del contrato número 7 no se precisaron los medios para acreditar su solvencia, sino que se simplemente se hizo una referencia genérica a los medios de solvencia señalados en los artículos 64 y 67 de la LCSP. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

En el PCAP del contrato número 7 se estableció que la valoración de las ofertas económicas se realizaría en función de su proximidad a la baja media resultante de todas las ofertas presentadas a la respectiva licitación. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de

ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria de los contratos números 4, 5, 6 y 7 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido, del artículo 22 de la LCSP.

En los contratos números 5, 6 y 7 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Ministerio, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

No se ha justificado el procedimiento ni los criterios de adjudicación elegidos en los contratos números 5, 6 y 7 incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 LCSP.

El contrato número 5 cuyo objeto fue la contratación del servicio auxiliar de servicio y control, fue tramitado a través del procedimiento de urgencia, que implica una reducción de plazos que, especialmente en cuanto al tiempo para presentar ofertas, supone una restricción de la concurrencia de licitadores, por ello su utilización es permitida por el artículo 96 de la LCSP solamente cuando la necesidad del contrato sea inaplazable o su adjudicación sea preciso acelerarla por razones de interés público. En el expediente del contrato la urgencia se basa en “la necesidad de continuar prestando estos servicios a partir del 1 de enero de 2009 dada la expiración del contrato en vigor el 31 de diciembre de 2008”, no estando por tanto justificada la utilización del procedimiento de urgencia para la preparación y adjudicación de este contrato.

En los informes de valoración de las ofertas presentadas en las licitaciones de los contratos números 5 y 6 el baremo para la valoración del precio de las ofertas establecido en los correspondientes PCAP, no se aplicó en toda su extensión, sino que mediante la utilización de diversas fórmulas se redujeron significativamente los márgenes de las puntuaciones otorgadas entre las ofertas mas caras y las ofertas mas económicas. Como consecuencia de estas valoraciones las bajas ofertadas tuvieron una relevancia significativamente menor de la que habría debido resultar, por consiguiente, esta valoración no es conforme con el principio de economía en la gestión de fondos públicos.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto a los contratos números 1 a 3 y 6 a 8, pues a pesar de que el plazo de ejecución de estos contratos ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

El contrato número 4 cuyo objeto fue la contratación de las obras de reposición del edificio S-690 en la Base Aérea de Zaragoza fue objeto de una modificación que supuso un incremento del precio del 49% y se fundamentó en que “la nueva ubicación del polvorín de línea supone que los accesos del mismo a la zona de polvorines vayan a cambiar necesitándose una reparación a fondo de los viales existentes en la zona”. No se ha acreditado en el expediente de contratación que estas actuaciones respondan a causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de elaboración del proyecto primitivo circunstancia ésta que exige el artículo 202 de la LCSP para que pueda adjudicarse un contrato modificado. Por lo tanto, no se considera justificada la modificación. La recepción de las obras se produjo el 28 de enero de 2010.

IV.3.1. Instituto Social de las Fuerzas Armadas

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (en lo sucesivo ISFAS) ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 4 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 5.482 miles de euros, tal y como se refleja en el siguiente cuadro que se adjunta como anexo IV.3.1-1.

Este Tribunal ha analizado la totalidad de los contratos remitidos, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Servicios	3	100	4.557	100
Gestión de Servicios públicos	1	100	925	100
TOTAL	4	100	5.482	100

Los resultados obtenidos de la Fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el ISFAS en el ejercicio 2009 se exponen a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de contratos al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.3.1-2 se reflejan los datos relativos al cumplimiento por el ISFAS de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
ISFAS	R	36	7.138	4	5.482	--	--	14	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior el ISFAS ha remitido la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009. Asimismo, este Tribunal ha recibido la comunicación

de la formalización de 14 expedientes de prórroga de otros contratos anteriores. La información remitida por el ISFAS relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular en el Perfil de Contratante, publicado en su propia sede electrónica y en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el BOE.

Debe señalarse al respecto que el ISFAS ha dado adecuado cumplimiento a la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los expedientes de sus contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superen los importes fijados en el artículo 29 de la LCSP.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

En el análisis de los PCAP y de los PPTP de los expedientes de contratación tramitados por el ISFAS se ha observado lo siguiente:

- En tres contratos de servicios los PCAP excluyeron la posibilidad de aplicar la revisión de precios regulada en los artículos 77 y siguientes de la LCSP, salvo en el caso de que fuera acordada la prórroga del contrato una vez transcurrido el plazo de duración inicial establecido en dos años, es decir, únicamente a partir del tercer año de ejecución.

El ISFAS motivó esta exclusión de la revisión de precios en la circunstancia de haber “... *tenido en cuenta al confeccionarse el presupuesto...*” las posibles variaciones del precio, por lo que en definitiva anticipó una hipotética variación de precios en el cálculo del presupuesto, lo que no resultó acorde con lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, según el cual, los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, “*atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación*”.

Así, por ejemplo, en uno de los contratos analizados consta un presupuesto calculado para el año 2010 incrementado en el 4,6% con respecto al presupuesto previsto para el ejercicio 2009, así como un presupuesto para el año 2011 incrementado en el 5,6% con respecto al presupuestado para el año 2010, lo que puesto en relación con el hecho de que el IPC interanual del ejercicio 2010 alcanzó únicamente el 1% y el IPC del ejercicio 2011 fue del 2%, demuestra lo antieconómico de la actuación del ISFAS en este ámbito, tal y como ha manifestado reiteradamente este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización.

Además, para el caso de prórroga, en el que el PCAP sí admitía la revisión de precios, el ISFAS estableció que se aplicaría el “*IPC publicado correspondiente a los 12 meses anteriores a la fecha del acuerdo de inicio del expediente de prórroga*”, lo que, en definitiva, implica que la cuantía de la revisión para un mismo período pueda variar dependiendo de la mayor o menor antelación con la que el órgano de contratación inicie el expediente de prórroga, lo que resulta improcedente, como también ha señalado este Tribunal anteriormente respecto de la contratación del propio ISFAS.

- En cuatro contratos fueron utilizados como criterios objetivos de adjudicación los certificados de garantía de la calidad, los recursos materiales o la experiencia de las empresas licitadoras, factores que, en su caso, pueden ser utilizados como medios acreditativos de la solvencia técnica de las empresas licitadoras o de la aptitud de los licitadores, pero que no deben ser valorados como criterios de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53.2, 67 y 134.1 de la LCSP.

Como ejemplo de esta deficiencia cabe citar el contrato en el cual la valoración (con un máximo de hasta 20 puntos) de la experiencia como criterio de adjudicación fue determinante en el resultado la

adjudicación del Lote 1, que recayó en favor de una empresa que, sin embargo, había presentado la oferta más cara.

- En un contrato de tramitación anticipada el PCAP incluyó una cláusula, en cuya virtud, si el contrato se formalizaba en el ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su ejecución (como de hecho sucedió), la adjudicación quedaba sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente. La inclusión en el PCAP de esta condición suspensiva de la existencia de crédito, no contemplada, dentro del ámbito de la Administración General del Estado, ni por la LCSP, que en su artículo 94.2 (artículo 110.2 del TRLCSP) modifica el régimen jurídico de la tramitación anticipada establecido en el artículo 69.4 del derogado TRLCAP, ni tampoco por la LGP, que regula la cuestión en su artículo 47, conlleva a juicio de este Tribunal un incremento del riesgo de inseguridad jurídica en la contratación, por lo que debería motivarse adecuadamente su necesidad y explicitarse en el PCAP las consecuencias de su aplicación.

- Por último, cabe señalar que el ISFAS en el ejercicio 2009 no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

- En el contrato el documento de formalización no contempló los precios unitarios ofertados por la empresa adjudicataria, tal y como resultaba obligatorio teniendo en cuenta que el sistema de determinación del precio del contrato previsto en el pliego fue precisamente el de precios unitarios (artículo 71.3c) del RGLCAP).

- En este mismo contrato citado, según consta en la documentación incorporada al expediente, la evaluación de los criterios de adjudicación no cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no fue previa a la evaluación de los criterios de cuantificación automática, tal y como exige el artículo 134 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

- En un contrato fueron aplicadas penalidades por importe de 790 euros por deficiencias en la ejecución del servicio por parte de la empresa adjudicataria.

- Este Tribunal ha analizado el cumplimiento por parte del ISFAS de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que se hayan observado retrasos en los pagos.

IV.3.2. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 16 expedientes de contratación, por importe de 24.457 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 4 expedientes por importe de 13.102 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	1	33	5.755	66
Servicios	2	20	3.344	41
Suministros	1	100	4.002	100
Otros	0	0	0	0
TOTAL	4	25	13.101	52

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
INTA	R	149	32.985	16	24.457	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En los PCAP de los contratos números 1 y 2 si bien se previó que las empresas licitadoras debían acreditar su solvencia con determinados medios, no se precisaron estos medios, sino que se simplemente se hizo una referencia genérica a los medios de solvencia señalados en los artículos 64, 66 y 67 de la LCSP. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

En lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria del contrato 2 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido, del artículo 22 de la LCSP.

El contrato número 2 cuyo objeto fue la asistencia de sistemas informáticos, fue tramitado a través del procedimiento de urgencia, que implica una reducción de plazos que, especialmente en cuanto al tiempo para presentar ofertas, supone una restricción de la concurrencia de licitadores, por ello su utilización es permitida por el artículo 96 de la LCSP solamente cuando la necesidad del contrato sea inaplazable o su adjudicación sea preciso acelerarla por razones de interés público. En el expediente del contrato la urgencia se basa sin mayor explicación, en “que es imprescindible adjudicar este expediente para asegurar el funcionamiento de los sistemas informáticos” no estando por tanto justificado que se haya utilizado el procedimiento de urgencia para la preparación y adjudicación de este contrato. Además, no se ha justificado el procedimiento ni los criterios de adjudicación elegidos incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 LCSP.

En el contrato número 2 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

No ha sido posible realizar la fiscalización de la ejecución de los contratos números 1 y 2 pues a pesar de que el plazo de ejecución de los mismos ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

IV.3.3. Servicio Militar de Construcciones

El Servicio Militar de Construcciones ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 9 expedientes de contratación, por importe de 7.056 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 3 expedientes por importe de 3.245 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	3	33	3.245	46
Servicios	0	0	0	0
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	3	33	3.245	46

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Servicio Militar de Construcciones	R	277	40.562	9	7.056	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En los PCAP de los contratos números 1 a 3 aunque se indicaron los medios establecidos en los artículos 64 y 65 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

No se ha justificado el procedimiento ni los criterios de adjudicación elegidos en el contrato número 1 incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 LCSP.

El contrato número 2 cuyo objeto fueron las obras del edificio administrativo del Centro Universitario de la Defensa en la Academia Militar de Zaragoza, fue tramitado a través del procedimiento de urgencia, que implica una reducción de plazos que, especialmente en cuanto al tiempo para presentar ofertas, supone una restricción de la concurrencia de licitadores, por lo que su utilización es permitida por el artículo 96 de la LCSP solamente cuando la necesidad del contrato sea inaplazable o su adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. En este expediente, la urgencia se basa en "la exigencia de que el edificio esté en uso al comienzo del curso académico 2010" no estando por tanto justificado que se haya utilizado el procedimiento de urgencia para la preparación y adjudicación de este contrato.

El informe de valoración de las ofertas presentadas en el contrato número 1 consistió en un simple cuadro de puntuaciones asignadas en cada uno de los criterios de adjudicación, a los licitadores, sin ninguna motivación, lo que supone una vulneración del artículo 135 de la LCSP, no estando por lo tanto justificada la adjudicación de este contrato.

Al ser los contratos números 1 a 3 contratos de obras, debería haberse efectuado una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realizó, lo que no se llevó a cabo, incumpliendo lo dispuesto en la Disposición Final 2ª de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En trámite de alegaciones se han remitido las actas de recepción y de liquidación de los contratos números 1 a 3.

IV.3.4. Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas

El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 19 expedientes de contratación, por importe de 13.127 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 6 expedientes por importe de 5.442 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados en el Tribunal de Cuentas:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	1	17	1.929	21
Servicios	5	38	3.513	88
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	6	32	5.442	41

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
INVIFAS	R	81	14.092	19	13.127	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En el pliego de cláusulas administrativas del contrato número 1 no se previó que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no debían aportar clasificación, sino solvencia tal y como establece el artículo 63 de la LCSP. Esta deficiencia supuso una restricción a la concurrencia. Además, se estableció en la valoración de las ofertas económicas que “se considerarán desproporcionadas aquellas ofertas que sean un 10% inferiores a la media aritmética de las ofertas recibidas”. A juicio de este Tribunal en el concurso con varios criterios de adjudicación, la temeridad no puede establecerse en atención a un solo criterio aislado, pues una oferta económica baja puede ser viable teniendo en cuenta lo que oferta el licitador respecto a otros aspectos del contrato (artículo 136 de la LCSP).

En el PCAP del contrato número 2 aunque se indicaron los medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación. Además, se estableció la valoración del criterio del precio de la oferta en función de su proximidad a la media de baja de las ofertas presentadas a la licitación. Esta actuación no es conforme con el principio de economía que debe informar la contratación pública.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

El informe de valoración de las ofertas presentadas en el contrato número 2 consistió en un simple cuadro de puntuaciones asignadas en cada uno de los criterios de adjudicación, a los licitadores, sin ningún tipo de motivación, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP y no estando por lo tanto justificada la adjudicación de este contrato.

Al ser el contrato número 1 un contrato de obras, en virtud de la Disposición Adicional 14ª del TRLCAP, debería haberse efectuado una retención adicional de crédito del 10% del importe de

adjudicación, en el momento en que éste se realizó y no se llevó a cabo, incumpliendo lo dispuesto en la Disposición Final 2ª de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

No ha sido posible realizar la fiscalización de la ejecución de los contratos números 1 y 2 pues a pesar de que el plazo de ejecución de los mismos ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

IV.3.5. Cría Caballar de las Fuerzas Armadas

La Cría Caballar de las Fuerzas Armadas ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 6 expedientes de contratación, por importe de 2.231 miles de euros, de los cuales se ha fiscalizado 2 expedientes por importe de 951 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	2	33	951	43
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	2	33	951	43

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	R	35	5.608	6	2.231	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En el PCAP del contrato número 1 si bien se previó que las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea debían acreditar su solvencia con determinados medios, no se

precisaron estos medios sino que se simplemente se hizo una referencia genérica a los medios de solvencia señalados en los artículos 64 y 67 de la LCSP. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria del contrato número 1 en la que se determinó la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido, del artículo 22 de la LCSP.

En el contrato número 1 se adjunta un informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

El informe de valoración de las ofertas presentadas en el contrato número 1 consistió en un simple cuadro de puntuaciones asignadas en cada uno de los criterios de adjudicación, a los licitadores, sin ningún tipo de motivación, no estando por lo tanto justificada la adjudicación de este contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

No ha sido posible realizar la fiscalización de la ejecución del contrato pues a pesar de que el plazo de ejecución ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

IV.3.6. Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa

La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 2 expedientes de contratación, por importe de 6.602 miles de euros, de los cuales se ha fiscalizado 1 expediente por importe de 5.900 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	50	5.900	97
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	50	5.900	97

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa	R	2	6.662	2	6.662	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
² R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En el PCAP del contrato fiscalizado no se precisaron los medios para acreditar la solvencia de los licitadores, sino que se simplemente se hizo una referencia genérica a los medios de solvencia señalados en los artículos 64 y 67 de la LCSP. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria del contrato en la que se determinó la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido, del artículo 22 de la LCSP.

En el contrato se adjunta un informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

No se ha justificado el procedimiento ni los criterios de adjudicación elegidos incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

No ha sido posible realizar la fiscalización de la ejecución del contrato pues a pesar de que el plazo de ejecución ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

IV.3.7. Centro Nacional de Inteligencia

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió, a solicitud del Tribunal de Cuentas, 3 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 4.587 miles de euros, habiendo sido fiscalizados en su totalidad, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	1	100	843	100
Servicios	2	100	3.744	100
Suministros	--	--	--	--
Otros	--	--	--	--
TOTAL	3	100	4.587	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el CNI en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, el CNI ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado, salvo los contratos menores, ascendiendo a un total de 156 contratos, por un importe global de 23.008 miles de euros.

Asimismo, debe señalarse que se han fiscalizado 3 contratos por importe de 4.587 miles de euros.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del CNI de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CNI	R	156	23.008	3	4.587				
¹ (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. ² (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato. R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.									

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

c) Cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en la fase de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

El CNI adjudicó los tres expedientes fiscalizados mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Dos de ellos se adjudicaron directamente, justificándose debidamente en el expediente la ausencia de concurrencia. En el tercero de los contratos, por el contrario, se solicitaron tres ofertas, resultando adjudicataria la empresa que presentó la oferta económicamente más ventajosa.

De conformidad con el artículo 160 de la LCSP, los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalaron los criterios que serían objeto de negociación. Estos aspectos fueron puestos de manifiesto a las empresas invitadas, si bien no hay constancia documental en los dos expedientes adjudicados directamente de la negociación con los candidatos.

La garantía definitiva de uno de los contratos de servicios era de fecha posterior a la formalización del contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

En los dos contratos de servicios la Entidad no formalizó el acta de recepción formal del objeto del contrato, al que alude el artículo 205 de la LCSP. En su lugar, se incorporó en las facturas un sello de conformidad del jefe de la unidad petitionaria, de acuerdo con lo previsto en la Resolución comunicada 83/2003, del Secretario de Estado Director del CNI, por la que se regula el régimen económico administrativo de la contratación.

IV.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El Ministerio de Economía y Hacienda (en adelante, MEH) tenía adscritos en este ejercicio cinco organismos autónomos. En este epígrafe se recogen los resultados de las comprobaciones realizadas respecto de la contratación celebrada por los órganos del Ministerio, así como, en apartados específicos, la correspondiente a los referidos organismos autónomos, además de la relativa a un consorcio.

La Administración General contaba en este ejercicio con 83 órganos de contratación, de los que 31 correspondían a los servicios centrales y 52 a las Delegaciones.

Por el MEH se remitieron al Tribunal de Cuentas un total de 35 expedientes primitivos, por un importe de 26.178 miles de euros. Atendiendo a los tipos de contratos, el 5,7% fue de obras, el 85,7% de servicios y el 8,6% de suministro. En cuanto a la forma de adjudicación, la más empleada fue el procedimiento abierto con varios criterios, en un 85,7% de los casos.

El cuadro siguiente refleja la muestra analizada de los expedientes primitivos.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	1	50	1.866	62,9
Servicios	9	30	15.062	68,3
Suministro	1	33,3	181	15,6
TOTAL	11	31,4	17.109	65,4

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

Se han recibido relaciones de los contratos celebrados correspondientes a 53 órganos de contratación y certificaciones negativas de otros 20.

Según las relaciones recibidas, los órganos del Ministerio adjudicaron un total de 212 expedientes, por un importe total de 39.492 miles de euros. Por otra parte, se adjudicaron 5.283 expedientes de contratación centralizada, por un importe de 666.990 miles de euros.

Se remitieron asimismo por el MEH 77 prórrogas o modificaciones, por un importe total de 38.028 miles de euros. No se ha recibido información ni documentación alguna sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones. La información y documentación enviada por los órganos de contratación es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS (en miles de euros)									
ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos	C								
D.G. de Fondos Comunitarios	R	2	40						
D.G. de Servicios y Coordinación Territorial	R	2	254						
D.G. de Tributos	R	2	76						
D.G. del Patrimonio del Estado	R	24	12.118						
Dirección General de Presupuestos	C								
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas	C								
Subdirección General de Compras	R	5.263	656.209						
Secretaría General del Patrimonio del Estado	R	11	3.674						
Secretaría General de Hacienda	C								
Secretaría General de Presupuestos y Gastos	C								
Secretaría General de Financiación Territorial / Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales	R	5	180						
Secretaría General Técnica	C								
Subdirección General de Recursos Humanos	C								
Inspección General	C	-	-						
Junta de Contratación	R	45	21.506	21	20.534	1	23	51	
Oficialía Mayor	R	2	189						
Subsecretaría	R	4	3.411	2	2.968	1	1		
Intervención General de la Administración del Estado	C								
Tribunal Económico-Administrativo Central	C								
Delegaciones, 43	R	135	7.825	12	2.676	1	2		
Delegaciones, 10 (x)	C								
TOTALES	73	5.495	705.482	35	26.178	3	26	51	
(x) Álava, Ávila, Ceuta, Córdoba, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Palencia, Las Palmas y Vizcaya.									

No se ha recibido la relación de los contratos celebrados o su certificación negativa de los 14 órganos de contratación siguientes:

- Órganos con competencia originaria: Ministro, Secretaría de Estado de Economía.
- Órganos con competencia delegada: Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, Dirección General de Financiación Internacional, Dirección General de Política Económica, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Dirección General del Catastro, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional, Subdirección General de Administración Financiera e Inmuebles.

De acuerdo con los datos de la Plataforma de Contratación del Estado, no se incluyeron en las relaciones cuatro expedientes que, por su cuantía, deberían haber figurado. Dichos expedientes corresponden a las Delegaciones de Economía y Hacienda en Cuenca (dos casos), Pontevedra (un

caso), y Teruel (un caso) Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de 19 expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación. Corresponden a los siguientes órganos de contratación: Junta de Contratación (13), Subsecretaría (1) y las Delegaciones de Economía y Hacienda de Baleares (4), y Tenerife (1)

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los PCAP no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, o estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (disposición adicional 6ª de la LCSP).

-Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Los PCAP no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan los PCAP de expedientes concretos:

-En un expediente de la Subsecretaría de Economía y Hacienda no se ha regulado debidamente la subcontratación, ya que el PCAP se limita a remitirse al artículo 210 de la LCSP.

-En un expediente de la Delegación de Economía y Hacienda de Tenerife, si bien se han establecido los medios para acreditar la solvencia de los licitadores no se han determinado los mínimos que han de alcanzarse en cada uno de ellos.

-En un expediente de la Delegación de Economía y Hacienda de Baleares, aunque se determinaron los medios para acreditar la solvencia técnica de los licitadores, no se establecieron los mínimos que habían de alcanzarse.

- No se han limitado en el PCAP los gastos de publicidad de la licitación a asumir por el adjudicatario en un expediente, adjudicado por la Delegación de Economía y Hacienda de Tenerife.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que

señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

En concreto, en un expediente adjudicado por la Subsecretaría no consta resolución motivada que establezca la improcedencia de la revisión de precios.

Por otra parte, cabe señalar la existencia de las siguientes deficiencias en la documentación remitida:

- En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, la memoria justificativa para la contratación del servicio carece de fecha.
- El PCAP incluido en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no consta aprobado en un expediente adjudicado por la Delegación de Economía y Hacienda de Tenerife. En este mismo expediente, y en otro adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, el pliego de prescripciones técnicas no consta aprobado.
- El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en un expediente adjudicado por la Delegación de Economía y Hacienda de Tenerife, en cuatro adjudicados por la Junta de Contratación del Ministerio y en uno adjudicado por la Subsecretaría.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Un contrato fue resuelto por incumplimiento del plazo de ejecución con la consiguiente incautación de la fianza definitiva.

IV.4.1. Comisionado para el Mercado de Tabacos

El Comisionado para el Mercado de Tabacos (en adelante, CMT) remitió al Tribunal de Cuentas un total de seis expedientes primitivos, todos ellos de servicios, por un importe de 2.331 euros. En cuanto a la forma de adjudicación, cinco se adjudicaron por procedimiento abierto con varios criterios y uno por procedimiento negociado sin publicidad. Se han fiscalizado tres de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	3	50	2.042	87,6
Suministro	0	0	0	0
TOTAL	3	50	2.042	87,6

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La documentación enviada por el CMT se ciñe a las relaciones de contratos y a los expedientes primitivos, sin que se hayan remitido prórrogas ni modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

La información y documentación recibida es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS
(en miles de euros)

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Comisionado para el Mercado de Tabacos	R	6	2.331	6	2.331				
TOTALES	1	6	2.331	6	2.331	0	0	0	0

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general los PCAP no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, o estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (disposición adicional 6ª de la LCSP).

-Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Los PCAP no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan a los PCAP de expedientes concretos:

-En un expediente, en relación con los criterios de adjudicación, hay una preponderancia de los criterios subjetivos, sin que se prevea la existencia de un comité de expertos u organismo técnico especializado que realice la evaluación de las ofertas conforme a estos criterios, según establece el artículo 134.2 de la LCSP. En trámite de alegaciones se indicó que por resolución expresa de la presidencia del organismo se nombró el citado comité, que actuó evaluando las ofertas y elevando su informe técnico.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

En concreto, en un expediente no constan el pliego de prescripciones técnicas aprobado por el órgano de contratación, la fiscalización previa de la Intervención, la resolución motivada aprobando el expediente de contratación y el gasto y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, la publicación de la adjudicación en el BOE, la acreditación de la clasificación del adjudicatario, los documentos acreditativos de hallarse el adjudicatario al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, los documentos contables de disposición del gasto y la notificación de la adjudicación de los licitadores.

En un expediente no consta la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares. Por otra parte, el anuncio de la licitación en el BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad y la fecha de la adjudicación que figura en el contrato no coincide con la de la resolución de adjudicación.

IV.4.2. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en adelante, ICAC) ha remitido únicamente al Tribunal de Cuentas una prórroga de un expediente de contrato de servicios, que ha sido fiscalizada.

El ICAC ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye dos expedientes por un importe de 171 miles de euros. Ninguno de ellos era, por su cuantía, de remisión obligatoria al Tribunal de Cuentas.

La información y documentación enviada por el ICAC es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS (en miles de euros)									
ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas	R	2	171	0	0			1	
TOTALES	1	2	171	0	0			1	

IV.4.3. Instituto de Estudios Fiscales

El Instituto de Estudios Fiscales (en adelante, IEF) remitió al Tribunal de Cuentas cinco expedientes primitivos, por un importe de 914 miles de euros.

El cuadro siguiente refleja la muestra analizada de los expedientes primitivos.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	25	378	57,4
Suministro	1	100	305	100
TOTAL	2	40	683	74,7

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El IEF ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 24 expedientes por un importe 1.694 miles de euros.

Con posterioridad a la remisión de los expedientes se han remitido al Tribunal de Cuentas cinco comunicaciones sobre cumplimiento de la prestación.

De otra parte, el IEF remitió tres expedientes de prórroga, por un importe total de 952 miles de euros. De ellos, dos fueron de servicios, y uno de suministro.

No se ha recibido información ni documentación sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS (en miles de euros)									
ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Instituto de Estudios Fiscales	R	24	1.694	5	914	5		3	
TOTALES	1	24	1.694	5	914	5		3	

De conformidad con la relación de contratos, se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de un expediente que, por su cuantía, debería haberse enviado.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general los PCAP no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, o estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas

que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (disposición adicional 6ª de la LCSP).

-Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones iguallen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Los PCAP no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

Con independencia de ello, el análisis realizado también ha permitido comprobar que en un expediente no se han establecido los medios para acreditar la solvencia de los licitadores ni los mínimos que han de alcanzarse en cada uno de ellos, limitándose el PCAP a efectuar una mera remisión a los artículos 64 y siguientes de la LCSP.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En dos expedientes, el documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar no consta en escritura pública. En ambos expedientes, por otra parte, el anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad.

IV.4.4. Instituto Nacional de Estadística

El Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE) remitió al Tribunal de Cuentas 26 expedientes primitivos, por un importe total de 33.986 miles de euros. El cuadro siguiente refleja la muestra analizada de los expedientes primitivos.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	4	16,7	5.281	17,4
Suministro	1	50	668	54,7
TOTAL	5	19,2	5.949	18,8

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El INE ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 86 expedientes por un importe de 35.874 miles de euros.

Con posterioridad a la remisión de los expedientes se han remitido al Tribunal de Cuentas 18 comunicaciones sobre cumplimiento de la prestación.

De otra parte, ha remitido cinco prórrogas, todas ellas de contratos de servicios, por importe de 3.637 miles de euros. No se ha recibido información ni documentación alguna sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

La información y documentación enviada por el IEF es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Instituto de Estudios Fiscales	R	86	35.874	26	33.986	18		5	
TOTALES	1	86	35.874	26	33.986	18		5	

Además de las 18 comunicaciones ya citadas, según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de otro expediente.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general los PCAP no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, o estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (disposición adicional 6ª de la LCSP).

-Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Los PCAP no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Se ha observado que el anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en dos expedientes.

IV.4.5. Parque Móvil del Estado

El Parque Móvil del Estado (en adelante, PME) remitió al Tribunal de Cuentas tres expedientes, por un importe total de 2.113 miles de euros. El cuadro siguiente refleja la muestra analizada de los expedientes primitivos.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	50	416	37,8
Suministro	1	100	1.012	100
TOTAL	2	66,7	1.428	67,6

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El PME ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 27 expedientes por importe de 2.842 miles de euros.

Con posterioridad a la remisión de los expedientes se han enviado al Tribunal de Cuentas dos comunicaciones sobre cumplimiento de la prestación.

De otra parte, el PME remitió la prórroga de un contrato de servicios. No se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

La información y documentación enviada por el PME es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Parque Móvil del Estado	R	27	2.842	4	2.267	2		1	
TOTALES	1	27	2.842	3	2.113	2		1	

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general los PCAP no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, o estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (disposición adicional 6ª de la LCSP).

-Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Los PCAP no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan a los PCAP de expedientes concretos:

-En un expediente no se establece la forma de acreditar la solvencia de los licitadores de los Estados miembros de la Unión Europea, efectuándose una mera remisión a los artículos de la ley.

- No se han limitado en el PCAP los gastos de publicidad de la licitación a asumir por el adjudicatario en otro expediente.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Se ha observado que en un expediente, la autorización de la Ministra para contratar no contiene la fecha. La retención de crédito efectuada es posterior al acuerdo de adquisición de los vehículos.

IV.4.6. Consorcio “Aletas”

Este consorcio no ha remitido documentación alguna al Tribunal de Cuentas. De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, adjudicó al menos un expediente que debería haberse incluido en una relación de contratos y haber sido remitido a este Tribunal. Dicho expediente, así como otro también correspondiente al ejercicio 2009 del que no se tenía noticia, fue remitido al Tribunal de cuentas en trámite de alegaciones, por lo que no ha podido ser objeto de fiscalización.

IV.4.7. Agencia Estatal de Administración Tributaria

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) remitió al Tribunal de Cuentas 68 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 63.603 miles de euros, habiendo sido fiscalizados 14 de estos expedientes, por un importe de 23.055 miles de €, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	1	100	1.050	100
Servicios	10	19	19.016	41
Suministros	3	21	2.989	19
Otros	--	--	--	--
TOTAL	14	21	23.055	36

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por la AEAT en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, la AEAT ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 251 contratos por un importe global de 102.200 miles de euros. Esta información ha sido contrastada con los datos publicados a través de la Plataforma de Contratación del Estado, habiéndose comprobado que se publicaron 133 contratos adjudicados en el ejercicio fiscalizado, de los cuales 53 fueron adjudicados por las Delegaciones Especiales de la AEAT, 70 por la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la AEAT y 10 por la Dirección General de la AEAT.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 68 contratos por importe de 63.603 miles de euros y comunicó y remitió en el ejercicio 2009 la documentación correspondiente a 32 expedientes de prórroga y 9 modificados. Igualmente, ha comunicado 21 prórrogas, 24 modificaciones y 16 revisiones de precio de contratos adjudicados en el ejercicio fiscalizado. Si bien la Entidad no remitió inicialmente información sobre la finalización de los contratos, como requiere la citada Instrucción del Tribunal, dicha carencia fue subsanada durante el trámite de Alegaciones.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte de la AEAT de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
AEAT	R	251	102.200	68	63.603	49	33	53	16
1 (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato. 2 R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.									

Los perfiles del contratante de los distintos órganos de contratación de la Agencia Tributaria se difundieron a través de la Plataforma de Contratación del Estado ("www.contrataciondelestado.es"), según establece el artículo 309 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, verificando su adecuación a la LCSP y a las demás disposiciones legales aplicables, así como a los fines de la contratación. De su fiscalización, se han detectado las siguientes deficiencias:

En uno de los expedientes fiscalizados la AEAT utilizaba un modelo tipo de pliego de cláusulas administrativas particulares con las adaptaciones necesarias al tipo de contrato de que se trata.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cinco expedientes exigieron, como medio acreditativo de la solvencia técnica, económica y financiera de los licitadores, el estar en posesión de una determinada clasificación. Sin embargo, no concretaron estos medios para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, a pesar de que a éstas no les es exigible aportar clasificación, de acuerdo con el artículo 55 de la LCSP. Únicamente incluyeron una previsión respecto de la acreditación de su capacidad de obrar mediante la presentación de certificados emitidos por los Registros de sus países de origen.

Igualmente, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de dos expedientes incluyeron, entre los criterios que han de servir de base para la adjudicación, la aportación de certificados de gestión medioambiental, cuando estos extremos son medios justificativos de la solvencia técnica o profesional.

No consta el informe de la asesoría jurídica respecto de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente.

Los pliegos de prescripciones técnicas de dos expedientes concretaron los criterios de adjudicación, desarrollando las cuestiones objeto de valoración, cuando el artículo 67.2 del RGLCAP prevé que estos extremos figuren en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Lo mismo ocurre en otros tres expedientes cuyos pliegos de prescripciones técnicas hacían mención expresa al objeto del contrato. A este respecto, el artículo 68.3 del mismo texto legal no permite que los pliegos de prescripciones técnicas contengan cláusulas que deben figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Con carácter general, la AEAT no estableció en la contratación fiscalizada la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad. Por el contrario, sí incluyó condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo previsto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. En este sentido, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente contenían, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la LCSP, una condición especial en la que se exigía que, entre el personal que vaya a ejecutar la prestación objeto del contrato fuera la menos un 40% de mujeres, refiriéndose esta obligación a las nuevas contrataciones de personal. Igualmente, los pliegos de tres de los expedientes fiscalizados también incluían una cláusula como condición especial referida a la cuestión de igualdad de género.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Las deficiencias detectadas en el análisis de los requisitos formales de los expedientes de contratación fiscalizados se exponen en este epígrafe, así como en un cuadro anexo, en el que se indica la documentación que no ha sido aportada.

La declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar aportada por el adjudicatario de un expediente era de fecha anterior a la publicación de la licitación en el BOE, contraviniendo lo exigido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, si bien posteriormente un acta de la mesa de contratación señaló que esta deficiencia había sido

subsana, lo que ha sido debidamente justificado en trámite de alegaciones mediante la documentación correspondiente.

La propuesta de adjudicación referente a un expediente se limitó a proponer a la única oferta presentada, señalando al respecto que la empresa cumplía lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas, careciendo de la motivación suficiente que requiere el artículo 135 de la LCSP.

La AEAT adjudicó un expediente, mediante el procedimiento negociado sin publicidad. De conformidad con el artículo 160 de la LCSP, los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalaron el precio como aspecto único de negociación, indicando que una vez presentada la oferta, se podría solicitar al licitador que mejorara su oferta inicial, si estuviera en condiciones de hacerlo. Sin bien inicialmente no constaba que el órgano de contratación hubiera negociado con el candidato la oferta que éste había presentado, como requieren los artículos 153 y 162 de la LCSP, la AEAT ha acreditado en trámite de alegaciones que dicha negociación se hizo durante la elaboración del presupuesto.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Si bien la AEAT no remitió inicialmente ni las facturas ni los documentos acreditativos de los pagos efectuados, posteriormente, en trámite de alegaciones, remitió la mencionada documentación.

La Entidad no ha remitido el acta formal de recepción de los expedientes fiscalizados, prevista en el art. 205 de la LCSP.

IV.4.8. Comisión Nacional de la Competencia

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha remitido al Tribunal de Cuentas 4 contratos correspondientes al ejercicio 2009, 1 remitido de oficio por la Entidad y 3 a solicitud del Tribunal de Cuentas, por un importe total de 584 miles de euros, habiendo sido fiscalizados en su totalidad, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	--	--	--	--
Servicios	4	100	584	100
Suministros	--	--	--	--
Otros	--	--	--	--
TOTAL	4	100	584	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por la CNC en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, la CNC ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 21 contratos por un importe global de 1.944 miles de euros. No obstante, en esta certificación la Entidad ha incluido indebidamente 2 expedientes de prórroga de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, cuando de acuerdo con la citada Instrucción del Tribunal de Cuentas, dichas incidencias deberían haber sido únicamente objeto de comunicación.

Esta información ha sido contrastada con los datos publicados a través de su página Web en su perfil de contratante, habiéndose comprobado que todos los contratos publicados figuraban a su vez en la relación certificada.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 1 contrato por importe de 349 miles de euros. Por el contrario, la CNC no ha remitido, durante el periodo fiscalizado, información sobre las incidencias de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, ni sobre los contratos finalizados, como requiere la Instrucción del Tribunal. Tampoco ha comunicado incidencias de contratos adjudicados en el ejercicio 2009.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte de la CNC de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CNC	R	21	1.944	1	349				
1 (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. 2 (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato. R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.									

La CNC publicó a través de su página Web su perfil de contratante, de acuerdo con el artículo 42 de la LCSP, en la que ofreció información sobre las convocatorias en curso, las adjudicaciones provisionales y definitivas. Igualmente, la Entidad difundió su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado ("www.contrataciondelestado.es"), tal y como exige el artículo 309 de la LCSP.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente incluyeron, entre los criterios que han de servir de base para la adjudicación, el plan de formación, sin que se especificasen los extremos que iban a ser valorados por la mesa de contratación, y sin que éste criterio se encontrase directamente vinculado al objeto del contrato, como requiere el artículo 134 de la LCSP. La LCSP excluye como criterios de adjudicación aquellos criterios que no van dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa, sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en cuestión. Además, los pliegos de prescripciones técnicas previeron, como requisito necesario de las empresas participantes, que todo su personal hubiera realizado formación sobre los medios a emplear y sobre las medidas de

higiene y prevención de riesgos, añadiendo que la empresa adjudicataria debería presentar un programa de formación continuada del personal, informando a la Comisión sobre las actividades formativas.

Igualmente, los pliegos de dos expedientes, entre los criterios que han de servir de base para la adjudicación, los certificados acreditativos de la calidad, cuando estos extremos son medios justificativos de la solvencia técnica o profesional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LCSP. Los requisitos de solvencia de las empresas son requisitos legalmente establecidos como criterios de admisión de los licitadores, que deben ser tenidos en cuenta previamente para evaluar la aptitud de la empresa adjudicataria, sin que pueda ser objeto de valoración, lo que legalmente se considera requisito indispensable para licitar.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de dos expedientes utilizaron como criterio de adjudicación las “mejoras” presentadas por los licitadores, indicando únicamente que debían tratarse de mejoras que redundaran en la calidad de los servicios, sin precisar su contenido y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación. Esta falta de determinación no resultó acorde con los principios de publicidad y transparencia previstos en el artículo 1 de la LCSP, al privar a las empresas de la información suficiente sobre las posibles mejoras que pudieran proponer y, en su caso, cuáles de ellas serían las más valoradas por el órgano de contratación.

Con carácter general, la CNC no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Al igual que en expedientes tramitados en ejercicios anteriores, la memoria justificativa de un expediente se limitó a señalar la necesidad de contratar un servicio de gabinete de prensa y de comunicación interna, sin justificar la insuficiencia de medios para cubrir las necesidades que se trataban de satisfacer a través del contrato, así como la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios de los que dispone, máxime cuando de trataba de un servicio que la CNC venía contratando de manera sucesiva. Tampoco consta que la Entidad realizara un estudio objetivo y detallado sobre el coste del servicio, en caso de que se prestase por personal propio de la Entidad, indicando la CNC, en alegaciones, que consideraba más ventajoso para la Entidad contratar a una empresa especializada para la realización de la prestación objeto del contrato al carecer de personal específico para ello. Igualmente, el acuerdo de aprobación del expediente únicamente indicó la necesidad de realizar una nueva contratación, al aproximarse la finalización del contrato vigente en la fecha.

El informe de valoración de las ofertas presentadas en un expediente analizó las proposiciones de las empresas licitadoras atendiendo a todos los criterios de adjudicación, sin que la evaluación de los criterios de adjudicación no cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas fuera previa a la de los criterios de cuantificación automática, como exige el artículo 134 de la LCSP.

Asimismo, la CNC adjudicó dos expedientes mediante el procedimiento negociado. De conformidad con el artículo 160 de la LCSP, los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalaron los criterios que serían objeto de negociación. Sin embargo, el órgano de contratación no negoció con

los candidatos las ofertas que éstos habían presentado, para adaptarlas a los requisitos indicados en los pliegos, como requieren los artículos 153 y 162 de la LCSP. La Entidad, en alegaciones, indica que en el primero de los expedientes no se negociaron las ofertas, al entender que al presentarse una única empresa la negociación no era precisa, mientras que en el segundo la negociación no tuvo lugar debido a razones de urgencia, sin que estos argumentos constituyan un impedimento para que se hubiera llevado a efecto la negociación de las condiciones del contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Se han analizado las facturas y los documentos acreditativos de los pagos de los expedientes fiscalizados, sin que se haya observado incidencia alguna.

IV.4.9. Comisión Nacional del Mercado de Valores

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió al Tribunal de Cuentas 9 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 4.315 miles de euros, habiendo sido fiscalizados 7 de estos expedientes, por un importe de 3.510 miles de €, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	--	--	--	--
Servicios	7	78	3.510	81
Suministros	--	--	--	--
Otros	--	--	--	--
TOTAL	7	78	3.510	81

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por la CNMV en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, la CNMV remitió la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado. En este sentido, la Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 22 contratos por un importe global de 5.087 miles de euros. La información contenida en la relación certificada ha sido contrastada con los datos publicados a través de la Plataforma de Contratación del Estado, habiéndose comprobado que todos los contratos publicados figuraban en la citada relación.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 9 contratos por importe de 4.315 miles de euros, y comunicó y remitió en el ejercicio 2009 la documentación correspondiente a 2 expedientes de prórroga y 1 recepción de contratos celebrados en ejercicios anteriores. Igualmente, ha comunicado 6 prórrogas, 2 modificaciones y 8 recepciones de contratos adjudicados en el ejercicio fiscalizado.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del CNMV de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CMNV	R	22	5.087	9	4.315	9	2	8	
<p>1 (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato.</p> <p>2 R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.</p>									

El perfil de contratante de la Comisión, previsto en el artículo 42 de la LCSP, y mediante el cual se permite el acceso público a la información contractual de la Entidad por medio de Internet, se realizó a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, verificando su adecuación a la LCSP y a las demás disposiciones legales aplicables, así como a los fines de la contratación. De su fiscalización, se han detectado las siguientes deficiencias:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cinco expedientes establecieron que la documentación de los licitadores se presentara en dos sobres, uno con la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y otro con las proposiciones técnicas y económicas de los interesados. Es criterio reiterado de este Tribunal que garantiza mejor la objetividad de la adjudicación que la fase de valoración técnica se realice con anterioridad al conocimiento de las ofertas económicas, por lo que las proposiciones técnicas y económicas de los interesados deberían presentarse en sobres separados.

En tres expedientes se valoraron, como criterios de adjudicación, factores o requisitos de solvencia técnica. En concreto, los pliegos de un expediente incluyeron, entre los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, los recursos destinados al servicio, aportando el curriculum, formación y experiencia de los trabajadores ofertados, los de otro expediente, los medios técnicos y humanos y los, de un tercer expediente, los equipos o maquinaria que se emplearían para la ejecución del servicio. Como ha manifestado el Tribunal de Cuentas en anteriores Informes, dichos elementos no deben valorarse en la adjudicación del contrato, sino en la fase previa de admisión a la licitación, siendo requisitos legalmente establecidos como criterios de admisión de los licitadores, que deben ser tenidos en cuenta previamente para evaluar la aptitud de la empresa adjudicataria, de acuerdo con el artículo 67 de la LCSP. En este sentido, la ejecución del contrato por el personal adecuado quedaba suficientemente garantizada con la exigencia de la solvencia técnica ajustada a las características del servicio, así como por la previsión, como hizo en uno de los expedientes, de condiciones especiales de ejecución requiriendo que el servicio se prestase por personal que tuviese experiencia suficiente.

Asimismo, en un expediente se utilizaron como criterios de adjudicación las “mejoras” presentadas por los licitadores, sin precisar en que condiciones quedaba autorizada su presentación y sin que tal posibilidad se indicara en el anuncio de licitación tal como venía exigido por el artículo 147.3 de la LCSP.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente no mencionaron los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación, contraviniendo lo establecido en el artículo 160 de la LCSP, lo que restringió los principios de publicidad y objetividad, proporcionando al órgano de contratación un exceso de discrecionalidad en el momento de negociar y adjudicar el contrato.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cinco expedientes se limitaron a señalar que, dada la naturaleza y características del contrato, no se establecía plazo de garantía, sin justificar debidamente en el expediente tal dispensa. Esta ausencia de justificación infringió los artículos 205.3 de la LCSP y 67.2.t) del RGLCAP, que requieren que se justifique debidamente en el expediente.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente declararon la improcedencia de la revisión de precios, sin que conste en el expediente una resolución motivada del órgano de contratación en la que se razonara tal decisión, como requiere el artículo 77.2 de la LCSP.

Con carácter general, la CNMV no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

c) Cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en la fase de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Con carácter general, la CNMV siguió empleando, al igual que en ejercicios anteriores, como modelo de certificado de conformidad con el presupuesto de gastos para llevar a cabo la contratación, el previsto en su Manual de Procedimientos, sin que en éste se señalara la partida presupuestaria a la que se iba a aplicar el gasto.

En el informe sobre la necesidad de contratación de un expediente se indicó que la CNMV había venido contratando, desde el año 2002, con empresas especializadas la realización de tareas de apoyo a las labores de Registro General. Este informe se limitó a declarar que la Entidad no disponía de personal en plantilla para realizar las actividades que configuraban el servicio, argumentando que no era conveniente la ampliación de la misma por tratarse de trabajadores con muy diferentes condiciones de empleo a las del resto del personal en plantilla así como por la necesidad de prever un sistema alternativo para la prestación del servicio, en circunstancias de crisis. Sin embargo, no consta que la CNMV hubiera realizado un estudio objetivo y detallado sobre el coste del servicio, en caso de que se prestase por personal propio de la Entidad, máxime cuando se trataba de un servicio, que, aunque no fuera de carácter técnico, lo requería la Comisión con carácter ordinario.

Los pliegos de prescripciones técnicas de un expediente establecían unos plazos para la entrega de los libros objeto del contrato, para lo cual la Entidad se comprometía a proporcionar a las imprentas el material correspondiente con la anticipación necesaria para que se cumplieran dichos

plazos. Sin embargo, este expediente no se tramitó con la antelación suficiente, en tanto que estaba prevista la entrega de determinados libros en abril de 2009 y el contrato no se formalizó hasta el 30 de ese mes.

El informe elaborado por la Mesa de Contratación en un expediente por el que se valoraba las referencias evaluables mediante un juicio de valor, detalló la forma de valoración y distribución de puntos de los criterios de adjudicación, lo que no resultó acorde con la transparencia y objetividad exigible en el proceso de licitación. Es en los pliegos de cláusulas administrativas particulares donde deberían haberse establecido con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que fueran conocidos por las empresas licitantes, a fin de que pudieran preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Entidad contratante.

Igualmente, el informe de otro de los expedientes fiscalizados valoró, entre otros extremos, los currículos de los miembros de los equipos de trabajo propuestos, su experiencia y formación. Estos extremos, además de no poder valorarse en la adjudicación del contrato al tratarse de criterios de solvencia, habían quedado suficientemente acreditados en una fase anterior, al tramitarse este expediente mediante procedimiento restringido, y haber sido seleccionados los candidatos, de acuerdo con los artículos 146 y 147 de la LCSP, en atención a su solvencia.

Las notificaciones de la adjudicación de un expediente a las empresas que concurrieron a la licitación estuvieron carentes de motivación, en contra de lo dispuesto en el artículo 137.1 de la LCSP, limitándose a señalar la empresa seleccionada y el detalle de su oferta económica. Con posterioridad, y al amparo de lo dispuesto en este mismo artículo, dos de las empresas descartadas solicitaron aclaraciones al respecto. En este caso la Entidad comunicó las puntuaciones obtenidas por los licitadores, señalando que la empresa adjudicataria había obtenido la mayor puntuación en la valoración, al presentar la oferta más ventajosa. No facilitó información, sin embargo, de los motivos del rechazo de sus candidaturas y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

En los expedientes analizados no constaban inicialmente las facturas ni los documentos acreditativos de los pagos efectuados, si bien la Entidad remitió dichos documentos en trámite de alegaciones.

La CNMV prorrogó dos expedientes con una vigencia de un año, acordando las partes que se incrementarían los importes de los contratos en un 85% de la tasa de variación interanual del IPC del mes de diciembre de 2010, si bien no se precisó su importe definitivo, ni se adjuntó información sobre la cuantía del citado incremento.

IV.5. MINISTERIO DEL INTERIOR

El Ministerio del Interior ha remitido a este Tribunal de Cuentas 288 expedientes de contratación por importe de 533.072 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 119 expedientes por importe de 229.745 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	19	7	51.356	10
Servicios	58	20	110.637	21
Suministros	42	15	67.752	12
Otros				
TOTAL	119	41	229.745	43

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

Ha incumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu, al no remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	977	761.000	288	533.072	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
² R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

El PPT del contrato número 6 no tiene fecha.

En los PCAP de los contratos números 1 a 3 y 5 y 6 aunque se indicaron los medios establecidos en los artículos 64, 65 y 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Zona Europea, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado

medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria de los contratos 1, 5, 6 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido, del artículo 22 de la LCSP.

En los contratos números 2 y 3 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Ministerio, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

No se ha justificado el procedimiento ni los criterios de adjudicación elegidos en los contratos números 4, 5 y 6 incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 LCSP.

Los contratos números 1 y 2 fueron adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad, invocando para poder utilizar tal procedimiento, el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 154 de la LCSP, que permite la utilización de este procedimiento para “los declarados secretos o reservados o cuando su ejecución debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado”. En los expedientes no se ha acreditado documentalmente que la empresa adjudicataria garantizara adecuadamente la protección de los citados intereses, en consecuencia, no están justificadas las adjudicaciones de los contratos.

Se ha remitido el informe de valoración de las ofertas presentadas en el contrato número 4, sin embargo al no haberse enviado el cuadro de características técnicas del PCAP, donde debían figurar los criterios de adjudicación, hasta el trámite de alegaciones, este Tribunal no puede ya pronunciarse sobre el mismo.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto a los contratos 5 y 6 pues a pesar de que el plazo de ejecución de estos contratos ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

Respecto al contrato número 1 se han remitido en trámite de alegaciones, 4 actas de recepción parcial pero no el acta de recepción final del contrato.

El contrato número 3 se encuentra en fase de ejecución tal y como acredita la documentación aportada en trámite de alegaciones.

Respecto al contrato número 4 cuyo objeto fueron unas obras de remodelación en la comisaría de El Carmen, en Murcia, se ha enviado un expediente de modificación que supuso un incremento del precio del 19% y tuvo por objeto diversas actuaciones entre otras, alojar el centro de transformación energética en otro lugar del edificio, la impermeabilización total de la cubierta del

edificio, la sustitución del ascensor del edificio y cambios en la distribución del edificio. No se ha acreditado en el expediente que las citadas actuaciones respondan a causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de la elaboración del proyecto primitivo y por lo tanto no se considera justificada la modificación a los efectos de lo previsto en el artículo 202 de la LCSP sin que conste la práctica de las actuaciones previstas en la ley para la exigencia de responsabilidades por las deficiencias del mencionado proyecto.

Respecto al contrato número 5 se ha remitido en trámite de alegaciones abundante documentación que acredita la ejecución del contrato pero no el acta de recepción final del contrato

IV.5.1. Dirección General de Tráfico.

La Dirección General de Tráfico ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 118 expedientes de contratación, por importe de 206.182 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 42 expedientes por 81.927 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	12	67	26.619	62
Servicios	22	28	35.808	29
Suministros	8	40	19.500	48
Otros	0	0	0	0
TOTAL	42	36	81.927	40

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha incumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
DGT	C			118	206.182	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En los PCAP de los contratos números 1 a 5 si bien se previó la documentación que debían presentar las empresas no españolas de Estados Miembros de la UE para acreditar su solvencia, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de ellos para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Respecto de los criterios de valoración de los PCAP de los contratos números 1 y 5, la aplicación de la fórmula establecida para valorar la proposición económica arroja como resultado diferencias muy pequeñas de puntuación ante ofertas económicas sustancialmente diferentes y en los PCAP de los contratos números 2 y 3 se estableció la valoración del criterio del precio de la oferta en función de su proximidad a la media de baja de las ofertas presentadas a la licitación. Estas actuaciones no son conforme con el principio de economía que debe informar la contratación pública.

Además, no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes a los subcriterios de adjudicación “conexión con los centros de control, implantación de un sistema para la retransmisión multicast de la señal de video y telemando e integración de los equipos en el sistema intercentros de la DGT” del criterio de adjudicación “valor técnico” de los contratos números 1 y 5. Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En los contratos números 2 y 3 se adjuntó informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limitó a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Organismo, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

En los contratos número 1, 2, 3 y 5 no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos.

El contrato número 4 se adjudicó mediante el procedimiento negociado sin publicidad con base en la causa prevista en el apartado d) del artículo 154 de la LCSP. Dicha causa consiste en que por razones técnicas, artísticas o relacionadas con la protección de derechos exclusivos, “*el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado*”, sin embargo en el expediente no consta la acreditación de que el adjudicatario fuera el único que podían realizar la prestación contratada, por lo que no se encuentra justificada la celebración del contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En trámite de alegaciones, respecto al contrato número 1 se ha enviado un acta de suspensión temporal de las obras de fecha 1 de diciembre de 2011, y los certificados de conformidad con los servicios prestados del contrato número 4 y se ha remitido igualmente documentación que acredita que los contratos números 2 y 3 se encuentran actualmente en fase de ejecución.

Respecto al contrato número 5 se ha enviado un acta de suspensión definitiva de las obras de fecha 3 de diciembre de 2010 y las certificación de obras ejecutadas y las facturas abonadas hasta la citada fecha.

IV.5.2. Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 6 expedientes de contratación, por importe de 23.402 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 2 expedientes por 16.530 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	2	33	16.530	71
Servicios	0	0	0	0
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	2	33	16.530	71

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado	R	20	29.715	6	23.402	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

En el PCAP del contrato número 2, si bien se previó la documentación que debían presentar las empresas no españolas de Estados Miembros de la UE para acreditar su solvencia, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de ellos para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

El contrato número 2 fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad, invocando para poder utilizar tal procedimiento, el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 154 de la LCSP, que permite la utilización de este procedimiento para “los declarados secretos o reservados o cuando su ejecución debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado” Sin embargo la aplicación del citado supuesto requiere declaración expresa de que concurre tal requisito y dicha declaración debe ser realizada por el titular del Departamento Ministerial. En el expediente no se adjunta dicha declaración ni se ha acreditado documentalmente que la empresa adjudicataria garantizara adecuadamente la protección de los citados intereses, en consecuencia, no está justificada la adjudicación del contrato.

Este contrato fue objeto de una modificación (contrato número 1) que supuso un incremento del precio del 16% y tuvo por objeto diversas actuaciones para corregir errores materiales en el proyecto primitivo entre otras, las diferencias entre la cota de sondeo del proyecto primitivo y la cota real de los sondeos, la aparición de cimentación de antiguos edificios demolidos más profundas y de mayor entidad que las previstas. No se ha acreditado en el expediente que las citadas actuaciones respondan a causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de la elaboración del proyecto primitivo y por lo tanto no se considera justificada la modificación a los efectos de lo

previsto en el artículo 202 de la LCSP sin que conste la práctica de las actuaciones previstas en la ley para la exigencia de responsabilidades por las deficiencias del mencionado proyecto.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto de los contratos números 1 y 2 pues a pesar de que los plazos de ejecución de este contrato han concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

IV.5.3.Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

El Organismo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 4 expedientes de contratación, por importe de 4.428 miles de euros, de los cuales se ha fiscalizado 1 expediente por importe de 2.532 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	25	2.532	57
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	25	2.532	57

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu de remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo	R	385	183.920	4	4.428	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

En el PCAP del contrato número 1 si bien se previó la documentación que debían presentar las empresas no españolas de Estados Miembros de la UE para acreditar su solvencia, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de ellos para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria en la que se determinó la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genérico no correspondiéndose con las exigencias en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP y además, no se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales del organismo, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios.

No se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos en el contrato número 1, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

El contrato número 1 se encuentra en fase de ejecución, si bien la única documentación que consta en el expediente es la relativa a la prórroga del mismo.

IV.6. MINISTERIO DE FOMENTO

El Ministerio de Fomento (en adelante, MF) tenía adscritos en este ejercicio una agencia estatal y dos organismos autónomos. En este epígrafe se recogen los resultados de las comprobaciones realizadas respecto de la contratación celebrada por los órganos del Ministerio así como, en apartados específicos, la correspondiente a los referidos organismos autónomos.

La Administración General contaba en este ejercicio con 36 órganos de contratación, incluyendo las 15 Demarcaciones de Carreteras del Estado, de los que cinco lo fueron sólo en parte del mismo.

Por el MF se remitieron al Tribunal de Cuentas un total de 303 expedientes primitivos, por un importe de 1.766.808 miles de euros. Atendiendo a los tipos de contratos, el 69% fue de obras, el 29,7% de servicios y el 1,3% de suministro. En cuanto a la forma de adjudicación, la más empleada fue el procedimiento abierto con varios criterios, en un 73,9% de los casos.

El cuadro siguiente refleja la muestra analizada de los expedientes primitivos:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	64	30,6	1.264.278	74,4
Servicios	35	38,9	38.832	58,7
Suministro	3	75	1.451	79,6
TOTAL	102	33,7	1.304.561	73,8

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

Se han recibido relaciones de los contratos celebrados de 13 órganos de contratación y certificaciones negativas de otros dos.

Según las relaciones recibidas, los órganos del Ministerio adjudicaron un total de 693 expedientes, por un importe total de 2.334.347 miles de euros.

Se remitieron asimismo por el MF 86 modificados y 24 prórrogas, por un importe total de 242.969 miles de euros. Por tipos de contrato, 85 fueron de obras, 24 de servicios y uno de suministro.

La información y documentación enviada por los órganos de contratación es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

(en miles de euros)

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art- 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE	a	b	c	d
Secretaría de Estado de Infraestructuras (1)	R	1	25	71	1.447.509	1	39	3	
Secretaría de Estado de Transportes	C	-	-			-		1	
Dirección General de Carreteras	R	427	1.981.715	129	241.986	4	43		
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (2)	R	74	301.444	56	53.822	-		4	
Dirección General de Programación Económica y Presupuestos (3)	R	43	8.042	9	5.037	7			
Dirección General de la Marina Mercante	R	15	3.442	5	1.979	2	1		
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional	R	49	7.986	11	3.986	-			
Dirección General de Transporte Terrestre	C	11	871						
Junta de Contratación	R	34	14.658	19	6.688	2	3	20	
Secretaría General. Técnica	R	5	180			-			
Subdirección General de Administración y Gestión Financiera	-			2	5.441			2	
Subdirección General de Gestión de ayudas, Subvenciones y Proyectos	-			1	360				
Subsecretaría	R	34	15.984			-			
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña	C	-	-			-			
TOTAL	15	693	2.334.347	303	1.766.808	16	86	30	
Como consecuencia de las reestructuraciones del Departamento, se incluyen:									
(1) Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación y Secretaría de Estado de Planificación y Relaciones Institucionales									
(2) Dirección General de Ferrocarriles									
(3) Dirección General de Servicios									

No se ha recibido la relación de los contratos celebrados o su certificación negativa de los 22 siguientes órganos de contratación:

- Órgano con competencia originaria: Ministro
- Órganos con competencia delegada: Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Transportes por Carretera, Junta de Contratación, Secretaría General de Transportes, Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, Subdirección General de Ayudas, Subvenciones y Proyectos, y las Demarcaciones de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.

De acuerdo con los datos de la Plataforma de Contratación del Estado y con los propios expedientes remitidos al Tribunal, no se incluyeron en las relaciones 194 expedientes que por su cuantía deberían haber figurado. Dichos expedientes corresponden a las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (17), Castilla-León Oriental (17), Castilla León

Occidental (6), Galicia (10), Comunidad Valenciana (2), Madrid (26) y Extremadura (9), así como a la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras (2), la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (2), la Dirección General de Carreteras (45), la Dirección Nacional del Instituto Geográfico Nacional (6), la Dirección General de la Marina Mercante (1), la Dirección General de Programación Económica (1), la Dirección General de Servicios (3), la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera (4) y la Junta de Contratación (35).

De conformidad con los datos de las relaciones de expedientes y los publicados en el Boletín Oficial del Estado, se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de 254 expedientes: corresponden 246 a la Dirección General de Carreteras, uno a la Dirección General de la Marina Mercante y siete a la Junta de Contratación.

Con posterioridad a la remisión de los expedientes se han recibido en el Tribunal de Cuentas 11 comunicaciones sobre cumplimiento de la prestación, así como tres sobre variaciones en el plazo de ejecución.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de otros 242 expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación. Dichos expedientes corresponden a los siguientes órganos de contratación: Dirección General de Carreteras (120), Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (33), Dirección General de Servicios (1), Junta de Contratación (27), Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras (56), Subdirección General de Administración y Gestión Financiera (3) y Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos (1).

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales videntes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los PCAP no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan los PCAP de expedientes concretos:

- No se han limitado en el pliego de cláusulas administrativas particulares los gastos de publicidad de la licitación a asumir por el adjudicatario en un expediente adjudicado por la Dirección General de la Marina Mercante, en un expediente adjudicado por la Dirección General de Servicios, en un expediente adjudicado por la Dirección General de Programación Económica, en ocho expedientes adjudicados por Junta de Contratación del Ministerio y en dos expedientes adjudicados por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.

- En cuatro expedientes adjudicados por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, los puntos 16 y 17 del pliego de prescripciones técnicas contienen el plazo de ejecución y el presupuesto de licitación respectivamente. Dichos contenidos deben formar parte del pliego de cláusulas administrativas particulares y no del pliego de prescripciones técnicas, como señala el artículo 67.2.c y e del RGLCAP.

- En un expediente adjudicado por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, el pliego de prescripciones técnicas contiene el plazo de ejecución del contrato, extremo que debe formar parte del pliego de cláusulas administrativas particulares y no del pliego de prescripciones técnicas (como señala el artículo 67.2.e del RGLCAP).
- En dos expedientes adjudicados por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, el pliego de prescripciones técnicas contiene menciones relativas al plazo de ejecución y el presupuesto de licitación, extremos que, de acuerdo con el artículo 67.2.c y e del RGLCAP deberán formar parte del pliego de cláusulas administrativas particulares.
- En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, el pliego de prescripciones técnicas contiene en sus cláusulas la estimación presupuestaria y el plazo de ejecución, información que debe figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares (artículo 67.2.c y e del RGLCAP).
- En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, el pliego de cláusulas administrativas particulares omite menciones obligatorias: la duración del contrato (artículo 67.2.e del RGLCAP), el procedimiento y forma de adjudicación (artículo 67.2.f del RGLCAP), los gastos de publicidad (artículo 67.2.g del RGLCAP) y la jurisdicción (artículo 67.2.w del RGLCAP). Por otra parte, el cuadro de características no es congruente con el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares tipo aportado
- En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, el pliego de prescripciones técnicas incluye menciones relativas a la realización de pedidos, entrega del material, plazo de entrega y forma de pago, datos que son propios del contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares (artículos 67.2.e y ñ del RGLCAP), por lo que se incumple el artículo 68.3 del RGLCAP.
- En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, el pliego de prescripciones técnicas (del que no consta en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas la aprobación por el órgano de contratación) regula en una de sus cláusulas el plazo de ejecución, extremo que es propio del pliego de cláusulas administrativas particulares, según establece el artículo 67.2.e del RGLCAP.
- En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, el pliego de cláusulas administrativas particulares contiene estipulaciones incompatibles, toda vez que se indica que "el plazo de ejecución es de 8 meses, la fecha de terminación deberá fijarse dentro del año 2009, y se entenderá que la ejecución de las obras comienza a los cinco meses contados desde la fecha señalada para la apertura de las proposiciones económicas". Dado que la fecha de apertura es el 5 de marzo de 2008, no es posible que se inicien las obras 5 meses después y que con un plazo de ejecución de 8 meses terminen dentro del año.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida se recoge en el siguiente cuadro, en el que los dígitos identifican los documentos que deben contener los expedientes conforme se recoge en el Anexo 2.

[illegible]

ORGANO					Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS																
						2	7	9	14	16	18	20	24	28	32	41	42	43	46	48	50	51
Infraestructuras																						
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	12-LU-4150														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	12-P-3130													X	X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	12-SO-3080														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	12-SO-3090														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	12-SO-3100														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	12-SO-3110														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	14-SE-4710														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	200810200																	
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	200910040																	
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	23-AB-4200	X												X				
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	26-LU-4490												X					
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-A-4240														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-AV-2970														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-HU-6100	X																
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-MU-5630										X					X	X	
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-O-5350														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-P-3110														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-S-5580														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-SE-3780																X	
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-SE-4820														X		X	
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-SG-3090														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	32-ZA-3340													X	X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	33-B-4650														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	33-M-12700			X											X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	33-SO-2940														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	48-MU-5420													X				
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	52-PO-30101														X			
Secretaría de Infraestructuras	Estado	de	Planificación	e	23-A-3611									X				X	X		X	
Subdirección General de Administración y Gestión Financiera					118B09	X									X		X		X		X	

ORGANO	Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS																
		2	7	9	14	16	18	20	24	28	32	41	42	43	46	48	50	51
Subdirección General de Administración y Gestión Financiera	133W09-JC/666								X							X		
Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos	90003/109				X			X								X		

Igualmente, no consta en los expedientes fiscalizados la siguiente documentación:

- La autorización del Ministro para contratar, en un modificado adjudicado por la Dirección General de Carreteras.
- El informe de supervisión del proyecto, en un modificado adjudicado por la Dirección General de Carreteras y en dos modificados adjudicados por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- La aprobación del proyecto, en un modificado adjudicado por la Dirección General de Carreteras y en otro adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- El acta de replanteo del proyecto, en un modificado adjudicado por la Dirección General de Carreteras y en otro adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- La aprobación del expediente, en una prórroga adjudicada por la Junta de Contratación.
- La fiscalización previa en cuatro expedientes de modificación, dos de ellos tramitados por la Dirección General de Carreteras, uno por la Junta de Contratación y otro por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- La retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación en contratos de carácter plurianual, en un expediente adjudicado por la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos.
- El acta de calificación documental de la Mesa de Contratación, en cuatro expedientes. De ellos, uno fue adjudicado por la Dirección General de Carreteras y tres por la Junta de Contratación.
- Los informes de valoración técnica de las ofertas, en ocho expedientes. Dichos expedientes fueron adjudicados en un caso por la Dirección General de Carreteras, en cuatro por la Junta de Contratación y en tres por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- El acta de apertura de las proposiciones económicas, en cuatro expedientes adjudicados por la Junta de Contratación.
- La solicitud de información a los licitadores cuyas ofertas estaban incursas en presunción de temeridad, en un expediente. adjudicado por la Junta de Contratación.
- Las alegaciones de los licitadores cuyas ofertas estaban incursas en presunción de temeridad, en 17 expedientes. Dichos expedientes fueron adjudicados en dos casos por la Dirección General de Carreteras, en uno por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, en 13 por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras y en uno por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.

- Los informes técnicos de valoración de las alegaciones realizadas por los licitadores incurso en presunción de temeridad, en un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- La propuesta de adjudicación, en dos expedientes, adjudicados respectivamente por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras y la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
- La acreditación de que el adjudicatario no se encontraba incurso en prohibición de contratar y al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en una prórroga tramitada por la Junta de Contratación.
- La documentación acreditativa de la clasificación del adjudicatario, en ocho expedientes de modificación y una prórroga. Los modificados fueron tramitados en dos casos por la Dirección General de Carreteras, en cuatro por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras y en uno por la Junta de Contratación, mientras que la prórroga fue tramitada por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
- La documentación acreditativa de que el contratista se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los 15 expedientes anteriores, así como en otros cuatro expedientes de modificación, uno de ellos tramitado por la Dirección General de Carreteras y tres por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- La acreditación de que el adjudicatario se hallaba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social en un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- La publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial del Estado, en dos expedientes, adjudicados por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias y por la Junta de Contratación .
- La publicación de la adjudicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en 39 expedientes. Dichos expedientes fueron adjudicados en seis casos por la Dirección General de Carreteras, en dos por la Junta de Contratación y en 31 por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- El documento de formalización, en dos prórrogas aprobadas por la Junta de Contratación.
- Los documentos contables de la disposición del gasto en un modificado adjudicado por la Dirección General de Carreteras y en dos prórrogas adjudicadas por la Junta de Contratación.
- La comunicación del contratista en relación con la suspensión de la ejecución, en un modificado tramitado por la Dirección General de Carreteras.
- Los informes de situación relativos a la suspensión, en dos expedientes de modificación tramitados por la Dirección General de Carreteras .
- La aprobación de la suspensión en un expediente modificado tramitado por la Dirección General de Carreteras .
- La justificación de la modificación, en dos expedientes tramitados por la Dirección General de Carreteras.
- El informe del Servicio Jurídico en relación con la modificación, en un expediente tramitado por la

Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.

- La conformidad del contratista con la modificación, en cuatro expedientes. Los modificados fueron tramitados en dos casos por la Dirección General de Carreteras y en dos por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- El acuerdo de ampliación del plazo de ejecución, en tres expedientes de modificación, dos de ellos aprobados por la Dirección General de Carreteras y uno por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- El acta de comprobación del replanteo en 34 expedientes: cuatro adjudicados por la Dirección General de Carreteras, tres expedientes de modificación tramitados así mismo por esta Dirección General 21 expedientes adjudicados por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, cuatro expedientes de modificación tramitados por esta misma Secretaría de Estado, un expediente adjudicado por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera y un expediente adjudicado por la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos.
- El acta de medición general y certificación final, en 16 expedientes. De ellos, dos adjudicados por la Dirección General de Carreteras, uno por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, seis por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, uno por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera y uno por la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos; así como dos expedientes de modificación tramitados por la Dirección General de Carreteras, uno por la Junta de Contratación y dos por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
- La aprobación de la liquidación de la obra, en nueve expedientes. De ellos, uno adjudicado por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias y otro por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, así como tres expedientes de modificación tramitados por la Dirección General de Carreteras, uno por la Junta de Contratación y tres por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.

Por otra parte, se han observado las siguientes deficiencias:

- El pliego de cláusulas administrativas particulares no consta aprobado en seis expedientes. De ellos, tres expedientes fueron adjudicados por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, uno por Junta de Contratación del Ministerio, uno por la Secretaría General de Planificación e Infraestructuras y uno por la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos.
- El pliego de prescripciones técnicas no consta aprobado en un expediente adjudicado por Junta de Contratación del Ministerio.
- En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas se incluyen dos aprobaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares: una, con fecha pero sin firma, y otra firmada donde no se distingue la fecha.
- El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en cuatro expedientes adjudicados por Secretaría General de Planificación e Infraestructuras, en dos expedientes adjudicados por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, en 15 expedientes adjudicados por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, en dos expedientes adjudicados por la Dirección General de la Marina Mercante, en un expediente

adjudicado por la Dirección General de Servicios, en un expediente adjudicado por la Dirección General de Programación Económica, en un expediente adjudicado por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y en diez expedientes adjudicados por Junta de Contratación del Ministerio.

- El informe técnico sobre los criterios de adjudicación consiste únicamente en un cuadro con las puntuaciones en un expediente adjudicado por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, en tres expedientes adjudicados por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, en doce expedientes adjudicados por Secretaría General de Planificación e Infraestructuras y en un expediente adjudicado por Junta de Contratación del Ministerio.

- La baja de adjudicación es igual o superior al 30% en un expediente adjudicado por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, en 13 expedientes adjudicados por Secretaría General de Planificación e Infraestructuras y en un expediente adjudicado por la Dirección General de Carreteras.

- El documento de formalización no incluye el régimen de penalidades por demora en un expediente adjudicado por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, en nueve expedientes adjudicados por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, en dos expedientes adjudicados por la Dirección General de Carreteras, en un expediente adjudicado por Junta de Contratación del Ministerio y en nueve expedientes adjudicados por Secretaría General de Planificación e Infraestructuras.

- El objeto del contrato no está definido en un expediente adjudicado por Secretaría General de Planificación e Infraestructuras.

- En un expediente adjudicado por la Dirección General de Carreteras, el 22 de febrero de 2008 se declaró desierto un expediente de obras, licitado por el procedimiento de subasta restringida, por no haberse presentado ninguna proposición por las empresas previamente invitadas. El 6 de febrero de 2009 se aprobó la continuidad de la tramitación de la obra por procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el artículo 154.c de la LCSP. En el acta de apertura de las proposiciones figura un presupuesto de licitación de 4.530 miles de euros (IVA incluido), cuando el presupuesto recogido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y aprobado es de 4.127 miles de euros (IVA incluido). Por otra parte, en relación con la adjudicación provisional, siendo el precio el único criterio para seleccionar al adjudicatario, se excedió el plazo máximo de 15 días a contar desde el día siguiente a la apertura de las proposiciones (artículo 145.1 de la LCSP).

- En un expediente adjudicado por la Dirección General de Carreteras no se cumplió el plazo establecido en los artículos 145.1 y 136.3 de la LCSP para llevar a cabo la adjudicación provisional. El certificado remitido por la empresa adjudicataria no cubre la fecha de adjudicación. Se sobrepasó el plazo establecido en el artículo 140.1 LCSP para proceder a la formalización del contrato.

- En un expediente adjudicado por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, dentro de la documentación preparatoria del mismo, tanto el informe de insuficiencia de medios como el acuerdo de iniciación constan sin fecha.

- En un expediente adjudicado por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no se incluye la declaración de no estar incurso en prohibición de contratar de uno de los componentes de la UTE adjudicataria.

- En un expediente adjudicado por la Dirección General de Programación Económica, el certificado de clasificación incluido en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas había caducado en la fecha de la adjudicación.
- En dos expedientes adjudicados por la Dirección General de Servicios, el documento de formalización omite la referencia a algunos antecedentes administrativos (fecha de adjudicación, fiscalización previa y acto de aprobación del expediente).
- En un expediente adjudicado por la Dirección General de Servicios, la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no incluye el informe técnico de valoración de las ofertas ni la valoración de las sociedades, sino que se limita a un certificado donde consta que las empresas presentadas cumplen los requisitos.
- En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, la declaración motivada de urgencia consta sin fecha ni firma.
- En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, el documento de formalización incluido en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas carece de fecha.

En un expediente adjudicado por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional cuyo objeto era la “obtención del vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el plan nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Galicia”, se siguió la tramitación de urgencia, justificándose este hecho en la necesidad de que los vuelos, por circunstancias ambientales, debían iniciarse entre los meses de abril y mayo de 2009. Sin embargo, el contrato no se formalizó hasta el 1 de julio. La Mesa de Contratación propuso por unanimidad la adjudicación a favor de la oferta que obtuvo la mayor puntuación global. Sin embargo, con anterioridad a la adjudicación provisional, el Director General consideró que “dado que se han convocado seis procedimientos con idéntico objeto en diferentes ámbitos geográficos, y presentando la empresa propuesta para el conjunto de sus ofertas técnicas 3 aeronaves y un idéntico cronograma de ejecución, no le sería posible la ejecución de más de tres contratos. Esto unido a las particulares circunstancias, tanto climáticas como de vegetación, de la zona, aconsejan que los trabajos los realice la empresa que ofrece la oferta técnica más adecuada a la zona de trabajo”. En opinión del Tribunal de Cuentas, debería haberse solicitado a la empresa que obtuvo mayor puntuación por aplicación de los dos criterios de adjudicación (técnico y económico), que justificara su oferta y la posibilidad o no de ejecutar varios contratos simultáneamente.

Otro expediente adjudicado por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, cuyo objeto era la “realización de vuelo fotogramétrico digital, apoyo de campo, aerotriangulación, modelo digital de elevaciones y ortofotos digitales para el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, correspondiente a Islas Canarias”, también se tramitó por el procedimiento de urgencia con la misma justificación de que, por motivos ambientales, los vuelos debían iniciarse en abril y mayo de 2009. Sin embargo, el contrato no se formalizó hasta el 13 de julio.

En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, el informe justificativo de la necesidad del gasto incluido en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas carece de fecha, así como la resolución motivada que justificaba la no revisión de precios. Por otra parte, en opinión del Tribunal de Cuentas, no se justifica el recurso al acuerdo marco, ya que, al tener este expediente como objeto el suministro de consumibles para impresoras, cae dentro del ámbito de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de Abril, que declara los bienes y servicios de contratación centralizada. Sin embargo, el 20 de abril de 2009, la Dirección General del Patrimonio del Estado manifestó lo contrario.

En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, la escritura de que el adjudicatario no se encontraba incurso en prohibición de contratar que se incluyó en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas está incompleta.

En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, la resolución motivando la no revisión de precios incluida en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas carece de fecha, así como el informe de valoración técnica de las ofertas.

En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no se incluyó el informe de fiscalización, sino únicamente el sellado de conformidad en la propuesta de gasto. Igualmente, se remitió la aprobación de la propuesta de gasto, pero no la aprobación del expediente.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, el certificado de clasificación del adjudicatario incluido en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas había caducado en la fecha de la adjudicación definitiva.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, el informe de valoración técnica de las ofertas carece de fecha.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, la garantía definitiva se puso a disposición de la Dirección General de Carreteras en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación (la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras), como dispone el artículo 83 de la LCSP.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, el informe donde se justifica la elección del procedimiento que se incluyó en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas está incompleto, pues falta precisamente la hoja donde se justifica la elección del procedimiento.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, la clasificación del adjudicatario incluida en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas estaba caducada en la fecha de la adjudicación definitiva.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, no consta en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas el documento de depósito de la garantía definitiva, aunque se hace referencia a éste en el documento de formalización del contrato.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, el documento de formalización del contrato incluido en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas está incompleto; no constan ni los antecedentes administrativos ni se incluye el régimen de penalidades por demora.

En seis expedientes adjudicados por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, el importe de la garantía definitiva se puso a disposición de la Dirección General de Carreteras en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación como dispone el artículo 83 LCSP.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, la clasificación del adjudicatario incluida en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas había caducado cuando se produjo la adjudicación definitiva.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, desde la fecha de la adjudicación provisional hasta su notificación a los licitadores transcurrieron 28 días,

incumpléndose lo dispuesto en el artículo 58.2 de la LRJAP, que establece que las notificaciones deberán ser cursadas en un plazo de 10 días desde la fecha en que fueron dictadas.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, el plazo de ejecución que figura en el anuncio de licitación publicado en el DOUE es de 20 meses, cuando el plazo recogido en el anuncio del BOE y en el pliego de cláusulas administrativas particulares es de 8 meses.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, desde la recepción de la documentación del contratista hasta la fecha de adjudicación definitiva, se excedió el plazo de cinco días estipulado en el artículo 135.3 LCSP.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas se incluye un documento de aprobación del expediente de fecha 9 de diciembre de 2008, pero que no está firmado por el órgano competente, y otro firmado por la Secretaría de Estado, pero sin fecha.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, se realizó una resolución complementaria de aprobación del proyecto, ampliando el plazo de 12 a 30 meses. En la documentación remitida no se incluyen las circunstancias que justifiquen esta ampliación del plazo, que representa dos veces y media la estimación inicial. Además, la propuesta de adjudicación consta sin fecha

Inicialmente, el procedimiento se tramitó por procedimiento restringido, aduciendo “la estimación de que es necesario que concurran a la licitación empresas que además de la clasificación acrediten solvencia conforme a criterios técnicos cuantificables”; sin embargo, la utilización de un único criterio de adjudicación se justificó en “la moderada dificultad de las obras, lo cual lleva consigo que baste con atender solamente al precio más bajo no temerario para realizar dicha adjudicación”. En opinión del Tribunal de Cuentas, resulta contradictorio que por un lado se establezca la moderada dificultad de los trabajos y por otro lado se exija solvencia técnica a los licitadores. Finalmente, con fecha 30 de septiembre de 2008 se propuso la anulación del expediente que se había comenzado a tramitar por procedimiento restringido, para pasar a hacerlo por procedimiento abierto, por el que “al requerir un menor número de trámites, se agilizan los plazos y (...) [se permite] la promoción de una mayor concurrencia de licitadores”.

Similares circunstancias concurren en otro expediente, igualmente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras. También se realizó una resolución complementaria de aprobación del proyecto ampliando el plazo de 12 a 30 meses, sin que en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas se justifique esta ampliación del plazo. Del mismo modo, se justifica el recurso al procedimiento restringido en “la estimación de que es necesario que concurran a la licitación empresas que, además de la clasificación, acrediten solvencia conforme a criterios técnicos cuantificables”, al tiempo que la utilización de un único criterio de adjudicación se justifica en “la moderada dificultad de las obras, lo cual lleva consigo que baste con atender solamente al precio más bajo no temerario para realizar dicha adjudicación”.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, la copia de la certificación de que el adjudicatario se encontraba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social incluida en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas resulta ilegible. Por otra parte, el documento de formalización incluido en dicha documentación remitida está incompleto.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, el pliego de cláusulas administrativas particulares establecía que "la ejecución de las obras comienza a los cinco meses contados desde la fecha señalada para la apertura de las proposiciones económicas", mientras que el documento de formalización establece que "el plazo de ejecución de las obras es de 8 meses contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. Este acto se llevará a cabo en un plazo máximo de un mes desde la firma de este contrato". Al no aportarse el acta de comprobación del replanteo, no cabe determinar cuándo se iniciaron las obras. Por otra parte, desde la recepción de la documentación del contratista hasta la fecha de adjudicación definitiva, transcurrieron más de los cinco días estipulados en el artículo 135.3 LCSP. Finalmente, el importe de la garantía se puso a disposición de la Dirección General de Carreteras en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación, como dispone el artículo 83.1 LCSP

En un expediente tramitado por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por el procedimiento de urgencia, se justificó el mismo en el próximo vencimiento de contratos de similar tipo de servicio a lo largo de los meses cercanos a las fechas de la justificación y en que no sería conveniente que se demorase la contratación de estos servicios de difusión, ya que haría que el público cambiara la percepción de las mejoras que se están realizando en infraestructuras. Sin embargo, la circunstancia de este vencimiento era conocida con anterioridad a la tramitación de este expediente, por lo que una mayor diligencia habría evitado el recurso a la tramitación de urgencia. La resolución por la que se declara la improcedencia de la revisión de precios carece de fecha. Igualmente, los informes de valoración constan sin fecha ni firma.

En un expediente adjudicado por la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, el informe de improcedencia de revisión de precios carece de fecha. La declaración por la que se motiva el recurso a la tramitación de urgencia consiste en la simple remisión artículo 96 de la LCSP, por lo que no queda acreditada la concurrencia de las circunstancias que la Ley establece como requisito.

En un expediente adjudicado por la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos, según consta en la documentación remitida, en la oferta presentada el 30/11/09, en el sobre nº 1 figura el certificado que acredita que la empresa se encuentra en posesión de la clasificación requerida; sin embargo, dicho documento no se incluyó en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Con carácter general, la posibilidad de prórroga del contrato aparece prevista en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (conforme establece el artículo 67.2.e del RGLCAP) y se justifica el recurso a la misma.

En cuanto a los modificados, aunque el artículo 202 de la LCSP establece que "una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente", con frecuencia lo que se presenta como "causas imprevistas" responde más bien a defectos en la elaboración del proyecto inicial. Por otra parte, la aprobación de estos modificados produce un incremento en el precio de los contratos y en la duración de los mismos (agravado en este aspecto por las suspensiones en la ejecución que con frecuencia trae aparejada la tramitación de dichos modificados) que desvirtúan en buena medida las bajas obtenidas en la adjudicación, además del consiguiente perjuicio al interés público.

En 2009 se adjudicaron por la Dirección General de Carreteras las obras complementarias de un expediente adjudicado en 2004. De acuerdo con la documentación remitida, la tramitación de la aprobación del proyecto de las obras complementarias se inició en mayo de 2008, fecha en la debería haber finalizado la ejecución del contrato principal. No obstante, en dicha documentación se menciona que con fecha 27 de febrero de 2007 fue aprobada la modificación nº 1 (generando un adicional de 8.941 miles de euros), aunque no se hace referencia a si dicho modificado –que no ha sido remitido al Tribunal de Cuentas- supuso un incremento en el plazo de ejecución. Por otra parte, cabría poner en duda la necesidad de las obras complementarias. En efecto, según el informe de propuesta de las mismas, se señala que su objeto es la iluminación de los enlaces del tramo, así como canalización y fibra óptica; una de las razones aducidas para la iluminación es la intensidad de vehículos/día, aspecto que debería haber sido tenido en cuenta en el expediente primitivo o en su caso en la modificación.

En el expediente de un modificado aprobado por la Dirección General de Carreteras, el documento de formalización incluido en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas está incompleto, ya que únicamente comprende la primera página, que incluye la voluntad de las partes y hace referencia al momento de la formalización del contrato original. Por otra parte, dado que el importe de este modificado supone un incremento del 35% de la cifra de adjudicación del principal, desvirtúa totalmente la baja obtenida en este último, que fue de un 24%.

Con fecha 18 de septiembre de 2006 se adjudicó por la Dirección General de Carreteras un expediente por importe de 5.168 miles de euros (lo que suponía una baja del 36%) y un plazo de adjudicación de 18 meses. Sin embargo, el 10 de noviembre se levantó un acta de comprobación del replanteo negativa, por la que se suspendía el inicio de las obras, ya que se detectó “en diferentes puntos kilométricos la existencia de desajustes entre los datos obtenidos y los reflejados en el Proyecto de Construcción”, se constató “la presencia de construcciones subterráneas en viviendas, y edificaciones no existentes en la fase de redacción del proyecto y cuya afección por la ejecución de las obras debe ser objeto de un pormenorizado estudio”, así como que no habían sido “abonados o consignados los depósitos previos correspondientes a las fincas afectadas por la expropiación, no existiendo disponibilidad de los terrenos para el inicio de las obras”) y se habían presentado alegaciones por el ayuntamiento que debían ser objeto de estudio antes del comienzo de la ejecución de las obras. Estas circunstancias cuestionan, al menos en parte, el modo en que se realizó el proyecto y el replanteo previo de las obras, extremo que también fue puesto de manifiesto por la Inspección General al informar la propuesta de modificación.

Con fecha 13 de mayo de 2008 se solicitó informe a la Inspección General del departamento, que fue emitido el 22 de julio siguiente, concluyendo que los cambios propuestos estaban motivados desde el punto de vista técnico. El informe del abogado del Estado, ante el incremento del presupuesto de contratación que suponía el modificado, advirtió que, conforme al informe de la Inspección General del departamento de fecha 22 de junio de 2007, “dado el tiempo transcurrido desde la adjudicación del contrato (casi dos años), sin que se hayan iniciado las obras, y el adicional económico (superior al 20% del presupuesto de adjudicación), que la propuesta de modificación comporta, nos hallamos ante las dos posibles causas de resolución del contrato, de acuerdo con lo que establece la LCAP en su artículo 149. Tal circunstancia consideramos que deberá ser tenida en cuenta en la resolución que sobre la propuesta de modificación que ahora se formula haya de emitir el órgano de contratación, dado que, aunque dicha propuesta resulte al criterio de esta Inspección razonable únicamente desde el punto de vista técnico, pueden existir razones de oportunidad o de otra naturaleza que justifiquen la no resolución del contrato, cuya valoración no corresponde a este órgano de control”. El director de las obras, en escrito de 26 de agosto de 2008, consideró que existían razones de interés público para la permanencia del contrato. Igualmente, el contratista mostró su conformidad con el contenido y alcance de las

modificaciones, indicando su interés por la ejecución (a pesar de lo cual, el 18 de junio de 2009 el Director General de Carreteras autorizó la cesión del contrato, sin que en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas consten las razones que justificaran la cesión).

El 14 de agosto de 2008 se realizó una nueva acta de comprobación, que permitió el inicio de las obras en aquellas partes no afectadas por las modificaciones solicitadas, manteniéndose en suspensión las unidades afectadas por el modificado. El 7 de octubre, el Director General de Carreteras autorizó la redacción del modificado, cuya aprobación técnica se realizó el 23 de junio de 2009. El modificado se adjudicó el 23 de noviembre, formalizándose el 4 de diciembre por un importe de 2.100 miles de euros (lo que supone un 35% del presupuesto del principal). La fecha de fin estimada era el 30 de septiembre de 2010.

En un expediente adjudicado por la Dirección General de la Marina Mercante, según consta en el acta de recepción, las obras se iniciaron el 9 de Octubre de 2009 y finalizaron el 30 de Abril de 2010, por lo que su duración fue de 6 meses y 21 días. Aunque el plazo de ejecución que estipulaba el pliego de cláusulas administrativas particulares era de siete meses, la empresa adjudicataria había ofertado la realización de la obra en cinco meses, y así consta como plazo de ejecución en la cláusula 3ª del contrato, valorándose dicha reducción del plazo en la ejecución para incrementar el número de puntos otorgado por el informe técnico; sin embargo, finalmente, no se cumplió el plazo de ejecución ofertado.

La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras aprobó en 2009 un modificado de un expediente firmado el 17 de marzo de 2004, por un importe de 49.452 miles de euros (lo que suponía una baja del 8,37% sobre el presupuesto de licitación) y con un plazo de ejecución de 33 meses. El acta de comprobación de replanteo se levantó el 16 de abril de 2004. La ejecución del contrato comenzó en mayo, pero inmediatamente se decidió la suspensión temporal total de las obras por incidencias que impedían su continuación. Ello motivó la tramitación del proyecto modificado al amparo del art 59 del TRLCAP. Dado que la repercusión líquida representa un incremento de un 125% sobre el presupuesto de adjudicación, unido al hecho de que un estudio geotécnico elaborado por el CEDEX puso de manifiesto "aspectos problemáticos no recogidos en el proyecto de construcción", cabe cuestionar el modo en que se redactó el proyecto original.

La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras aprobó un segundo modificado de otro expediente adjudicado en 2005 por importe de 36.165 miles de euros, posteriormente modificado con un adicional de 5.664 miles de euros (no remitido al Tribunal) formalizado el 14 de diciembre de 2007. Hay que señalar que, aun cuando la modificación citada no suponía ampliación de plazo, dos meses después de la misma, el 2 de junio de 2009, se aprobó una prórroga para la terminación de las obras hasta el 31 de octubre de 2009.

La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras aprobó el modificado de un contrato de obras cuya fecha de formalización fue el 10 de abril de 2006, por un importe de 53.511 miles de euros y un periodo de ejecución de 30 meses. Existe un informe de justificación de las obras del modificado, de fecha 23 de enero de 2009, firmado por el ingeniero director de las obras, que señala que dicho modificado "tiene por objeto la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de los trabajos de construcción de la obra, subsanando también omisiones del proyecto original". Sin embargo, el artículo 202 de la LCSP establece que las modificaciones de los contratos solo podrán introducirse por "razones de interés público y para atender a causas imprevistas", por lo que las omisiones del proyecto original no pueden considerarse como una causa imprevista.

En el expediente consta un informe de fiscalización desfavorable sobre el reajuste de anualidades debido a que el certificado de retención de crédito no se encuentra firmado por el órgano

competente. El informe de propuesta de reajuste de anualidades debería estar aprobado por el Secretario de Estado de Infraestructuras, pero se remite sin fecha ni firma; asimismo, los documentos contables de retención de crédito llevan firma y fecha, pero no se identifica a la persona que los ha firmado.

La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras aprobó un modificado de un expediente firmado el 9 de enero de 2007, por importe de 30.557 miles de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. El 5 de mayo de 2009, antes de la finalización de la obra, se modificó el contrato por importe de 6.075 miles de euros, lo que representa un 19% de la cifra original. La modificación de la obra se debe básicamente a errores en las mediciones originales o a falta de las mismas; sin embargo, en el informe de supervisión se consideran tales circunstancias causas imprevistas.

La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras adjudicó un expediente cuyo objeto eran las obras complementarias a otras adjudicadas el 10 de enero de 2002, que ya habían sufrido dos modificados y otro expediente de obras complementarias. Según el apartado IV.1 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares, "la ejecución de las obras comienza a los cinco meses contados desde la fecha señalada para la apertura de las proposiciones económicas". Dado que tal acto se produjo el 2 de abril de 2009, las obras deberían haber comenzado el 2 de septiembre de 2009. Al ser el plazo de ejecución de 13 meses, la fecha de finalización sería el 2 de octubre de 2010. No obstante, la cláusula quinta del documento de formalización establece que "el plazo de ejecución de las obras es de 13 meses contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. Este acto se llevará a cabo en un plazo máximo de un mes desde la firma de este contrato". Al no aportarse en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas el acta de comprobación de replanteo, no puede establecerse cuándo comenzaron efectivamente las obras. El importe de la garantía se puso a disposición de la Dirección General de Carreteras en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación como dispone el artículo 83.1 LCSP.

IV.6.1. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (en adelante, CEDEX) remitió al Tribunal de Cuentas un total de seis expedientes primitivos, así como un modificado de un expediente de obras. No se remitieron prórrogas, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado dos de los expedientes recibidos, así como el modificado, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	1	100	736	100
Servicios	1	20	160	7,4
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	2	33,3	896	30,9

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La información y documentación enviada por el CEDEX es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CEDEX	R	96	9.873	6	2.895	3	1		
TOTALES	1	96	9.873	6	2.895	3	1		

El CEDEX ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 96 expedientes por un importe de 9.873 miles de euros. De ellos, cinco no debieron relacionarse, por ser de importe menor.

Con posterioridad a la remisión de los expedientes primitivos se han recibido en este ejercicio tres comunicaciones sobre ejecución total del contrato, así como una de la realización de una modificación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales videntes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

- Los PCAP no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Se han producido las siguientes deficiencias:

- El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en dos expedientes.

- El documento de formalización no incluye el régimen de penalidades por demora en dos expedientes.

IV.6.2. Centro Nacional de Información Geográfica

El Centro Nacional de Información Geográfica (en adelante CNIG) remitió al Tribunal de Cuentas una relación de los contratos celebrados que incluye 20 expedientes por un importe de 2.059 miles de euros.

Este organismo no remitió al Tribunal de Cuentas ningún expediente. Sin embargo, de acuerdo con la relación remitida al Tribunal, así como con los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado,

deberían haberse remitido cinco expedientes, de los que tres fueron remitidos en trámite de alegaciones, por lo que no pudieron ser objeto de fiscalización. Tampoco remitió ninguna comunicación relativa a incidencias producidas tras la formalización de los expedientes.

La información y documentación enviada por el CNIG es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CNIG	R	20	2.059	0	0				
TOTALES	1	20	2.059	0	0				

IV.6.3. Agencia Estatal de Seguridad Aérea

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante, AESA) remitió al Tribunal de Cuentas un único expediente, de suministro, que fue fiscalizado, conforme refleja el siguiente cuadro:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Suministro	1	100	417	100
TOTAL	1	100	417	100

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

Esta agencia ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 35 expedientes por un importe de 3.809 miles de euros.

La información y documentación enviada por la AESA es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
AESA	R	35	3.809	1	417				
TOTALES	1	35	3.809	1	417				

De acuerdo con las relaciones de expedientes y la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de dos expedientes.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de un expediente. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del expediente de contratación remitido, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales videntes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-el PCAP no contiene cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, o estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (disposición adicional 6ª de la LCSP).

-Asimismo, tampoco prevé la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-El PCAP no incluye declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-El PPT recoge la forma de pago, dato que es propio del contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares (artículo 67.2.ñ del RGLCAP).

-En el PCAP no consta el importe máximo de los gastos de publicidad.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

El pliego de prescripciones técnicas no consta aprobado por el órgano de contratación (la Directora de la agencia), sino por el Coordinador de Sistemas de la Información, con el *conforme* del Secretario General.

Se omitió la remisión de los informes preceptivos por tratarse de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, el anuncio de la licitación y la publicación de la adjudicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

IV.7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 35 expedientes de contratación, por importe de 29.090 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 17 expedientes por importe de 13.187 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	3	9	2.366	8
Servicios	14	40	10.821	37
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	17	49	13.187	42

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

Los Órganos de contratación del Ministerio han cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	172	36.688	35	29.029	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En los PCAP de los contratos números 2 y 3 aunque se indicaron los medios establecidos en los artículos 64, 65 y 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Zona Europea, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. En el PCAP del contrato número 1 aunque se indicaron los medios establecidos para acreditar la solvencia técnica de las empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Zona Europea, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. Estas deficiencias afectan a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

En los pliegos de los contratos números 2 y 3 no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes a los criterios de adjudicación “propuesta técnica” (contrato número 2) y “planificación de los medios técnicos y humanos” y “materiales impresos y programas informáticos dirigidos a la correcta ejecución del trabajo” (contrato número 3). Además los criterios de adjudicación del contrato número 3 antes mencionados, están redactados en unos términos excesivamente genéricos e imprecisos. Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el

pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En el contrato número 3 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Ministerio, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto al contrato número 2 pues a pesar de que el plazo de ejecución de estos contratos ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

Respecto al contrato número 1 se aporta en trámite de alegaciones documentación que acredita que el contrato se encuentra actualente en fase de ejecución. Respecto al contrato número 2 solo se adjunta una Comunicación al Tribunal de Cuentas de circunstancias posteriores a la formalización, en la que se indica que durante la ejecución del este contrato ha habido 3 ampliaciones de plazo y 2 revisiones de precio.

IV.7.1. Consejo Superior de Deportes

El Consejo Superior de Deportes ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 12 expedientes de contratación, por importe de 9.145 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 4 expedientes por importe de 3.415 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados en el Tribunal de Cuentas:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	1	20	866	29
Servicios	3	43	2.549	41
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	4	63	3.415	37

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
CSD	R	42	10.145	12	9.145	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En el pliego del contrato número 1 no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes al criterio de adjudicación “propuesta técnica”. Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En el contrato número 1 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Organismo, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio. Además, no se ha justificado el procedimiento y de los criterios de adjudicación elegidos.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto al contrato número 1 pues a pesar de que el plazo de ejecución de este contrato ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su completa ejecución, habiéndose aportado varios certificados de conformidad pero no el acta de recepción de los servicios prestados.

IV.8. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

En este epígrafe se analiza la contratación celebrada en el ámbito del Ministerio de Trabajo e Inmigración (en adelante MTIN), incluyendo tanto la correspondiente a los órganos de contratación del propio Ministerio como, en subepígrafes específicos, la celebrada por los siguientes organismos adscritos a este Departamento Ministerial: Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Fondo de Garantía Salarial y Consejo Económico y Social.

El MTIN ha remitido a este Tribunal de Cuentas, para su fiscalización, 24 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe de 31.483 miles de euros, tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.8-1.

Este Tribunal ha analizado la totalidad de los contratos remitidos, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Servicios	22	100	28.240	100
Suministro	2	100	3.243	100
TOTAL	24	100	31.483	100

Los resultados de las comprobaciones referidas a los órganos de contratación del propio MTIN en el ejercicio 2009 se exponen a continuación:

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El MTIN ha remitido a este Tribunal relaciones certificadas de los contratos adjudicados durante el ejercicio 2009, correspondientes tanto a órganos de contratación con competencias propias, como a órganos de contratación con competencias delegadas de los anteriores, comprensivas de los expedientes de contratos adjudicados en el ejercicio 2009, por un importe total de 28.236 miles de euros.

En el siguiente cuadro, y en el anexo IV.8-2, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por el MTIN de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas ²			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Ministro de Trabajo e Inmigración:	-	-	-	-	-				
Subdirección General de Oficialía Mayor	R	44	3.840	5	2.063				
Subdirector General de Administración Financiera	R	13	2.520	5	2.090				
Subdirector General de Obras y Patrimonio	R	17	2.839	-	-				
Subsecretario de Trabajo e Inmigración	R	5	16.234	5	15.623				
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración:	R	-	-	-	-				
Secretaría de Estado		4	189	-	-				
Dirección General de Inmigración		1	44	-	-				
Dirección General de Integración de los Inmigrantes		15	1.347	1	695				
Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior		2	3.425	2	3.124				
Subdirección general de Información Administrativa y Publicaciones		1	53	-	-				
Subdirección General Oficialía Mayor		2	196	1	165				
Subsecretaría de Trabajo e Inmigración		5	7.914	5	7.723				
TOTAL		109	38.601	24	31.483			14	

¹Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009). ² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa; (a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

La información remitida por el MTIN relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado (2009) ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular con la información contenida en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y la contenida en el BOE, con el siguiente resultado:

1. Las relaciones certificadas, a excepción de la correspondiente a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, han sido formuladas por los órganos encargados de la gestión de la contratación, cuyas competencias delegadas de contratación estaban limitadas en función de las cuantías de los contratos, y han comprendido contratos de cuantías superiores a las previstas en las respectivas delegaciones de competencias y que efectivamente fueron, como era procedente, adjudicados por otros órganos superiores y directivos de mayor jerarquía.

En lo sucesivo, la formulación de las relaciones certificadas debe hacerse en la forma señalada en el apartado II.1.1 de la *“Instrucción General relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios*

celebrados por las entidades del Sector público estatal y autonómico", aprobada por el Pleno del Tribunal en su sesión celebrada el día 26 de marzo de 2009, según la cual los órganos de contratación de los distintos entes, organismos y entidades incluirán en las relaciones certificadas que remitan al Tribunal de Cuentas los contratos que hayan celebrado cualesquiera otros órganos en los que aquéllos hayan delegado sus propias y originarias competencias de contratación.

2. El MTIN ha cumplido adecuadamente con la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los expedientes de contratación que, de acuerdo con sus tipos y cuantías, eran de remisión obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP.
3. En las relaciones certificadas remitidas a este Tribunal constan incluidos cincuenta y cuatro contratos que, sin embargo, no fueron publicados en la Plataforma de Contratación del Estado. Por contra, aparece publicado en la Plataforma de Contratación del Estado un contrato de servicios que no fue incluido como debiera en las relaciones certificadas remitidas a este Tribunal.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

En el análisis de los PCAP y de los PPTP de los expedientes de contratación tramitados por el MTIN se ha observado lo siguiente:

- Los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares utilizados en el MTIN son, por regla general, de carácter excesivamente genérico, sin que hayan sido específicamente redactados para su posterior aplicación a contratos de naturaleza análoga, tal y como exige el artículo 99 de la LCSP.

Estos modelos de pliegos, como es lógico, no concretaron los criterios objetivos de adjudicación, que posteriormente fueron adaptados y detallados para cada contrato en particular, sin que, en consecuencia, el Informe de la Asesoría Jurídica emitido sólo respecto del modelo de pliego avalase por tanto la validez de este aspecto concreto tan trascendente de las licitaciones.

Esta práctica, ya criticada por este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización de la contratación, que hace necesaria la adaptación posterior de los PCAP a las circunstancias de cada contrato, convierte los informes de los Servicios Jurídicos emitidos respecto de los modelos de pliegos particulares en meros formulismos para agilizar la tramitación de los expedientes de contratación, evitando así la emisión de los informes jurídicos particularizados de los PCAP, pero sin que ello permita garantizar su adecuación a la legalidad en todas sus cláusulas.

- En dos contratos los PCAP contemplaron la apertura, previa al acto público de licitación, de cierta información y documentación relativas a determinados aspectos técnicos constitutivos de las proposiciones de los licitadores, que eran evaluables como criterios objetivos de adjudicación y cuya ponderación dependía de un juicio de valor.

Esta práctica, ya criticada por este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización, resulta contraria al carácter secreto que deben tener las proposiciones hasta el momento mismo de la licitación pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 129.2 de la LCSP, y no resulta acorde con el principio de transparencia que debe regir en la contratación administrativa, previsto en los artículos 1 y 123 de la LCSP.

- En dos contratos la mención obligatoria en los PCAP relativa al sistema de determinación del precio del contrato (artículo 75.2 de la LCSP y artículo 67 del RGLCAP apartado 7.c) fue omitida y consistió en una mera explicación de la forma en que había sido calculado el presupuesto por el órgano de contratación.

- En cuanto a los criterios de adjudicación previstos en los PCAP y aplicados a los contratos analizados cabe señalar lo siguiente:

- Utilización inadecuada como criterio de adjudicación de las mejoras o prestaciones adicionales que pudieran ofertar los licitadores, con expresiones tales como "*otras mejoras*" valorables o que "*se valorarán hasta 10 puntos todas aquellas mejoras que redunden en una mayor calidad del servicio*", sin mayor concreción previa respecto de su contenido y de su extensión, en perjuicio de la objetividad y transparencia que exigen los artículos 1 y 123 de la LCSP.
- Utilización como criterio de adjudicación de factores acreditativos de la solvencia técnica de las empresas licitadoras (de aptitud de los licitadores), tales como los certificados de garantía de calidad "*Certificado oficial de calidad, UNE-EN ISO, certificado ISO 9001:2000*", la "*Formación académica y cualificación profesional del equipo de trabajo*" o los recursos personales y materiales de las empresas, que no debieron ser valorados como tales criterios de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53.2, 67 y 134.1 de la LCSP.
- Establecimiento de límites a partir de los cuales las posibles mayores bajas en el precio ofertadas por los licitadores no conllevan un correlativo incremento de la puntuación del precio. Tal y como ha señalado este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización, estos límites en la valoración del criterio objetivo precio, también denominados "*umbrales de saciedad*", no son adecuados pues desincentivan la competencia y resultan contrarios a los principios de eficiencia y economía, ya que, en la práctica, las empresas licitadoras no suelen ofertar bajas económicas por encima del citado "*umbral*", sabedoras de que no obtendrán con ello una mejor puntuación en el criterio precio. Además, pudiera darse el caso de que, entre dos ofertas que únicamente se diferencian en el precio, el órgano de contratación no elija la oferta más barata.

La inclusión en el PPTP de cláusulas propias del PCAP, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 68 del RGLCAP. Las menciones improcedentes en los PPTP se han referido a la cláusula de confidencialidad y al sistema de valoración de las ofertas.

- La inadecuada regulación de la revisión de precios aplicable a un contrato cuyo PCAP, si bien en primer término contempló adecuadamente la aplicación de la revisión de precios (el 85% del IPC) respecto del importe a pagar a tanto alzado, por la Administración, sin embargo, la misma cláusula del pliego previó también que "*los precios de los productos podrán ser revisados, previo acuerdo con la Administración*".

Esta última previsión implicaba que los precios de los productos podrían resultar modificados al margen de la revisión de precios aplicable según el índice oficial (IPC) establecida en el PCAP, lo que, no resultó acorde con el sistema de revisión de precios establecido en los artículos 77 y siguientes de la LCSP.

- Finalmente, cabe señalar que, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el MTIN durante el ejercicio 2009 no estableció en su contratación fiscalizada

por este Tribunal condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, para la adjudicación de los contratos respecto de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad. Estas dos posibilidades figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Del análisis efectuado por este Tribunal del cumplimiento por el MTIN de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, cabe señalar las siguientes incidencias:

- No constan en los respectivos extractos de los expedientes de determinados contratos los siguientes documentos: la clasificación del contratista exigida en el artículo 54 de la LCSP, la publicidad de la convocatoria de la licitación en el DOUE establecida en el artículo 126 de la LCSP, y la publicidad en el DOUE de la adjudicación definitiva del contrato o, en su caso, la comunicación de la adjudicación definitiva a la Comisión Europea exigida en el artículo 138.3 de la LCSP.
- En un contrato, la imputación presupuestaria del gasto al concepto 227.99 (*“Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.- Otros”*), realizada por el MTIN, resultó parcialmente inadecuada, puesto que, en la medida en que el precio del contrato correspondía al menos en parte al servicio de comedor del personal del propio Ministerio, su importe debió imputarse a los créditos previstos para gastos sociales del personal en el Capítulo 1, Gastos de Personal, del Presupuesto del MTIN.
- En dos contratos, la justificación para la utilización de la tramitación de urgencia de los expedientes prevista en el artículo 96 de la LCSP para el caso de que la contratación *“sea inaplazable o su adjudicación sea preciso acelerarla por razones de interés público”*, no resultó motivada en la concurrencia de circunstancias que no hubieran podido preverse con una adecuada planificación de la contratación por parte del órgano de contratación, sin necesidad de recurrir a este tipo de tramitación abreviada y claramente restrictiva de la concurrencia. Las circunstancias de estos dos contratos son las siguientes:
 - En el primer contrato citado, la declaración de urgencia se justificó en la necesidad de convocar un nuevo procedimiento de licitación al finalizar el plazo de ejecución del contrato hasta entonces vigente, contrato que además ya había sido prorrogado. Esta pretendida urgencia resulta desvirtuada por el hecho de que, el órgano de contratación conocía desde la misma fecha de formalización del contrato anterior cual sería su plazo de finalización, por lo que la urgencia derivó, en realidad, de la propia inactividad de la Administración y no de una circunstancia imprevisible.
 - En el segundo contrato, la declaración de urgencia queda desvirtuada si se tiene en cuenta en cuenta el hecho de que se trataba de actuaciones que estaban programadas para el período 2007 a 2013, por lo que no se podía hablar de una circunstancia sobrevenida ni imprevisible para el órgano de contratación.

Cabe añadir que los plazos de tramitación del expediente de contratación y de su adjudicación no fueron coherentes con la justificación de la declaración de urgencia. Así, el PPTP está fechado el 11 de febrero de 2009, la orden de inicio del expediente fue de 13 de mayo de 2009,

la aprobación del PCAP, del gasto y la apertura del procedimiento de contratación, tienen fecha de 3 de junio de 2009; la propuesta de adjudicación del 14 de julio de 2009, la adjudicación provisional fue el 24 de agosto y la adjudicación definitiva el 8 de octubre.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Finalmente, este Tribunal ha analizado el cumplimiento por el MTIN de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que se hayan observado demoras significativas en los pagos analizados.

IV.8.1. Servicio Público de Empleo Estatal

El Servicio Público de Empleo Estatal (en lo sucesivo SEPE) ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 23 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 21.942 miles de euros, tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.8.1-1.

Este Tribunal ha analizado la totalidad de los contratos remitidos, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	1	100	1.672	100
Servicios	17	100	12.451	100
Suministro	5	100	7.819	100
TOTAL	23	100	21.942	100

Los resultados obtenidos de la Fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el SEPE en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.8.1-2 se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del SEPE de la obligación legal de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación del órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas ²			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
SEPE	R	121	24.330	23	21.942	--	--	1	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

El SEPE ha remitido las relaciones certificadas de los contratos correspondientes al ejercicio 2009. Asimismo, este Tribunal ha recibido la comunicación de la formalización de un expediente de prórroga de otro contrato anterior.

La información remitida por el SEPE relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el BOE, con el siguiente resultado:

- Debe ponerse de manifiesto que el SEPE ha remitido diversas relaciones certificadas de contratos del año 2009, de forma separada, correspondientes a sus Servicios Centrales y a diversas Direcciones Provinciales, si bien cuatro de ellas, correspondientes a las Direcciones Provinciales de Zaragoza, Murcia, Lérida y Salamanca fueron remitidas fuera del plazo establecido en la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas, de 6 de abril de 2009. Además, la Dirección Provincial del SEPE de Sevilla no ha remitido a este Tribunal la relación certificada correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la citada Instrucción General.

Por otra parte, cabe señalar también que:

- En las relaciones certificadas remitidas por el SEPE figuran incluidos diecinueve contratos que, sin embargo, no aparecen publicados como debiera haber ocurrido en la Plataforma de Contratación del Estado. Asimismo, aparecen publicados en la citada Plataforma diez contratos del SEPE que no figuran en las relaciones certificadas remitidas a este Tribunal.

- Asimismo, en las mencionadas relaciones certificadas correspondientes al ejercicio 2009 no figuraban incluidos, como era preceptivo, 7 contratos de servicios, por importe de 5.299 miles de euros, cuyo extracto de expediente sí fue remitido al Tribunal. No obstante, de los 7 contratos citados no incluidos en la relación certificada, 4 de ellos sí fueron incluidos en la relación correspondiente al ejercicio siguiente (ejercicio 2010), sin ajustarse, por tanto, al criterio establecido a este respecto en la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas, de 6 de abril de 2009, basado en la fecha de adjudicación de los contratos, acorde con el criterio legal establecido en la entonces vigente LCSP, que hacía coincidir la perfección de los contratos con el momento de su adjudicación. Este criterio fue modificado posteriormente por el de la perfección en el momento de la formalización de los contratos, en virtud de lo dispuesto en la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que modificó, entre otras leyes, la LCSP y posteriormente recogido en el artículo 27 del vigente TRLCSP.

- Asimismo, debe señalarse que el SEPE ha cumplido con carácter general con la obligación, establecida en el artículo 29 de la LCSP, de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los

expedientes de los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superen los importes fijados en el citado artículo.

No obstante, según la información incluida en las relaciones certificadas cabe señalar que el SEPE no remitió 2 expedientes de contratación cuya remisión resultaba obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 29 de la LCSP. No obstante, cabe añadir que los citados expedientes de contratación fueron publicados en el BOE.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPTP) aplicados a los contratos adjudicados por el SEPE en el ejercicio 2009, con objeto de comprobar su grado de adecuación a la legalidad y al principio de eficiencia durante el citado período fiscalizado.

Como resultado del análisis realizado, cabe poner de manifiesto lo siguiente:

- En cinco contratos, los PCAP contemplaron la apertura, previa al acto público de licitación, de información y documentación relativas a determinados aspectos técnicos constitutivos de las proposiciones de los licitadores, que eran evaluables como criterios objetivos de adjudicación y cuya ponderación dependía de un juicio de valor.

Esta práctica, ya criticada reiteradamente por este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización, no resultó acorde con el carácter secreto que deben tener las proposiciones hasta el momento mismo de la licitación pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 129.2 de la LCSP, y perjudica el cumplimiento del principio de transparencia que debe regir en la contratación administrativa, principio recogido en los artículos 1 y 123 de la LCSP.

Cabe añadir a este respecto que el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, vigente durante parte del período fiscalizado, establece en sus artículos 26 y 27 con total claridad, la necesidad de incluir en sobre independiente la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, así como su apertura en un acto de carácter público.

- En un contrato, el PCAP era un mero cuadro de características, sin que se certificase mediante diligencia su correspondencia con el “modelo de pliego”.

- En seis contratos los PCAP no concretaron suficientemente el contenido y la forma o método de valoración de alguno de los criterios objetivos de adjudicación que resultaban aplicables, tal y como resulta exigible en virtud de lo dispuesto en el artículo 134.2 de la LCSP, y en cumplimiento de los principios de igualdad y transparencia previstos en los artículos 1 y 123 de la LCSP, que exigen que el contenido y el método de valoración de los criterios de adjudicación sean conocidos con carácter previo por todos los posibles licitadores.

Un ejercicio más los supuestos observados más frecuentemente por este Tribunal fueron: la inclusión de las prestaciones complementarias o de las posibles mejoras al PPTP propuestas por los propios licitadores (mejoras indeterminadas), así como la insuficiente concreción de los criterios técnicos, cuya puntuación dependía de un juicio de valor.

Como ejemplo de la deficiencia señalada cabe citar un contrato, en el que el PCAP aplicable al 2º lote incluyó como criterio de adjudicación “*los protocolos de actuación y planificación de actividades para la consecución de los servicios establecidos en el PPT*”, valorable hasta un máximo de 40

puntos, sin establecer mayor precisión al respecto de cómo serían concretados los criterios de distribución de dichos 40 puntos máximos.

Además, en este caso concreto tampoco fue motivada suficientemente en el expediente de contratación la distribución de la puntuación asignada a los licitadores en relación con este criterio de adjudicación. Así, en el informe de valoración técnica de las ofertas se reflejaron las puntuaciones otorgadas a las empresas licitadoras con valoraciones tales como, "*contiene una floja presentación de protocolos...*", "*aunque está bien ajustada en su contenido adolece de escaso detalle...*", que constituyeron apreciaciones, a juicio de este Tribunal, claramente insuficientes para motivar las diferentes puntuaciones otorgadas a cada una de las empresas licitadoras.

No obstante, cabe señalar que la adjudicación del contrato analizado recayó en la oferta más económica, por lo que la valoración de los criterios de apreciación subjetiva no resultó, en este caso concreto, determinante en la adjudicación, si bien ello no desvirtúa la existencia de la incidencia señalada.

- En cuatro contratos fueron incluidos en los PCAP, y valorados como criterios objetivos de adjudicación, factores o características de las empresas, tales como los medios personales o materiales del licitador o la disposición por éste de certificados de aseguramiento de la calidad (certificados AENOR, ISO, etc.), factores que, como reiteradamente ha manifestado este Tribunal de Cuentas, no deben ser valorados como criterios de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53.2, 67 y 134.1 de la LCSP.

- En un contrato el PCAP incluyó una fórmula para valorar el criterio precio, ya criticada reiteradamente por este Tribunal en anteriores Informes de Fiscalización, que asignó la máxima puntuación prevista a la oferta más barata, prescindiendo del valor relativo que la propia baja o economía representase respecto del presupuesto de licitación del contrato, de manera que con este sistema podrían obtener una elevada puntuación tanto bajas insignificantes como otras que supongan verdaderas economías. En efecto, la aplicación de este tipo de fórmulas si bien permiten una correcta ordenación de las ofertas en función del precio, no resultan adecuadas para la ponderación del criterio precio con respecto de los restantes criterios de adjudicación, en virtud de lo dispuesto en artículo el 134 de la LCSP, ni tampoco resulta acorde con el principio de eficiencia aplicable en la ejecución del gasto público.

- En cuatro contratos de servicios de duración superior al año, los PCAP excluyeron la aplicación de la revisión de precios sin que estuviese suficientemente motivada su exclusión, tal y como exige el artículo 77.2 de la LCSP. En concreto, en dos de los contratos analizados no constaba motivación alguna en el expediente, mientras que en los otros dos contratos, el SEPE justificó la exclusión basándose en que las empresas licitadoras debían tener en cuenta la no aplicación de la revisión de precios en la elaboración de sus ofertas económicas y, por tanto, hacer sus propias previsiones sobre la evolución futura de los precios. Esta práctica, ya criticada en anteriores Informes de Fiscalización, no parece razonable, teniendo en cuenta, además, que estas previsiones podrían no cumplirse, y que la evolución de los precios podría ser al alza pero también a la baja, circunstancia, esta última, que no contemplarían, en ningún caso, las empresas licitadoras.

- En dos contratos de servicios de tramitación anticipada, los PCAP establecieron que, si el contrato se formalizaba en el ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su ejecución (como de hecho sucedió), la adjudicación del contrato quedaba sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente. La inclusión en el PCAP de esta condición suspensiva de la existencia de crédito, no contemplada, dentro del ámbito de la Administración General del Estado, ni por la LCSP, que en su artículo 94.2 (artículo 110.2 TRLCSP) modifica el régimen jurídico de la tramitación anticipada establecido en el

artículo 69.4 del derogado TRLCAP, ni por la LGP, que regula la cuestión en su artículo 47, conlleva un incremento del riesgo de inseguridad jurídica en la contratación, por lo que debería motivarse adecuadamente su necesidad y explicitarse en el PCAP las consecuencias de su aplicación.

- En cuatro contratos, los PPTP incluyeron indebidamente cláusulas relativas a la forma de pago, al plazo de ejecución del contrato, a los requisitos de solvencia de las empresas, etc., cláusulas que deben figurar previstas únicamente en el PCAP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, en relación con el artículo 68.3, ambos del RGLCAP.

- Finalmente, cabe señalar que, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el SEPE no estableció condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

En relación con esta cuestión, cabe citar el contrato, cuyo objeto fue la campaña de publicidad para la difusión del portal redtrabaj@ para el SEPE, en cuyo lote 1, relativo a la creatividad de la campaña, el PCAP contempló expresamente que en la puntuación del criterio técnico, cuya ponderación era del 70%, se tuvieran “*en cuenta para su valoración...*” las propuestas de los licitadores que hicieran referencia, entre otros aspectos, “*a la igualdad de género*”, lo cual debe valorarse positivamente, si bien el pliego no concretó suficientemente cómo sería valorado este aspecto concreto por parte de la Mesa de Contratación.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Del análisis efectuado por este Tribunal del cumplimiento por el SEPE de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, cabe señalar las siguientes incidencias:

- En el mismo contrato acabado de citar, la Mesa de Contratación propuso el desistimiento del procedimiento de adjudicación respecto del lote 2, relativo a la contratación del plan de medios, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la LCSP, al no haber valorado, según consta en el expediente, por error de la propia Mesa de Contratación, la oferta técnica presentada por una de las empresas licitadoras, ya que esta circunstancia, aunque fuera debida a un error, resultaba contraria al procedimiento previsto en el artículo 134.2 de la LCSP.

En consecuencia, en este contrato únicamente fue adjudicado el lote 1 relativo a la creatividad de la campaña, en fecha 4 de diciembre de 2009, por lo que no fue cumplido el objetivo previsto en el PCAP, que contemplaba que la campaña de publicidad se realizase entre el día 15 de noviembre y el 15 de diciembre del ejercicio 2009, plazo que no fue cumplido, al no haber sido adjudicado el plan de medios (lote 2).

- El contrato, cuyo objeto fue el servicio de seguridad y vigilancia (lote 1) y el servicio de vigilancia de la salud laboral para los Servicios Centrales del SEPE (lote 2), fue objeto de contratación conjunta mediante Lotes cuyos objetos eran absolutamente heterogéneos y sin que entre ellos existiese “*unidad funcional*” alguna, por lo que, en este caso concreto, no resultaba aplicable el

artículo 74 de la LCSP, que permite la división en lotes de parte de un mismo objeto y, por tanto, los citados servicios debieron contratarse separadamente a juicio de este Tribunal.

- En tres contratos de servicios, los tres de la Dirección Provincial del SEPE de Sevilla, las circunstancias expresadas por el órgano de contratación para justificar la tramitación urgente se basaron en la prolongación excesiva en el tiempo de las fases iniciales de la tramitación de los expedientes, principalmente, el cumplimiento de los plazos de la publicidad obligatoria en los diarios oficiales, por lo que, para garantizar la continuidad de los servicios objeto de los contratos, era necesario acelerar la adjudicación por razones de interés público.

A juicio de este Tribunal, la mencionada circunstancia no fue suficiente justificación para motivar la tramitación urgente de los expedientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, artículo que debe interpretarse con carácter restrictivo. Y ello, teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la vigencia de los contratos de servicios anteriores era conocida por el órgano de contratación desde la misma fecha en que éstos se firmaron, además de que, obviamente, los plazos de publicidad de cumplimiento obligatorio están establecidos en la LCSP. Por tanto, el órgano de contratación tuvo tiempo suficiente para haber tramitado el expediente de forma ordinaria, por lo que, con una adecuada planificación de su contratación, no habría resultado preciso recurrir a este tipo de tramitación más restrictiva de la concurrencia.

Así, cabe citar como ejemplo, un contrato, en el que la justificación de la tramitación de urgencia se basó efectivamente en que: *"la fecha de publicación del anuncio preceptivo en el Boletín Oficial del Estado ha dilatado en el tiempo la expiración del plazo de presentación de proposiciones, con el consiguiente retardo de los trámites posteriores y especialmente de la adjudicación definitiva del contrato, circunstancias todas ellas que obligaron a acordar la tramitación de urgencia del expediente en cuanto la celebración del citado contrato respondería a la necesidad inaplazable de garantizar la seguridad de la sede"*. Estas circunstancias acabadas de exponer reflejan, como ya ha quedado señalado, que la urgencia invocada derivó, en realidad, de la falta de la adecuada planificación previa de la Administración, por lo que no resultó suficiente para justificar la tramitación de urgencia, dado su carácter excepcional, por la reducción de plazos que supone en la tramitación y licitación, lo que pudo incidir negativamente en la concurrencia y transparencia del procedimiento.

- En un contrato la formalización del contrato se produjo transcurrido el plazo de diez días desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, previsto en el artículo 140 de la LCSP.

- En un contrato no quedó acreditado en el expediente de contratación el informe técnico en el que se basó la propuesta de adjudicación (134.2 de la LCSP).

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Por lo que respecta a la ejecución de los contratos, debe señalarse lo siguiente:

- En un contrato ya citado anteriormente, algunos de los servicios parciales contratados fueron facturados en fecha anterior a la fecha final del período mensual correspondiente, lo que resultó contrario a la regla de servicio hecho que establece el artículo 200.1 de la LCSP.

- Finalmente, debe señalarse que se ha analizado, sobre una muestra de treinta pagos realizados, el cumplimiento por el SEPE de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que en ninguno de los casos analizados se hayan observado retrasos en los pagos.

IV.8.2. Fondo de Garantía Salarial

El Fondo de Garantía Salarial (en lo sucesivo FOGASA) ha remitido a este Tribunal de Cuentas la relación certificada de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009, en la que figura un único contrato de servicios por importe de 512 miles de euros, cuyo extracto fue remitido oportunamente por el FOGASA y que ha sido fiscalizado por este Tribunal de Cuentas.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.8.2-1 que se adjunta, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte de FOGASA de la obligación legal de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación del órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
FOGASA	R	7	820	1	512	--	--	--	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior FOGASA ha remitido la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009. La información remitida por FOGASA relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular en el Perfil de Contratante publicado en su propia sede electrónica y en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el BOE, con el siguiente resultado:

- Debe señalarse que FOGASA ha dado adecuado cumplimiento a la obligación, establecida en el artículo 29 de la LCSP, de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los expedientes de los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superen los importes fijados en el citado artículo.

- No obstante, cabe señalar que en la relación certificada correspondiente al ejercicio 2009 no figuraba incluido un contrato por importe de 60 mil euros, que sí figuraba incluido en la información publicada por el FOGASA en la Plataforma de Contratación del Estado.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el del pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) aplicados al único contrato adjudicado por FOGASA en el ejercicio 2009 y remitido a este Tribunal, con objeto de comprobar su grado de adecuación a la legalidad y al principio de eficiencia durante el citado período fiscalizado, sin haber detectado incidencias reseñables.

En lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el FOGASA en el único contrato remitido y fiscalizado en el ejercicio 2009 no estableció condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos respecto de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Finalmente, debe señalarse que se han analizado los pagos realizados para verificar el cumplimiento por parte del FOGASA de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que se hayan observado retrasos en los pagos.

IV.8.3. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en lo sucesivo INSHT) ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 6 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 4.686 miles de euros, tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.8.3-1.

Este tribunal ha analizado una muestra para su fiscalización de 4 contratos por un importe de 3.488 miles de euros, que representan el 67% de los contratos remitidos y el 74% del importe total, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Servicios	4	67	3.488	74
TOTAL	4	67	3.488	74

Los resultados obtenidos de la Fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.8.3-2 que se adjunta se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del INSHT de la obligación legal de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
INSHT	R	24	5.848	6	4.686	--	--	1	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior el INSHT ha remitido la relación certificada de contratos celebrados correspondiente al ejercicio 2009. Asimismo, este Tribunal ha recibido la comunicación de la formalización de un expediente de prórroga de otro contrato anterior. La información remitida por el INSHT relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante publicado en su propia sede electrónica y en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el BOE, con el siguiente resultado:

- En la relación certificada correspondiente al ejercicio 2009 figuraba incluido un contrato de servicios, por importe de 39 miles de euros, que no estaba publicado como debiera en la Plataforma de Contratación del Estado.
- De igual modo, no aparecen publicados en el BOE cuatro contratos cuya publicidad de la adjudicación resultaba obligatoria y que fueron oportunamente remitidos a este Tribunal.
- Asimismo, debe señalarse que el INSHT ha dado adecuado cumplimiento a la obligación, establecida en el artículo 29 de la vigente LCSP, de remitir al Tribunal de Cuentas todos los extractos de los expedientes de los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superaron los importes fijados en el citado artículo.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPTP) aplicados a los contratos adjudicados por el INSHT en el ejercicio 2009, con objeto de comprobar su grado de adecuación a la legalidad y al principio de eficiencia durante el citado período fiscalizado.

Como resultado del análisis realizado, cabe poner de manifiesto lo siguiente:

- En un contrato el PPTP exigió que las empresas licitadoras dispusieran, y así lo acreditaran, de sede u oficinas en la provincia de Madrid, lo que supone una limitación de la libre concurrencia. A juicio de este Tribunal, tal y como ya ha señalado en anteriores Informes de Fiscalización, el establecimiento de un criterio de aptitud como es el lugar de residencia de las empresas licitadoras en una determinada provincia o Comunidad Autónoma no resulta acorde con el principio de igualdad de trato y no discriminación, principio recogido en los artículos 1 y 123 de la LCSP. En este mismo sentido se ha pronunciado también la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (JCCA) en su Informe 9/09, de 31 de marzo de 2009, cuando concluye que “*el origen, domicilio*

social o cualquier otro indicio del arraigo territorial de una empresa no puede ser considerado como condición de aptitud para contratar con el sector público”.

Además, el PPTP exigió, también indebidamente, como requisito de admisión de las empresas licitadoras la acreditación de determinados certificados de gestión de la calidad, como fueron los certificados de gestión medioambiental y de gestión de la prevención de riesgos laborales, lo que no resultó procedente puesto que la solvencia de las empresas ya quedaba acreditada con la adecuada clasificación de los contratistas exigida en el propio PCAP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2, en relación con el artículo 54, ambos de la LCSP.

- En dos contratos de servicios, los PCAP no concretaron suficientemente el contenido y la forma o método de valoración de alguno de los criterios objetivos de adjudicación que resultaban aplicables, tal y como resulta exigible en virtud de lo dispuesto en el artículo 134.2 de la LCSP.

Así por ejemplo, en uno de los contratos cuyo objeto fue la organización de una conferencia de prevención de riesgos laborales en Barcelona (lote 2), el PCAP incluyó como criterio de adjudicación el catering, valorable con un máximo de hasta 20 puntos, sin establecer mayor precisión al respecto de cómo sería valorado este criterio. Fue la propia Mesa de Contratación la que, en el informe de valoración de las ofertas de las empresas licitadoras, concretó los aspectos específicos valorables del citado criterio, que fueron: “la calidad y variedad” hasta 10 puntos, la “ambientación y decoración” hasta 8 puntos y “otras aportaciones” valorables con un máximo de dos puntos. Ninguno de estos subcriterios estaba incluido con carácter previo en el PCAP para conocimiento de todos los posibles licitadores, lo que no resultó acorde con los principios de transparencia y objetividad aplicables a la contratación administrativa, previstos en los artículos 1 y 123 de la LCSP.

- En un contrato el PPTP incluyó indebidamente cláusulas relativas a los criterios objetivos de adjudicación que deben figurar previstas únicamente en el PCAP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, en relación con el artículo 68.3, ambos del RGLCAP.

- Finalmente, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, cabe citar un contrato, cuyo PCAP estableció como uno de los criterios técnicos de adjudicación el denominado criterio de *“responsabilidad social corporativa”* (valorado con hasta 5 puntos), criterio que incluyó, entre otros aspectos a valorar por parte de la Mesa de Contratación, las prácticas adoptadas por las empresas licitadoras que fueran más allá de las exigencias legales de obligado cumplimiento en distintos ámbitos, algunos de los cuales, como fueron *“la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la inserción en su plantilla de colectivos desfavorecidos, la conciliación de la vida familiar y laboral, etc.”*, no estaban relacionados con el objeto del contrato, tal y como exige el artículo 134 de la LCSP. Cabe apuntar no obstante que, en el contrato analizado, la valoración de este criterio no incidió en el resultado final de la adjudicación, que recayó en la empresa que presentó la oferta más económica.

Efectivamente, el artículo 134 de la LCSP establece que los criterios de adjudicación deben estar *“vinculados al objeto del contrato”*, ser objetivos y permitir seleccionar la oferta más ventajosa económicamente, lo que resulta aplicable también a cualquier criterio que, como en el caso analizado, pretenda valorar las ofertas en función de circunstancias de carácter social.

En ese sentido, cabe señalar que en la LCSP existen distintas posibilidades para poder incluir en los contratos cuestiones de carácter social, como las consideradas en este contrato, relativas a la promoción de la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida familiar o la inserción laboral en la plantilla de las empresas de colectivos desfavorecidos.

En concreto, la mencionada Ley Orgánica 3/2007 legitima esta inclusión del objetivo de igualdad entre mujeres y hombres, por lo que los órganos de contratación pueden particularizar el objeto de los contratos para que satisfaga, al mismo tiempo, la necesidad directa que justifique el propio contrato y la complementaria de promover la igualdad, lo que sin embargo en este contrato no sucedió, ya que el PPTP se limitó únicamente a definir la prestación de limpieza objeto del contrato sin extender este objeto a otras cuestiones de tipo social.

Por último, cabe señalar que el INSHT no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos y respecto de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Del análisis efectuado por este Tribunal del cumplimiento por el INSHT de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, cabe señalar las siguientes incidencias:

- En un contrato cuyo objeto fue el desarrollo del proyecto de asesoramiento público al empresario en empresas de menos de diez trabajadores, la empresa adjudicataria (ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A), tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la AGE y sus OAAA (entre ellos el INSHT) para realizar, entre otros servicios técnicos, precisamente los que fueron objeto de esta específica contratación, por lo que la calificación del negocio jurídico celebrado entre el adjudicatario (ISDEFE) y el INSHT tenía, en realidad, la naturaleza jurídica propia no de un contrato de servicios sino de una encomienda de gestión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1n) en relación con el 24.6 de la LCSP.

En consecuencia, el citado negocio jurídico debió ajustarse a las particularidades propias de una encomienda de gestión, a la que, en todo caso, no se hace referencia en la documentación incorporada al expediente, no resultando aplicable en este caso el procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad ni concurrencia utilizado por el INSHT, justificado en el artículo 154.d de la LCSP, que ampara los supuestos en los que *por "razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado"*.

- En un contrato, la clasificación exigida en el PCAP para el lote 1 fue: "Grupo M, Subgrupo 6, Categoría C", sin embargo, según consta en el expediente la empresa adjudicataria no poseía dicha clasificación, si bien se comprometía, para el caso de que resultase finalmente adjudicataria del contrato (como de hecho sucedió), a subcontratar los servicios comprendidos en dicho lote 1 con una empresa que sí disponía de la citada clasificación, lo que no resultó acorde con lo establecido en el artículo 54 de la LCSP.

Efectivamente, el art. 54,1 de la LCSP señala expresamente que *"en el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan*

de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por estos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato". Por tanto, el expresado artículo se refiere a supuestos concretos en los que una específica parte de la prestación haya de realizarse por empresas con una especialización determinada, lo que no sucedió en el caso del contrato analizado, en el cual, el propio PCAP exigió una única clasificación referida a la totalidad de los servicios comprendidos en el lote 1 del contrato, por lo que este caso no tenía encaje legal en el supuesto previsto por el citado artículo 54 y, en consecuencia, no quedó adecuadamente acreditada en el expediente la clasificación económica requerida al contratista.

- En un contrato no consta la autorización ministerial para contratar (artículo 292.5 de la LCSP) que resultaba preceptiva.

- En un contrato no consta la publicidad de la convocatoria de la licitación en el DOUE exigida en el artículo 126 LCSP y en otros cuatro no consta la publicidad de la adjudicación en el BOE y en el DOUE, que era obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Finalmente, debe señalarse que este tribunal ha analizado el cumplimiento por el INSHT de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin que se hayan producido demoras significativas en los pagos analizados.

IV.8.4. Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social (en adelante CES) ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización tres contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 595 miles de euros, tal y como se refleja en el anexo IV.8.4-1.

Se han fiscalizado los tres contratos remitidos por el CES, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	3	100	595	100
TOTAL	3	100	595	100

Los resultados obtenidos de la Fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos remitidos por el CES en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de contratos al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.8.4-2 que se adjunta, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por el CES de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación del órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativa			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CES	R	6	741	3	595	3			

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior, el CES ha remitido la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009. La información remitida por el CES relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante y en el BOE, con el siguiente resultado:

- El CES ha remitido a este Tribunal de Cuentas la relación certificada de contratos, así como los extractos de expedientes en los casos en que resultaba preceptivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP.
- Por el contrario, no fue publicada la adjudicación en el BOE de ninguno de los tres expedientes de contratación remitidos por el CES y fiscalizados por este Tribunal, cuya publicidad resultaba obligatoria.
- El CES no ha integrado su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado, tal y como exige el artículo 309 de la LCSP, por lo que no ha sido posible contrastar la información contractual de esta entidad, ya que en su propia página Web el CES únicamente publica las licitaciones y adjudicaciones efectuadas en el ejercicio corriente, sin que conste un archivo histórico de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el de los pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPTP) aplicados a los contratos adjudicados por el CES en el ejercicio 2009, con objeto de comprobar su grado de adecuación a la legalidad y al principio de eficiencia durante el citado período fiscalizado, sin que se hayan encontrado incidencias reseñables.

- En lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el CES durante el ejercicio 2009 no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos respecto de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el análisis efectuado por este Tribunal del cumplimiento por el CES de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, se han observado las siguientes incidencias:

- La tramitación de forma separada de tres contratos de obras para la reforma del edificio que constituye la sede del CES, con un presupuesto de licitación (IVA excluido) en cada uno de ellos de 199.990, 198.700 y 199.827 euros, respectivamente, todos ellos para la realización de obras de reforma del mismo edificio, realizadas durante el mismo ejercicio, adjudicadas al mismo contratista y siendo, además, los tres proyectos de obras redactados y dirigidos en su ejecución por el mismo arquitecto. Ello constituyó, a juicio de este Tribunal, un supuesto de fraccionamiento contractual prohibido por el artículo 74.2 de la LCSP, en cuya virtud, *“no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”*.

En efecto, con el fraccionamiento del objeto de estos contratos y la consiguiente disminución de su importe, el CES omitió la exigencia en el pliego de la clasificación del contratista (artículo 54 de la LCSP), así como eludió la publicidad en el BOE de la convocatoria de la licitación, que, según dispone el artículo 161.2 en relación con el 126.1, ambos de la LCSP, resulta obligatoria en los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros, importe que habría resultado superado con la tramitación conjunta de al menos dos de las tres obras analizadas.

- Asimismo, los proyectos de obras de cada uno de los tres contratos citados fueron aprobados en determinadas fechas, 12 de mayo de 2009, 6 de julio de 2009, y 11 de septiembre 2009, respectivamente, todos ellos, con posterioridad a las fechas que constan en los documentos de certificación de viabilidad geométrica de los proyectos (replanteo), fechados el 2 de marzo de 2009, el 4 de mayo de 2009 y el 31 de julio de 2009, lo que no resultó acorde con lo dispuesto en el artículo 110 de la LCSP, que dispone que *“Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos...”*.

- Por último cabe añadir que no consta en ninguno de los tres expedientes de obras analizados la publicidad de la adjudicación definitiva en el BOE, tal y como resultaba obligatorio por razón del importe de los contratos, superior en los tres casos a 100.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Por lo que respecta a la ejecución de los contratos, debe señalarse lo siguiente:

- En los tres contratos de obras acabados de citar constan en los expedientes certificaciones de obra de fechas anteriores a las respectivas fechas de las actas de inicio y replanteo de las obras, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, que dispone que *“la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo...”*.

Finalmente, este Tribunal ha analizado el cumplimiento por el CES de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que se hayan observado retrasos en los pagos.

IV.9. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en adelante MITC) tenía adscritos en este ejercicio cuatro organismos autónomos. En este epígrafe se recogen los resultados de las comprobaciones realizadas respecto de la contratación celebrada por los órganos del Ministerio, así como, en apartados específicos, la correspondiente a los referidos organismos autónomos.

La Administración General contaba en este ejercicio con 21 órganos de contratación, de los que dos lo fueron solo en parte de aquél.

Por el MITC se remitieron al Tribunal de Cuentas un total de 27 expedientes primitivos, por un importe de 36.507 miles de euros. Atendiendo a los tipos de contratos, el 7,4% fue de obras, el 74,1% de servicios y el 18,5% de servicios. En cuanto a la forma de adjudicación, la más empleada fue el procedimiento abierto con varios criterios, en un 77,8% de los casos.

El cuadro siguiente refleja la muestra total de los expedientes primitivos analizados.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	1	50	943	57,9
Servicios	5	25	19.585	64,4
Suministro	2	40	3.047	68,3
TOTAL	8	29,6	23.575	64,6

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

Se han recibido relaciones de los contratos celebrados correspondientes a 12 órganos de contratación y certificaciones negativas de otros nueve.

Según las relaciones recibidas, se adjudicaron un total de 305 contratos, por un importe total de 54.395 miles de euros.

Con posterioridad a la remisión de los expedientes primitivos se han recibido en este ejercicio 15 comunicaciones sobre cumplimiento total de la prestación y dos sobre variaciones del plazo de ejecución del contrato. Asimismo, se han remitido al Tribunal de Cuentas doce prórrogas y cuatro modificados.

La información y documentación enviada por los órganos de contratación es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

(en miles de euros)

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Ministro	C								
Secretaría de Estado de Comercio	R	68	1.932						
Secretaría de Estado de Energía	C								
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información	R	14	7.592	3	2.157	2		2	
Secretaría de Estado de Turismo	C			1	258				
Dirección General de Comercio e Inversiones	R	34	515						
Dirección General de Industria	C								
Dirección General de Política Comercial	R	6	121						
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa	R	6	345						
Dirección General de Política Energética y Minas	C								
Dirección General de Telecomunicaciones	R	1	6			2			
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información	C								
Junta de Contratación	R	49	30.148	21	32.465	11	4	12	
Oficialía Mayor	R	65	1.275						
Secretaría General de Comercio Exterior	R	6	382						
Secretaría General de Energía	C								
Secretaría General de Industria	R	2	2.680						
Subdirección General de Análisis, Estrategia y Evaluación	R	22	945						
Subdirección General de Administración Financiera y Contratación	C								
Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	R	18	1.086						
Subsecretaría	R	14	7.368	2	1.627				
TOTALES	21	305	54.395	27	36.507	15	4	14	

De acuerdo con los datos de las relaciones de expedientes remitidas al Tribunal de Cuentas, así como de los publicados en el Boletín Oficial del Estado, se omitió el envío al Tribunal de Cuentas de 15 expedientes: 10 de Oficialía mayor y Subsecretaría y cinco de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de nueve expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación. Dichos expedientes corresponden a los siguientes órganos de contratación: Junta de Contratación (8) y Secretaría de Estado de Turismo (1).

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales videntes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los PCAP no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-Con carácter general, en aquellos casos en los que, por existir preponderancia de los criterios subjetivos, deba constituirse el comité de expertos que establece el artículo 134.2 de la LCSP, los pliegos no prevén el establecimiento de dicho comité.

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

-Los pliegos no siempre recogen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén siempre la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida se recoge en el cuadro siguiente:

ORGANO	Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS									
		7	18								
Junta de Contratación	J09.007.01	X									
Junta de Contratación	J09.075.01	X									
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información	M09.012.13	X									
Secretaría de Estado de Turismo	03000810045/2008		X								

Por otra parte, se han observado las siguientes deficiencias:

- El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en un expediente adjudicado por la Junta de Contratación.

- El documento de formalización no incluye el régimen de penalidades por demora en un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Turismo.

- En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación, la fecha de la adjudicación es posterior a la fecha de formalización del contrato.

IV.9.1. Centro Español de Metrología

El Centro Español de Metrología (en adelante, CEM) remitió al Tribunal de Cuentas un total de dos expedientes primitivos, así como una prórroga. No se remitieron modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se ha fiscalizado uno de los expedientes recibidos y la prórroga, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Servicios	1	50	387	55,4
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	1	50	387	55,4

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El CEM ha remitido una relación que incluye 24 expedientes por un importe de 2.483 miles de euros.

La información y documentación enviada por el CEM es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CEM	R	24	2.483	2	699				
TOTALES	1	24	2.483	2	699				

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de dos expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales videntes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, aunque los pliegos incluyen la posibilidad de que el órgano de contratación supervise la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP), no especifica por qué medios se llevará a cabo dicho control.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

La documentación remitida presenta las siguientes omisiones y deficiencias:

- En un expediente, el anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad.
- Se omitieron el documento contable acreditativo de la existencia de crédito, el informe del Servicio Jurídico sobre la prórroga, la documentación acreditativa de que el adjudicatario se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el acuerdo de prórroga, en una tramitada por la Dirección del Centro.

IV.9.2. Instituto de Turismo de España

El Instituto de Turismo de España (en adelante, TURESPAÑA) contaba en el ejercicio 2009 con 37 órganos de contratación, de los que 36 lo fueron sólo en parte del mismo. De ellos, 33 correspondían a las Oficinas en el Exterior.

TURESPAÑA remitió al Tribunal de Cuentas un total de 21 expedientes primitivos, así como siete prórrogas y dos modificados. No se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado siete de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	1	33,3	10.010	44,9
Servicios	5	29,4	10.620	19,1
Suministro	1	100	938	100
TOTAL	7	33,3	21.568	27,4

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El número de expedientes incluidos en las tres relaciones enviadas es de 154 por un importe de 98.045 miles de euros. La Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa no presentó relación ni certificación negativa sobre los contratos celebrados.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas siete expedientes de prórroga y dos modificados, todos ellos de contratos de servicios.

Con posterioridad a la remisión de los expedientes se han remitido al Tribunal de Cuentas una comunicación sobre variación en el plazo de ejecución.

La información y documentación enviada por TURESPAÑA es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Dirección General	R	13	86.079	3	1.082				
Presidencia				16	77.074		2	4	
Secretaría General	R	81	7.727	2	628			1	
Oficinas de Turismo (33)	R	60	4.239	-	-			3	
TOTALES	3	154	98.045	21	78.784		2	8	

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de 2 expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales videntes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

- Con carácter general, aunque los pliegos establecen la posibilidad de que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP), no especifican con qué medios se realizará dicho control.

- En aquellos casos en los que en los criterios de adjudicación hay una preponderancia de los criterios subjetivos, no se prevé la existencia de un comité de expertos u organismo técnico especializado que realice la evaluación de las ofertas conforme a estos criterios, según establece el artículo 134.2 de la LCSP.

- Los pliegos no siempre recogen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén en todos los casos la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan los pliegos de expedientes concretos:

- En un expediente adjudicado por la Presidencia de TURESPAÑA, el pliego de prescripciones técnicas recoge el presupuesto de licitación del contrato, extremo que debe constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares (artículo 67.2.c. del RGLCAP).

- En un expediente adjudicado por la Presidencia de TURESPAÑA, en el pliego de prescripciones técnicas figuran el presupuesto, el plazo de ejecución y la forma de pago del contrato, información

que debe constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares pero no en el pliego de prescripciones técnicas (artículo 67.2.c, e y ñ del RGLCAP).

-En un expediente de obras adjudicado por la Presidencia de TURESPAÑA, el PCAP no regula debidamente la subcontratación, ya que se limita a remitirse al artículo 210 de la LCSP. En este mismo expediente, no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

Se ha omitido la remisión de la siguiente documentación:

- La publicación de la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado, en un expediente adjudicado por la Presidencia del Instituto.
- El informe del servicio jurídico sobre la prórroga en una tramitada por la Oficina Española de Turismo en Londres.

Por otra parte, se produjeron las siguientes deficiencias:

- En un expediente adjudicado por la Presidencia del Instituto, la apertura de las proposiciones económicas se produjo con anterioridad al informe de valoración de las ofertas técnicas, en contra de lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- En un expediente adjudicado por la Presidencia del Instituto, el cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares establece que la adjudicación provisional se produciría en el plazo máximo de 15 días desde la apertura de las proposiciones económicas. Sin embargo, se produjo un retraso de 38 días desde la finalización de dicho plazo máximo.
- En un expediente adjudicado por la Presidencia del Instituto, la apertura de las ofertas económicas se produjo con un retraso de 21 días sobre la fecha indicada en el anuncio de la licitación publicado en el BOE.

IV.9.3. Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras

El Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (en adelante IRMCDACM) remitió al Tribunal de Cuentas un único expediente, que ha sido fiscalizado.

El cuadro siguiente refleja la muestra analizada.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	-	-	-	-
Servicios	1	100	2.009	100
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	1	100	2.009	100

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El IRMCDACM ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 6 expedientes por un importe de 2.114 miles de euros.

La información y documentación enviada por el IRMCDACM es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS (en miles de euros)									
ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
IRMCDACM	R	6	2.114	1	2.009				
TOTALES	1	6	2.114	1	2.009				

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del expediente de contratación recibido, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-El PCAP no incluye declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

IV.9.4. Oficina Española de Patentes y Marcas

La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) contaba en el ejercicio con dos órganos de contratación, la Dirección General y la Secretaría General. La OEPM remitió 13 expedientes por un importe de 7.831 miles de euros, de los que se seleccionaron dos para su fiscalización.

El cuadro siguiente refleja la muestra analizada.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	-	-	-	-
Servicios	1	9,1	1.342	20,7
Suministro	1	50	508	37,3
TOTAL	2	15,4	1.850	23,6

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La relación de los contratos celebrados incluye 68 expedientes por un importe de 12.034 miles de euros.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas un expediente de prórroga y un modificado, ambos de contratos de servicios.

La información y documentación enviada por los órganos de contratación de la OEPM es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
OEPM	R	68	12.034	13	7.831		1	1	
TOTALES	1	68	12.034	13	7.831		1	1	

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de dos expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación recibidos, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Los PCAP no siempre recogen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén en todos los casos la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y

mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Aunque los pliegos establecen la posibilidad de que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP), no siempre especifican con qué medios se realizará dicho control.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

En concreto, en un expediente no consta la resolución motivada que establece la revisión de precios.

IV.9.5. Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha remitido al Tribunal de Cuentas 6 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 2.331 miles de euros, habiendo sido fiscalizados en su totalidad, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	1	100	685	100
Servicios	5	100	1.646	100
Suministros	--	--	--	--
Otros	--	--	--	--
TOTAL	6	100	2.331	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por la CMT en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, la CMT ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 33 contratos por un importe global de 4.190 miles de euros. Esta información ha sido contrastada con los datos publicados a través de su página Web en su perfil de contratante, habiéndose comprobado que 2 contrato que figuraban en la relación certificada no han sido publicados en su página web.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 6 contratos por importe de 2.331 miles de

euros. Por el contrario, la CMT no informó, durante el periodo fiscalizado, sobre las incidencias de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, ni sobre los contratos finalizados, como requiere la citada Instrucción del Tribunal. En ejercicios posteriores ha informado sobre dos prórrogas de contratos adjudicados en el ejercicio 2009.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte de la CMT de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CMT	R	33	4.190	6	2.331			2	
1 (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato. 2 R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.									

La CMT publicó a través de su página Web su perfil de contratante, de acuerdo con el artículo 42 de la LCSP, en la que ofrecía información sobre las convocatorias en curso, las adjudicaciones provisionales y definitivas, así como una referencia a determinados contratos formalizados en ejercicios anteriores. Por el contrario, la Entidad no difundió su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado ("www.contrataciondelestado.es"), tal y como exige el artículo 309 de la LCSP.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, verificándose su adecuación a la legalidad y a los criterios de eficiencia, detectándose las siguientes deficiencias:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente, no concretaron los medios acreditativos de la solvencia para aquellos licitadores procedentes de Estados miembros de la Unión Europea, remitiendo a los artículos 64 y 67 de la LCSP, este último referido al contrato de servicios. Igual ocurre en otros dos expedientes.

Los pliegos de un expediente adjudicado mediante procedimiento negociado con publicidad, incluyeron como cuestiones objeto de negociación las medidas de aseguramiento de la calidad y el equipo a adscribir a las obras y perfil especializado de los técnicos de las empresas, extremos que deberían haberse exigido para acreditar su solvencia técnica o profesional.

Igualmente, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de dos expedientes incluyeron, entre los criterios que han de servir de base para la adjudicación, la adecuación e idoneidad del equipo de trabajo y los niveles de certificación de los fabricantes o las certificaciones de calidad, cuando estos extremos son medios justificativos de la solvencia técnica o profesional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LCSP. Esta misma circunstancia se produjo en otro expediente, en el que se incluyeron como criterio de adjudicación, las titulaciones oficiales expedidas y las certificaciones de calidad.

Asimismo, los pliegos de un expediente previeron, entre los criterios de adjudicación de uno de sus lotes, los medios materiales que ofrecía el licitador para llevar a cabo las labores objeto del contrato. Los requisitos de solvencia de las empresas son requisitos legalmente establecidos como criterios de admisión de los licitadores, que deben ser tenidos en cuenta previamente para evaluar la aptitud de la empresa adjudicataria, sin que pueda ser objeto de valoración lo que legalmente se considera requisito indispensable para licitar.

Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de tres expedientes, establecieron, como uno de los criterios de adjudicación, las prestaciones adicionales, sin precisar su contenido y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación, limitándose a señalar que se valorarían todas las mejoras funcionales y técnicas propuestas. Esta falta de determinación no resultó acorde con los principios de publicidad y transparencia previstos en el artículo 1 de la LCSP, al privar a las empresas de la información suficiente sobre las posibles mejoras que pudieran proponer y, en su caso, cuáles de ellas serían las más valoradas por el órgano de contratación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente previeron la apertura en acto público, únicamente, de la oferta económica, no así del resto de la documentación valorable conforme a los criterios de adjudicación, infringiendo el artículo 129.2 de la LCSP que exige que las proposiciones sean secretas y que se arbitren los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública.

Con posterioridad a la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de un expediente, la Entidad procedió a modificar la redacción de estos documentos, sin que conste que dichas modificaciones hubieran sido aprobadas por el órgano de contratación ni informadas, en cuanto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, por el servicio jurídico, al considerar la Entidad que se trataba de una simple corrección de errores materiales.

Los pliegos de prescripciones técnicas de dos expedientes hacían mención al objeto del contrato, así como al plazo de ejecución, cuando el artículo 67.2 del RGLCAP dispone que estos extremos figuren en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. A este respecto, el artículo 68.3 del mismo texto legal no permite que los pliegos de prescripciones técnicas contengan cláusulas que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Con carácter general, la CMT no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

c) Cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en la fase de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el informe sobre la necesidad de la contratación de un expediente se aludía a necesidad de la traducción de informes, documentos o publicaciones relacionados con el sector de las telecomunicaciones que pudieran ser necesarios o que tuvieran relevancia para el ejercicio de las funciones de regulación que correspondían a la CMT. Este informe debería haber concretado con más precisión el tipo de necesidades a que se refiere o qué se entiende como relevante en el ámbito de las funciones de regulación de la Entidad.

La apertura de los sobres que contenían las ofertas técnicas presentadas por los licitadores de cuatro expedientes se realizó por la mesa de contratación, sin que conste, en las actas expedidas al efecto, que se hubiera llevado a cabo en acto público, como requiere el artículo 129.2 de la LCSP.

Asimismo, según consta en el informe de valoración de las ofertas presentadas en un expediente, una de las empresas licitadoras presentó una única oferta económica, comprensiva de los dos lotes en que se había fraccionado el expediente, circunstancia que debería haber sido motivo de inadmisión de la proposición.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente previeron la constitución de un comité de expertos, para la valoración de los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor. Sin embargo, no consta la constitución de este comité, que de conformidad con lo indicado en el artículo 134.2 de la LCSP, ha de estar formado por un mínimo de tres miembros. Únicamente figura en el expediente un informe de evaluación de las ofertas del Director de Sistemas de Información de la CMT.

El informe elaborado por los comités de expertos constituidos para la valoración de las ofertas de un expediente expuso previamente, y con carácter general, el método empleado para su evaluación, atendiendo a los criterios de adjudicación que requieren un juicio de valor. Sin embargo, no motivó la puntuación otorgada a cada una de ellas, que constaba en un cuadro adjunto, lo que resultó contrario al principio de transparencia e impidió conocer si la adjudicación había recaído en la oferta económicamente más ventajosa.

En un expediente la empresa adjudicataria ofreció un plazo de ejecución de las obras inferior al previsto en los pliegos. Sin embargo, el contrato formalizado entre las partes no se ajustó a lo ofertado por el adjudicatario, manteniendo el plazo estipulado en los pliegos. A este respecto, cabe señalar que las mejoras propuestas por la empresa adjudicataria deben ser incluidas expresamente en el documento de formalización del contrato, cuyo contenido se encuentra regulado en el artículo 71 del RGLCAP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Si bien en los expedientes analizados no constaban, inicialmente, ni las facturas ni los documentos acreditativos de los pagos efectuados, todos esos documentos fueron aportados por la Entidad en trámite de alegaciones.

No constan las actas formales de recepción de los contratos examinados.

IV.9.6. Comisión Nacional de Energía

La Comisión Nacional de Energía (CNE) remitió al Tribunal de Cuentas 6 contratos correspondientes al ejercicio 2009, 3 de ellos de oficio y los otros 3 a solicitud del Tribunal de Cuentas, por un importe total de 1.585 miles de euros, habiendo sido fiscalizados en su totalidad, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	--	--	--	--
Servicios	3	100	1.020	100
Suministros	3	100	565	100
Otros	--	--	--	--
TOTAL	6	100	1.585	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por la CNE en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, la CNE remitió la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 57 contratos por un importe global de 6.175 miles de euros. No obstante, en esta certificación la Entidad incluyó indebidamente 18 incidencias de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, cuando de acuerdo con la Instrucción General del Tribunal de Cuentas, dichas incidencias deberían haber sido únicamente objeto de comunicación, y 4 encomiendas de gestión, negocio jurídico no sujeto a la legislación de contratos.

El perfil de contratante de la Comisión, previsto en el artículo 42 de la LCSP, y mediante el cual se permite el acceso público a la información contractual de la Entidad por medio de Internet, se realizó a través de la Plataforma de Contratación del Estado. No obstante, la información contenida en la relación certificada no ha podido ser contrastada con los datos publicados a través de la Plataforma de Contratación del Estado, en tanto que no figuran en ella los contratos adjudicados en el ejercicio fiscalizado.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 3 contratos por importe de 956 miles de euros, y comunicó y remitió la documentación correspondiente a 4 expedientes de prórroga y 2 modificaciones de contratos celebrados en ejercicios anteriores, así como 3 prórrogas de contratos adjudicados en el ejercicio fiscalizado. En alegaciones remitió información sobre la finalización de 4 expedientes.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte de la CNE de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CNE	R	57	6.175	3	956	4	2	7	
1	(a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato.								
2	R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.								

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente no concretaron los medios acreditativos de la solvencia para aquellos licitadores procedentes de Estados miembros de la Unión Europea.

Asimismo, los pliegos de otro expediente señalaron que el expediente se tramitaría por procedimiento abierto, valorándose, además del precio, otros criterios de carácter técnico que se establecían en el pliego de prescripciones técnicas. Esta previsión resultó contraria a la cláusula décimo segunda de estos mismos pliegos, que preveía como único criterio de adjudicación el precio.

En los pliegos de un expediente se incluyeron, como criterios objetivos de adjudicación, factores o requisitos de solvencia técnica de las empresas licitadoras (determinantes de la aptitud de estas empresas), tales como los medios personales o materiales, factores que, como reiteradamente ha manifestado este Tribunal de Cuentas, no son susceptibles de valoración como criterios de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 67 y 134.1 de la LCSP. Así, se dio el supuesto en este expediente, en el que una de las ofertas recibidas, de acuerdo con el informe de valoración, presentó ciertas deficiencias en la adscripción de medios personales, lo que debió ser motivo de inadmisión, por no acreditar la solvencia suficiente, en lugar de ser objeto de una mera puntuación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de uno de los expedientes fiscalizados preveían las “mejoras” presentadas por los licitadores, entre los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, sin precisar su contenido y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente adjudicado mediante procedimiento negociado con publicidad, no concretaron las cuestiones objeto de negociación, indicando únicamente que el órgano de contratación negociaría con el licitador la oferta que éste hubiera presentado, para adaptarla a los requisitos indicados en los pliegos.

Los pliegos de prescripciones técnicas de tres de los expedientes fiscalizados hacían mención al objeto del contrato y en el último expediente indicado, además, a la duración del contrato, cuando el artículo 67.2 del RGLCAP dispone que estos extremos figuren en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. A este respecto, el artículo 68.3 del mismo texto legal no permite que

los pliegos de prescripciones técnicas contengan cláusulas que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Con carácter general, la CNE no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Un expediente se tramitó por el procedimiento de urgencia, de acuerdo con el artículo 96 de la LCSP, a fin de poder cumplir en plazo las funciones asignadas en el Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambio de Suministrador. Sin embargo, este Real Decreto se publicó el 20 de junio y el expediente no se inició hasta pasados tres meses, lo que pone de manifiesto la falta de diligencia de la Entidad en la tramitación del expediente, y que de otro modo hubiera permitido su tramitación de forma ordinaria.

Un expediente tuvo por objeto, de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas, el suministro del obsequio de Navidad para el personal de la CNE. Sin embargo, la Comisión adquirió 285 lotes navideños, siendo 50 para personal de empresas externas que prestaban servicios en el Organismo con carácter habitual, a pesar de que este colectivo no tenía la condición de personal propio de la Entidad.

Asimismo, la CNE adjudicó otro expediente mediante el procedimiento negociado sin publicidad. De conformidad con el artículo 160 de la LCSP, los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalaron los criterios que serían objeto de negociación. Sin embargo, no consta que el órgano de contratación negociara con los candidatos las ofertas que éstos habían presentado, para adaptarlas a los requisitos indicados en los pliegos, como requieren los artículos 153 y 162 de la LCSP. Por el contrario, de la documentación aportada se desprende que la Entidad se limitó a recibir las ofertas y a proceder a su valoración, como si de un procedimiento abierto se tratara.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

En el ejercicio 2008 la Entidad formalizó un contrato de servicios. En julio de 2009 se formalizó una modificación del contrato con objeto de ampliar su plazo de ejecución, así como determinados extremos de la facturación y de la revisión de precios. Asimismo, se acordó la suspensión del contrato, ante la falta de publicación de los formularios de reporte de la información contable a suministrar por las empresas eléctricas y gasistas, estableciendo que si transcurridos seis meses desde el inicio de la suspensión, no hubieran sido publicados los citados formularios, la suspensión finalizaría y el contrato se reanudaría, fijando las partes, de mutuo acuerdo, las tareas a realizar. Esta previsión implicaba asignar tareas al contratista en el supuesto de reanudación del contrato, sin desaparecer las causas que determinan la suspensión del mismo, con lo que estas mismas tareas también podrían haberse encomendado con anterioridad, sin necesidad de la suspensión contractual. Respecto de las mencionadas circunstancias la Entidad alega que la mencionada reanudación trataba de evitar la aplicación de la indemnización del 5% del precio del contrato por una actividad no realizada (artículo 285.2 de la LCSP), la cual no había podido serlo por falta de publicación de determinada normativa, necesaria al efecto, por el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, lo que este Tribunal de Cuentas considera motivación suficientemente justificativa de la actuación de la Entidad.

Por otra parte, en la medida en que se modificaron las cláusulas de facturación y de revisión precios, originando un reajuste de anualidades, la Entidad debería haber emitido un nuevo certificado de existencia de crédito, extremo que no consta en el expediente.

Si bien la CNE no remitió inicialmente ni las facturas ni los documentos acreditativos de los pagos efectuados, ni las actas de recepción de los expedientes finalizados, posteriormente, en trámite de alegaciones, remitió la mencionada documentación.

IV.9.7. Consejo de Seguridad Nuclear

El Consejo de Seguridad Nuclear ha remitido al Tribunal de Cuentas 7 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 3.914 miles de euros habiéndose sido todos ellos objeto de fiscalización, lo que representa el 100% de los contratos remitidos y el 100% del importe total, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	--	--	--	--
Servicios	7	100	3.914	100
Suministros	--	--	--	--
Otros	--	--	--	--
TOTAL	7	100	3.914	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el CSN en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, el CSN ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 60 contratos por un importe global de 8.957 miles de euros. No obstante, en esta certificación se han incluido indebidamente 13 prórrogas de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, por importe de 2.209 miles de euros, cuando de acuerdo con la Instrucción General del Tribunal de Cuentas, dichas incidencias deberían haber sido únicamente objeto de comunicación. Esta información ha sido contrastada con los datos publicados a través de la Plataforma de Contratación del Estado, habiéndose comprobado que figuraban publicados 33 contratos adjudicados en el ejercicio 2009.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 7 contratos por importe de 3.914 miles de euros, así como información sobre la prórroga de dos contratos adjudicados en el ejercicio fiscalizado. Si bien la Entidad no remitió inicialmente información sobre la finalización de los

contratos, como requiere la citada Instrucción del Tribunal, dicha carencia fue subsanada durante el trámite de Alegaciones.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del CSN de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CSN	R	60	8.957	7	3.914			2	
1 (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato. 2 R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.									

El CSN publicó en su página Web, de acuerdo con el artículo 42 de la LCSP, información acerca de las convocatorias de contratación en curso y contratos adjudicados recientemente, incluyendo, entre otros, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, los anuncios de licitación y los acuerdos de adjudicación. Igualmente, el CSN difundió su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado ("www.contrataciondelestado.es"), tal y como exige el artículo 309 de la LCSP.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

El CSN empleó modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares, junto con un cuadro resumen en el que se concretaron los requisitos exigibles a cada contrato, incluyendo extremos de gran transcendencia como son los criterios de adjudicación. El CSN empleó modelos de PCAP, junto con un cuadro resumen, que cumplían, en general, las previsiones contenidas en el artículo 99 de la LCSP.

Los Pliegos de cláusulas administrativas de dos expedientes no establecían la necesidad de que el sobre conteniendo la oferta técnica fuera objeto de apertura en acto público, al igual que el correspondiente a la oferta económica, pese a que ya se encontraba en pleno vigor el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, infringiendo, así, el artículo 129.2 de la LCSP que exige que las proposiciones sean secretas y que se arbitren los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente no precisaron los medios a través de los cuales los licitadores habían de justificar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, remitiendo de manera genérica a un anexo que reproducía los medios previstos en los artículos 64 y siguientes de la LCSP. Por el contrario, estos mismos pliegos incluyeron, entre los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, la titulación del profesorado, cuando este extremo es un medio justificativo de la solvencia técnica o profesional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LCSP.

Igualmente, los cuadros resumen anexos a los pliegos de cláusulas administrativas particulares de tres de los expedientes fiscalizados exigieron, con objeto de acreditar la solvencia económica,

financiera y técnica, que los licitadores estuvieran en posesión del requisito de la clasificación, cuando este requisito no era exigible a los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 55 de la LCSP. Incluso en el expediente 227.00/2517/2009 se señalaba que la no presentación de dicha acreditación supondría la no consideración de la oferta. La falta de previsión de los medios acreditativos de la solvencia para estos empresarios supuso una limitación al acceso a la licitación de los contratos.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente mencionaron, entre los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, los requisitos mínimos que habían de cumplir el equipo de trabajo, valorándose las características adicionales que se aportaran. Estos requisitos mínimos, sin embargo, deberían haberse incluido entre los requisitos de solvencia, como así hicieron los pliegos de prescripciones técnicas.

Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de otro de los expedientes fiscalizados exigieron, entre la documentación acreditativa de la solvencia técnica, la declaración responsable por parte de los licitadores de no tener vinculación alguna con los titulares de las instalaciones nucleares objeto de inspección. La independencia de las empresas no es, sin embargo, un requisito de solvencia, sino una obligación contractual esencial, dada la naturaleza del contrato. Prueba de ello es que los pliegos previeron, entre las causas especiales de resolución, la de no mantener las citadas condiciones de independencia.

Los pliegos de prescripciones técnicas de seis expedientes hicieron mención a extremos que, de acuerdo con el artículo 67.2 del RGLCAP, debieron figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, como el presupuesto del contrato, la facturación o el pago. A este respecto, el artículo 68.3 del mismo texto legal no permite que los pliegos de prescripciones técnicas contengan cláusulas que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Con carácter general, el CSN no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Sólo en uno de los contratos adjudicados se incluyó como criterio de adjudicación la implantación en las empresas licitadoras de un Plan de Igualdad para mujeres y hombres.

c) Cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en la fase de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

La apertura y valoración de tres de los expedientes examinados se realizó con anterioridad al acto público de apertura de las ofertas, lo que resultó contrario al principio de transparencia y al carácter secreto de las proposiciones hasta la licitación pública, previsto en el artículo 129.2 de la LCSP.

No consta la publicación en el DOCE de la adjudicación de un expediente así como la garantía definitiva constituida por el adjudicatario de otro de los expedientes fiscalizados.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Si bien en los expedientes analizados no constaban, inicialmente, ni las facturas ni los documentos acreditativos de los pagos efectuados, ni tampoco las actas formales de recepción de los contratos examinados, todos esos documentos fueron aportados por el CSN en trámite de alegaciones.

IV.10. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (en adelante, MMAMRM) tenía adscritos en este ejercicio una agencia estatal y 16 organismos autónomos. En este epígrafe se recogen los resultados de las comprobaciones realizadas respecto de la contratación celebrada por los órganos del Ministerio, así como, en apartados específicos, la correspondiente a los referidos organismos autónomos.

La Administración General contaba en este ejercicio con 19 órganos de contratación de los que cinco lo fueron sólo en parte de aquél.

Por el MMAMRM se remitieron al Tribunal de Cuentas un total de 294 expedientes primitivos, por un importe de 431.271 miles de euros. Atendiendo a los tipos de contratos, el 36,7% fue de obras, el 55,8% de servicios y el 7,5% de suministro. En cuanto a la forma de adjudicación, la más empleada fue el procedimiento abierto con varios criterios, en un 73,8% de los casos.

El cuadro siguiente refleja la muestra total de los expedientes primitivos fiscalizados.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	43	39,8	236.379	76,5
Servicios	56	34,1	83.617	73,4
Suministro	5	2,7	3.613	43,4
TOTAL	104	35,4	323.609	75

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

Se han recibido relaciones de los contratos celebrados correspondientes a nueve órganos de contratación.

Según las relaciones recibidas, los órganos del Ministerio adjudicaron un total de 475 expedientes, por un importe total de 1.373.178 miles de euros

Se han remitido al Tribunal de Cuentas 39 expedientes de prórroga y 86 modificados. Por tipos de contratos, 36 fueron de obras, 88 de servicios y uno de suministro. Con posterioridad a la remisión de los expedientes primitivos se han recibido diez comunicaciones sobre cumplimiento de la prestación y dos de resolución del contrato.

La información y documentación enviada por los órganos de contratación es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Ministra	-	-	-	1	1.213		1		
Secretaría de Estado de Cambio Climático				1	313				
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua	R	5	2.161	4	42.809		24	2	
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental	R	7	1.645	3	1.380			1	
Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios	R	22	10.505	2	1.188				
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal	R	43	44.104	17	28.331				
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos	R	4	28.184	6	5.810				
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura				1	812	1			
Dirección General de Servicios (1)	R	54	12.030	2	1.383	2			
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	R	120	71.903	91	25.849	4	9		1
Dirección General del Agua	R	214	1.201.325	139	274.882		47	31	
Junta de Contratación		-	-	14	8.273	2	1	5	1
Secretaría General de Medio Rural				1	1.474				
Secretaría General del Mar	R	6	1.321	8	13.151	1	1		
Subsecretaría	-	-	-	4	24.403		3		
TOTALES	9	475	1.373.178	294	431.271	10	86	39	2
(1) La relación incluye Ministra, Subsecretaría y Servicios Generales									

No se ha recibido la relación de los contratos celebrados o su certificación negativa de los 10 siguientes órganos de contratación:

- Órganos con competencia originaria: Secretaría de Estado de Cambio Climático
- Órganos con competencia delegada: Dirección General de Desarrollo Sostenible y Medio Rural, Dirección General de Ordenación Pesquera, Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Junta de Contratación, Oficina Española del Cambio Climático, Secretaría General del Medio Rural, y Secretaría General Técnica.

De acuerdo con los datos de la Plataforma de Contratación del Estado, así como con los expedientes remitidos al Tribunal de Cuentas, las relaciones de contratos omitieron la inclusión de 41 expedientes que, por su cuantía, deberían figurar en las mismas: uno de la Ministra, cuatro de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, uno de la Secretaría de Estado del Cambio Climático, 13 de la Dirección General del Agua, cinco de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, uno de la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, dos de la Dirección General de Servicios, uno de la Secretaría General de Medio Rural, 12 de la Junta de Contratación y uno de la Subsecretaría.

De acuerdo con las relaciones de expedientes remitidas al Tribunal de Cuentas, así como con los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado, se ha detectado que se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de 20 expedientes: uno de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, seis de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, seis de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios y siete de la Junta de Contratación.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de otros 167 expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación. Dichos expedientes corresponden a los siguientes órganos de contratación: Ministra (1), Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (1), Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos (4), Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (15), Dirección General del Agua (105), Junta de Contratación (10), Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua (21), Secretaría General del Mar (5) y Subsecretaría (5).

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general (salvo en los expedientes tramitados por la Dirección General de Sostenibilidad y por la Dirección General del Agua), los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-Con carácter general, en aquellos casos en los que, por existir preponderancia de los criterios subjetivos, deba constituirse el comité de expertos que establece el artículo 134.2 de la LCSP, los pliegos no prevén el establecimiento de dicho comité.

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan los pliegos de expedientes concretos:

-No se han limitado en el pliego de cláusulas administrativas particulares los gastos de publicidad de la licitación a asumir por el adjudicatario en diez expedientes adjudicados por la Dirección General del Agua, conforme establece el artículo 67.2.g del RGLCAP. En otro expediente adjudicado por la Dirección General del Agua no se establece el importe máximo de los gastos de publicidad a abonar por el adjudicatario, puesto que el pliego de cláusulas administrativas particulares se remite al cuadro de características, y éste a aquél.

-El pliego de prescripciones técnicas contiene menciones que corresponden al pliego de cláusulas administrativas particulares en un expediente adjudicado por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, el pliego de prescripciones técnicas recoge aspectos del presupuesto económico que deben regularse en el pliego de cláusulas administrativas particulares, lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Servicios, el pliego de prescripciones técnicas incluye extremos que corresponden al pliego de cláusulas administrativas particulares (lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP), como el presupuesto económico y el plan de pagos.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el pliego de prescripciones técnicas recoge extremos (plazo de ejecución y abono de los trabajos) que de acuerdo con el artículo 67.2 del RGLCAP deben recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares, lo que infringe el artículo 68.3 del RGLCAP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el pliego de prescripciones técnicas hace referencia a la revisión de precios y al presupuesto, extremos que deben figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares (artículo 67.2 del RGLCAP), por lo que se infringe el artículo 68.3 del RGLCAP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el pliego de prescripciones técnicas contiene cláusulas propias del pliego de cláusulas administrativas particulares (plazo de ejecución, artículo 67.2.e del RGLCAP, y presupuesto de licitación, artículo 67.2.c del RGLCAP), lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el pliego de prescripciones técnicas contiene cláusulas que son propias del pliego de cláusulas administrativas particulares (el plazo de ejecución y el presupuesto y forma de pago, artículo 67.2.c, e y ñ del RGLCAP), lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el pliego de prescripciones técnicas contiene menciones (presupuesto, forma de pago y revisión de precios del contrato) que deben figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares (artículo 67.2.c, ñ y o del RGLCAP), lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el pliego de prescripciones técnicas recoge el plazo de ejecución, contraviniendo el artículo 68.3 del RGLCAP, puesto que dicho extremo debe figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares (artículo 67.2.g del RGLCAP).

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el pliego de prescripciones técnicas contiene datos que deberían figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares (plazo de ejecución, artículo 67.2.e del RGLCAP; valoración y abono de los trabajos, artículo 67.2.ñ del RGLCAP; y revisión de precios, artículo 67.2.o del RGLCAP), lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP.

-En tres expedientes adjudicados por la Junta de Contratación, el pliego de prescripciones técnicas incluye extremos (presupuesto y revisión de precios en el primero, revisión de precios en el segundo y criterios de solvencia técnica en el tercero) que, de acuerdo con el artículo 67.2 del RGLCAP, deben figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares, lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP.

-En un expediente adjudicado por la Ministra, el pliego de prescripciones técnicas contiene menciones (el detalle del presupuesto) que corresponden al pliego de cláusulas administrativas particulares, lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida se recoge en el siguiente cuadro:

ORGANO	Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS																			
		2	7	10	11	15	16	18	24	25	28	39	40	41	43	44	45	47	48	51	
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal	7A/09																			X	
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal	8A/09																			X	
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal	14A/09					X															
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal	290920004																			X	
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos	09/711		X							X						X	X				
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos	09/692		X							X						X				X	
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura	09035															X					
Dirección General de Servicios	SN2009/1249C		X						X	X						X					
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	20-0137					X															
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	30-1349				X																
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0363					X															
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	43-1442	X									X						X				
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	43-0332															X					
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0386															X					
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0380									X				X	X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0343														X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0338	X												X							
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0325													X							
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	30-1349														X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	30-1332														X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	28-4944														X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	27-0299										X			X	X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	27-0289						X														
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	21-0360														X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	12-0201														X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	11-0683														X						
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	04-1237												X	X					X		

ORGANO	Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS																			
		2	7	10	11	15	16	18	24	25	28	39	40	41	43	44	45	47	48	51	
Costa y del Mar																					
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0380																			X	
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	04-1237																			X	
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0325																			X	
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	27-0299																			X	
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	30-1349																			X	
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar	38-0363											X									
Dirección General del Agua	01.803-202/0411																			X	
Dirección General del Agua	01.803-179/0411																			X	
Dirección General del Agua	01.803-201/0411											X								X	
Dirección General del Agua	01.831-058/0411																			X	
Dirección General del Agua	02.119-114/2101								X												
Dirección General del Agua	02.128-188/2101																			X	
Dirección General Del Agua	02.199-009/0411											X									
Dirección General del Agua	02.499-025/2111											X								X	
Dirección General del Agua	02.803-229/0411																			X	
Dirección General del Agua	02.834-002/0411																			X	
Dirección General del Agua	02.834-004/0411																			X	
Dirección General del Agua	02.840-022/0411																			X	
Dirección General del Agua	02.963-050/0411																			X	
Dirección General del Agua	02.963-051/0411																			X	
Dirección General del Agua	02.963-054/0411																			X	
Dirección General del Agua	03.251-336/2111																			X	
Dirección General del Agua	03.253-181/2111																			X	
Dirección General del Agua	03.310-378/0612																			X	
Dirección General del Agua	03.803-295/0611																			X	
Dirección General del Agua	04.100-284/2111																			X	
Dirección General del Agua	04.118-005/0612																			X	
Dirección General del Agua	04.120-001/0612																			X	
Dirección General del Agua	04.199-022/2111											X								X	
Dirección General del Agua	04.290-386/2111																			X	
Dirección General del Agua	04.316-204/0611																			X	
Dirección General del Agua	04.428-110/2111																			X	
Dirección General del Agua	04.428-111/2111																			X	
Dirección General del Agua	04.602-227/2111											X								X	
Dirección General del Agua	04.602-230/2111											X								X	
Dirección General del Agua	07.400-415/2111											X								X	
Dirección General del Agua	08.118-191/2111																			X	
Dirección General del Agua	08.803-258/0411																			X	
Dirección General del Agua	08.831-090/0411																			X	
Dirección General del Agua	08.834-003/0311																			X	
Dirección General del Agua	08.960-029/0411																			X	
Dirección General del Agua	09.122-012/2111											X								X	
Dirección General del Agua	09.123-155/2111																			X	
Dirección General del Agua	09.123-197/2111																			X	
Dirección General del Agua	09.260-325/2111																			X	
Dirección General del Agua	09.400-526/2111																			X	
Dirección General del Agua	09.831-083/0411																			X	
Dirección General del Agua	09.963-030/0611																			X	
Dirección General del Agua	11.307-452/2111																			X	
Junta de Contratación	43-0341							X								X					
Junta de Contratación	27-0301	X	X										X								
Junta de Contratación	12-0210															X	X				
Junta de Contratación	09004		X						X	X											
Junta de Contratación	09003		X							X	X							X			
Ministra	732/08															X					
Secretaría de Estado de Medio Rural	2009/1156								X												
Secretaría de Estado de Medio Rural y Aqua	14.351-044/2112			X			X	X	X	X	X		X								

ORGANO	Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES Y ESPECIFICOS A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS																		
		2	7	10	11	15	16	18	24	25	28	39	40	41	43	44	45	47	48	51
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua	01.320-248/2111																			X
Secretaría General de Medio Rural	2009/1156				X										X	X				
Secretaría General del Mar	36-1054													X						
Secretaría General del Mar	36-1054																			
Subsecretaría	12-0212							X						X	X					

Igualmente, no consta en los expedientes fiscalizados la siguiente documentación:

-La publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado, en un expediente. adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

-La solicitud de ofertas a las empresas con las que se va negociar, en un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

-El acta de calificación documental, en dos expedientes. Dichos expedientes fueron adjudicados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y por la Ministra .

-Los informes de valoración técnica de las ofertas, en nueve expedientes. Dichos expedientes fueron adjudicados en ocho casos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y en uno por la Secretaría General del Mar.

-El acta de apertura de las proposiciones económicas, en un expediente, adjudicado por la Secretaría General del Mar.

-Las alegaciones de los licitadores incursos en presunción de temeridad, en dos expedientes. Dichos expedientes fueron adjudicados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

-El informe técnico acerca de las alegaciones de los licitadores incursos en presunción de temeridad, en un expediente adjudicado por la Secretaría General del Mar.

-La propuesta de adjudicación, en cuatro expedientes. Dichos expedientes fueron adjudicados en un caso por la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, en dos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y en uno por la Junta de Contratación .

-La publicación de la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado, en cinco expedientes, adjudicados en tres casos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y en uno por la Junta de Contratación.

-El acta de comprobación del replanteo, en nueve expedientes. Dichos expedientes fueron adjudicados en seis casos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en uno por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, en uno por la Secretaría General del Mar y en otro por la por la Subsecretaría. Igualmente, falta también el acta de comprobación de replanteo en dos expedientes de modificación; de ellos, uno fue tramitado por por la Secretaría General del Mar y otro por la Dirección General del Agua.

-La acreditación de haber realizado el trámite de audiencia al contratista en seis expedientes de modificación. Cuatro de ellos fueron tramitados por la Dirección General del Agua, uno por la Ministra y uno por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

-La conformidad del contratista con la modificación, en un expediente tramitado por la Ministra.

-La documentación acreditativa de que el contratista se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en 19 expedientes de modificación. Dichos expedientes fueron tramitados en 12 casos por la Dirección General del Agua, en uno por la Ministra, en cinco por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua y en uno por la Secretaría General del Mar.

-La acreditación de la solvencia del adjudicatario en tres expedientes de modificación, dos de ellos aprobados por la Dirección General del Agua y uno por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

-La documentación acreditativa de la clasificación del adjudicatario, en seis expedientes de modificación. Uno de ellos fue tramitado por la Dirección General del Agua, otro por la Ministra, tres por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua y uno por la Secretaría General del Mar.

-El acta de medición general y certificación final en trece expedientes. De ellos, tres fueron adjudicados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, nueve por la Dirección General del Agua y uno por la Secretaría General del Mar. En este mismo caso se encuentran seis expedientes de modificación, uno tramitado por la Dirección General del Agua y cinco por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

-La aprobación de la liquidación de la obra, en dos expedientes adjudicados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, así como en cuatro expedientes de modificación, tres de ellos tramitados por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua y uno por la Secretaría General del Mar.

Por otra parte, se han producido las siguientes deficiencias:

-Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas no constan aprobados en un expediente adjudicado por la Dirección General de Servicios.

-El pliego de cláusulas administrativas particulares no consta aprobado en dos expedientes adjudicados por la Junta de Contratación.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua existe una contradicción entre el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares (que señala que no habrá fases sucesivas en la apertura de la documentación) y el cuerpo del Pliego, donde se establece que "cuando se utilicen, además del precio, otros criterios de valoración se realizará en dos fases independientes y sucesivas, una técnica y otra económica, lo que se indicará en (...) el cuadro de características". Igualmente la cláusula 2,8 establece que "En el caso de pluralidad de criterios, la valoración se hará en fases sucesivas primero de la oferta técnica y después de la económica."

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, en el acta de propuesta de adjudicación provisional se hace constar que la vocal representante de la Intervención observa que el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación establece en la cláusula adicional nº1 la no admisibilidad de variantes, mientras que el anejo 3 (relativo a los criterios de valoración de las ofertas) incluye en el valor técnico de la oferta "hasta un máximo de veinte (20) puntos en función de las características técnicas de las propuestas o soluciones ofertadas analizando su contenido, los procedimientos de prestación, técnicas de ejecución y factores específicos del servicio a realizar, su coherencia general y las mejoras significativas que se propongan para el cumplimiento del objeto del contrato". A este respecto hay que recordar que el artículo 131.1 de la LCSP establece que "cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o

mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad". Además, el apartado 2 de este mismo artículo señala que "la posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación". Respecto al grado de consecución, en su caso, de los objetivos de carácter medioambiental que establece el Pliego en el apartado 2.2.1 del Anejo 3 como uno de los criterios de adjudicación no evaluable mediante fórmulas, los informes técnicos incluyen un comentario y puntuación asociada, sin llegar a precisar qué objetivos de entre los recogidos en el Pliego son cumplidos y valorados.

Por el Presidente de la Mesa se puso de manifiesto que las mejoras a que se alude tanto en el Pliego como en los informes tienen un sentido diferente al dado a la misma palabra en el Artículo 131 de la LCSP. En este artículo se equipara variante a mejora, cosa que no hacían el TRLCAP ni el RGLCAP, aún vigentes al tramitarse este expediente, en los que "variante" se equipara a "alternativa". En el Pliego y, consecuentemente en los informes la palabra "mejora" viene utilizada como calificativo de calidad y, más precisamente, de calidad técnica de la oferta. Dado que entre los criterios de valoración de las ofertas establecidos en el Artículo 134 LCSP se incluyen la calidad y el valor técnico, criterios directamente vinculados al objeto del contrato y que han sido recogidos en los pliego de cláusulas administrativas particulares, es preciso, en el momento de la valoración, tener en cuenta dicha calidad y valor técnico, lo que pasa por determinar qué materiales o partes de la prestación superen los umbrales establecidos en los pliego de prescripciones técnicas y el grado de superación de dichos umbrales. Se considera que las ofertas que contienen materiales de mejor calidad (por encima del umbral establecido) tienen una mejor calidad técnica, lo que se califica como mejora, sin que en modo alguno suponga alternativa ni por ende variante alguna.

-En las mismas circunstancias que el expediente anterior en lo referente a la interpretación del término "variante" se encuentran otros dos expedientes también adjudicados por la Dirección General del Agua.

-En dos expedientes adjudicados por la Dirección General del Agua existe una incoherencia en el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares, que en su apartado 8 establece la no existencia de fases sucesivas en la celebración de la licitación, si bien a continuación establece como umbral mínimo en la puntuación de las fases obtener en la valoración técnica 20 puntos o más. Por otra parte, publicada la adjudicación provisional en el perfil de contratante y aplicando los plazos establecidos en el artículo 135.4 LCSP, la elevación a definitiva de la adjudicación provisional se llevó a cabo en un plazo superior al establecido en dicho artículo.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el apartado 8 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares contiene una incoherencia, ya que, tras señalar la no existencia de fases sucesivas en la celebración de la licitación, fija a continuación un umbral mínimo de 20 o más puntos en la valoración de la oferta técnica, entendiéndose que no se procederá a la apertura de la oferta económica si no se obtiene dicha puntuación.

-En tres expedientes adjudicados por la Dirección General del Agua, el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares presenta una incoherencia, ya que, tras señalar la no existencia de fases sucesivas en la celebración de la licitación, fija a continuación un umbral mínimo a obtener en la valoración de la oferta técnica, lo que necesariamente supone la existencia de fases.

-Esta misma circunstancia se produce en otro expediente adjudicado por la Dirección General del agua. Por otra parte, no se cumplieron los plazos establecidos en el artículo 135.4 LCSP para llevar

a cabo la adjudicación definitiva. En trámite de alegaciones, el órgano fiscalizado atribuyó este retraso al período vacacional de las empresas y de la Administración.

-En un expediente, adjudicado por la Secretaría General de Medio Rural, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas falta la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en tres expedientes adjudicados por la Junta de Contratación, en uno adjudicado por la Ministra, en dos adjudicados por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, en uno adjudicado por la Secretaría General de Medio Rural, en dos adjudicados por la Secretaría General del Mar, en uno adjudicado por la Subsecretaría, en 43 adjudicados por la Dirección General del Agua, en 18 adjudicados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en uno expediente adjudicado por la Dirección General Recursos Agrícolas y Ganaderos y en cinco adjudicados por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.

-El documento de formalización no incluye el régimen de penalidades por demora en dos expedientes adjudicados por la Dirección General Recursos Agrícolas y Ganaderos.

-El informe técnico se emite en fecha posterior a la apertura de las proposiciones económicas en un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

-El informe técnico sobre los criterios de adjudicación consiste únicamente en un cuadro con las puntuaciones en cuatro expedientes adjudicados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y en un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio.

-La baja de adjudicación es igual o superior al 30% en 16 expedientes adjudicados por la Dirección General del Agua.

-El informe técnico sobre los criterios de adjudicación consiste únicamente en un cuadro con las puntuaciones en un expediente adjudicado por la Subsecretaría.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, el documento de formalización del contrato omite el establecimiento del plazo de un mes desde la firma del acta de comprobación de replanteo, como establece la Ley.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el acta de replanteo previo es de fecha anterior a la aprobación del proyecto, lo que infringe el artículo 110 LCSP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la garantía definitiva se puso a disposición del Ministerio, en lugar de hacerlo a disposición del órgano de contratación, como establece el artículo 83.1 LCSP. Asimismo, desde la notificación de adjudicación al adjudicatario hasta la formalización del contrato transcurrieron 37 días hábiles, plazo muy superior a los diez que dispone el artículo 140.1 LCSP y establecía la propia notificación.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se sobrepasó el plazo de 20 días naturales entre la solicitud de ofertas y la adjudicación provisional que establece el artículo 9.1 del Real Decreto-Ley 9/2008, al amparo del cual se tramitó este contrato. También se sobrepasó el plazo de cinco días hábiles para proceder a la adjudicación definitiva

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la garantía definitiva se puso a disposición del Ministerio, en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación (artículo 83.1 LCSP). Por otra parte, se sobrepasó el plazo establecido para la adjudicación definitiva.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el informe técnico (que en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas consiste únicamente en un cuadro con las puntuaciones obtenidas) es de fecha posterior al acta de apertura de las proposiciones económicas.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el importe de la garantía se puso a disposición de la Dirección General del Agua, en lugar de hacerlo a disposición del órgano de contratación, conforme establece el artículo 83.1 de la LCSP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el importe de la garantía se puso a disposición de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación, como establece el artículo 83.1 de la LCSP. Por otra parte, desde la fecha de la adjudicación provisional hasta su notificación a los licitadores transcurrieron 37 días, incumpléndose lo previsto en el artículo 58.2 LRJAP, que determina que las notificaciones deberán ser cursadas en un plazo de 10 días desde la fecha en que fue dictada.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, se superó el plazo de dos meses -a contar desde la apertura de las proposiciones- para proceder a la adjudicación provisional que establece el artículo 145.2 de la LCSP. Igualmente, se sobrepasó el plazo de 10 días, a contar desde la notificación de la adjudicación definitiva, para proceder a la formalización de acuerdo con el artículo 140.1 LCSP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, se excedió el plazo para proceder a la notificación de la adjudicación provisional en casi 1 mes; por otra parte, en dicha notificación no se hizo referencia a la posibilidad de interponer el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 37 LCSP. Igualmente, tampoco se cumplieron los plazos para realizar la adjudicación definitiva establecidos en el artículo 135.4 LCSP, ni para formalizar el contrato desde la notificación al adjudicatario.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, la media de las ofertas que aparece recogida en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no fue calculada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85.4 del RGLCAP (que según el Anejo nº4 del pliego de cláusulas administrativas particulares era de aplicación para considerar la posible temeridad), que establece que si existen ofertas superiores en 10 unidades porcentuales a la media, habrá que proceder al cálculo de una nueva media con las ofertas que no se encuentren en dicho supuesto. Una vez hallada la nueva media ninguna oferta estaría incurso en temeridad. Sin embargo, con la media obtenida por el órgano de contratación las ofertas inferiores a 1.227.370,21 € resultarían presuntamente temerarias. En este supuesto se encuentra la oferta que resultó finalmente adjudicataria, sin que figure que se haya solicitado justificación alguna tal como establece el artículo 136 de la LCSP. La notificación de la adjudicación provisional se realizó superado el plazo de diez días establecido en el artículo 58.2 de la LRJAP. Igualmente, en dicha notificación no se hizo referencia alguna a la posibilidad de presentar el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 37 de la LCSP. También se excedió el plazo establecido en el artículo 135.4 de la LCSP para proceder a elevar a definitiva la adjudicación provisional, y el fijado para la formalización del contrato establecido por el artículo 140 de la LCSP desde la notificación de la adjudicación.

-En dos expedientes adjudicados por la Dirección General del Agua, se incumplió el plazo (establecido en el artículo 58.2 de la LRJAP) para la notificación de la adjudicación provisional a los licitadores.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, se superó el plazo de 10 días establecido en el artículo 140.1 LCSP para proceder a la formalización del contrato.

-Un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua sufrió un importante aumento en su presupuesto de licitación. Inicialmente, la solicitud de autorización de redacción del proyecto (realizada en enero de 2005) estimaba un importe aproximado del proyecto de 5.300 miles de euros. Sin embargo, en abril de 2008 el Ingeniero Jefe de Área se dirige al Director Adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con el objeto de establecer un nuevo importe para la redacción del proyecto que, partiendo de unos "tanteos previos" a la redacción del proyecto que hicieron solicitar una nueva autorización de redacción en septiembre de 2006 por un importe de 10.900 miles de euros, desemboca en una tercera solicitud por importe de 36.000 miles de euros debido a una serie de actuaciones que ahora se entienden necesarias, y que obligan a actualizar el importe de las obras en cuestión. Por lo tanto, en tres años el importe se multiplicó prácticamente por siete.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua se sobrepasó el plazo establecido en el artículo 140.1 de la LCSP para proceder a la formalización del contrato.

-En tres expedientes adjudicados por la Dirección General del Agua, desde la fecha de la adjudicación provisional hasta su notificación a los licitadores se incumplió lo dispuesto en el artículo 58.2 de la LRJAP, que establece que las notificaciones deberán ser cursadas en un plazo de 10 días desde la fecha en que fue dictada la resolución.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, la aprobación del proyecto incluida en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas carece de fecha.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el acta de replanteo previo, de 13 de diciembre de 2006, al hacer referencia a la aprobación del proyecto, dice que éste fue aprobado por resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 18 de diciembre de 2006. Por otra parte, en el documento de aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y del gasto, de 23 de febrero de 2009, se señala que la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro resolvió, el 13 de diciembre de 2006, aprobar el proyecto de referencia. Con fecha 20 de enero de 2009 se aprobó una adenda al proyecto de restauración ecológica de ríos de la margen derecha del río Ebro (Zaragoza y Soria), señalando que "en este Proyecto, que había sido propuesto para ser realizado a través del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, se da la urgencia en ejecutar las obras incluidas en el mismo por lo que se precisa modificar el plazo de ejecución de los trabajos previstos en el proyecto ya aprobado, reduciéndolo de 18 a 8 meses, a cuyo fin se emplearán todos los medios y equipos que resulten necesarios para cumplir el objetivo". El artículo 13 del Real-Decreto Ley 9/2008 establece que "las obras financiadas con cargo a este Fondo deberán ser de ejecución inmediata y tener un valor estimado inferior a 5 millones de euros, y su contratación se tramitará por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con los plazos previstos en el artículo 9.1 del presente Real Decreto-ley". Resulta incomprensible que estando aprobado el proyecto el 18 de diciembre de 2006, y habiéndose presentado la propuesta de habilitación económica el 18 de enero de 2007, no se realizase ninguna actuación dirigida a la tramitación del expediente hasta la aprobación de la adenda el 20 de enero de 2009. Si hasta diciembre de 2008 no se constituyó el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, no cabe afirmar en la adenda que este proyecto de 2006 se iba a financiar

con el citado fondo. Por otra parte, al acogerse al Real Decreto se redujo el plazo de ejecución de 18 a 8 meses, lo que implica que era posible ejecutar la obra en ese plazo, extremo que no se compadece con que inicialmente se previera un plazo superior al doble del finalmente establecido. A este expediente no se ha acompañado declaración motivada de urgencia. Aunque no fuese necesario motivar la urgencia, ya que ésta viene establecida *ex lege* en el citado Real Decreto-Ley, en opinión del Tribunal de Cuentas debería constar, previamente a determinar la financiación de este proyecto con el citado fondo, un informe en el que se expusiera y justificase el impacto de esta obra en el mantenimiento y creación de empleos, tanto para su inclusión en el ámbito del Real Decreto Ley como para su tramitación urgente. Igualmente, sería conveniente que se acreditase el cumplimiento del objetivo establecido en relación con la parte expositiva del Real Decreto-Ley: alto impacto del contrato en el mantenimiento y creación de empleo (nuevas contrataciones a desempleados para realización de las obras y seguimiento de los puestos de trabajo creados y mantenidos como consecuencia de la inversión en los ejercicios posteriores).

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, el informe técnico de valoración de las ofertas incurre en un error, puesto que valora todas las ofertas presentadas, incluyendo las de las dos empresas que fueron excluidas por defectos en la documentación administrativa, y que no debieron ser tenidas en cuenta en el proceso de valoración. En trámite de alegaciones se informó de que dicha circunstancia se debió a un error, y que en la sesión de la Mesa de Contratación en la que se procedió a la apertura de ofertas económicas no se abrieron las de aquellos licitadores que no habían superado la fase de calificación de la documentación administrativa. La notificación de la adjudicación provisional a los licitadores se realizó excediendo el plazo de diez días recogido en el artículo 58.2 de la LRJAP. Asimismo, el certificado de que no se había interpuesto recurso especial contra la adjudicación es de fecha anterior a la notificación a los adjudicatarios. La formalización del contrato se realizó excediendo el plazo de 10 días fijados en el artículo 140.1 de la LCSP.

-En cuatro expedientes adjudicados por la Dirección General del Agua, desde la fecha de la adjudicación provisional hasta su notificación a los licitadores transcurrieron, respectivamente, 20, 22, 25 y 42 días, incumpléndose lo dispuesto en el artículo 58.2 de la LRJAP, que establece que las notificaciones deberán ser cursadas en un plazo de 10 días desde la fecha en que fue dictada la resolución.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, publicada la adjudicación provisional en el perfil de contratante, se excedieron los plazos establecidos en el artículo 135.4 de la LCSP para elevar a definitiva dicha adjudicación. Tampoco se cumplió el plazo establecido en el artículo 140.1 de la LCSP para proceder a la formalización.

-En la documentación remitida al Tribunal de Cuentas correspondiente a un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua consta un informe del ingeniero jefe de explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de fecha 20 de diciembre de 1995, en el que comunica que ha redactado y dado curso al proyecto, previendo un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de ejecución por contrata de 993 miles de pesetas, proponiendo su aprobación. Se dirigió comunicación a la Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria, para la tramitación del proyecto ante la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura el 31 de julio de 1996. Cinco años después –sin que en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas consten las razones de semejante demora-, el 1 de marzo de 2001, el Director Técnico se dirigió de nuevo a la Dirección General, señalando que, dado el tiempo transcurrido desde su redacción, las premisas que sirvieron de base para la realización del proyecto habían quedado desfasadas, por lo que solicitaba su devolución a esta Confederación para su adaptación y posterior envío a la Dirección General, conservando la misma clave y título. El 2 de abril de ese

año, el Subdirector General de Proyectos y Obras comunicó que el proyecto se devolvía a la Confederación para que se readaptase. Tras otros cinco años en los que el único trámite relevante fue la supervisión del proyecto en 2005, en el año 2006 se concluyó que del análisis de la información se deducía que el proyecto no requería la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Finalmente, con fecha 26 de enero de 2009, se aprobó técnicamente la adenda del proyecto, que establecía un plazo de ejecución de las obras de 9 meses.

Este expediente se acogió para su financiación al Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre. Sin embargo, en opinión del Tribunal de Cuentas, carece de sentido que una obra cuyos antecedentes se remontan al 19 de octubre de 1994 (fecha de la autorización de la redacción del proyecto por la Dirección General de Obras Hidráulicas) se deba tramitar de forma urgente en el año 2009 (15 años después). De hecho, a este expediente no se acompaña la declaración motivada de urgencia. Aunque no fuese necesario motivar la urgencia, ya que ésta viene establecida *ex lege* en el citado Real Decreto-Ley, en opinión del Tribunal de Cuentas debería constar, previamente a determinar la financiación de este proyecto con el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, un informe en el que se expusiera y justificase el impacto de esta obra en el mantenimiento y creación de empleos, tanto para su inclusión en el ámbito del Real Decreto Ley como para su tramitación urgente. Igualmente, sería conveniente que se acreditase el cumplimiento del objetivo establecido en relación con la parte expositiva del Real Decreto-Ley: alto impacto del contrato en el mantenimiento y creación de empleo (nuevas contrataciones a desempleados para realización de las obras y seguimiento de los puestos de trabajo creados y mantenidos como consecuencia de la inversión en los ejercicios posteriores).

-En dos expedientes adjudicados por la Dirección General del Agua, desde la fecha de la adjudicación provisional hasta su notificación a los licitadores transcurrieron respectivamente 26 y 29 días, incumplándose lo dispuesto en el artículo 58.2 de la LRJAP, que establece que las notificaciones deberán ser cursadas en un plazo de 10 días desde la fecha en que fue dictada la resolución.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, no se cumplieron los plazos establecidos en el artículo 135.4 de la LCSP para elevar a definitiva la adjudicación provisional. Igualmente, se superó el plazo de 10 días establecido en el artículo 58.2 LRJAP para notificar la resolución de adjudicación provisional. Además, la citada notificación tuvo lugar con posterioridad a que se cumpliera el plazo para interponer recurso especial en materia de contratación de acuerdo con el artículo 37 de la LCSP.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua, se incumplió el plazo establecido en el artículo 58.2 de la LRJAP para la notificación de la adjudicación provisional a los licitadores.

-Un expediente, adjudicado por la Dirección General del Agua, sufrió unas dilaciones excesivas durante su tramitación. En efecto, la solicitud de autorización para la redacción del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica al Subdirector General de Obras Hidráulicas del entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo está fechada el 8 de marzo de 1991. Tras una solicitud por parte del Ministerio de un informe que “explique, justifique y detalle la necesidad, ventajas, régimen de caudales, posibles secciones tipo, superficie a ocupar, longitud y capacidad del desagüe, rentabilidad y demás datos y gráficos que permitan adoptar una decisión sobre la conveniencia de tal proyecto” y un escrito por parte de la Confederación exponiendo las razones solicitadas, con fecha 21 de marzo de 1992 la Dirección General del MOPU resolvió autorizar la redacción del proyecto. Doce años después –sin que en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas conste información acerca de esta dilatación en la tramitación del expediente-, el 5 de

febrero de 2004, el Jefe del Área de Presas de la Subdirección General de Proyectos y Obras emitió un escrito en el que hacía constar que, tal como solicitó la Confederación Hidrográfica del Ebro, se desglosó en dos el expediente. Tras incoar el expediente de información pública, finalmente con fecha 30 de julio de 2008 se levantó el acta de replanteo, en la que se manifestó que no se precisaba la disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva iría precedida de la formalización del acto de ocupación.

En el Acta de Propuesta de Adjudicación Provisional la vocal representante de la Intervención observó que las valoraciones técnicas de las soluciones variantes presentadas por un mismo licitador eran en todos los casos superiores a las que recibían las soluciones base, así como que la mayor parte de las puntuaciones técnicas concedidas a las soluciones base apenas superaban el umbral mínimo de 20 puntos establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares para no ser eliminadas del proceso de valoración y selección, por lo que cabía preguntarse acerca de la bondad y calidad de la solución base contenida en el proyecto elaborado por el centro gestor.

A pesar del tiempo transcurrido desde la iniciación del expediente, con fecha 10 de mayo de 2010 se remitió un escrito por la empresa adjudicataria, dirigida a la Directora General del Agua, en el que exponía que con fecha 27 de enero de 2010 se levantó el acta de comprobación de replanteo, en la que se hacía constar que no existía la disponibilidad de los terrenos imprescindibles para poder llevar a cabo la ejecución de las obras, estimándose que la citada disponibilidad y por lo tanto el comienzo de la misma no se produciría antes del mes de mayo siguiente. Posteriormente, se indicó que a fecha 10 de mayo de 2010 seguía sin existir la disponibilidad de los terrenos imprescindibles para la ejecución de las obras, estimándose que dicha disponibilidad y por lo tanto el comienzo de las mismas no se produciría antes de julio, por lo que era necesario realizar un reajuste de anualidades, que se aprobó con fecha 7 de julio de 2010.

-En un expediente adjudicado por la Dirección General del Agua), desde la fecha de apertura de las proposiciones económicas hasta la fecha de adjudicación provisional transcurrieron más de dos meses, en contra de lo dispuesto en el artículo 145.2 de la LCSP.

-En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, la garantía definitiva se constituyó en dos fechas distintas, una a favor de la Dirección General de Costas y otra a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, debiendo haberse constituido a favor del órgano de contratación como establece el artículo 83.1 de la LCSP.

-En un expediente adjudicado por la Junta de Contratación del Ministerio, el informe de valoración técnica de las ofertas consta sin fecha.

-En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, la garantía se constituye a favor de la Dirección General del Agua en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación como señalan los artículos 36.1 del TRLCAP y 65.2 del RGLCAP.

-Un expediente, adjudicado por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, fue tramitado por el procedimiento de urgencia. Aunque la declaración de urgencia está motivada (finalización de la operación y mantenimiento de los aviones contra incendios el 31 de diciembre de 2008), no parece lógico que se esperase hasta el 5 de diciembre para tramitar el expediente, ya que la finalización del contrato anterior no sólo era previsible sino conocida, por lo que podía haberse comenzado a realizar los trámites pertinentes con el tiempo necesario para no tener que acudir a esta forma de contratación.

-En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, el importe de la garantía se puso a disposición de la Dirección General del Agua en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación, como señala el artículo 36.1 TRLCAP

-En un expediente, adjudicado por la Secretaría General de Medio Rural, se siguió el procedimiento de urgencia, si bien en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no consta justificación de la misma. De acuerdo con el artículo 96 de la LCSP, los plazos para la licitación y la adjudicación se reducen a la mitad, salvo el establecido en el artículo 135.4 LCSP, que se reduce a 10 días hábiles. Aplicando los plazos establecidos, la adjudicación definitiva tendría que haber tenido lugar el 5 de diciembre de 2009, y sin embargo no tuvo lugar hasta el 18 de diciembre.

Por otra parte, este expediente está formado por dos lotes que son adjudicados a la misma empresa. El documento de formalización del lote II no cumple el plazo establecido en el artículo 140.1 LCSP, puesto que se excede el plazo de 10 días establecido a contar desde el siguiente al de notificación de la adjudicación definitiva.

-En un expediente adjudicado por la Subsecretaría, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas sólo consta la notificación de la adjudicación provisional al adjudicatario, pero no a los demás licitadores. Por otra parte, no se ha remitido el cuadro de características del contrato, limitándose a incluir el pliego tipo.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Con carácter general, la posibilidad de prórroga del contrato aparece prevista en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (conforme establece el artículo 67.2.e del RGLCAP) y se justifica el recurso a la misma.

En cuanto a los modificados, aunque el artículo 202 de la LCSP establece que “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente”, con frecuencia lo que se presenta como “causas imprevistas” responde más bien a defectos en la elaboración del proyecto inicial. Por otra parte, la aprobación de estos modificados produce un incremento en el precio de los contratos y en la duración de los mismos (agravado en este aspecto por las suspensiones en la ejecución que con frecuencia trae aparejada la tramitación de dichos modificados) que desvirtúan en buena medida las bajas obtenidas en la adjudicación, además del consiguiente perjuicio al interés público.

La Dirección General del Agua aprobó un modificado de otro expediente, formalizado el 16 de noviembre de 2006 por un importe de 385 miles de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. Las obras objeto de vigilancia se iniciaron el 2 de octubre de 2006 con un plazo inicial de 30 meses, por lo que deberían finalizar el 2 de abril de 2009. Sin embargo, la aprobación de un modificado hizo que el 5 de febrero se ampliase el plazo hasta el 31 de diciembre de 2009; consecuentemente, el 9 de febrero se amplió también la asistencia hasta dicha fecha. Para atender al control y vigilancia del mayor volumen de obra producido con el proyecto modificado, el 25 de febrero de 2009 se solicitó autorización para redactar el correspondiente modificado de la asistencia. Tramitada la modificación, tanto en la aprobación como en la formalización se estableció la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos de en siete meses y medio a partir de la firma del contrato, que incluye trabajos de liquidación una vez terminada la obra. La formalización tuvo lugar el 17 de agosto, por lo que la ejecución terminaría 31 de marzo de 2010. Como ya se ha señalado anteriormente, la asistencia ya había sido objeto de ampliación y su fecha de finalización era el 31 de diciembre de 2009, por lo que hay 4,5 meses en que se solapan los plazos. En opinión del Tribunal de Cuentas,

hubiera sido más correcto que el modificado estableciera un plazo de ejecución adicional de tres meses.

La Dirección General del Agua aprobó un modificado de otro expediente formalizado el 18 de diciembre de 2007, por un importe de 1.207 miles de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Este modificado supone un incremento del 82% sobre el presupuesto vigente. Aunque su informe de fiscalización fue de conformidad, el Interventor señaló que parte del modificado se debe a la necesidad de incluir un “estudio de integración paisajística”, de obligado cumplimiento según el Decreto 120/2006 de 1 de agosto, hecho que debería haberse previsto en el Pliego primitivo y que por lo tanto no se puede incluir como “causa imprevista” tal como establece el artículo 101 TRLCAP, extremo en el que coincide con la opinión del Tribunal de Cuentas.

La Dirección General del Agua aprobó un modificado de otro expediente formalizado el 18 de abril de 2006 por 221 miles de euros y un plazo de ejecución inicial de 12 meses. Los trabajos se iniciaron el 18 de mayo de 2006. Sin embargo, el gran valor medioambiental de la zona y el problema de la gestión del agua, unido a la participación de varias administraciones, hizo necesario que se elaboraran estudios más complejos que los recogidos inicialmente en el contrato en las primeras fases. Esto trajo como consecuencia que se aprobasen cuatro ampliaciones de plazo (junto con los correspondientes reajustes de anualidades), así como una suspensión temporal total de las obras, que retrasaron la fecha de terminación hasta el 18 de agosto de 2009. En opinión del Tribunal de Cuentas, las circunstancias que se mencionan para formular estudios alternativos ya se daban en el momento en que se tramitó el proyecto, y por lo tanto deberían haberse tenido en cuenta entonces. Por otra parte, la modificación citada se motivó en la necesidad de incluir el estudio de una estación de tratamiento de aguas potables (ETAP) del sistema de abastecimiento, por nuevas necesidades topográficas surgidas como consecuencia del estudio de alternativas realizado y por último por las exigencias surgidas tras someter el mismo a estudio de impacto ambiental. A juicio del Tribunal de Cuentas, estas motivaciones no tienen cabida en el artículo 101 del TRLCAP, puesto que no serían necesidades nuevas ni causas imprevistas, ya que la ETAP debería haberse incluido en el proyecto inicial y de igual forma el mismo debía haberse sometido a estudios medioambientales.

La Ministra aprobó la modificación de las obras del paseo fluvial del Río Ebro frente al núcleo urbano de Deltebre (Tarragona). El expediente original se inició el 21 de junio de 2007, con un presupuesto de licitación de 10.731 miles de euros. Adjudicado por importe de 7.293 miles de euros el 15 de marzo de 2007, el contrato se formalizó el 24 de abril de 2007, con un plazo de ejecución de 20 meses. El acta de comprobación de replanteo se levantó el 21 de mayo de 2007, por lo que el fin teórico de las obras (que, de acuerdo con el contrato, comenzarían al día siguiente de la comprobación del replanteo) sería el 21 de enero de 2009. Sin embargo, con fecha 1 de octubre de 2007 se aprobó una redistribución de anualidades que no conllevaba un cambio del plazo de ejecución, justificándola en que en la época estival no se pudieron hacer los trabajos previstos en dos meses. Aprobado el reajuste de anualidades, se fijó el nuevo fin de las obras en el 30 de mayo de 2009.

El 1 de octubre de 2007 el Ayuntamiento de Deltebre puso de manifiesto una serie de anomalías que era preciso subsanar. Con fecha 22 de noviembre se aprobó la resolución por la que se autorizaba la redacción del proyecto modificado de obras, que fue aprobado el 26 de marzo de 2009, siendo el incremento de 683 miles de euros (un 9% del principal). Sin embargo, con fecha 28 de octubre de 2008, el interventor señaló que del examen comparado del presupuesto del proyecto y de la última relación valorada tramitada, se desprendía que se había certificado y abonado al contratista la ejecución de unidades de obra por un importe superior al que figura en presupuesto, por lo que si estas unidades estaban ejecutadas, deberían incluirse como adicional en el

presupuesto modificado. En la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no consta la respuesta que el órgano de contratación dio a las observaciones realizadas por el interventor.

La Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua aprobó el tercer modificado del contrato de asistencia para la inspección y vigilancia de las obras de la presa de Enciso. Formalizado en 1999 por un importe de 2.554 miles de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, ha sufrido tres modificaciones (que han incrementado el importe en un 133 %) y varias suspensiones y ampliaciones de plazo de las obras que han retrasado la fecha de finalización prevista hasta el 30 de junio de 2012.

Durante la tramitación del modificado, la Intervención Delegada detectó que se habían ejecutado trabajos incluidos en dicho proyecto modificado sin los preceptivos trámites de fiscalización previa y aprobación del gasto. La dirección de los trabajos consideró que “la cantidad total certificada entre Mayo de 2002 y Diciembre de 2003 está cuestionada y que debe someterse a la decisión del Consejo de Ministros sobre su convalidación”. La Intervención consideró que el Consejo de Ministros podría adoptar una resolución favorable en relación con el expediente, a fin de posibilitar el pago de las obligaciones derivadas de los trabajos efectivamente ejecutados ya que, en otro caso, podría producirse un enriquecimiento injusto de la Administración, con el subsiguiente perjuicio económico para el contratista, creando una situación de desequilibrio patrimonial, que debería corregirse mediante el procedimiento de reclamación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Finalmente, la convalidación se produjo en junio de 2009.

Los argumentos utilizados para la convalidación se basan en evitar un enriquecimiento injusto de la Administración. Sin embargo, en opinión del Tribunal de Cuentas, y a pesar de regirse por el TRLCAP, la interpretación que ha de darse debería estar acorde con las Directivas de la Unión Europea que, finalmente llevaron a la aprobación de la LCSP, y que suponen tanto un establecimiento de límites a las modificaciones como un beneficio para la transparencia e igualdad en las condiciones de los licitadores. A la luz de la normativa comunitaria vigente a la sazón y del espíritu tanto de la TRLCAP como de la LCSP, no resulta admisible esta forma de actuar, conforme a la cual se ejecuta primero y se formaliza después.

En un expediente adjudicado por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua la garantía se constituyó a favor de la Dirección General del Agua en lugar de hacerlo a favor del órgano de contratación (Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad), como señalan los artículos 36.1 del TRLCAP y 65.2 del Reglamento.

La Secretaría General del Mar aprobó el modificado de un expediente formalizado el 2 de junio de 2008. El acta de recepción remitida, que comprende tanto el principal como el modificado, es de fecha 29 de mayo de 2009; sin embargo, en los diferentes documentos en que se hace referencia a la misma consta el 29 de junio de 2009. Por otra parte, en dicho acto no se fija la fecha para el inicio de la medición general, tal como establece el artículo 166.1 del RGLCAP.

La certificación final se propuso para su aprobación el 25 de marzo de 2010, siendo aprobada el 7 de abril. No se cumplió el plazo de dos meses a contar desde la recepción para llevar a cabo este trámite de acuerdo con los artículos 147.1 del TRLCAP y 166.9 del RGLCAP.

La fecha del acta de replanteo previo es anterior a la aprobación del proyecto.

IV.10.1. Confederación Hidrográfica del Cantábrico

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (en adelante, CHC) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 14 expedientes primitivos. No se remitieron prórrogas ni modificaciones, ni se ha recibido

información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado cuatro de los expedientes primitivos recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	2	28,6	15.779	56,2
Servicios	2	28,6	1.029	54,8
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	4	28,6	16.808	56,1

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHC ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 21 expedientes por importe de 30.279 miles de euros.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHC	R	21	30.279	14	29.948				
TOTALES	1	21	30.279	14	29.948				

De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de un expediente.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de diez expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean

más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida se recoge en el cuadro siguiente:

Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS						DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA TIPO DE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN		
							TIPO DE CONTRATO		
							OBRAS		
	2	16	18	23	24	48	14	15	20
11-09	X	X					X	X	
15-09			X	X		X			X
N1.904.015/8811				X		X			
N1.952.005/8811				X	X				

Igualmente, no consta en los expedientes fiscalizados la siguiente documentación:

-El informe del Servicio Jurídico acerca del pliego de cláusulas administrativas particulares, en dos expedientes.

Por otra parte, se han producido las siguientes deficiencias:

-El informe técnico se emitió en fecha posterior a la apertura de las proposiciones en un expediente.

-El anuncio del BOE no especificaba el importe máximo de los gastos de publicidad en dos expedientes.

-Se remitió en certificado independiente la viabilidad del proyecto en un expediente.

En un expediente correspondiente a un contrato de los regulados por el artículo 125 del TRLCAP (es decir, de elaboración de proyecto y ejecución de obra por el mismo contratista), tanto el citado

precepto como el documento de formalización establecen que el contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, aprobación y replanteo; a pesar de ello, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas se incluye el acta de comprobación de replanteo sin que conste la documentación relativa al citado informe y su aprobación. Por otra parte, según el citado precepto la contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras correspondientes tendrá carácter excepcional y sólo puede aplicarse en los supuestos enunciados en el artículo; pero en la documentación remitida no consta ningún documento que acredite que el expediente responde a algunos de los supuestos previstos.

Este expediente se tramitó según la regulación contenida en el TRLCAP, consecuencia de la publicación en el BOE del anuncio de licitación antes del 30 de abril de 2008. Desde la citada fecha hasta la contratación ha transcurrido prácticamente un año, demora que parece excesiva.

IV.10.2. Confederación Hidrográfica del Duero

La Confederación Hidrográfica del Duero (en adelante, CHD) remitió al Tribunal de Cuentas un total de ocho expedientes primitivos, así como un expediente de prórroga. No se remitieron modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado dos de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	1	20	3.033	55,7
Servicios	1	33,3	206	21,3
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	2	25	3.239	50,6

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHD ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 60 expedientes por importe de 11.204 miles de euros.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHD	R	60	11.204	8	6.408			1	
TOTALES	1	60	11.204	8	6.408			1	

De acuerdo con los datos contenidos en la Plataforma de Contratación del Estado, no se incluyeron en la relación ocho expedientes que, por su importe, deberían haber figurado.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

En concreto, en un expediente no consta la Resolución motivada que establezca la improcedencia de la revisión de precios, y en otro la declaración motivada de urgencia.

Por otra parte, se han producido las siguientes deficiencias:

-El documento de formalización no incluye el régimen de penalidades por demora en un expediente.

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en dos expedientes.

IV.10.3. Confederación Hidrográfica del Ebro

La Confederación Hidrográfica del Ebro (en adelante, CHE) remitió al Tribunal de Cuentas un total de diez expedientes primitivos, todos ellos de obras. No se remitieron prórrogas ni modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado tres de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	3	33	5.804	52
TOTAL	3	33	5.804	52

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHE ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 234 expedientes por importe de 32.267 miles de euros.

Con posterioridad a la remisión inicial de los expedientes se remitieron diez comunicaciones de cumplimiento de la prestación.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHE	R	234	32.267	10	11.152	10			
TOTALES	1	234	32.267	10	11.152	10			

De acuerdo con los datos de la Plataforma de Contratación del Estado, la relación no incluyó un expediente que, por su cuantía, debería haber figurado.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Se ha omitido la remisión de la siguiente documentación:

-El informe del Servicio Jurídico acerca del pliego de cláusulas administrativas particulares, en un expediente.

Por otra parte, se han observado las siguientes deficiencias:

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en tres expedientes.

-La baja de adjudicación es igual o superior al 30% en dos expedientes.

-Uno de los expedientes fiscalizados se enmarca dentro de las actuaciones urgentes para dinamización de la economía y el empleo previstas en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 13, su contratación se tramitó por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 96.1 de la LCSP, con sujeción a los plazos previstos en el artículo 9.1 del citado Real Decreto-Ley. El artículo 96 de la LCSP establece, en su apartado 1, que “podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada”. A este expediente no se ha acompañado declaración motivada de urgencia. Aunque no fuese necesario motivar la urgencia, ya que ésta viene establecida *ex lege* en el citado Real Decreto-Ley, en opinión del Tribunal de Cuentas debería constar, previamente a determinar la financiación de este proyecto con el citado fondo, un informe en el que se expusiera y justificase el impacto de esta obra en el mantenimiento y creación de empleos. Igualmente, sería conveniente que se acreditase el cumplimiento del objetivo establecido en relación con la parte expositiva del Real Decreto-Ley: alto impacto del contrato en el mantenimiento y creación de empleo (nuevas contrataciones a desempleados para realización de las obras y seguimiento de los puestos de trabajo creados y mantenidos como consecuencia de la inversión en los ejercicios posteriores).

En estas mismas circunstancias se encuentra otro expediente de la Confederación.

Dentro de la documentación remitida al Tribunal de Cuentas se encuentra un acta de calificación documental de fecha 2 de marzo de 2009 (si bien se envía como acta de apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación); en dicha acta se hace referencia al acta de apertura de las ofertas técnicas, de fecha posterior (9 de marzo). Esta misma circunstancia se produce en otros dos expedientes de la Confederación, uno con las mismas fechas y otro en el que un acta de 7 de septiembre hace referencia a otra de 21 de septiembre.

IV.10.4. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante, CHG) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 13 expedientes primitivos, así como siete modificados y dos prórrogas. No se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado dos de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	2	22,2	12.346	48,3
Servicios	0	0	0	0
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	2	15,4	12.346	45,8

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHG ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 44 expedientes por importe de 36.605 miles de euros.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas dos expedientes de prórroga y siete modificados. Por tipos de contrato, seis fueron de obras y tres de servicios.

Con posterioridad a la remisión del expediente primitivo se han recibido en este ejercicio 11 comunicaciones sobre variación del plazo de ejecución (diez ampliaciones y una reducción) y una de finalización de la ejecución.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHG	R	44	36.605	13	26.937	1	7	13	
TOTALES	1	44	36.605	13	26.937	1	7	13	

De acuerdo con los datos de la Plataforma de Contratación del Estado, no se incluyeron en la relación remitida al Tribunal de Cuentas 16 expedientes que, por su cuantía, deberían haber figurado. Igualmente, se remitió al Tribunal de Cuentas un expediente que también debería haber sido incluido en la relación.

De acuerdo con los datos contenidos en la relación remitida al Tribunal de Cuentas, así como de con los publicados en el Boletín Oficial del Estado, se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de 13 expedientes.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de otros 13 expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y

a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida se recoge en el cuadro siguiente:

Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS				DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA TIPO DE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
					TIPO DE CONTRATO
					OBRAS
	2	18	24	51	14
JA-3560	X	X			
GR-3281	X		X	X	X
JA-3560				X	X

Igualmente, no consta en los expedientes fiscalizados la siguiente documentación:

-El informe del Servicio Jurídico acerca del pliego de cláusulas administrativas particulares, en dos expedientes.

-La publicación de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el acta de apertura de las proposiciones económicas y la publicación de la adjudicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en un expediente.

- El acta de calificación documental y la propuesta de adjudicación, en un expediente.
- El acta de comprobación del replanteo, en dos expedientes.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Uno de los modificados fiscalizados afecta a un contrato que ha sufrido continuos retrasos desde su comienzo. En efecto, formalizado con fecha 4 de agosto de 2008, se levantó acta de comprobación de replanteo el 28 de agosto; sin embargo, un día después la Presidencia de la Confederación autorizó la no iniciación de las obras por no estar disponibles los terrenos, lo que indicaría una deficiente tramitación. Con fecha 28 de julio de 2009 (once meses después) la Presidencia autorizó que se iniciasen parcialmente las obras, firmándose acta de comprobación de replanteo parcial el 3 de agosto de 2009 y señalándose como fecha de finalización de las obras el 4 de agosto de 2011. El 2 de noviembre de 2009 se levantó un acta de suspensión temporal parcial de las obras en la que se indicaba que “una vez aprobada la modificación se redactará y tramitará un acta de levantamiento de la suspensión”. Finalmente, la Presidencia del organismo autorizó una nueva ampliación de plazo por 4 meses y 26 días, señalándose como nueva fecha de terminación de las obras el 30 de diciembre de 2011. Como consecuencia de todos estos retrasos se produjeron tres sucesivos reajustes de anualidades.

IV.10.5. Confederación Hidrográfica del Guadiana

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (en adelante, CHGa) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 22 expedientes primitivos, así como dos modificados. No se remitieron prórrogas, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado cinco de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	3	25	24.783	78,6
Servicios	1	14,3	688	23,7
Suministro	0	0	0	0
Administrativos especiales	1	50	10.298	50,6
TOTAL	5	22,7	35.769	63,5

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHGa ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 303 expedientes por importe de 77.998 miles de euros. Con la calificación de contratos administrativos especiales, se han incluido 230 contratos que, según este Tribunal, no debieron figurar en esta relación al ser, por su objeto, contratos de carácter patrimonial sobre bienes inmuebles.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas dos expedientes de modificación. Por tipos de contratos, uno fue de obras y otro de servicios.

Con posterioridad a la remisión del expediente primitivo se han recibido en este ejercicio diez comunicaciones sobre terminación de la ejecución, 16 de variaciones en el tiempo de ejecución, dos de suspensión y su correspondiente levantamiento y uno de resolución del contrato.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHGa	R	303	77.998	22	56.290	10	2	16	3
TOTALES	1	303	77.998	22	56.290	10	2	16	3

De acuerdo con los expedientes remitidos al Tribunal de Cuentas, se omitió la inclusión en la relación de contratos de un expediente que, por su cuantía, debería haber figurado.

De acuerdo con los datos contenidos en la relación remitida al Tribunal de Cuentas, así como con los publicados en el Boletín Oficial del Estado, se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de siete expedientes.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de otros seis expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan los pliegos de expedientes concretos:

-No se han limitado en el pliego de cláusulas administrativas particulares los gastos de publicidad de la licitación a asumir por el adjudicatario en un expediente.

-En un expediente, el pliego de prescripciones técnicas contiene cláusulas cuyo contenido es propio del pliego de cláusulas administrativas particulares, contra lo establecido en el artículo 68.3 del RGLCAP (presupuesto y precio de adquisición). El pliego de cláusulas administrativas particulares no incluye el régimen de penalidades por demora. La prestación de la garantía definitiva se exonera sin que conste la motivación en el expediente, como exige el Artículo 83.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida se recoge en el cuadro siguiente:

Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS					DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA TIPO DE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
						TIPO DE CONTRATO
						OBRAS
	42	43	44	47	48	20
9/9-09					X	X
9/32-08	X	X	X	X	X	

Igualmente, no consta en los expedientes fiscalizados la siguiente documentación:

-El acta de apertura de las proposiciones económicas, en un expediente.

Por otra parte, se han observado las siguientes deficiencias:

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en cuatro expedientes.

-La baja de adjudicación es igual o superior al 30% en dos expedientes.

-En un expediente, la documentación remitida no incluye el acta de comprobación del replanteo, el acta de medición general y certificación final y la aprobación de la liquidación de la obra.

-Uno de los expedientes fiscalizados se enmarca dentro de las actuaciones urgentes para dinamización de la economía y el empleo previstas en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 13, su contratación se tramitará por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 96.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, con sujeción a los plazos previstos en el artículo 9.1 del citado Real Decreto-Ley. El artículo 96 de la LCSP establece, en su apartado 1, que “podrán ser objeto de tramitación urgente los

expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada”.

A este expediente no se ha acompañado declaración motivada de urgencia. Aunque no fuese necesario motivar la urgencia, ya que ésta viene establecida *ex lege* en el citado Real Decreto-Ley, en opinión del Tribunal de Cuentas debería constar, previamente a determinar la financiación de este proyecto con el citado fondo, un informe en el que se expusiera y justificase el impacto de esta obra en el mantenimiento y creación de empleos. Igualmente, sería conveniente que se acreditase el cumplimiento del objetivo establecido en relación con la parte expositiva del Real Decreto-Ley: alto impacto del contrato en el mantenimiento y creación de empleo (nuevas contrataciones a desempleados para realización de las obras y seguimiento de los puestos de trabajo creados y mantenidos como consecuencia de la inversión en los ejercicios posteriores).

En estas mismas circunstancias se encuentra otro expediente.

-En un expediente cuyo objeto era la adquisición de derechos de uso de agua en la cuenca alta del Guadiana, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no se contienen todos los contratos formalizados, sino sólo los correspondientes a 25 de un total de 85 adjudicatarios. Los contratos formalizados no exigen penalidades por los eventuales incumplimientos de las actuaciones a realizar por los adjudicatarios con posterioridad a ellos (artículo 71.3 del Reglamento), ya que, como se ha señalado anteriormente, no se exigió garantía definitiva. Tampoco se aporta a este Tribunal en el expediente la documentación sobre su cumplimiento.

El acta de la Mesa de Contratación sobre la calificación documental declara con defectos subsanables 13 ofertas; sin embargo se procede seguidamente a la apertura de los sobres con las proposiciones económicas de todos los licitadores, proceder éste contrario a lo establecido en el artículo 82.1 del Reglamento que es concordante con la cláusula 2.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Este contrato, calificado como de administrativo especial, es a juicio del Tribunal un contrato de carácter privado, de naturaleza patrimonial y de tipo adquisición de derechos sobre inmuebles a los que se refiere el artículo 116 de la LPE; con esta calificación, no se ha aportado el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado ni el estudio de mercado para el establecimiento de la compensación económica.

Las adjudicaciones se basan en un informe técnico que no consta en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas.

-En un expediente, a la hora de valorar la posible temeridad de las ofertas, la Mesa, como consta en el acta de apertura de las proposiciones, hizo suyo el criterio mantenido por la Abogacía del Estado en su informe de 25 de mayo de 2007, según el cual no puede presumirse que existe unidad de decisión entre las empresas pertenecientes a un grupo y la unión temporal integrada por una empresa miembro de dicho grupo, por lo que las ofertas deben valorarse como independientes y no como formuladas por empresas del mismo grupo con base en su carencia de personalidad jurídica. Sin embargo, como señaló en su recurso uno de los licitadores no adjudicatarios, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa señaló, en su informe 27/05, de 29 de junio de 2005, la finalidad del artículo 86.1 del RGLCAP, en el sentido de que con él se trata de "establecer una regulación más adecuada de los supuestos de bajas temerarias introduciendo su posible aplicación en los concursos y evitando la realización por sociedades pertenecientes a un mismo grupo, de prácticas que pueden desvirtuar la competencia tratándose de evitar con esta última la alteración

intencionada de las medias aritméticas". Es decir, y esta postura es compartida tanto por uno de los vocales de la Mesa, que emitió voto particular, como por el Tribunal de Cuentas, que la no existencia de una unidad de decisión no impide que se produzca comunicación de las respectivas ofertas. En suma, podría revocarse la adjudicación provisional ya que la Administración no aplicó correctamente la norma del artículo 86 RGLCAP; es decir, que la adjudicación habría recaído en empresa diferente a la adjudicataria de haberse interpretado de forma diferente el contenido del artículo 86 así como la carencia de personalidad jurídica de los miembros de las UTEs y los términos "concurrir individualmente".

IV.10.6. Confederación Hidrográfica del Júcar

La Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante, CHJ) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 26 expedientes primitivos, así como un modificado. No se remitieron prórrogas, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado siete de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	2	18,2	2.875	20,1
Servicios	5	33,3	4.597	58,2
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	7	26,9	7.472	33,7

También se ha fiscalizado el modificado recibido.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHJ ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 119 expedientes por importe de 32.223 miles de euros.

Se ha remitido al Tribunal de Cuentas el modificado de un contrato de obras.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHJ	R	119	32.223	26	22.170		1		
TOTALES	1	119	32.223	26	22.170		1		

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de 18 expedientes. En trámite de alegaciones se remitió la documentación correspondiente a dos de los expedientes; de otros doce se indicó que se encontraban todavía en ejecución, y de cuatro más

que no se había aprobado aún la liquidación, pero sin aportar datos que justificaran dichas circunstancias, toda vez que, de acuerdo con la información disponible en el Tribunal de Cuentas, en todos ellos había transcurrido el plazo fijado en el contrato para la ejecución.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan los pliegos de expedientes concretos:

-En dos expedientes, el pliego de prescripciones técnicas recoge extremos (como el presupuesto estimado del contrato y el plazo de ejecución) que, de acuerdo con el artículo 67.2 RGLCAP, deben regularse en el pliego de cláusulas administrativas particulares, por lo que se incumple el artículo 68.3 del RGLCAP.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

No consta en los expedientes fiscalizados la siguiente documentación:

-La documentación acreditativa de que el contratista se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en un expediente de modificación.

-El acta de medición general y certificación final en un expediente.

Por otra parte, se han observado las siguientes deficiencias:

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en tres expedientes.

-En dos expedientes, el informe técnico de valoración de las ofertas carece de fecha.

IV.10.7. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (en adelante, CHMS) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 12 expedientes primitivos, así como ocho modificados

Se ha fiscalizado uno de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	12,5	270	14,3
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	1	8,3	270	3

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHMS ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 19 expedientes por importe de 9.286 miles de euros.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas ocho modificados. De ellos, cuatro fueron de contratos de obras y cuatro de servicios.

Con posterioridad a la remisión del expediente primitivo se han recibido dos comunicaciones sobre cumplimiento de la prestación, tres sobre variación del período de ejecución y una de revisión de precios. El expediente a que se refiere esta última comunicación fue adjudicado en 2005 por la Confederación Hidrográfica del Norte por un importe de 33.652 miles de euros. Su objeto era la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Lugo. Dicho expediente ha sido afectado por dos modificados (por un importe total de 4.602 miles de euros) y cuatro variaciones en el plazo de ejecución. La terminación de las obras, inicialmente prevista para diciembre de 2008, se vio retrasada dos años. Las ampliaciones en el plazo de ejecución y el acta de recepción no se remitieron al Tribunal de Cuentas hasta 2011, totalmente fuera de plazo.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHMS	R	19	9.286	12	8.987	2	8	3	1
TOTALES	1	19	9.286	12	8.987	2	8	3	1

Se remitió al Tribunal de Cuentas un expediente que debería haber sido incluido en la relación.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de un expediente. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida es la siguiente:

-El documento contable acreditativo de la existencia de crédito, la acreditación de haber realizado el trámite de audiencia al contratista, la conformidad del contratista con la modificación, el reajuste de la garantía, la documentación acreditativa de la clasificación del adjudicatario, la documentación acreditativa de que el contratista se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y la formalización de la modificación, en un expediente de modificación.

IV.10.8. Confederación Hidrográfica del Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura (en adelante, CHS) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 32 expedientes primitivos, así como seis prórrogas y un modificado. No se ha recibido

información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado 13 de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	10	55,6	13.621	63,9
Servicios	3	27,3	1.805	51,7
Suministro	0	0	0	0
TOTAL	13	40,6	15.426	31,7

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHS ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 114 expedientes por importe de 31.734 miles de euros.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas seis expedientes de prórroga y un modificado. Por tipos de contrato, seis fueron de servicios y uno de suministro.

Con posterioridad a la remisión del expediente primitivo se recibieron en este ejercicio diez comunicaciones de cumplimiento de la prestación, y cinco sobre variación de los plazos de ejecución.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHS	R	114	31.734	32	48.619	10	1	11	
TOTALES	1	114	31.734	32	48.616	10	1	11	

Se remitió al Tribunal de Cuentas un expediente que debería haber sido incluido en la relación.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de 24 expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación. En trámite de alegaciones se comunicó que en ninguno de dichos expedientes se había realizado la liquidación del contrato, sin aportar más datos.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Se han observado las siguientes deficiencias:

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en seis expedientes.

-La baja de adjudicación es igual o superior al 30% en un expediente.

En un expediente las circunstancias que se alegan como justificativas de acudir a la tramitación de emergencia no resultan suficientes. Además, la financiación proviene parcialmente del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, establecido por el Real Decreto-Ley 9/2008, que establece que la tramitación de los expedientes se desarrollará por el procedimiento de urgencia. En relación con este extremo, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no queda acreditada la concurrencia de las circunstancias que establece el Real Decreto-Ley (actuaciones de inmediata ejecución, en el ámbito de determinados sectores productivos estratégicos, para el desarrollo de proyectos con alto impacto en el mantenimiento y creación de empleo) ni la consecución de los objetivos que persigue dicha norma.

En un expediente, la justificación presenta contradicciones, ya que, por una parte, se justifica en base al llamado "Plan E", que permite realizar las obras con carácter urgente y en los plazos previstos por el Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. De hecho, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas se incluye la autorización previa de la Ministra, de 3 de febrero de 2009, por la que faculta a la Confederación Hidrográfica del Segura a celebrar los correspondientes contratos con base en la propuesta del Presidente de la Confederación. Sin embargo, simultáneamente se justifica el acudir al procedimiento de emergencia en aplicación del Real Decreto 1265/2005 de 21 de octubre, por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo.

En opinión del Tribunal de Cuentas, al acogerse al procedimiento de emergencia -como se muestra claramente en el Informe de la Inspección General de Servicios de 11 de febrero de 2009-, queda fuera de aplicación el Plan E, ya que no cabe aplicar simultáneamente el Real Decreto-Ley 9/2008 y el Real Decreto 1265/2005 que, además, fue anulado por no ser conforme a Derecho por sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009.

Por otra parte, de considerarse aplicable el Plan E, en opinión del Tribunal de Cuentas, con carácter previo a determinar la financiación de este proyecto mediante el citado fondo debería constar un informe en el que se expusiera y justificase el impacto de esta obra en el mantenimiento y creación de empleos, tanto para su inclusión en el ámbito del Real Decreto Ley como para su tramitación urgente.

Por último, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas se incluye un documento fechado en marzo de 2009, sin que conste el día, en el que se señala que las obras de emergencia correspondientes (entre otras) a este expediente no están incluidas en los anexos III y IV del Real Decreto Ley 2/2004 por el que se modifica la Ley 10/2001, por lo que se considera que no se trata de una obra de interés general.

En cualquier caso, al haberse tramitado por el procedimiento de emergencia, deberían haberse incluido la acreditación de que el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no fue superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se hubiese excedido ese plazo, la contratación de dichas prestaciones hubiera requerido la tramitación por un procedimiento ordinario.

En el documento de formalización se hace constar que ambas partes “convienen en otorgar el presente contrato de colaboración”. Sin embargo, de la forma y contenido del expediente se desprende que no corresponde con lo previsto por la LCSP como contrato de colaboración. En estas mismas circunstancias (salvo que el documento por el que se indica que las obras no son de interés general sí se encuentra fechado) se hallan otros cuatro expedientes.

En un expediente, la baja de adjudicación fue del 42%. Este expediente se tramitó por el procedimiento de urgencia. Su financiación se basa en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre. Admitiendo que la urgencia sea *ex lege*, hay que precisar que la parte expositiva del citado Real Decreto-Ley establece que “el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, tiene por objeto financiar actuaciones de inmediata ejecución, en el ámbito de determinados sectores productivos estratégicos, para el desarrollo de proyectos con alto impacto en el mantenimiento y creación de empleo”. Por ello, con carácter previo a determinar la financiación de este proyecto con el citado fondo debería constar un informe en el que se expusiera y justificase el impacto de esta obra en el mantenimiento y creación de empleos, tanto para su inclusión en el ámbito del Real Decreto Ley como para su tramitación urgente.

IV.10.9. Confederación Hidrográfica del Tajo

La Confederación Hidrográfica del Tajo (en adelante, CHT) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 17 expedientes primitivos, así como cuatro prórrogas. No se remitieron modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado nueve de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	8	61,5	16.118	78,2
Servicios	1	25	693	35,5
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	9	52,9	16.811	74,5

También se ha fiscalizado una de las prórrogas remitidas.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La CHT ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 102 expedientes por importe de 31.514 miles de euros.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas cuatro expedientes de prórroga de contratos de servicios.

Con posterioridad a la remisión del expediente primitivo se han recibido siete comunicaciones sobre variación del plazo de ejecución.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CHT	R	102	31.514	17	22.557			11	
TOTALES	1	102	31.514	17	22.557			11	

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

-En los expedientes de obras no se prevé la existencia del 1% cultural establecido por el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan los pliegos de expedientes concretos:

-El pliego de prescripciones técnicas contiene menciones que corresponden al pliego de cláusulas administrativas particulares en un expediente.

-En un expediente, el pliego de prescripciones técnicas incluye detalles del presupuesto del contrato, lo que contraviene el artículo 68.3 del RGLCAP, puesto que dicho extremo debe recogerse exclusivamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

-No se han limitado en el pliego de cláusulas administrativas particulares los gastos de publicidad de la licitación a asumir por el adjudicatario en cuatro expedientes.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Se han observado las siguientes deficiencias:

-La baja de adjudicación es igual o superior al 30% en seis expedientes.

-Uno de los expedientes fiscalizados se enmarca dentro de las actuaciones urgentes para dinamización de la economía y el empleo previstas en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 13 su contratación se tramitará por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 96.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, con sujeción a los plazos previstos en el artículo 9.1 del citado Real Decreto-Ley. A este expediente no se ha acompañado declaración motivada de urgencia. Admitiendo que la urgencia sea *ex lege* hay que precisar que en la parte expositiva del citado Real Decreto-Ley se señala que “el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, tiene por objeto financiar actuaciones de inmediata ejecución, en el ámbito de determinados sectores productivos estratégicos, para el desarrollo de proyectos con alto impacto en el mantenimiento y creación de empleo”. En opinión del Tribunal de Cuentas, con carácter previo a determinar la financiación de este proyecto mediante el citado fondo debería constar un informe en el que se expusiera y justificase el impacto de esta obra en el mantenimiento y creación de empleos, tanto para su inclusión en el ámbito del Real Decreto-Ley como para su tramitación urgente.

-En estas mismas circunstancias se encuentran otros dos expedientes.

IV.10.10. Entidad Estatal de Seguros Agrarios

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante, EESA) remitió al Tribunal de Cuentas un único expediente primitivo. No se remitieron prórrogas ni modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado el expediente recibido, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	-	-	-	-
Servicios	1	100	293	100
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	1	100	293	100

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La EESA ha presentado una relación que incluye 12 expedientes por un importe de 814 miles de euros.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS**(en miles de euros)**

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
EESA	R	12	814	1	293				
TOTALES	1	12	814	1	293				

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de un expediente. En trámite de alegaciones se informó de que la ejecución del contrato se realizó completamente de conformidad con lo establecido en el mismo y en los Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

IV.10.11. Fondo Español de Garantía Agraria

El Fondo Español de Garantía Agraria (en adelante, FEAGA) no remitió al Tribunal de Cuentas expedientes primitivos, prórrogas ni modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El FEAGA ha presentado relaciones de los contratos adjudicados por cada uno de sus dos órganos de contratación que incluyen 15 expedientes por un importe total de 2.259 miles de euros.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS**(en miles de euros)**

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
FEAGA	R	15	2.259	-	-				
TOTALES	1	15	2.259	-	-				

De acuerdo con los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado, debieron haberse remitido cuatro expedientes al Tribunal de Cuentas. Los expedientes fueron remitidos en trámite de alegaciones, por lo que no han podido ser objeto de fiscalización

IV.10.12. Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos

El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (en adelante, FROM) remitió al Tribunal de Cuentas un total de nueve expedientes

primitivos. No se remitieron prórrogas ni modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado dos de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	-	-	-	-
Servicios	2	22,2	7.192	63,3
Suministro	-	-	-	-
TOTAL	2	22,2	7.192	63,3

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El FROM ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 22 expedientes por un importe de 11.947 miles de euros.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
FROM	R	22	11.947	9	11.357				
TOTALES	1	22	11.947	9	11.357				

De acuerdo con los datos contenidos en la Plataforma de Contratación del Estado, la relación de contratos no incluyó 10 expedientes que, por su cuantía, deberían haber figurado.

De acuerdo con los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado, se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de cuatro expedientes.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de nueve expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis no se han detectado deficiencias significativas.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida es la siguiente:

-La publicación de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, los informes de valoración técnica de las ofertas, en un expediente y la publicación de la adjudicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en un expediente.

Por otra parte, se han observado las siguientes deficiencias:

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en un expediente.

-El documento de formalización no incluye el régimen de penalidades por demora en un expediente.

IV.10.13. Mancomunidad de los Canales del Taibilla

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (en adelante, MCT) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 15 expedientes primitivos, así como seis modificados y tres prórrogas. No se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado seis de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	5	41,7	1.167	21,2
Suministro	1	50	1.688	51,1
TOTAL	6	40	2.855	29

También se han fiscalizado tres de los modificados recibidos.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

La MCT ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 70 expedientes por importe de 14.404 miles de euros.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas tres expedientes de prórroga y seis modificados. Por tipos de contrato, uno de obras, doce de servicios y dos de suministros.

Con posterioridad a la remisión del expediente primitivo se ha recibido en este ejercicio una comunicación sobre la resolución de un contrato, fuera de plazo.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
MCT	R	70	14.404	15	9.854		6	3	1
TOTALES	1	70	14.404	15	9.854		6	3	1

De acuerdo con los datos contenidos en la Plataforma de Contratación del Estado, la relación no incluyó tres expedientes que, por su cuantía, deberían haber figurado.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Los pliegos de los expedientes de suministro no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones iguallen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

Se han observado las siguientes deficiencias:

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en cinco expedientes.

-La baja de adjudicación es igual o superior al 30% en dos expedientes.

-En un expediente que se tramitó por procedimiento negociado sin publicidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154.e de la LCSP, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no

constan los datos suficientes que expliquen las razones por las que este contrato no pudo celebrarse por el procedimiento de urgencia del artículo 96 de la LCSP. En trámite de alegaciones se informó de que, “siendo necesaria una pronta ejecución del contrato, el procedimiento de urgencia (...) hubiera alargado el proceso de contratación varios meses, lo cual era incompatible con la naturaleza de la obra a la que estaba ligado el contrato en cuestión”.

IV.10.14. Parque de Maquinaria

El organismo autónomo Parque de Maquinaria (en adelante, OAPM) remitió al Tribunal de Cuentas un total de tres expedientes primitivos. No se remitieron prórrogas ni modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se ha fiscalizado uno de los expedientes recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Suministro	1	50	1.100	53,7
TOTAL	1	33,3	1.100	37,6

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El OAPM ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye 29 expedientes por importe de 4.985 miles de euros.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
OAPM	R	29	4.985	3	2.924				
TOTALES	1	29	4.985	3	2.924				

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de dos expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen del expediente fiscalizado se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida es la siguiente:

-El informe del Servicio Jurídico acerca del pliego de cláusulas administrativas particulares y el certificado del Registro recogiendo las ofertas recibidas.

Por otra parte, se han observado las siguientes deficiencias.

-El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad.

IV.10.15. Parques Nacionales

El organismo autónomo Parques Nacionales (en adelante, OAPN) remitió al Tribunal de Cuentas un total de 5 expedientes primitivos, así como ocho prórrogas y cinco modificados. No se remitieron prórrogas ni modificaciones, ni se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

Se han fiscalizado dos de los expedientes primitivos recibidos, conforme refleja el siguiente cuadro.

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Tipo	Número	% s/expedientes recibidos	Importe (en miles de euros)	% s/importe expedientes recibidos
Obras	-	-	-	-
Servicios	2	50	510	55,4
Suministro	0	0	0	0
TOTAL	2	40	510	15,1

Así mismo, se han fiscalizado dos prórrogas y cuatro modificados.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

El OAPM ha presentado una relación que incluye 99 expedientes por importe de 13.834 miles de euros.

Se han remitido al Tribunal de Cuentas ocho expedientes de prórroga y cinco modificados. Por tipos de contrato, tres fueron de obras, ocho de servicios y dos de suministro.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
OAPN	R	99	13.834	5	3.367		5	8	
TOTALES	1	99	13.834	5	3.367		5	8	

De acuerdo con los datos contenidos en la relación remitida al Tribunal de Cuentas, así como con los publicados en el Boletín Oficial del Estado, se omitió la remisión al Tribunal de Cuentas de seis expedientes.

Según los datos obrantes en este Tribunal, debió comunicarse la ejecución total de la prestación de diez expedientes. No se ha recibido documentación alguna a este respecto, por lo que se desconoce su situación. Dichos expedientes corresponden a los siguientes órganos de contratación: Dirección (5), Presidencia (4) y Vicepresidencia (1).

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, comprobándose si se adecúan o no a la LCSP y a las demás disposiciones legales vigentes, así como a los fines de la contratación. Como resultado del análisis se han detectado las siguientes deficiencias:

-Con carácter general, los pliegos no contienen cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (Disposición Adicional 6ª de la LCSP). Asimismo, tampoco prevén la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la LO 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

-Igualmente con carácter general, los pliegos no incluyen declaraciones sobre el modo en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del RGLCAP).

Con independencia de ello, se ha comprobado la existencia de otras deficiencias que afectan los pliegos de expedientes concretos:

-No se han limitado en el pliego de cláusulas administrativas particulares los gastos de publicidad de la licitación a asumir por el adjudicatario en un expediente adjudicado por la Presidencia del Organismo.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha observado que documentos que debían estar incluidos no lo estaban, pese a exigirlos la Instrucción. En relación con estas omisiones hay que señalar que si bien en unos casos puede inferirse la existencia de los documentos no incluidos, en otros no es posible conocer este extremo ni, por tanto, si se han cumplido los correspondientes preceptos de la legislación sobre contratos.

La documentación omitida se recoge en el cuadro siguiente:

ORGANO	Nº EXPEDIENTE	DOCUMENTOS COMUNES A TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS				
		24	25	28	41	44
Dirección	62P/09			X		X
Presidencia	6P/09	X	X		X	

Igualmente, no consta en los expedientes fiscalizados la siguiente documentación:

-La acreditación de haber concedido el trámite de audiencia al contratista en dos expedientes de modificación, tramitado uno por la Presidencia del organismo y otro por la Vicepresidencia.

-La fiscalización previa en un expediente de modificación tramitado por la Vicepresidencia del organismo.

-El informe del Servicio Jurídico acerca de la modificación, en un expediente tramitado por la Presidencia del organismo.

-La conformidad del contratista con la modificación, en un expediente tramitado por la Presidencia del organismo.

-La aprobación de la modificación, en dos expedientes. Uno de ellos fue tramitado por la Presidencia del organismo, y el otro por la Vicepresidencia.

-El reajuste de la garantía, en un expediente de prórroga tramitado por la Vicepresidencia del organismo.

-La documentación acreditativa de la clasificación del adjudicatario, en un expediente de modificación tramitado por la Presidencia del organismo (35P/09), así como en un expediente de modificación y otro de prórroga tramitados por la Vicepresidencia.

-La documentación acreditativa de que el contratista se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en un expediente de prórroga tramitado por la Dirección del organismo, dos expedientes de modificación tramitados por la Presidencia del organismo y un expediente de modificación y otro de prórroga tramitados por la Vicepresidencia del organismo.

- La formalización de la modificación, en un expediente tramitado por la Presidencia del organismo.
- El acuerdo de ampliación de plazo, en un expediente de prórroga tramitado por la Vicepresidencia del organismo.

Por otra parte, se han observado las siguientes deficiencias:

- El anuncio del BOE no especifica el importe máximo de los gastos de publicidad en un expediente adjudicado por la Dirección del Organismo.
- En un expediente adjudicado por la Presidencia del organismo, en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas no consta el comienzo efectivo del plazo de ejecución, ya que no consta el acta de inicio, y el clausulado del contrato no especifica cuándo debía realizarse el acta.
- En un expediente adjudicado por la Vicepresidencia del organismo, la petición de prórroga por parte del adjudicatario carece de fecha. Por otra parte, aunque se menciona en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas que se ha producido un aumento del importe respecto del principal por el IPC, no consta la cuantía exacta de dicho incremento ni si se produjo el reajuste de la garantía.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Dos expedientes, adjudicados por la Presidencia del organismo, son sendas modificaciones de un contrato formalizado el 28 de mayo de 2007, con un plazo de ejecución de 18 meses. El hecho de que después de tres modificaciones y de un retraso en la ejecución, la recepción no se produjese hasta el 14 de diciembre de 2010, y el importe sufriera un incremento del 20 %, indica cuando menos una deficiente planificación en la tramitación del proyecto original.

IV.10.16. Agencia Estatal de Meteorología

La Agencia Estatal de Meteorología, que cuenta con cuatro órganos de contratación, no ha presentado relación de los contratos celebrados ni su certificación negativa. Tampoco ha remitido ningún expediente al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, adjudicó al menos 15 expedientes, diez de los cuales, por su cuantía, deberían haber sido remitidos al Tribunal de Cuentas.

IV.10.17. Agencia para el Aceite de Oliva

La Agencia para el Aceite de Oliva (en adelante, AAO) ha presentado una relación de los contratos celebrados que incluye cinco expedientes por importe de 405 miles de euros. Ninguno de los expedientes relacionados, por su cuantía, era de remisión obligatoria al Tribunal de Cuentas.

La información y documentación enviada es la que se detalla en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

(en miles de euros)

ORGANOS	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones			
	R/C	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
AAO	R	5	405	-	-				
TOTALES	1	5	405	-	-				

IV.11. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Ministerio de la Presidencia ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 64 expedientes de contratación, por importe de 53.152 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 32 expedientes por importe de 33.016 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	32	50	33.016	62
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	32	50	33.016	62

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

Los Órganos de contratación del Ministerio han cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	254	122.054	64	53.152	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En el PCAP del contrato número 1 aunque se indicaron los medios establecidos en el artículo 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Zona Europea, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

En el PCAP del contrato número 1 se estableció la valoración del criterio del precio de la oferta en función de su proximidad a la media de baja de las ofertas presentadas a la licitación. Esta actuación no es conforme con el principio de economía, que debe informar la contratación pública. Además, no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes a los subcriterios de adjudicación “plan de mantenimiento, maquinaria, medios auxiliares y herramientas, plan de mejora paisajística y otras mejoras” del criterio de adjudicación “propuesta técnica”. Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

Tanto el PCAP como el PPT del contrato número 2 no tienen fecha ni firma.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En el contrato número 1 no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos.

El contrato de servicio de enlaces y azafatas que prestaran sus servicios en cumbres, eventos y reuniones convocados por la presidencia española de la UE (número 2) fue tramitado a través del procedimiento de urgencia. El artículo 96 de la LCSP solamente permite la utilización de este procedimiento cuando la necesidad del contrato sea inaplazable o su adjudicación sea preciso acelerarla por razones de interés público. En el expediente del contrato la urgencia se justifica en “la necesidad de llevarse a cabo en el periodo en que va a tener lugar la presidencia española y, por otro, a razones de interés público, derivadas de la trascendencia que los eventos de dicha presidencia española tienen para el estado y sus ciudadanos” no estando por tanto justificado que se haya utilizado el procedimiento de urgencia. Además, la adjudicación de este contrato se realizó

mediante un procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia de ofertas con invocación del supuesto previsto en el apartado 210 g) del TRLCAP que permiten la utilización de este procedimiento cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. Sin embargo, no se ha acreditado documentalmente que la empresa adjudicataria garantizara adecuadamente la protección de los citados intereses, en consecuencia, no esta justificada la adjudicación del contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos fiscalizados no se ha remitido el acta de recepción del contrato número 2 si bien constan certificados mensuales de conformidad correspondientes a los servicios prestados.

IV.11.1. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional

EL Consejo de Administración del Patrimonio Nacional ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 22 expedientes de contratación, por importe de 34.072 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 8 expedientes por importe de 13.886 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados en el Tribunal de Cuentas:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	8	36	13.886	41
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0		0
TOTAL	8	36	13.886	41

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Órgano de contratación del Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
PN	R	94	51.110	22	34.072	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En el pliego del contrato número 1 se exigió que los licitadores tuvieran clasificación, pero dicho requisito no resulta exigible para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea para las que debió preverse que acreditaran su solvencia por los medios ordinarios. Al no haberse hecho así, los empresarios europeos sufrieron una restricción en cuanto a sus posibilidades de concurrir al mercado.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

Los contratos de servicios de conservación y mantenimiento del yate Fortuna (número 1) y de servicios de limpieza de la Moncloa (número 2) fueron adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas con invocación del supuesto previsto en el apartado 154 f) de la LCSP que permiten la utilización de este procedimiento cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. Sin embargo, no se ha acreditado documentalmente que la empresa adjudicataria garantizara adecuadamente la protección de los citados intereses, en consecuencia, no está justificada la adjudicación del contrato.

En los contratos números 1 y 2 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Organismo, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

Se ha enviado documentación acreditativa de la completa ejecución del contrato número 1 si bien no se ha remitido el acta de recepción del servicio prestado. Respecto al contrato número 2 la documentación remitida acredita que el mismo se encuentra en fase de ejecución.

IV.11.2. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 1 expediente de contratación, por importe de 696 miles de euros el cual ha sido fiscalizado.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre el expediente contractual fiscalizado en el Tribunal de Cuentas:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	100	696	100
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	100	696	100

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
BOE	R	21	2.125	1	696	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En el PCAP del contrato fiscalizado de servicio de elaboración de registros documentales del BOE anteriores a 1995, si bien se previó la documentación que debían presentar las empresas no españolas de Estados Miembros de la UE para acreditar su solvencia, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de ellos para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación. Además, no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes al criterio de adjudicación “propuesta técnica” Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado

medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En el contrato se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Ministerio, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio. Además, no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos.

En el informe de valoración de las ofertas presentadas aunque figuran algunas explicaciones generales sobre la metodología de la valoración del criterio de adjudicación “oferta técnica”, no constan los motivos concretos por los que se otorgaron a cada uno de los licitadores las puntuaciones, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP por lo que debe concluirse que las adjudicaciones de estos contratos no están justificadas.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En trámite de alegaciones se ha remitido documentación que acredita que el contrato fiscalizado se encuentra en fase de ejecución al haber sido prorrogado hasta el año 2012.

IV.12. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

EL Ministerio de Política Territorial ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 7 expedientes de contratación, por importe de 16.385 miles de euros, de los cuales se ha fiscalizado 1 expediente por importe de 14.865 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre el expediente contractual fiscalizado:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	14	14.865	91
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	14	14.865	91

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

Los Órganos de contratación del Ministerio han cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	65	5.866	7	16.385	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En el PCAP si bien se previó que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no debieran aportar clasificación sino acreditar su solvencia y se determinaron los medios para dicha acreditación, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de dichos medios para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación. Asimismo en ese PCAP, dentro del criterio de valoración de ofertas denominado “solvencia y garantías de la red postal” se incluyeron como subcriterios entre otros “ las oficinas de atención al público y los centros de tratamiento de envíos postales” los cuales valoraban el número de oficinas, su ubicación y además su distribución territorial, aspectos éstos que no deben valorarse en la adjudicación del contrato sino en la fase previa de admisión a la licitación ya que debe ser cumplido por todos los licitadores para ser admitidos a la licitación.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria del contrato en la que se determinó la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos no correspondiéndose con las exigencias en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP. Además, no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos.

En el informe de valoración de ofertas aunque figuran algunas explicaciones generales sobre la metodología de la valoración de los criterios técnicos, no constan los motivos concretos por los que se las puntuaciones, por lo que debe concluirse que la adjudicación no está justificada.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución del contrato se ha remitido dos certificados de conformidad de los servicios prestados durante los años 2010 y 2011 (plazo de ejecución del mismo) y una relación certificada de los pagos efectuados en ejecución del citado contrato pero no se ha enviado el acta de recepción.

IV.12.1. Instituto Nacional de Administración Pública.

En la relación certificada de contratos celebrados remitida por el organismo consta que adjudicó varios contratos que eran de remisión obligatoria a este Tribunal, 4 de estos contratos han sido remitidos en trámite de alegaciones.

IV.12.2. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (en lo sucesivo MUFACE) ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 10 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 4.567 miles de euros, tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.12.2.

Este Tribunal ha analizado para su fiscalización la totalidad de los contratos remitidos, conforme se expone en el cuadro siguiente:

1

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Servicios	10	100	4.567	100
TOTAL	10	100	4.567	100

Los resultados obtenidos de la Fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por MUFACE en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de contratos al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.12.2 que se adjunta, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por MUFACE de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
MUFACE	R	116	946.948	10	4.567	--	--	1	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.
(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior MUFACE ha remitido oportunamente la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009. Esta información relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular en el Perfil de Contratante, publicado en su propia sede electrónica y en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el BOE.

Como resultado de este análisis cabe señalar que MUFACE ha dado adecuado cumplimiento a la obligación, establecida en el artículo 29 de la vigente LCSP, de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los expedientes de los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superen los importes fijados en el citado artículo.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

En el análisis de los PCAP y de los PPTP de los expedientes de contratación tramitados por MUFACE se ha observado lo siguiente:

- En tres contratos la mención obligatoria en los PCAP relativa al sistema de determinación del precio del contrato (artículo 75.2 LCSP y artículo 67 del RGLCAP apartado 7.c) fue omitida y consistió en una mera explicación de la forma en que había sido calculado el presupuesto por el órgano de contratación .
- En un contrato el PCAP incluyó como requisito de solvencia técnica de las empresas la acreditación del sistema de gestión ambiental, según norma IS-UNE-EN 140001 o equivalente, lo que resultó improcedente, puesto que en este contrato el PCAP exigió a los contratistas acreditar la oportuna clasificación, y por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51.2 de la LCSP, el requisito de la solvencia de las empresas es sustituido por el de su clasificación cuando éste resulta exigible, como en este caso.
- En cuanto a los criterios de adjudicación incluidos en los PCAP y aplicados a los contratos analizados cabe señalar las siguientes deficiencias:
 - La utilización inadecuada como criterio de adjudicación de las mejoras o prestaciones adicionales que pudieran ofertar los propios licitadores, sin mayor concreción previa respecto de su contenido y de su extensión, en perjuicio de la objetividad y transparencia que exigen los artículos 1 y 123 de la LCSP.
 - La utilización como criterio objetivo de adjudicación de factores tales como los certificados de garantía de calidad (ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004) o la experiencia, que pueden ser utilizados, en su caso, como requisitos de la solvencia técnica de las empresas licitadoras (aptitud), pero que no deben ser valorados como criterios de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53.2, 67 y 134.1 de la LCSP.
 - La utilización de una fórmula para valorar el criterio precio en función de la proporción existente entre las bajas económicas de las ofertas presentadas por los licitadores, prescindiendo del valor relativo que la propia baja representase respecto del precio de licitación, lo que puede dar lugar a que pequeñas diferencias en las bajadas económicas ofertadas por las empresas den como resultado diferencias desproporcionadas en la puntuación obtenida. Este sistema, si bien permite una correcta ordenación de las ofertas en función del precio, sin embargo, no resulta adecuado para la ponderación del criterio precio con respecto de los restantes criterios de adjudicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 de la LCSP.

- En tres contratos el PPTP incluyó indebidamente cláusulas propias del PCAP, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 68 del RGLCAP. Las menciones improcedentes en los PPTP fueron: el plazo de ejecución, el presupuesto máximo de licitación, el lugar y plazo de presentación de las ofertas, las cláusulas de seguridad y confidencialidad y los criterios de valoración de las ofertas.

- Por último, cabe señalar que MUFACE no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007.

Únicamente cabe reseñar que el “modelo de pliego” adjuntado a la Hoja-resumen del pliego que resultaba aplicable a un contrato de servicios, contempló entre sus cláusulas la posibilidad prevista en la LCSP de incluir cualquiera de las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en el artículo 102 de la LCSP (entre otras, las consideraciones de tipo medioambiental o de carácter social), artículo que reprodujo el propio pliego.

Asimismo, el PCAP contempló también la verificación por parte del órgano de contratación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato que, en su caso, se hubieran previsto, así como las posibles consecuencias (imposición de penalidades e incluso la resolución del contrato) que podrían producirse en caso de incumplimiento de tales condiciones por parte de la empresa contratista.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el análisis del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos cabe señalar las siguientes deficiencias:

- En un contrato, la clasificación aportada por la empresa que resultó adjudicataria tenía como fecha de caducidad el 30 de octubre de 2009, por lo que dicha clasificación caducó antes de la fecha de la adjudicación definitiva del contrato, el 18 de diciembre de 2009, e incluso antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de las ofertas por las empresas licitadoras (10 noviembre de 2009), sin que conste en el expediente de contratación la subsanación de esta deficiencia (artículo 54 LCSP).

- En este mismo expediente acabado de citar, el documento de formalización del contrato no incluyó entre sus cláusulas como debiera, las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria y que fueron valoradas por la Mesa de Contratación como criterio de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el PCAP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Este Tribunal ha analizado el cumplimiento por MUFACE de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que en ninguno de los pagos analizados se hayan observado retrasos.

IV.13. MINISTERIO DE CULTURA

El Ministerio de Cultura ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 110 expedientes de contratación, por importe de 137.693 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 47 expedientes por importe de 61.866 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	10	11	33.904	25
Servicios	26	24	17.522	13
Suministros	11	10	10.440	8
Otros	0	0	0	0
TOTAL	47	43	61.866	45

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

Los Órganos de contratación del Ministerio han cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	596	146.862	110	137.693	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En el PCAP del contrato número 5, si bien se previó que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no debieran aportar clasificación sino acreditar su solvencia y se determinaron los medios para dicha acreditación, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de dichos medios para considerar solvente al licitador. En los PCAP de los contratos números 2, 3 y 4 se observó esta misma deficiencia en cuanto a los mínimos de solvencia económica. Estas deficiencias afectan a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

En el PCAP del contrato número 2 se estableció un umbral de saciedad consistente en que la máxima puntuación se asignará a las ofertas iguales al 70% del importe de licitación, las ofertas que superasen ese umbral no recibirían mayor puntuación. La fijación de umbrales de saciedad en la valoración de la oferta económica es contraria al principio de economía que debe informar el gasto público.

En el PCAP del contrato número 5 no se especificaron la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes al criterio de adjudicación “organización del servicio”. Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

En los PCAP de los contratos números 3 y 4 (ambos contratos de obras) se utilizó entre otros, el criterio de adjudicación “Mejor conocimiento del proyecto y de los problemas de su puesta en obra” (10 puntos), en el que se valoraba la elaboración de una memoria que contemple la interferencia con los usos del inmueble, accesibilidad, respeto al entorno y suministro de servicios necesarios para la ejecución de la obra, éste no debería haber sido objeto de valoración ya que dicha información no debe ser aportada por los licitadores sino que debe formar parte del contenido del proyecto de obra, en virtud del artículo 107 de la LCSP.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria del contrato número 5 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos no correspondiéndose con las exigencias en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

En los contratos número 2 y 5 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Ministerio, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

En los contratos números 2, 3, 4, 5 no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto a los contratos números 2 y 3 pues, a pesar de que los plazos de ejecución de estos contratos han concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

Respecto al contrato número 4, se ha remitido un expediente de cesión del contrato como consecuencia del concurso de acreedores del contratista primitivo pero a pesar de que el plazo de ejecución del contrato ha concluido no se ha enviado el acta de recepción del mismo ni ningún otro documento que acredite la ejecución actual del citado contrato.

IV.13.1. Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 10 expedientes de contratación, por importe de 3.139 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 4 expedientes por importe de 1.917 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	4	40	1.917	61
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	4	40	1.917	61

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
BN	R	92	11.422	10	3.139	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En los PCAP de los contratos números 1 y 2 si bien se previó que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no debieran aportar clasificación sino acreditar su solvencia y se determinaron los medios para dicha acreditación, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de dichos medios para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

En los contratos números 1 y 2, los PCAP establecieron como criterios de adjudicación la valoración técnica (49 puntos) y la oferta económica (51 puntos). Para poder proceder a valorar las ofertas económicas era necesario que las empresas alcanzases una puntuación mínima de 35 y 39 puntos, respectivamente en la valoración técnica. La LCSP establece en su artículo 134 que cuando en un PCAP la ponderación atribuida a los criterios subjetivos (criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor) sea superior a la de los criterios objetivos (criterios cuantificables mediante la aplicación de una fórmula), la valoración de los criterios subjetivos no podrá hacerse por el órgano de contratación o la Mesa, sino que deberá constituirse un comité de expertos o atribuirse la valoración a un organismo técnico especializado. En este contrato, la configuración de la valoración de los criterios subjetivos en una primera fase, que resultaba eliminatória de no alcanzarse cierta puntuación, implicaba que la ponderación atribuida a los criterios subjetivos era, de hecho, en esa primera del 100%. Por ello la valoración de los criterios subjetivos debió encargarse a un comité de expertos u organismo técnico especializado. En conclusión, la valoración de los criterios de adjudicación no fue realizada de manera correcta.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En ambos contratos no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos. Se adjuntan informes sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, estos informes son meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, esta deficiencia es singularmente relevante al tratarse de contratos para realizar actividades propias, típicas y permanentes del Organismo Autónomo Biblioteca Nacional como es la realización de tareas de catalogación y su consecuente gestión de depósitos. por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

En la valoración de las ofertas presentadas tanto en el contrato número 1 como en el 2, se observa que uno de los subcriterios de la "Valoración técnica" establecido en el PCAP, se subdividió a su

vez en el informe de valoración en apartados con distintos márgenes de puntuación, no estando prevista esta división en el PCAP. El establecimiento de apartados no previstos en el PCAP y, en este caso, una vez abiertas las plicas y conocido el contenido de las distintas ofertas, constituye una actuación contraria a la objetividad que debe inspirar la actuación de los poderes públicos en la adjudicación de un contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos se ha aportado en trámite de alegaciones abundante documentación acreditativa de la misma, sin embargo, no se han enviado las actas de recepción de los servicios prestados.

IV.13.2. Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 21 expedientes de contratación, por importe de 67.494 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 6 expedientes por importe de 24.002 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	2	25	18.425	34
Servicios	1	20	591	20
Suministros	3	38	4.986	49
Otros	0	0	0	0
TOTAL	6	29	24.002	36

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	R	155	74.439	21	67.494	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En los PCAP de los contratos números 1 a 4 para valorar la oferta económica, se establecen unos valores como referencia: la oferta más económica (15 puntos en el contrato número 1, 50 puntos en el contrato número 2 y 25 puntos en los contratos números 3 y 4), la que coincida con la baja media (12,5 en el contrato número 1, 40 puntos en el contrato número 2 y 18 puntos en los contratos números 3 y 4) y la que coincida con el presupuesto de licitación (0 puntos) Esta forma de valoración, en función de su proximidad en mayor o menor medida a la baja media, es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En ninguno de los contratos fiscalizados se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos se ha remitido en trámite de alegaciones documentación acreditativa de la ejecución de los contratos números 1, 2 y 4 así como las actas de recepción de los mismos. Respecto al contrato número 3 se ha aportado documentación que acredita que el mismo se encuentra en fase de ejecución estando prevista su conclusión para el mes de julio de 2013.

IV.13.3. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha remitido a este Tribunal de Cuentas 14 expedientes de contratación, por importe de 19.408 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 6 expedientes por importe de 10.512 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	1	100	2.947	100
Servicios	5	71	7.565	64
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	6	43	10.512	54

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha incumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al no remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	C			14	19.408	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En los PCAP de los contratos números 1 y 2 si bien se previó que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no debieran aportar clasificación sino acreditar su solvencia y se determinaron los medios para dicha acreditación, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de dichos medios para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

El PCAP del contrato número 1 recogía un límite que permitía apreciar la existencia de bajas temerarias respecto del precio, sin embargo la LCSP distingue dos regímenes para apreciar la existencia de ofertas temerarias según la forma de adjudicación del contrato sea el procedimiento con un único criterio de adjudicación (precio) o con varios criterios. En el primer caso, la temeridad sólo puede apreciarse en relación con la baja de ofertas económicas y así lo establece el artículo 136 de la LCSP, que remite a la regulación reglamentaria para el establecimiento de los criterios objetivos que permitan apreciar dicha temeridad (esa regulación reglamentaria se encuentra en el

artículo 85 del RGLCAP), por el contrario en el segundo supuesto, el artículo 136 de la LCSP señala que es en el pliego de cláusulas administrativas de cada contrato donde podrán expresarse los criterios objetivos para apreciar la temeridad, añadiendo que si el precio es uno de los criterios de adjudicación se deben establecer en el pliego los límites que permitan apreciar la existencia de baja temerarias. A juicio de este Tribunal la temeridad no puede establecerse en atención a un solo criterio aislado, pues una oferta económica baja puede ser viable teniendo en cuenta que oferta el licitador respecto a otros aspectos del contrato. Además, en el criterio de adjudicación "Oferta Técnica" se incluyó un subcriterio "Relación de equipos, maquinarias y medios auxiliares que la empresa se compromete a poner a disposición de la obra para la ejecución de los distintos trabajos, con el compromiso de mantenerlos o incorporarlos en la misma siempre que sean requeridos por el órgano contratante", sin embargo estos aspectos no deben valorarse en la adjudicación del contrato sino en la fase previa de admisión a la licitación (artículo 65 de la LCSP), ya que debe ser cumplido por todos los licitadores para ser admitidos a la misma. A mayor abundamiento, el artículo 61 de la LCSP, permite al órgano de contratación, además de exigir la clasificación pertinente, exigir a los licitadores, haciéndolo constar en el PCAP, que completen en la fase de selección, no de adjudicación como en este caso, la acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En ambos contratos no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

Al ser el contrato número 1 un contrato de obras, debería haberse efectuado una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realizó, incumpliendo lo dispuesto en la disposición final 2ª de la LCSP. Este contrato fue objeto de una modificación que supuso un incremento del precio del 26% y tuvo por objeto diversas actuaciones para corregir errores materiales en el proyecto primitivo tales como deficiencias en la cimentación, estado de la cubierta y estado de las instalaciones. No se ha acreditado en el expediente que las citadas actuaciones respondan a causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de la elaboración del proyecto primitivo y por lo tanto no se considera justificada la modificación a los efectos de lo previsto en el artículo 202 de la LCSP sin que conste la práctica de las actuaciones previstas en la ley para la exigencia de responsabilidades por las deficiencias del mencionado proyecto.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución de los contratos no ha sido posible realizar la misma respecto a los contratos números 1 y 2 pues, a pesar de que los plazos de ejecución de estos contratos han concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

IV.13.4. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 7 expedientes de contratación, por importe de 3.508 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 2 expedientes por importe de 2.122 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	17	389	22
Suministros	1	100	1.733	100
Otros	0	0	0	0
TOTAL	2	29	2.122	60

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
INAEM	R	57	6.766	7	3.508	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En el PCAP del contrato número 1 si bien se previó que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no debieran aportar clasificación sino acreditar su solvencia y se determinaron los medios para dicha acreditación, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de dichos medios para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En ambos contratos no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

No existen incidencias en la ejecución de los contratos fiscalizados.

IV.13.5. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 9 expedientes de contratación, por importe de 3.638 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 2 expedientes por importe de 1.407 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	2	22	1.407	39
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	2	22	1.407	39

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
ICAA	R	26	4.801	9	3.638	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En los PCAP de los contratos números 1 y 2 si bien se previó que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no debieran aportar clasificación sino acreditar su solvencia y se determinaron los medios para dicha acreditación, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en los medios económicos para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación. Además, en ambos pliegos se estableció que la valoración de las ofertas económicas se realizaría en función de su proximidad a la baja media resultante de todas las ofertas presentadas a la respectiva licitación. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos. Por último, en el del criterio de adjudicación “precio” del contrato número 1 se considera baja temeraria y excluye automáticamente del procedimiento (infringiendo lo dispuesto en el artículo del 136 de la LCSP), a las ofertas cuya proposición económica superen a la baja media en más de 20 unidades porcentuales. La temeridad no puede establecerse en atención a un solo criterio aislado, pues una oferta económica baja puede ser viable teniendo en cuenta lo que oferta el licitador respecto a otros aspectos del contrato.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria de los contratos números 1 y 2 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos no correspondiéndose con las exigencias en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

En ambos contratos no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

IV.13.6. Museo Nacional del Prado

El Museo Nacional del Prado ha remitido al Tribunal de Cuentas 6 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 3.816 miles de euros, habiendo sido fiscalizados en su totalidad, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	1	100	790	100
Servicios	4	100	1.549	100
Suministros	1	100	1.477	100
Otros	--	--	--	--
TOTAL	6	100	3.816	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el Museo en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, el Museo Nacional del Prado ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 62 contratos por un importe global de 13.071 miles de euros. No obstante, en esta certificación la Entidad ha incluido indebidamente 22 incidencias de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, por importe de 5.331 miles de euros, cuando de acuerdo con la Instrucción General del Tribunal de Cuentas, dichas incidencias deberían haber sido únicamente objeto de comunicación. Esta información ha sido contrastada con los datos publicados a través de su página Web en su perfil de contratante, habiéndose comprobado que sólo figuraban publicados 10 contratos de los incluidos en la relación.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 6 contratos por importe de 3.816 miles de euros. Sin embargo, no remitió de oficio un contrato de suministros que superó el importe previsto en el citado precepto, efectuando en alegaciones dicha remisión. Asimismo, comunicó y remitió la documentación correspondiente a 5 expedientes de prórroga de contratos adjudicados en el ejercicio 2009. La Entidad, en alegaciones, remite información sobre 6 expedientes finalizados y que fueron adjudicados en el ejercicio fiscalizado.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del Museo Nacional del Prado de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
M.N. Prado	R	62	13.071	6	3.815	6		5	
1 (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato. 2 R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.									

El Museo publicó a través de su página Web su perfil de contratante, de acuerdo con el artículo 42 de la LCSP, en la que ofrece información sobre las convocatorias en curso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, las adjudicaciones provisionales y definitivas. Asimismo, la Entidad difundió su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado ("www.contrataciondelestado.es"), tal y como exige el artículo 309 de la LCSP.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, verificando su adecuación a la LCSP y a las demás disposiciones legales aplicables, así como a los fines de la contratación. De su fiscalización, se han detectado las siguientes deficiencias:

En dos expedientes los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyeron, entre los criterios que han de servir de base para la adjudicación, los medios humanos y materiales, cuando dichos elementos habían de haberse valorado en la fase previa de admisión a la licitación, con objeto de evaluar la aptitud de las empresas, de acuerdo con el artículo 67 de la LCSP.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un expediente establecieron como uno de los criterios de adjudicación el inicio inmediato de las obras. En concreto, señalaron que se valoraría con la puntuación máxima el inicio de las obras 15 días después de la notificación de la adjudicación definitiva y con cero puntos el inicio 30 ó más días desde dicha notificación. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 212 de la LCSP, la ejecución de las obras ha de comenzar con el acta de comprobación de replanteo, una vez formalizado el contrato, por lo que el inicio de la ejecución debería haberse condicionado a la fecha de la comprobación del replanteo y no a la de la notificación de la adjudicación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de determinados expedientes, previeron la apertura en acto público de la oferta económica, no así del resto de la documentación valorable conforme a los criterios de adjudicación, cuando el artículo 129.2 de la LCSP exige que las proposiciones sean secretas y que se arbitren los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública.

Asimismo, en un expediente se incluyeron las "mejoras" presentadas por los licitadores, entre los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, sin precisar su contenido y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación, lo que supuso la introducción de elementos subjetivos y discrecionales de valoración. La inclusión de mejoras indeterminadas, sin que fueran

acompañadas de una adecuada ponderación, vulneró los principios de igualdad y transparencia previstos en el artículo 123 de la LCSP.

Igualmente, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de dos expedientes dispensaron del plazo de garantía, limitándose a señalar que no se establecía dicho plazo, al considerar el órgano de contratación que no procedía a tenor de la naturaleza, índole y características del servicio contratado. El artículo 205.3 de la LCSP exige que se justifique debidamente en el expediente de contratación tal dispensa, resultando insuficiente lo señalado en los pliegos.

Asimismo, los pliegos de prescripciones técnicas de tres expedientes hacían mención al presupuesto del contrato, así como al plazo de ejecución y a la forma de pago, cuando el artículo 67.2 del RGLCAP dispone que estos extremos figuren en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. A este respecto, el artículo 68.3 del mismo texto legal no permite que los pliegos de prescripciones técnicas contengan cláusulas que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Esta misma circunstancia se produjo en un expediente en el que los pliegos de prescripciones técnicas se refirieron expresamente al objeto, al presupuesto del contrato y a su plazo de vigencia, así como en otro expediente en el que se mencionaba el objeto del contrato.

El Museo Nacional del Prado no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyeron ninguna cláusula sobre la preferencia, en la adjudicación, de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las ofertas más ventajosas, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

La Entidad contrató en el ejercicio 2009, al igual que había venido haciendo desde el ejercicio 2005, con una empresa externa la prestación de los servicios de información y atención al visitante. El objeto de este contrato consistió en informar al público en todas sus demandas, ayudar en la distribución de información en ruedas de prensa, así como la recogida de prendas en consignas, incluyendo un servicio de azafatas y de recepcionista. Al tratarse de operaciones relacionadas con la actividad del Museo y que se llevaban a cabo de forma continuada en sucesivos ejercicios, la Entidad debió justificar debidamente la falta de conveniencia de disponer del personal propio suficiente que efectuara las actuaciones objeto de dicho servicio.

Próximos a vencer los contratos de mantenimiento que tenía contratados el Museo, la memoria justificativa de un expediente indicó, sin aportar ninguna razón que motivase dicha propuesta, la conveniencia de que fuera una única empresa la que realizase los servicios de mantenimiento. No obstante, en alegaciones, la Entidad alude genéricamente a razones organizativas para optar por una sola empresa, al resultar más económico y por permitir una mejor gestión de los intereses públicos.

Tres contratos dispusieron que el plazo total de ejecución se computaría a partir de la firma del contrato salvo que, por razones de urgencia, se hubiera iniciado desde la recepción de la garantía definitiva. Este último inciso, sin embargo, resultó innecesario, dado que de haberse producido dicha urgencia, se hubiera conocido en el momento de la formalización del contrato.

Dos contrato declararon la improcedencia de la revisión de precios, sin que constase en el expediente una resolución motivada del órgano de contratación en la que se hiciesen constar las razones de tal decisión, como requiere el artículo 77.2 de la LCSP.

En un expediente la empresa adjudicataria ofreció un plazo de duración inferior al previsto en los pliegos, así como un mayor plazo de garantía. Sin embargo, el contrato formalizado entre las partes no se ajustó a lo ofertado por el adjudicatario, limitándose a señalar en el primer caso que sería el fijado en los pliegos o el mejor que haya podido ofrecer el adjudicatario. A este respecto, cabe señalar que las mejoras propuestas por la empresa adjudicataria deberían haberse incluido expresamente en el documento de formalización del contrato, cuyo contenido se encuentra regulado en el artículo 71 del RGLCAP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

Si bien en los expedientes analizados no constaban, inicialmente, ni las facturas ni los documentos acreditativos de los pagos efectuados, ni tampoco el acta formal de recepción de los expedientes fiscalizados, todos esos documentos fueron aportados por la Entidad en trámite de alegaciones.

IV.13.7. Universidad Nacional de Educación a Distancia

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha remitido al Tribunal de Cuentas 7 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 11.929 miles de euros, habiendo sido fiscalizados en su totalidad, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% s/ exp. recibidos	Importe	% s/ importe exp. recibidos
Obras	2	100	8.585	100
Servicios	4	100	3.081	100
Suministros	1	100	263	100
Otros	--	--	--	--
TOTAL	7	100	11.929	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por la UNED en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, que establece la obligatoriedad de las entidades públicas de presentar anualmente una relación de los contratos adjudicados, la UNED ha remitido la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado.

La Entidad certificó la adjudicación, en el ejercicio 2009, de 143 contratos por un importe global de 27.589 miles de euros. No obstante, en esta certificación la Entidad ha incluido indebidamente 58 incidencias de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, por importe de 10.217 miles de euros, cuando de acuerdo con la citada Instrucción del Tribunal de Cuentas, dichas incidencias deberían haber sido únicamente objeto de comunicación.

Esta información ha sido contrastada con los datos publicados a través de su página Web en su perfil de contratante. A pesar de que la UNED no conserva esta información en dicha página, la Entidad ha aportado copia de los datos publicados en su perfil de contratante sobre 56 contratos adjudicados en el ejercicio 2009.

Asimismo, debe señalarse que la Entidad, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 29 de la LCSP, remitió al Tribunal de Cuentas 7 contratos por importe de 11.929 miles de euros, y comunicó y remitió en el ejercicio 2009 la documentación correspondiente a 5 expedientes de prórroga de contratos adjudicados en ejercicios anteriores. Asimismo, la Entidad ha remitido información sobre 4 expedientes de prórroga y 4 modificaciones de contratos adjudicados durante el periodo fiscalizado. La Entidad ha remitido, en alegaciones, información sobre cuatro expedientes finalizados.

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte de la UNED de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
Entidad	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
UNED	R	143	27.589	7	11.929	4	4	9	
1. (a) Finalización del contrato. (b) Modificación del contrato. (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas. 2. (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal del contrato. R: La Entidad ha remitido relación de contratos; C: La Entidad ha remitido certificación negativa.									

La UNED publicó a través de su página Web su perfil de contratante, de acuerdo con el artículo 42 de la LCSP, en la que ofrece información sobre las convocatorias en curso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, las adjudicaciones provisionales y definitivas. Por el contrario, la Entidad no difundió su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado (www.contrataciondelestado.es), tal y como exige el artículo 309 de la LCSP.

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos celebrados por esta Entidad son expuestos a continuación.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas

Se han analizado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de contratación seleccionados, verificando su adecuación a la LCSP y a las demás disposiciones legales aplicables, así como a los fines de la contratación. De su fiscalización, se han detectado las siguientes deficiencias:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de tres expedientes no concretaron los medios acreditativos de la solvencia para aquellos licitadores procedentes de Estados miembros de la Unión Europea, remitiendo únicamente el primero de ellos a los artículos 64 y 67 de la LCSP.

Los pliegos de cuatro expedientes no incluyeron ninguna fórmula o método para la valoración de la oferta económica, indicando únicamente la ponderación máxima atribuible. Esta falta de precisión

sobre el método de valoración de los criterios de adjudicación limitó la exigible objetividad y publicidad en la contratación y constituyó un riesgo para la transparencia de la adjudicación.

Asimismo, en un expediente, se previeron las “mejoras” presentadas por los licitadores, entre los criterios que habían de servir de base para la adjudicación, sin precisar su contenido y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación, lo que supuso la introducción de elementos subjetivos y discrecionales de valoración. La inclusión de mejoras indeterminadas, sin que fueran acompañadas de una adecuada ponderación, vulneró los principios de igualdad y transparencia previstos en el artículo 123 de la LCSP.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de tres expedientes no determinaron el límite temporal de las prórrogas, cuando el artículo 26 de la LCSP dispone que los contratos que celebren las entidades del sector público deberán incluir, necesariamente, una mención a la duración del contrato y de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas. La mera remisión a lo dispuesto en la legislación vigente para prorrogar el contrato no resultó suficiente para delimitar su plazo de duración, e impidió conocer su valor estimado, de acuerdo con el artículo 76 de la LCSP, que establece que, en el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta las eventuales prórrogas del contrato.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de tres expedientes no precisaron la fórmula o sistema de revisión de precios aplicable, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 77.3 de la LCSP.

Los pliegos de prescripciones técnicas de un expediente hacían mención a los criterios de adjudicación, cuando el artículo 67 RGLCAP del mismo texto legal dispone que estos extremos figuren en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. A este respecto, el artículo 68.3 no permite que los pliegos de prescripciones técnicas contengan cláusulas que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La UNED no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyeron ninguna cláusula sobre la preferencia, en la adjudicación, de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, siempre que estas proposiciones iguallen en sus términos a las ofertas más ventajosas, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo, en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En un expediente fueron valorados como criterios objetivos de adjudicación la disposición por el licitador de certificados de aseguramiento de la calidad, requisito que hace referencia a la solvencia técnica de las empresas licitadoras (determinantes de la aptitud de estas empresas), no siendo susceptible de valoración como criterio de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo del 67 de la LCSP.

El informe técnico de valoración y el acta de la mesa de contratación del expediente 11929/2009 no motivaron suficientemente la propuesta de adjudicación, limitándose el primero de ellos a señalar que la propuesta técnica presentada por la única empresa que había concurrido a la licitación resultaba correcta y que el importe de su oferta era inferior al importe máximo de licitación. En ningún caso el informe analizó la oferta presentada conforme a los criterios de adjudicación, lo que resultó contrario al principio de transparencia que ha de inspirar el procedimiento de adjudicación.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

El acta de comprobación del replanteo de un expediente se expidió fuera del plazo establecido en el artículo 212 de la LCSP.

La Universidad procedió a modificar un expediente, aportando como certificado de la existencia de crédito los documentos contables de ejecución del gasto, sin que estos puedan sustituir al documento administrativo previo de existencia de crédito, exigible de acuerdo con el art. 93.3 de la LCSP. Con posterioridad, este mismo expediente fue nuevamente modificado y prorrogado en dos ocasiones, superando las prórrogas el plazo inicialmente estipulado, contraviniendo el artículo 279 de la LCSP.

También se modificó otro expediente, argumentando la Entidad que era preciso un aumento de potencia para los servicios e instalaciones previstos para el futuro, extremo que debía haberse previsto en el momento de iniciarse la tramitación del referido expediente, aportando, como en el caso anterior, los documentos contables de ejecución del gasto como sustitutivos del documento administrativo previo de existencia de crédito.

La UNED prorrogó por un año un expediente cuyo plazo inicial era de 20 meses. El contrato en el que se formalizó la prórroga permitía a su vez la ampliación del plazo de ejecución, señalando al respecto que el contrato podría ser prorrogado, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pudiera exceder de seis años. Esta previsión vulneró lo dispuesto en el artículo 279 de la LCSP, que no permite que las prórrogas superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.

Si bien en los expedientes analizados no constaban, inicialmente, ni las facturas ni los documentos acreditativos de los pagos efectuados, ni tampoco el acta formal de recepción de los expedientes analizados, todos esos documentos fueron aportados por la Entidad en trámite de alegaciones.

IV.13.8. Consorcio de la Ciudad de Toledo

El Consorcio de la Ciudad de Toledo ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 1 expediente de contratación, por importe de 609 miles de euros el cual ha sido fiscalizado.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre el expediente contractual fiscalizado en el Tribunal de Cuentas:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	1	100	609	100
Servicios	0	0	0	0
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	100	609	100

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Consorcio ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Consorcio de la Ciudad de Toledo	R	1	609	1	609	0	0
¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.							
² R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.							

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas.

En el PCAP del contrato no se estableció que las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea puedan presentar la documentación acreditativa de su solvencia, lo que implica vulnerar el artículo 25.2 del TRLCAP y una grave restricción a la concurrencia de empresarios a la licitación de este contrato público. Además, se estableció que la valoración de las ofertas económicas se realizaría en función de su proximidad a la baja media resultante de todas las ofertas presentadas a la respectiva licitación. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

El contrato fue adjudicado mediante un procedimiento negociado con invocación del artículo 155 de la LCSP pero sin indicación del supuesto concreto no estando por tanto justificado que se haya utilizado el procedimiento negociado para la adjudicación de este contrato.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

El contrato fue objeto de una modificación que supuso un incremento del precio del 29% y tuvo por objeto diversas actuaciones entre otras, la realización integral de los trabajos de demolición desde

el interior del edificio así como el revestimiento exterior del edificio desde el mismo interior. Estas actuaciones, evidencian la deficiente redacción del proyecto primitivo no respondiendo las mismas a la existencia de causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de elaboración del mencionado proyecto, circunstancias éstas que exige el artículo 202 de la LCSP para que pueda adjudicarse un contrato modificado. Por lo tanto, no se considera justificada la modificación sin que conste la práctica de las actuaciones previstas en la ley para la exigencia de responsabilidades por las deficiencias del mencionado proyecto.

La recepción de las obras se produjo el 11 de enero de 2011.

IV.14. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

En este epígrafe se analiza la contratación celebrada en el ámbito del Ministerio de Sanidad y Política Social (en adelante MSPS), incluyendo tanto la correspondiente a los órganos de contratación del propio Ministerio como, en subepígrafes específicos, la celebrada por los siguientes organismos adscritos a este Departamento Ministerial: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Instituto Nacional de Consumo, Organización Nacional de Trasplantes y Real Patronato sobre Discapacidad.

Debe señalarse que la contratación celebrada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas no se ha incluido en este Anteproyecto de Informe de Fiscalización por cuanto su contratación durante los ejercicios 2008 y 2009 ha constituido el objeto de una Fiscalización específica incluida en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2012, aprobado por el Pleno en su sesión de 26 de enero de 2012.

El MSPS ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 22 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 14.255 miles de euros, tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.14-1.

Este Tribunal ha analizado una muestra para su fiscalización de 21 contratos por un importe de 13.751 miles de euros que representan el 95% de los contratos remitidos y el 96% del importe total, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	1	100	1.749	100
Servicios	18	95	11.004	96
Suministro	2	100	998	100
TOTAL	21	95	13.751	96

Los resultados obtenidos de la Fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el MSPS en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.14-2 que se adjunta, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del MSPS de la obligación legal de remisión de documentación contractual al Tribunal de Cuentas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Ministro	R	3	7.923	3	7.923			1	
Secretaría General de Política Social	R	2	265	1	225				
Subsecretario de Sanidad y Política Social	R	3	1.916	2	1.846		2		
D. G. de RR.HH y Servicios Económico-Presupuestarios	R	114	9.421	16	4.261				
TOTAL		122	19.525	22	14.255		2	1	

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior, el MSPS ha remitido las relaciones certificadas de contratos correspondientes al ejercicio 2009. Asimismo, este Tribunal ha recibido la comunicación de la formalización de un expediente de prórroga de otros contratos anteriores y de dos modificados.

La información remitida por el MSPS relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el BOE, con el siguiente resultado:

- En las relaciones certificadas correspondientes al ejercicio 2009 figuran incluidos 17 expedientes de contratación por un importe total de 1.290 miles de euros, que no fueron publicados en la Plataforma de Contratación el Estado. Asimismo, aparecen publicados en la citada Plataforma de Contratación 4 expedientes, por un total de 206 miles de euros, que no figuran incluidos, como debiera, en las relaciones certificadas remitidas a este Tribunal por el MSPS.
- Además, fueron remitidos a este Tribunal 4 expedientes de contratación por un importe total de 2.360 miles de euros, cuya adjudicación no aparece publicada en el BOE.
- Por último, debe señalarse que el MSPS ha dado adecuado cumplimiento a la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los expedientes de los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superen los importes fijados en el artículo 29 de la LCSP.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPTP) aplicados a los contratos adjudicados por el MSPS en el ejercicio 2009, con objeto de comprobar su grado de adecuación a la legalidad y al principio de eficiencia durante el citado período fiscalizado.

Como resultado del análisis realizado, cabe poner de manifiesto lo siguiente:

- En seis contratos, los PCAP contemplaron la apertura, previa al acto público de licitación, de información y documentación relativas a determinados aspectos técnicos constitutivos de las proposiciones de los licitadores, que eran evaluables como criterios objetivos de adjudicación y cuya ponderación dependía de un juicio de valor.

Esta práctica, ya criticada reiteradamente por este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización, no resultó acorde con el carácter secreto que deben tener las proposiciones hasta el momento mismo de la licitación pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 129.2 de la LCSP, y redundaba en perjuicio del principio de transparencia que debe regir en la contratación administrativa, principio recogido en los artículos 1 y 123 de la LCSP.

Cabe añadir a este respecto que el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, vigente durante parte del período fiscalizado, establece en sus artículos 26 y 27 con total claridad, la necesidad de incluir en sobre independiente la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, así como su apertura en un acto de carácter público.

- En dos contratos, los PCAP no establecieron el sistema de determinación del precio del contrato, por precios unitarios o a tanto alzado, tal y como exige el artículo 75.2 de la LCSP, limitándose a reflejar los criterios tenidos en cuenta por el órgano de contratación para realizar el cálculo del presupuesto de licitación.

- En seis contratos los PCAP no concretaron suficientemente el contenido y la forma o método de valoración de alguno de los criterios objetivos de adjudicación que resultaban aplicables, tal y como resulta exigible en virtud de lo dispuesto en el artículo 134.2 de la LCSP y en cumplimiento de los principios de igualdad y transparencia previstos en los artículos 1 y 123 de la LCSP, que exigen que el contenido y el método de valoración de los criterios de adjudicación sean conocidos con carácter previo por todos los posibles licitadores.

Los supuestos observados más frecuentemente por este Tribunal fueron: la inclusión de las prestaciones complementarias propuestas por los propios licitadores (mejoras indeterminadas), y la insuficiente concreción de los criterios técnicos, cuya puntuación dependía de un juicio de valor.

Como ejemplo de la deficiencia señalada cabe citar un contrato en el que el PCAP incluyó como criterio de adjudicación "*Otras mejoras propuestas por la empresa: 10%*", sin establecer mayor precisión al respecto. En este caso concreto fue admitida una única empresa a la licitación pública, por lo que, en la práctica, la mayor o menor valoración por parte de la Mesa de Contratación del citado criterio no tuvo incidencia en el resultado de la adjudicación, lo que no desvirtúa la incidencia señalada.

- En dos contratos fueron incluidos en los PCAP, y valorados como criterios objetivos de adjudicación, factores o características de las empresas licitadoras. En concreto, en uno de los dos contratos fueron valorados los recursos humanos propios de las empresas licitadoras y, en el otro contrato fue valorado como criterio de adjudicación la disposición por parte de las empresas licitadoras de "*centros de formación*", otorgando además, en este último caso, mayor puntuación a las empresas que tuvieran centros de formación propios con respecto a aquellas otras empresas que sólo tuvieran centros concertados. Estos factores, como reiteradamente ha manifestado este Tribunal de Cuentas, son requisitos de aptitud o de admisión de las empresas, por lo que no deben ser valorados como criterios de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53.2, 67 y 134.1 de la LCSP.

- En dos contratos los PCAP configuraron el precio como el criterio de adjudicación de mayor ponderación o importancia relativa, sin embargo, en la práctica, fue más valorada una mejora

consistente en el incremento de horas de trabajo sin coste ofertadas por los licitadores, que una reducción del precio en cuantía equivalente al precio de dichas horas de trabajo, lo que redundaba en perjuicio de la transparencia del procedimiento.

Como ejemplo cabe citar un contrato en el que precisamente la valoración del criterio relativo a las horas ofertadas por los licitadores sin coste adicional fue determinante en el resultado de la adjudicación, lo que no se ajustó a la ponderación teórica prevista en el PCAP, que otorgaba la máxima ponderación al criterio precio.

Además cabe añadir que, en este caso, la falta de previsión en el PCAP de límites en la valoración del número de horas adicionales ofertadas por las empresas licitadoras supuso que, en la práctica, la empresa que resultó adjudicataria ofertase 4.000 horas sin coste, que fueron valoradas por la Mesa de Contratación con el máximo de los 15 puntos posibles, frente a los 5,62 puntos obtenidos por la segunda empresa mejor puntuada en este criterio, que ofertó 1.500 horas sin coste, pero que presentó una bajada económica mayor en el criterio precio, lo que no resultó proporcionado ni coherente con lo dispuesto en el propio pliego regulador del contrato.

- En un contrato el PCAP incluyó un “umbral de saciedad” o límite en la valoración del criterio precio a partir del cual las bajas económicas ofertadas por las empresas licitadoras no serían valoradas, lo que ya ha sido criticado por este Tribunal en anteriores Informes de Fiscalización porque no resulta acorde con los principios de economía y eficiencia (artículo 1 de la LCSP).

- En tres contratos los PPTP incluyeron indebidamente cláusulas relativas a los criterios objetivos de adjudicación, al plazo de ejecución del contrato, a los requisitos de solvencia de las empresas, etc., cláusulas que deben figurar previstas únicamente en el PCAP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, en relación con el artículo 68.3, ambos del RGLCAP.

- En dos contratos de tramitación anticipada los PCAP establecieron que si el contrato se formalizaba en el ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su ejecución (como de hecho sucedió), la adjudicación del contrato quedaba sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente. La inclusión en el PCAP de esta condición suspensiva de la existencia de crédito, no contemplada, dentro del ámbito de la Administración General del Estado, ni por la LCSP, que en su artículo 94.2 (artículo 110.2 TRLCSP) modifica el régimen jurídico de la tramitación anticipada establecido en el artículo 69.4 del derogado TRLCAP, ni por la LGP, que regula la cuestión en su artículo 47, conlleva un incremento del riesgo de inseguridad jurídica en la contratación, por lo que debería motivarse adecuadamente su necesidad y explicitarse en el PCAP las consecuencias de su aplicación.

- Finalmente, cabe señalar que, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el MSPS durante el ejercicio 2009 no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En relación con el análisis del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, cabe señalar que en cuatro contratos no quedó acreditado en el expediente la publicidad de la adjudicación en el BOE, resultando obligatoria (artículo 138 de la LCSP).

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Este Tribunal ha analizado el cumplimiento por el MSPS de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que se hayan observado retrasos en los pagos analizados.

VI.14.1. Instituto Nacional de Consumo

El Instituto Nacional de Consumo (en adelante INC) ha remitido a este Tribunal de Cuentas la relación certificada de contratos adjudicados en el ejercicio 2009, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
INC	R	7	562	--	--	--	--	--	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

La información contenida en la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009 ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el BOE.

Del análisis comparativo de dicha información cabe concluir que el INC ha cumplido adecuadamente la obligación legal de remisión de la información contractual al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP.

No obstante, cabe señalar que el INC ha integrado su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del Estado (artículo 309 de la LCSP), a partir del ejercicio 2011, por lo que no aparece publicada la información contractual de esta entidad relativa a ejercicios anteriores.

IV.14.2. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en lo sucesivo AESAN, ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 2 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe de 364 miles de euros (IVA excluido), tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.14.2-1.

Este Tribunal ha analizado los dos contratos remitidos, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Servicios	2	100	364	100
TOTAL	2	100	364	100

Los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por este Tribunal de Cuentas de los dos contratos remitidos por la AESAN en el ejercicio 2009 son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.14.2-2 que se adjunta, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte de la AESAN de la obligación legal de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
AESAN	R	53	2.439	2	364	--	--	--	--
¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009). ² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa. (a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.									

Tal y como se observa en el cuadro anterior la AESAN ha remitido la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009. La información remitida por la AESAN relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el BOE, con el siguiente resultado:

- Debe señalarse que la AESAN ha dado adecuado cumplimiento a la obligación, establecida en el artículo 29 de la vigente LCSP, de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los expedientes de sus contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superen los importes fijados en el citado artículo.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPTP) aplicados a los contratos adjudicados por la AESAN en el ejercicio 2009, con objeto de comprobar su grado de adecuación a la legalidad y al principio de eficiencia durante el citado período fiscalizado.

A continuación se señalan las deficiencias relativas a uno de los dos contratos remitidos y fiscalizados:

- El PCAP incluyó como criterios objetivos de adjudicación la presentación por parte de las empresas licitadoras de certificados de garantía de calidad (ISO 9001:2000) y la acreditación de la experiencia en prestación de los servicios, factores que no deben ser valorados como criterios de adjudicación, sino, en su caso, previstos en el PCAP como requisitos de solvencia técnica o de aptitud de las empresas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53.2, 67 y 134.1 de la LCSP.
- El PPTP incluyó indebidamente los criterios de adjudicación, el presupuesto y la duración del contrato, aspectos que deben figurar previstos únicamente en el PCAP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, en relación con el artículo 68.3, ambos del RGLCAP.

Finalmente, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, cabe señalar que:

- La AESAN incluyó en el “modelo de pliego” para la contratación de servicios, la previsión del cumplimiento en la composición de la Mesa de Contratación del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colegiados, recogido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, “*salvo razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas*”.
- Asimismo, en el citado “modelo de pliego” estableció que, en caso de empate entre varias empresas en la puntuación obtenida de la valoración de los criterios objetivos de adjudicación, resultaría aplicable el criterio preferencial de adjudicación en favor de aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, acreditaran en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. Asimismo, si no fuera posible aplicar dicho criterio o si incluso aplicándose persistiera el empate, se valorarían las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa licitadora, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el capítulo IV del Título IV de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el análisis del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos no se han observado incidencias reseñables.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Este Tribunal ha analizado el cumplimiento por la AESAN de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes

documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin que en los casos analizados se hayan observado retrasos en los pagos.

IV.14.3. Instituto de Salud Carlos III

El Instituto de Salud Carlos III ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 12 expedientes de contratación, por importe de 7.889 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 5 expedientes por importe de 3.761 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. Recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	4	50	1.561	41
Suministros	1	33	2.200	72
Otros	0	0	0	0
TOTAL	5	42	3.761	48

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Instituto de Salud Carlos III	R	93	17.520	12	7.889	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En el PCAP del contrato número 1 se estableció que la valoración de las ofertas económicas se realizaría en función de su proximidad a la baja media resultante de todas las ofertas presentadas a la respectiva licitación. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria de los contratos números 1 y 2 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

En los contratos fiscalizados no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En tramite de alegaciones se han remitido documentos contables y certificados de conformidad de los servicios prestados en ejecución de los contratos números 1 y 2 pero no se han remitido las actas de recepción de los servicios prestados.

IV.14.4. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en lo sucesivo AEMPS) ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 10 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 5.201 miles de euros (IVA excluido), tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.14.1-1.

Este Tribunal ha fiscalizado 9 de los 10 contratos remitidos (90%), por un importe total de 4.334 miles de euros, que constituye el 83% de su importe, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Servicios	9	90	4.334	83
TOTAL	9	90	4.334	83

Los resultados obtenidos del análisis realizado por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por la AEMPS en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.14.1-2 que se adjunta se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del AEMPS de la obligación legal de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
AEMPS	R	43	6.733	10	5.201	1	3	5	11

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior la AEMPS ha remitido la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009. La información remitida por la AEMPS relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el BOE, con el siguiente resultado:

- La AEMPS ha dado adecuado cumplimiento a la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los expedientes de sus contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superen los importes fijados en el artículo 29 de la LCSP.

- No obstante, la relación certificada de contratos remitida por la AEMPS incluyó 4 expedientes de contratación, por importe de 197 miles de euros, que no aparecen publicados en la Plataforma de Contratación del Estado, a pesar de resultar ello obligatorio.

- Asimismo, fue publicado en el Perfil de Contratante de la AEMPS un contrato de obras, por importe de 177 miles de euros, que no figura incluido, como debiera, en la relación certificada de contratos remitida a este Tribunal.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPTP) aplicados a los contratos adjudicados por la AEMPS en el ejercicio 2009, con objeto de comprobar su grado de adecuación a la legalidad y al principio de eficiencia durante el citado período fiscalizado.

Como resultado del análisis realizado, cabe poner de manifiesto lo siguiente:

- En cuatro contratos, los PCAP contemplaron la apertura, previa al acto público de licitación, de información y documentación relativas a determinados aspectos técnicos constitutivos de las proposiciones de los licitadores, que eran valorables como criterios objetivos de adjudicación y cuya ponderación dependía de un juicio de valor.

Esta práctica, ya criticada por este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización, no resultó acorde con el carácter secreto que deben tener las proposiciones hasta el momento mismo de la licitación pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 129.2 de la LCSP, y redundaba en perjuicio del principio de transparencia que debe regir en la contratación administrativa, principio recogido en los artículos 1 y 123 de la LCSP.

Cabe añadir a este respecto que el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, vigente durante parte del período fiscalizado, establece en sus artículos 26 y 27 con total claridad, la necesidad de incluir en sobre independiente la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, así como su apertura previa en un acto de carácter público.

- En siete contratos, los PCAP incluyeron como criterios de adjudicación, entre otros, los medios humanos y materiales de las empresas, la presentación de certificados de garantía de calidad (ISO 9001, ISO 9000, etc.), los sistemas de prevención de riesgos laborales o la acreditación de la experiencia del personal asignado a la prestación de los servicios. Estos factores, como reiteradamente ha manifestado este Tribunal de Cuentas, pueden ser valorados, en su caso, en la fase de admisión o aptitud de las empresas licitadoras pero no son susceptibles de valoración como criterios de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53.2, 67 y 134.1 de la LCSP.

- En cuatro contratos, los PCAP no concretaron suficientemente el contenido o la forma o método de valoración de alguno de los criterios objetivos de adjudicación que resultaban aplicables, tal y como resultaba exigible en virtud de lo dispuesto en el artículo 134.2, y 5, así como en los artículos 1 y 123, todos ellos de la LCSP, que recogen los principios de transparencia y objetividad aplicables a la contratación administrativa.

Concretamente, los supuestos observados por este Tribunal fueron: la inclusión de las prestaciones complementarias o mejoras al PPTP propuestas por los propios licitadores (mejoras indeterminadas), y la insuficiente concreción previa de los criterios técnicos valorables.

Como ejemplo de la deficiencia señalada cabe citar un contrato en el que la hoja-resumen que se adjuntó al modelo de pliego incluyó, entre otros criterios de adjudicación, las "*mejoras económicas y sociales*" valorables hasta un máximo de 5 puntos, y el "*programa de organización del servicio*", valorable hasta con 8 puntos, sin establecer mayor concreción al respecto. Por tanto, fue la propia Mesa de Contratación, en el Informe técnico de valoración de las ofertas presentadas, la que detalló, con posterioridad a la apertura de las proposiciones de los licitadores, los aspectos concretos valorables.

Tal y como ha señalado reiteradamente este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización de la contratación, esta insuficiente concreción previa de los PCAP respecto de la forma de valorar los criterios de adjudicación resulta criticable aun cuando su ponderación sea escasa o su valoración no sea determinante en el resultado de la adjudicación, puesto que supone una actuación excesivamente discrecional, que no resulta acorde con los citados principios de transparencia y objetividad.

- En cinco contratos adjudicados mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación (antiguo concurso público), los PCAP establecieron un "umbral de saciedad" en la valoración del criterio precio (del 15%), es decir, un tope máximo para la valoración de las bajadas económicas ofertadas por los licitadores respecto del presupuesto de licitación de los contratos.

En concreto, la fórmula de valoración prevista en los PCAP otorgaba la máxima puntuación en el criterio precio a aquellas ofertas que presentasen un porcentaje de baja económica igual o superior al 15% respecto del precio máximo de licitación. Con el establecimiento de este tipo de límites resulta frecuente que, en la práctica, las empresas licitadoras presenten sus ofertas económicas justo en el límite del citado umbral del 15%, puesto que no va a obtener mejor puntuación una baja económica ofertada por debajo del citado umbral.

Tal y como ha venido señalando este Tribunal de Cuentas en anteriores Informes de Fiscalización, este tipo de “umbrales de saciedad” implican, de facto, una renuncia automática del órgano de contratación a la posibilidad de obtener una mayor economía, sin comprobar antes la viabilidad de las ofertas económicas presentadas por las empresas, lo que no resulta acorde con los principios de economía y eficiencia.

En uno de los contratos acabados de citar, el PCAP incluyó una cláusula que excluía automáticamente del proceso de licitación a aquellas empresas que presentasen ofertas por debajo del citado “umbral” del 15% del presupuesto de licitación, ofertas que serían consideradas “desproporcionadas” y quedarían por ello “excluidas del Procedimiento”.

Esta cláusula resultó contraria a lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP, que exige que en el caso de que una proposición pueda ser considerada desproporcionada o anormal “... *deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma...*”. Cabe añadir que, aunque en este caso concreto ninguna empresa presentó una oferta por debajo del citado 15%, ello no desvirtúa la realidad de la deficiencia señalada.

- En dos contratos los PCAP excluyeron la aplicación de la revisión de precios regulada en los artículos 77 y siguientes de la LCSP, salvo en el caso de que fuera acordada la prórroga, una vez transcurrido el plazo de duración inicial establecido (de dos años), motivando esta exclusión en que fueron tenidas en cuenta en el cálculo del importe máximo del contrato todas las posibles variaciones en los precios que pudieran producirse, lo que no resulta acorde con el artículo 75 de la LCSP, que establece expresamente el momento temporal en el que el órgano de contratación debe estimar el importe del contrato, cuando dispone que debe atender “*al precio general de mercado en el momento de fijar el presupuesto de licitación*”.

- En seis contratos de servicios de tramitación anticipada, los PCAP incluyeron una cláusula en cuya virtud si los contratos se formalizaban en el ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su ejecución (como de hecho sucedió), la adjudicación quedaba sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente. La inclusión en el PCAP de esta condición suspensiva de la existencia de crédito, no contemplada, dentro del ámbito de la Administración General del Estado, ni por la LCSP, que en su artículo 94.2 (artículo 110.2 TRLCSP) modifica el régimen jurídico de la tramitación anticipada establecido en el artículo 69.4 del derogado TRLCAP, ni por la LGP, que regula la cuestión en su artículo 47, conlleva un incremento del riesgo de inseguridad jurídica en la contratación, por lo que debería motivarse adecuadamente su necesidad y explicitarse en el PCAP las consecuencias de su aplicación.

- En un contrato el PPTP incluyó indebidamente los criterios objetivos de adjudicación, que deben figurar previstos únicamente en el PCAP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, en relación con el artículo 68.3, ambos del RGLCAP.

- Finalmente, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, cabe señalar lo siguiente:

La AEMPS incluyó con carácter general, mediante la incorporación a su “modelo de pliego”, la previsión del cumplimiento en la composición de la Mesa de Contratación del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colegiados, recogido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, “*salvo razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas*”, que no lo hicieran posible.

Asimismo, los PCAP establecieron que, en caso de empate entre varias empresas en la puntuación obtenida de la valoración de los criterios objetivos de adjudicación, resultaría aplicable el criterio preferencial de adjudicación en favor de aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, acreditaran en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. Asimismo, si no fuera posible aplicar dicho criterio o si aun aplicándose persistiera el empate se valorarían las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa licitadora, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el análisis del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos no se han observado incidencias reseñables.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Por lo que respecta a la ejecución de los contratos, debe señalarse lo siguiente:

- En un contrato, la revisión de precios aplicada, según lo previsto en el propio PCAP, fue la variación del 85% del IPC correspondiente al ejercicio anterior, es decir, tuvo en cuenta erróneamente el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2008 y el mes de diciembre del año 2009, en el que el IPC fue del 0,8%, en lugar de aplicar la variación del IPC (del 1,8%) referida a los 12 meses anteriores a la fecha de la revisión, que fue la correspondiente al período comprendido entre el mes de noviembre del ejercicio 2009 y el mes de octubre del ejercicio 2010 (artículo 79.3 de la LCSP).
- En un contrato, la AEMPS exigió el reajuste de la garantía definitiva como consecuencia de la revisión de precios prevista en el PCAP. En estos casos el reajuste de las garantías resulta improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.3 de la LCSP, ya que la revisión de precios no tiene el carácter de una modificación del contrato, aunque como resultado de su aplicación se altere su importe.
- Por último, este Tribunal ha analizado el cumplimiento por parte de la AEMPS de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin que en los casos analizados se hayan observado retrasos en los pagos.

IV.15. MINISTERIO DE VIVIENDA

El Ministerio de Vivienda contaba en este ejercicio con un único órgano de contratación, sin que se haya recibido la relación sobre los contratos celebrados. En trámite de alegaciones se remitió la documentación incompleta correspondiente a veinte expedientes de contratación, por lo que no han podido ser objeto de fiscalización en el presente informe ni es posible determinar si dichos expedientes son todos los susceptibles de remisión al Tribunal de Cuentas.

Se remitió al Tribunal de Cuentas un único expediente, un modificado cuyo importe fue de 293 miles de euros. No se ha recibido información ni documentación alguna de la fase de ejecución sobre cesiones de contratos, subcontrataciones, revisiones de precios o indemnizaciones.

El único expediente remitido fue adjudicado por la Ministra, y su objeto es el modificado a unas obras complementarias a las de rehabilitación de las Casas Consistoriales en Las Palmas de Gran Canaria.

El contrato inicial fue formalizado en diciembre de 2001, y las obras complementarias se formalizaron en diciembre de 2006 con un plazo de ejecución de nueve meses. En junio de 2010, durante el trámite de alegaciones al “Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 y 2007 por las entidades sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, se comunicó que se encontraba pendiente de efectuar la certificación final y la revisión de precios, sin aclararse las razones de que, más de un año después de la finalización teórica de las obras, no se hubiera procedido a su recepción.

El contrato complementario, según consta en la documentación remitida, debía haber finalizado en septiembre de 2007, dado que su duración era de 9 meses y el acta de comprobación del replanteo de fecha 26 de diciembre de 2006. Según consta en el Plan de Obras del Modificado nº1 de dicho complementario, las actividades a realizar comenzaron a finales de diciembre de 2006 y algunas acabaron en diciembre de 2007. Según el citado plan de obras, desde diciembre de 2007 hasta julio de 2008 no hubo actividad alguna; sin embargo, no hay constancia de ninguna suspensión de la ejecución para la redacción del modificado, ni respecto a este último consta en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas documento alguno que sea anterior al 14 de octubre de 2008. Si el contrato complementario había finalizado, no ha lugar a modificado; en otro caso, deberían acreditarse las circunstancias que han llevado a este retraso y su base legal. En trámite de alegaciones se comunicó que con fecha 21 de diciembre de 2007 (por lo tanto, antes de que el trámite de alegaciones del informe antes citado se produjera) se había autorizado una paralización temporal parcial de las obras.

En cuanto a la necesidad del modificado, no consta documento específico alguno relativo a la misma. Únicamente, en la propuesta de aprobación de proyecto modificado, de 4 de diciembre de 2008, firmada por la Subdirectora General de la Oficialía Mayor, en párrafo anterior a los puntos a aprobar, se hace referencia en los siguientes términos: "(...) justificado por la necesidad de adaptación al nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002 y del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que el proyecto fue redactado y aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del mismo (...)”.

A este argumento hay que objetar lo siguiente: el Real Decreto 842/2002 establecía que el Reglamento electrotécnico para baja tensión entraría en vigor, con carácter obligatorio, para todas las instalaciones contempladas en su ámbito de aplicación, al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; no obstante, podía aplicarse, voluntariamente, desde la fecha de dicha publicación. Por su parte, el Decreto 161/2006 establece, en su disposición transitoria primera, que “los expedientes sobre las materias reguladas en el presente Decreto iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarán hasta su resolución conforme a la normativa anterior”; la disposición final segunda, por su parte, establecía que el Decreto entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (publicación que se produjo el 17 de noviembre de 2006).

Si se tiene en cuenta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 842/2002, estaba vigente cuando se inició la tramitación del proyecto modificado; respecto al Decreto 161/2006, los expedientes iniciados con anterioridad se deben tramitar conforme a la normativa anterior. En opinión del Tribunal de Cuentas, no cabe alegar como justificación para realizar el modificado la nueva normativa relativa a electrotecnia de baja tensión en calidad de necesidad nueva o

imprevista, ya que existía normativa previa relativa a este área y, de hecho, el contrato principal (las obras complementarias) es de diciembre de 2006, posterior a la publicación del Decreto. El expediente iniciado es anterior a la publicación de Decreto y debería regirse por la normativa previa. Finalmente, desde la fecha de finalización de la ejecución prevista a la aprobación del proyecto modificado transcurrió aproximadamente un año. En cualquier caso, la necesidad no era nueva ni imprevista.

IV.16. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 99 expedientes de contratación, por importe de 147.673 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 35 expedientes por importe de 74.674 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	3	3	31.263	21
Servicios	22	22	29.300	20
Suministros	10	11	14.111	10
Otros	0	0	0	0
TOTAL	35	35	74.674	51

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

Los Órganos de contratación del Ministerio han cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir las preceptivas relaciones certificadas de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
MINISTERIO	R	1.351	1.813.052	99	147.673	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En los PCAP de los contratos números 1 y 2 no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de los medios de acreditación para considerar solvente al licitador. Estas deficiencias afectan a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Además, en ambos pliegos se estableció que la valoración de las ofertas económicas se realizaría en función de su proximidad a la baja media resultante de todas las ofertas presentadas a la respectiva licitación. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos. En estos mismos contratos se estableció que “se consideraran presuntamente desproporcionadas o anormales aquellas ofertas que sean un 10% (en el contrato número 1) y un 15% (en el contrato número 2) inferiores a la media de las ofertas recibidas” en el concurso con varios criterios de adjudicación, la temeridad no puede establecerse en atención a un solo criterio aislado, pues una oferta económica baja puede ser viable teniendo en cuenta lo que oferta el licitador respecto a otros aspectos del contrato (artículo 136 de la LCSP).

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria de los contratos números 1 y 2 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

En los contratos fiscalizados no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

Además, el contrato número 2 fue tramitado a través del procedimiento de urgencia, que implica una reducción de plazos que, especialmente en cuanto al tiempo para presentar ofertas, supone una restricción de la concurrencia de licitadores, por lo que su utilización es permitida por el artículo 96 de la LCSP solamente cuando la necesidad del contrato sea inaplazable o su adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. En este expediente, la urgencia se basa en “*la necesidad de que el servicio objeto del contrato que es la tramitación de expedientes correspondientes a diversos programas de ayudas este vigente a partir del 1 de enero de 2010*”. Habida cuenta de la existencia de un contrato previo con el mismo objeto con una duración hasta el 31 de diciembre de 2009 la urgencia resulta imputable al órgano de contratación ya que hubo tiempo suficiente para haber empezado la tramitación de este contrato de forma ordinaria, no estando por tanto justificado que se haya utilizado el procedimiento de urgencia para la preparación y adjudicación de este contrato.

En los informes de valoración de las ofertas presentadas en los contratos números 1 y 2, aunque figuran algunas explicaciones generales sobre la metodología de la valoración de los criterios de adjudicación de carácter técnico, no constan los motivos concretos por los que se otorgaron a cada uno de los licitadores las puntuaciones, por lo que debe concluirse que las adjudicaciones de estos contratos no están justificadas.

IV.16.1. Universidad Internacional Menéndez Pelayo

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 1 expediente de contratación, por importe de 8.949 miles de euros el cual ha sido fiscalizado.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre el expediente contractual fiscalizado:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. Recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	100	8.949	100
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	100	8.949	100

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
UIMP	R	33	17.520	1	8.949	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

En el PCAP no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de los medios de acreditación para considerar solvente al licitador. Además, no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes a los criterios de adjudicación excepto el criterio económico. Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en el contrato número 1 contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran

adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

No se ha justificado el procedimiento y de los criterios de adjudicación y además, el informe de valoración de las ofertas presentadas no tiene fecha.

IV.16.2. Instituto de Astrofísica de Canarias

El Instituto de Astrofísica de Canarias ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 1 expediente de contratación, por importe de 546 miles de euros, el cual ha sido fiscalizado.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre el expediente contractual fiscalizado:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	0	0	0	0
Suministros	1	100	546	100
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	100	546	100

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Instituto de Astrofísica de Canarias	R	55	3.712	1	546	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

En el PCAP del contrato aunque se indicaron los medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en tales medios para ser consideradas solventes. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación. Además, no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes a los criterios de adjudicación excepto el criterio económico. Estas actuaciones no son conformes con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública ya que es el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria del contrato en la que se determinó la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

Se ha remitido en trámite de alegaciones el acta de recepción del contrato de fecha 5 de julio de 2012.

IV.16.3. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 13 expedientes de contratación, por importe de 14.148 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 6 expedientes por importe de 5.647 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. Recibidos
Obras	1	50	2.427	77
Servicios	5	63	3.220	66
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	6	46	5.647	40

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas	R	225	1.591.182	13	14.148	0	0
¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas. ² R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.							

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

El PPT del contrato número 1 no tiene fecha.

En los PCAP de los contratos números 1 y 2 no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de los medios de acreditación para considerar solvente al licitador. Estas deficiencias afectan a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

Dentro de los criterios objetivos de valoración establecidos en el PCAP del contrato número 1 se estableció que se valorarían, por una parte, la “Oferta económica”, por otra la “Oferta técnica”. Respecto de la “Oferta económica” se estableció que la valoración de las ofertas económicas se realizaría en función de su proximidad a la baja media resultante de todas las ofertas presentadas a la respectiva licitación. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos. Respecto de la “Oferta técnica”, en el criterio “Jefe de obra”, se valoraba la titulación, su participación en obras similares, estos aspectos no deben valorarse en la adjudicación del contrato sino en la fase previa de admisión a la licitación (artículo 67 de la LCSP), ya que deben ser cumplidos por todos los licitadores para ser admitidos a la licitación.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria de los contratos números 1 y 2 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos

excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

En el contrato número 2 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del organismo, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

No ha sido posible realizar la fiscalización de la ejecución de los contratos números 1 y 2 pues a pesar de que el plazo de ejecución de este contrato ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

IV.16.4. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 4 expedientes de contratación, por importe de 4.417 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 2 expedientes por importe de 1.645 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. Recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	50	995	85
Suministros	1	50	650	20
Otros	0	0	0	0
TOTAL	2	50	1.645	37

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria	R	38	5.576	4	4.417	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

En el PCAP del contrato número 1 se exigió a todos los licitadores que acreditaran estar en posesión del requisito de la clasificación, cuando este requisito no es exigible a los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea, por lo que se restringió indebidamente la concurrencia respecto a esos licitadores. Respecto de los criterios de valoración, la aplicación de la fórmula establecida para valorar la proposición económica arroja como resultado diferencias muy pequeñas de puntuación ante ofertas económicas sustancialmente diferentes. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en el contrato número 1 contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

En el contrato número 1 se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del Ministerio, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio. Además, no se ha justificado el procedimiento y de los criterios de adjudicación elegidos.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En trámite de alegaciones se ha remitido únicamente como documentación de ejecución del contrato número 1 un certificado de conformidad con los servicios prestados correspondiente al mes de diciembre de 2010 pero no se ha aportado el acta de recepción que acredite la completa y correcta ejecución del servicio contratado.

IV.16.5. Instituto Español de Oceanografía

El Instituto Español de Oceanografía ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 3 expedientes de contratación, por importe de 3.595 miles de euros, de los cuales se ha fiscalizado 1 expediente por importe de 1.270 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre el expediente contractual fiscalizado:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. Recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	33	1.270	35
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	33	1.270	35

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
IEO	C			3	3.595	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.

² R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

El PPT del contrato no tiene fecha.

En el PCAP del contrato fiscalizado se exigió a todos los licitadores que acreditaran estar en posesión del requisito de la clasificación, cuando este requisito no es exigible a los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea, por lo que se restringió indebidamente la concurrencia respecto a esos licitadores. Además, se estableció que la valoración de las ofertas económicas se realizaría en función de su proximidad a la baja media resultante de todas las ofertas presentadas a la respectiva licitación. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en el contrato número 1 contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria del contrato en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP y aunque se adjunta informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales, requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios, sin embargo, este informe es meramente formal, pues se limita a declarar la insuficiencia de medios personales y materiales del organismo, sin justificar en modo alguno la existencia de la misma y sin hacer referencia a la conveniencia de la no ampliación de los mismos, por lo que no ha quedado acreditada la necesidad de contratar dicho servicio. Además, no se justifica la elección del procedimiento y forma de adjudicación.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En cuanto a la fiscalización de la ejecución del contrato, se han remitido los documentos contables y los certificados de conformidad de los meses de enero a diciembre de 2009, plazo de duración del contrato, pero no se ha aportado el acta de recepción de los servicios prestados.

IV.16.6. Instituto Geológico y Minero de España

El Instituto Geológico y Minero de España ha remitido a este Tribunal para su fiscalización 10 expedientes de contratación, por importe de 3.129 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 1 expediente por importe de 249 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre el expediente contractual fiscalizado:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. Recibidos
Obras	0	0	0	0
Servicios	1	10	249	8
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	10	249	8

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
IGME	R	60	5.227	10	3.129	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

En el PCAP no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de los medios de acreditación para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación. Respecto de los criterios de valoración, no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondiente al criterio de adjudicación “oferta técnica”. Esta actuación no es conforme con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública, ya que es en el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante

En lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en el contrato número 1 contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

No se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

No ha sido posible la fiscalización de la ejecución del contrato pues a pesar de que el plazo de ejecución del mismo ha concluido, no se ha remitido a este Tribunal la documentación acreditativa de su ejecución.

IV.16.7. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 25 expedientes de contratación, por importe de 60.185 miles de euros, de los cuales se han fiscalizado 11 expedientes por importe de 28.888 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Obras	1	25	26.832	54
Servicios	10	56	2.056	22
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	11	44	28.888	48

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
CSIC	R	741	142.948	25	60.185	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
²R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

De las comprobaciones realizadas se han observado las deficiencias que se exponen a continuación:

En los PCAP de los contratos números 1 y 2 no se indicaron los medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Unión Europea.,

En el PCAP del contrato número 1 se estableció que la valoración de las ofertas económicas se realizaría en función de su proximidad a la baja media resultante de todas las ofertas presentadas a la respectiva licitación. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos. Además, no se especificó la forma de valoración ni de asignación de las puntuaciones correspondientes a los criterios de adjudicación utilizados excepto el criterio económico en el contrato número 1. Esta actuación no es conforme con los principios de objetividad, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública, ya que es en el pliego donde establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que sean conocidos por las empresas licitantes a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las necesidades reales de la Administración contratante.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria de los contratos números 1 y 2 en la que se determinaron la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP.

En los contratos fiscalizados no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LCSP.

En los informes de valoración de las ofertas presentadas en los contratos números 1 y 2 aunque figuran algunas explicaciones generales sobre la metodología de la valoración de los criterios de adjudicación de carácter técnico, no constan los motivos concretos por los que se otorgaron a cada uno de los licitadores las puntuaciones, por lo que debe concluirse que las adjudicaciones de estos contratos no están justificadas.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

En trámite de alegaciones se ha remitido la documentación acreditativa de la ejecución de los contratos fiscalizados. El contrato número 2 se encuentra en fase de ejecución al haber sido prorrogado de conformidad con lo dispuesto en el PCAP. respecto al contrato número 2 se acredita la resolución del mismo por causa de interés público derivado de la coyuntura económica en fecha 25 de noviembre de 2010.

IV.16.8. Consorcio para el Equipamiento y la Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

El Consorcio para el Equipamiento y la Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 2 expedientes de contratación, por importe de 2.188 miles de euros, de los cuales se ha fiscalizado 1 expediente por importe de 2.004 miles de euros.

En el cuadro adjunto se expone la información sobre los expedientes contractuales fiscalizados:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	%/ S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. Recibidos
Obras	1	100	2.004	100
Servicios	0	0	0	0
Suministros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	50	2.004	92

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

El Organismo ha cumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al remitir la preceptiva relación certificada de contratos celebrados.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al cumplimiento de la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas:

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS							
Identificación	Relaciones o Certificados			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹	
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe		
Consorcio para el Equipamiento y la Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc	R	5	2.408	2	2.188	0	0

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas.
² R: La entidad ha remitido relación de contratos; C: ha remitido certificación negativa.

b) Análisis de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los diferentes tipos de contratos y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

En el PCAP no se establecieron los mínimos que debían alcanzarse en cada uno de los medios de acreditación para considerar solvente al licitador. Esta deficiencia afecta a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación. Respecto de los criterios de valoración, la aplicación de la fórmula establecida para valorar la proposición económica arroja como resultado diferencias muy pequeñas de puntuación ante ofertas económicas sustancialmente diferentes. Esta forma de valoración es contraria al principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos.

Por último, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el Ministerio no estableció en el contrato número 1 contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran previstas, con carácter potestativo en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos.

La documentación preparatoria del contrato en la que se determinó la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas está redactada en unos términos excesivamente genéricos, no correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido del artículo 22 de la LCSP. Además, no se ha justificado el procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas.

La documentación de ejecución del contrato ha sido remitida en trámite de alegaciones, el contrato fue recepcionado de conformidad en enero de 2011.

IV.17. MINISTERIO DE IGUALDAD

En este epígrafe se analiza la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 en el ámbito del Ministerio de Igualdad, (en lo sucesivo MIGD). Debe señalarse que el análisis de la contratación celebrada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, órgano directivo del Departamento, y por los organismos autónomos entonces adscritos al mismo, Instituto de la Mujer e Instituto de la Juventud, no se ha incluido en este Anteproyecto de Informe de Fiscalización, por cuanto sus respectivas contrataciones durante los ejercicios 2008 y 2009 han constituido los objetos específicos de el “Informe de Fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Juventud” y del “Informe de Fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Mujer”, aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 28 de abril 2011 y de 30 de junio de 2011, respectivamente.

Por el contrario, sí se reflejan en el subepígrafe específico los resultados de la fiscalización de la contratación del Consejo de la Juventud de España, organismo autónomo también adscrito durante el ejercicio 2009 a este Departamento Ministerial.

El MIGD ha remitido a este Tribunal de Cuentas para su fiscalización 5 contratos correspondientes al ejercicio 2009, por un importe total de 3.663 miles de euros, tal y como se refleja en el cuadro que se adjunta como anexo IV.17-1.

Este Tribunal ha fiscalizado la totalidad de los contratos remitidos por el MIGD, conforme se expone en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES FISCALIZADOS				
Modalidad	Número	% S./ exp. recibidos	Importe	% S./ importe exp. recibidos
Servicios	5	100	3.663	100
TOTAL	5	100	3.663	100

Los resultados obtenidos de análisis realizado por este Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por el MIGD en el ejercicio 2009, son expuestos a continuación.

a) Análisis del cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas

En el siguiente cuadro y en el anexo IV.17-2 que se adjunta, se reflejan los datos relativos al cumplimiento por parte del MIGD de la obligación legal de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
Secretaría Estado Igualdad	--	--	--	1	1.091	--	--	--	1
Subsecretaría	R	12	1.796	4	2.572	--	--	--	--
Director General para la Igualdad en el Empleo	R	8	731	--	--	--	--	--	--
TOTAL		20	2.527	5	3.663	--	--	--	1

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa. (a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

Tal y como se observa en el cuadro anterior, el MIGD ha remitido la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009. La información remitida por el MIGD relativa a los contratos correspondientes al ejercicio fiscalizado ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el BOE.

- Del análisis realizado debe señalarse que el MIGD ha dado adecuado cumplimiento a la obligación, establecida en el artículo 29 de la LCSP, de remitir al Tribunal de Cuentas los extractos de los expedientes de los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y administrativos especiales, que superen los importes fijados en el citado artículo.

- En la relación certificada remitida a este Tribunal constan incluidos 16 contratos que, sin embargo, no fueron publicados en la Plataforma de Contratación del Estado como debiera.

b) Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPTP) aplicados a los contratos adjudicados por el MIGD en el ejercicio 2009, con objeto de comprobar su grado de adecuación a la legalidad y al principio de eficiencia durante el citado período fiscalizado.

Como resultado del análisis realizado, cabe poner de manifiesto lo siguiente:

- En tres contratos, los PCAP contemplaron la apertura, previa al acto público de licitación, de información y documentación relativas a determinados aspectos técnicos constitutivos de las proposiciones de los licitadores, que eran evaluables como criterios objetivos de adjudicación y cuya ponderación dependía de un juicio de valor.

Esta práctica no resultó acorde con el carácter secreto que deben tener las proposiciones hasta el momento mismo de la licitación pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 129.2 de la LCSP, y redundaba en perjuicio del principio de transparencia que debe regir en la contratación administrativa, principio recogido en los artículos 1 y 123 de la LCSP.

Cabe añadir a este respecto que el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, vigente durante parte del período fiscalizado, establece en sus artículos 26 y 27 con total claridad, la necesidad de incluir en sobre independiente la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, así como su apertura en un acto de carácter público.

- En dos contratos, los PCAP no concretaron suficientemente el contenido y la forma o método de valoración de alguno de los criterios objetivos de adjudicación que resultaban aplicables, en perjuicio de la objetividad y transparencia establecidos en los artículos 1 y 123 de la LCSP, que exigen que el contenido y el método de valoración de los criterios de adjudicación sean conocidos con carácter previo por todos los posibles licitadores.

Como ejemplo de esta deficiencia cabe citar el contrato, cuyo PCAP incluyó como criterios de adjudicación, entre otros, "*el programa de trabajo*", valorado hasta un máximo de 20 puntos, y "*otras mejoras*", valorado hasta un máximo de 5 puntos, sin establecer en el pliego mayor precisión al respecto.

- Además, en el contrato acabado de citar, fue incluido en el PCAP y valorado indebidamente como criterio objetivo de adjudicación, la acreditación por parte de las empresas licitadoras de la certificación UNE-EN ISO 9002, siendo valorada con cinco puntos, pese a tratarse de características de las empresas licitadoras que no deben ser valoradas como criterio de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53.2, 67 y 134.1 de la LCSP.

- En un contrato los PPTP incluyeron indebidamente cláusulas relativas a la duración del contrato, el presupuesto y la forma de pago que deben figurar previstas únicamente en el PCAP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, en relación con el artículo 68.3, ambos del RGLCAP.

- En un contrato, con un plazo de ejecución de 24 meses, el PCAP estableció la aplicación de la revisión de precios sólo en caso de prórroga del contrato, de acuerdo con el IPC aplicable. Esta regulación de la revisión de precios en el pliego no resultó acorde con lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la LCSP, puesto que ni quedó constancia en el expediente de la motivación de la exclusión de la revisión de precios en el segundo ejercicio de duración del contrato, ni se limitó la revisión de precios al 85% del IPC, tal y como establece el artículo 78 de la LCSP.

- Finalmente, cabe señalar que, en lo que se refiere al análisis de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, el MIGD durante el ejercicio 2009 no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ni tampoco estableció, con este mismo fin, la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos respecto de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, posibilidades ambas que figuran

previstas, con carácter potestativo para el organismo de que se trate, en los artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007.

En este ámbito, únicamente cabe citar un contrato, cuyo objeto fue el servicio de limpieza de las instalaciones del MIGD, en el que el PCAP incluyó la siguiente condición en el contrato: *“En desarrollo de lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el contratista se obliga a contar como mínimo con un 50% de mujeres entre el personal que vaya a ejecutar el contrato, sin que afecte a los trabajadores que ya pertenezcan a la empresa”*.

La citada condición del pliego resultó innecesaria e inadecuada, al tratarse de un sector de la actividad empresarial, como es el de la limpieza, en el que las mujeres no están subrepresentadas, sino más bien al contrario, puesto que existe un alto nivel de concentración del trabajo femenino en este sector de servicios. Además, resulta llamativo que, sin embargo, en otros ámbitos de actividad en los que las mujeres sí están subrepresentadas no se hayan incluido en los pliegos de los contratos este tipo de condiciones sociales de ejecución.

c) Análisis del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos

En el análisis del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, no se han apreciado incidencias reseñables.

d) Análisis de la ejecución de los contratos y de las incidencias producidas

Este Tribunal ha analizado el cumplimiento por el MIGD de lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato, sin que en ninguno de los pagos analizados se hayan observado retrasos.

IV.17.1. Consejo de la Juventud de España

El Consejo de la Juventud de España (en adelante CJE) ha remitido a este Tribunal de Cuentas la relación certificada de contratos adjudicados en el ejercicio 2009, tal y como se refleja en siguiente cuadro:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación del órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones¹			
	R/C²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
CJE	R	1	31	--	--	--	--	--	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

La información contenida en la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009 ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el BOE.

Del análisis comparativo de dicha información cabe concluir que el CJE ha cumplido adecuadamente la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas.

IV.17.2. Real Patronato Sobre Discapacidad

El Real Patronato sobre Discapacidad (en adelante RPD) ha remitido a este Tribunal de Cuentas la relación certificada de contratos adjudicados en el ejercicio 2009, tal y como se refleja en el siguiente cuadro y en el anexo IV.14.5-1 que se adjunta:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS									
Identificación órgano de contratación	Relaciones o Certificaciones negativas			Expedientes (art. 29 LCSP)		Comunicaciones ¹			
	R/C ²	Número	Importe	Número	Importe	a	b	c	d
RPD	R	1	115	--	--	--	--	--	--

¹ Se refiere a las incidencias señaladas en los Anexos III y IV de la Instrucción de Contratación del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2009 (BOE de 11 de abril de 2009).

² Se señala con una R si la entidad ha remitido relación de contratos; y con una C si ha remitido certificación negativa.

(a) Finalización del contrato; (b) Modificación de contrato; (c) Plazos de ejecución, ampliación y prórrogas; (d) Cesión, subcontratación, revisión de precios, indemnizaciones, suspensión y extinción anormal el contrato.

La información contenida en la relación certificada de contratos correspondientes al ejercicio 2009 ha sido contrastada con otros antecedentes que obran a disposición de este Tribunal, en particular, en el Perfil de Contratante, publicado tanto en su propia sede electrónica como en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el BOE.

Del análisis comparativo de dicha información cabe concluir que el RPD ha cumplido adecuadamente la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP.

V. CONCLUSIONES.

Se exponen a continuación las conclusiones más significativas deducidas de los resultados obtenidos en la fiscalización.

V.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Primera.- Las relaciones de contratos remitidas al Tribunal de Cuentas presentan, habitualmente, significativas omisiones, así como numerosas deficiencias en su contenido, bien porque no incluyen la información establecida en la *“Instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las entidades del Sector público estatal y autonómico”*, bien porque la información es incompleta o enviada fuera de plazo.

Especialmente, son significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución de los contratos, así como sobre la finalización de los mismos.

Segunda.- Los expedientes de contratación remitidos al Tribunal de Cuentas son numéricamente inferiores a los que incluyen las relaciones de contratos y a los que constan en la Plataforma de Contratación del Estado o han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado. Ello supone que los órganos de contratación no han cumplido correctamente con las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público; y, además, implica una limitación al alcance de la fiscalización, al realizarse la misma sobre un universo inferior al que correspondería si se hubiera dispuesto de la totalidad de los expedientes a remitir, limitación que también afecta a los expedientes remitidos a los que falta documentación.

Tercera.- Se ha comprobado que diversos organismos no han publicado los contratos en el Perfil del Contratante, tal y como resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto en el artículo 138 de la ley de Contratos del Sector Público.

V.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- La inclusión en los pliegos de prescripciones técnicas de declaraciones o cláusulas que deberían figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, conforme a lo establecido en los artículos 67.2 y 68.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Segunda.- La omisión en los Pliegos de:

1. El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación que debe abonar el adjudicatario, conforme establece el artículo 67.2.g del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
2. El plazo de garantía, sin que se justifique debidamente en el expediente, como requiere el 205.3 de la LCSP.
3. Cláusulas sociales que determinen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de empresas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, cuenten en su plantilla con un número de trabajadores discapacitados mayor del 2%, o estén dedicadas específicamente a la inserción de personas en situación de exclusión social, siempre que estas proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones con aquellas ofertas que sean más ventajosas, o a favor de entidades sin ánimo de lucro (disposición adicional 6ª de la Ley de Contratos del Sector Público).
4. La preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
5. Declaraciones sobre el modo concreto en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

Tercera.- La improcedencia de la revisión de precios, sin que conste en el expediente una resolución motivada del órgano de contratación en la que haga constar las razones de tal decisión, como requiere el artículo 77.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Cuarta.- En diversos contratos de servicios continuados se omite en el PCAP la mención del sistema de determinación del precio del contrato, con infracción de lo dispuesto en el artículo 67 RGLCAP.

Quinta.- La concreción de los criterios objetivos de adjudicación presenta numerosas deficiencias, destacando su falta de precisión, tanto en su contenido como en las fórmulas o métodos de valoración. En este sentido algunos pliegos prevén, entre estos criterios, las “mejoras” presentadas por los licitadores, sin precisar su contenido y en qué condiciones queda autorizada su presentación, lo que exige que la Mesa de Contratación tenga que concretar su valoración en un momento posterior a la apertura de las proposiciones de los licitadores. Se valoran, como criterios de adjudicación, factores o requisitos de solvencia técnica, cuando dichos elementos deben valorarse en la fase previa de admisión a la licitación, de acuerdo con los artículos 65 y siguientes de la LCSP.

Sexta.- Se aprecia, frecuentemente, la vulneración del carácter secreto de las proposiciones, previsto en el artículo 129.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto.

Séptima.- La no inclusión, en los contratos adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad de los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas, como requiere el artículo 160 de la Ley de Contratos del Sector Público y en numerosos casos las Entidades no han negociado con las empresas invitadas, limitándose a evaluarlas, a través del correspondiente informe técnico de valoración, infringiendo el artículo 162 de la Ley de Contratos del sector Público.

Octava.- La utilización de pliegos-tipo de cláusulas administrativas particulares, sin que los correspondientes anexos contengan las adaptaciones necesarias a las circunstancias específicas de cada contrato.

Novena.- La utilización, en diversos casos, del procedimiento de emergencia, que, por su carácter excepcional, que debe limitarse estrictamente a los supuestos contemplados en el artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público, concretados en que la Administración contratante tenga necesidad de actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

Décima.- La justificación del trámite de urgencia, exigida por el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público, no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas.

V.3. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LAS FASES DE PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

Primera.- Las Entidades aportan, en algunos casos, como certificado de existencia de crédito el documento contable de retención de crédito, cuando ambos documentos difieren en su naturaleza.

El artículo 93.3 de la LCSP preceptúa que se ha de incorporar al expediente de contratación el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, sin que el documento contable referido pueda sustituir al documento administrativo previo de existencia de crédito.

Segunda.- Los informes sobre la insuficiencia de medios personales y materiales se limitan a señalar que las Entidades no disponen de medios suficientes para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del contrato, sin que en ellos se justifique debidamente dicha insuficiencia. No se justifica adecuadamente la necesidad del objeto de la contratación.

Tercera.- No consta, en determinados supuestos, la constitución de un comité de expertos, como exige el art. 134.2 de la LCSP, para la valoración de criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Cuarta.- La sustitución de los informes técnicos solicitados por el órgano de contratación previamente a la adjudicación por un cuadro resumen de puntuaciones (artículo 144.1 de la Ley de Contratos del Sector Público), así como la sustitución de los informes de la asesoría jurídica por una diligencia en la que se hace constar que los expedientes han sido informados favorablemente.

Quinta.- La carencia de los documentos acreditativos de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de la Unión Europea de la adjudicación de contratos, en los casos en que dicha publicidad resulta preceptiva (artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público).

Sexta.- Las garantías no se constituyen a favor del órgano de contratación (como señala el artículo 83 de la Ley de Contratos del Sector Público). De otro lado, las garantías definitivas se constituyen a favor de la propia Entidad en lugar de realizarse a favor del órgano de contratación, como requiere el artículo 65.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos las Administraciones Públicas.

Séptima.- La omisión, en el documento de formalización del contrato, de alguno de los requisitos y obligaciones establecidos por el artículo 71 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

V.4.- CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y DE LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS

Primera.- Las prórrogas previstas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en algún caso, exceden del plazo legalmente permitido (artículo 279 de la LCSP).

Segunda.- En algunos supuestos, no consta la realización total del contrato a satisfacción de la Administración ni las actas formales de recepción del objeto de los contratos que, a veces se sustituyen por recepciones parciales o provisionales.

Tercera.- Los expedientes de contratación de obras reflejan la excesiva frecuencia con la que, en este tipo de contratos, se producen incidencias durante su ejecución que conllevan incrementos de costes y de plazos de ejecución y que, en muchas ocasiones, pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales, que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas (artículo 202.1 de la Ley de Contratos del Sector Público).

Cuarta.- Las entidades fiscalizadas han cumplido adecuadamente lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece la obligación de abonar el precio del

contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato.

VI. RECOMENDACIONES.

A tenor de los resultados obtenidos en la fiscalización sobre la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las Entidades del sector público estatal sometidas a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, se considera oportuno formular las siguientes recomendaciones:

VI.1. EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE REMISIÓN DE CONTRATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Primera.- Adoptar las medidas para que el envío al Tribunal de Cuentas, tanto de las relaciones anuales de los contratos celebrados como de los expedientes de contratación e incidencias en su ejecución, se efectúen en los términos y plazos señalados en la normativa reguladora, siguiendo el modelo previsto en la Instrucción General de Contratación del Tribunal de Cuentas y acompañadas de la documentación que para cada caso prevé la propia Instrucción.

VI.2. EN RELACION CON LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- Revisar los diversos tipos de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los modelos de documentos de formalización de los contratos, evitando la utilización de pliegos genéricos aplicables a contratos de naturaleza diversa.

Segunda.- Incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas y los documentos de formalización de los contratos de los requisitos y prescripciones señalados en los artículos 67, 68, 71 y 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Tercera.- Debería aplicarse separadamente el método de puntuación de cada criterio de adjudicación y la fórmula de ponderación conjunta de los criterios, evitando en todo caso la utilización de métodos o fórmulas que alteren la ponderación que refleja el pliego

Cuarta.- Fijar los mecanismos que reduzcan la incidencia de la baja en las ofertas (sin perjuicio de los adecuados límites en caso de temeridad).

Quinta.- Extremar las medidas para que la ejecución del contrato se ajuste a lo pactado, en especial respecto al cumplimiento del plazo de duración y de las prórrogas.

VI.3. EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LAS FASES DE PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

Primera.- Sería conveniente que se justificara debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuentan las Entidades para cubrir las necesidades objeto de contratación.

Segunda Incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas.

Tercera.- Procurar que los informes técnicos de valoración de las ofertas de los licitadores sean lo suficientemente explicativos para poder apreciar la corrección de las puntuaciones otorgadas.

Cuarta.- Señalar con precisión en los anuncios de la licitación en los Boletines Oficiales el importe máximo de los gastos de publicidad a asumir por el adjudicatario, para que sean un fiel reflejo de la información contenida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, del que son una síntesis.

Quinta.- Sería aconsejable que los órganos de contratación determinaran con la máxima precisión los criterios de adjudicación de los contratos y los métodos y fórmulas para su valoración. A estos efectos deberían expresarse y aplicarse separadamente el método o fórmula de valoración de cada uno de los criterios objetivos de adjudicación y la fórmula de valoración conjunta de los criterios, evitando en todo caso la utilización de métodos o fórmulas que en la práctica alteran la ponderación que formalmente se refleja en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

VI.4. EN RELACIÓN CON LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

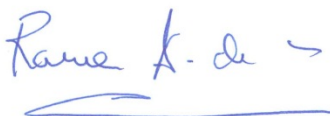
Primera.- Justificar debidamente las necesidades o las causas imprevistas que originan las modificaciones contractuales.

Segunda.- Llevar a cabo un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos, haciendo efectivas las garantías en caso de incumplimiento y, en su caso, la imposición de penalidades.

Tercera.- Adoptar la medidas necesarias para el más riguroso cumplimiento de los plazos establecidos para la certificación o recepción de los contratos y, posteriormente, para su pago, máxime teniendo en cuenta la paulatina reducción hasta 30 días del plazo máximo de que dispondrá la Administración, a partir del 1 de enero de 2013, para abonar el precio de los contratos, según establece el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con su disposición transitoria octava, añadida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Madrid, 20 de diciembre de 2012

EL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, reading "Ramón Á. de Miranda García", with a horizontal line underneath.

Ramón Álvarez de Miranda García

ANEXOS

IV.1. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	27	1.195	14	1	25	695	58
	Procedimiento negociado sin publicidad	3	19	4.629	55	2	67	1805	39
	Contratación centralizada	1	7	162	2				
	TOTAL	8	53	5.986	71	3	38	2500	42
Suministro	Abierto criterio precio								
	Procedimiento negociado sin publicidad	4	27	1.860	22	1	25	561	30
	Contratación centralizada	1	7	161	2				
	TOTAL	5	34	2.021	24	1	20	561	28
Colaboración entre el sector público y el sector privado	Abierto criterio precio								
	Contratación centralizada	2	13	450	5	1	50	250	56
	TOTAL	2	13	450	5	1	50	250	56
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	4	27	1.195	14	3	38	2500	42
	Total procedimiento negociado sin publicidad	9	60	6.939	82	1	20	561	28
	Total contratación centralizada	2	13	323	4	1	50	250	56
	TOTAL	15	100	8.457	100	5	33	3.311	39

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
401	80.192
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
114	10.556

IV.1.1. INSTITUTO CERVANTES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	2	100	2.454	100	2	100	2.454	100
	TOTAL	2	40	2.454	61,67	2	40	2.454	61,67
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	3	100	1.525	100	3	100	1.525	100
	TOTAL	3	60	1.525	38,33	3	60	1.525	38,33
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Abierto criterios múltiples	3	60	1.525	38,33	3	60	1.525	38,33
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	2	40	2.454	61,67	2	40	2.454	61,67
	TOTAL	5	100	3.979	100	5	100	3.979	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
91	12.635
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.1.2. AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	27	1.195	14	1	25	695	58
	Procedimiento negociado sin publicidad	3	19	4.629	55	2	67	1805	39
	Contratación centralizada	1	7	162	2				
	TOTAL	8	53	5.986	71	3	38	2500	42
Suministro	Abierto criterio precio								
	Procedimiento negociado sin publicidad	4	27	1.860	22	1	25	561	30
	Contratación centralizada	1	7	161	2				
	TOTAL	5	34	2.021	24	1	20	561	28
Colaboración entre el sector público y el sector privado	Abierto criterio precio								
	Contratación centralizada	2	13	450	5	1	50	250	56
	TOTAL	2	13	450	5	1	50	250	56
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	4	27	1.195	14	3	38	2500	42
	Total procedimiento negociado sin publicidad	9	60	6.939	82	1	20	561	28
	Total contratación centralizada	2	13	323	4	1	50	250	56
	TOTAL	15	100	8.457	100	5	33	3.311	39

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
202	47.756
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
114	10.556

IV.2. MINISTERIO DE JUSTICIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Restringido criterio precio	1	2	700					
	Abierto criterios múltiples	4	7	14.474	10	2	3	10.302	7
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	3	2.138	2				
	TOTAL	7	12	17.312	12	2	3	10.302	7
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	18	31	64.730	47	10	17	27.756	20
	Procedimiento negociado sin publicidad	29	49	51.678	37	13	22	21.270	15
	TOTAL	47	80	116.408	84	23	39	49.026	35
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	2	1.431	1	1	2	1.431	1
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	2	313					
	Contratación centralizada	3	4	3.533	3				
	TOTAL	5	8	5.277	4	1	2	1.431	1

IV.2. MINISTERIO DE JUSTICIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total restringido criterio precio	1	2	700					
	Total abierto criterios múltiples	23	39	80.635	58	13	22	39.489	29
	Total procedimiento negociado sin publicidad	32	54	54.129	39	13	22	21.270	15
	Total contratación centralizada	3	5	3.533	3				
	TOTAL	59	100	138.997	100	26	44	60.759	44

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
157	84.868
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.2.1. MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	2	67	343	31	1	50	28	8
	Contratación centralizada (CC)	1	33	773	69	1	100	773	100
	Total	3	16	1.116	94	2	67	801	72
Suministro	Abierto criterio precio (AP)								
	Contratación centralizada (CC)	16	100	74	100	1	6	22	30
	Total	16	84	74	6	1	6	22	30
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	2	11	343	29	1	50	28	8
	Total contratación centralizada (CC)	17	89	847	71	2	12	795	94
	Total	19	100	1.190	100	3	16	823	69

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
50	1.825
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
5	761

IV.2.2. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	3	37,5	1.169	89,03	3	37,5	1.169	89,03
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	5	62,5	145	11,04	5	62,5	145	11,04
	TOTAL	8	100	1.313	100	8	100	1.313	100
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Abierto criterios múltiples	3	37,5	1.169	89,03	3	37,5	1.169	89,03
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	5	62,5	145	11,04	5	62,5	145	11,04
	TOTAL	8	100	1.313	100	8	100	1.313	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
21	2.071
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.3. MINISTERIO DE DEFENSA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	1		1.250					
	Abierto criterios múltiples	6	1	9.145	1	3		4.189	
	Procedimiento negociado con publicidad	5	1	4.823		2		1.285	
	Procedimiento negociado sin publicidad	51	7	90.218	7	17	2	27.405	2
	TOTAL	63	9	105.436	8	22	3	32.879	3
Servicios	Abierto criterio precio	6	1	1.569		2		951	
	Restringido criterio precio	1		315					
	Abierto criterios múltiples	120	17	206.466	17	51	7	69.505	6
	Procedimiento negociado con publicidad	2		1.482					
	Procedimiento negociado sin publicidad	255	36	528.471	42	77	11	214.521	17
	TOTAL	384	54	738.303	59	130	18	284.777	23
Suministro	Abierto criterio precio	3		5.780		1		1.230	
	Abierto criterios múltiples	60	8	98.908	8	18	2	41.670	3
	Procedimiento negociado con publicidad	1		1.464					
	Procedimiento negociado sin publicidad	190	27	296.284	24	72	11	89.555	7
	Contratación centralizada	8	1	8.970	1	2		2.970	
	TOTAL	262	37	411.406	33	103	15	135.425	11

IV.3. MINISTERIO DE DEFENSA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Administrativos especiales	Abierto criterio precio								
TOTALES	Total abierto criterio precio	10	1	8.599	1	3	1	2.181	
	Total restringido criterio precio	1		315					
	Total abierto criterios múltiples	186	27	314.519	25	72	11	115.364	9
	Total procedimiento negociado con publicidad	8	1	7.769	1	2		1.285	
	Total procedimiento negociado sin publicidad	495	70	914.973	72	166	23	331.481	27
	Total contratación centralizada	8	1	8.970	1	2		2.970	
	TOTAL	708	100	1.255.145	100	245	35	453.281	36

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
3.862	1.448.087
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
1.887	954.495

IV.3.1. INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Restringido criterio precio (RP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	3	100	4.557	100	3	100	4.557	100
	Restringido criterios múltiples (RM)								
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)								
	Diálogo competitivo (DC)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	3	75	4.557	83	3	100	4.557	100
Gestion de servicios públicos	Abierto criterio precio (AP)								
	Restringido criterio precio (RP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	1	100	925	100	1	100	925	100
	Restringido criterios múltiples (RM)								
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)								
	Diálogo competitivo (DC)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	1	25	925	17	1	100	925	100
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterio precio (AP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total restringido criterio precio (RP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterios múltiples (AM)	4	100	5.482	100	4	100	5.482	100
	Total restringido criterios múltiples (RM)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado con publicidad (NC)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)								
	Total diálogo competitivo (DC)								
	Total contratación centralizada (CC)								
	Total	4	100	5.482	100	4	100	5.482	100

RELACIONES DE CONTRATOS		INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE	Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
36	7.138	7	6.584

IV.3.2. INSTITUTO NACIONAL DE TECNICAS AEROESPACIALES ESTEBAN TERRADAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Procedimiento negociado sin publicidad	3	19	8.672	35	1	33	5.755	66
	TOTAL	3	19	8.672	35	1	33	5.755	66
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	6	38	6.359	26	2	33	3.344	53
	Procedimiento negociado sin publicidad	4	25	1.843	8				
	TOTAL	10	63	8.202	34	2	20	3.344	41
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	6	4.002	16	1	100	4.002	100
	Procedimiento negociado con publicidad	1	6	1.464	6				
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	6	2.117	9				
	TOTAL	3	18	7.583	31	1	33	4.002	53
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	7	44	10.361	42	3	43	7.346	71
	Total procedimiento negociado con publicidad	1	6	1.464	6				
	Total procedimiento negociado sin publicidad	8	50	12.632	52	1	13	5.755	46
	TOTAL	16	100	24.457	100	4	25	13.101	54

RELACIONES DE CONTRATOS		INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE	Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
149	32.985	62	6.756

IV.3.3. SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	3	33	3.287	47	2		2260	69
	Procedimiento negociado con publicidad	3	33	2.510	35	1		985	39
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	12	138	2				
	TOTAL	7	78	5.935	84	3	33	3.245	46
Servicios	Abierto criterio precio								
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	12	600	9				
	TOTAL	1	12	600	9	0	0	0	0
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	12	521	7				
	TOTAL	1	12	521	7	0	0	0	0

IV.3.3. SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	4	44	3.808	54	2	50	2.260	59
	Total procedimiento negociado con publicidad	3	34	2.510	36	1	33	985	39
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	22	738	10				
	TOTAL	9	100	7.056	100	3	33	3.245	46

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
277	40.562
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
78	17.663

IV.3.4. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	2	11	3.510	27	1	50	1.929	55
	Procedimiento negociado con publicidad	4	21	5.626	43				
	TOTAL	6	32	9.136	70	1	17	1.929	21
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	2	11	950	7	2	100	950	100
	Procedimiento negociado sin publicidad	11	57	3.041	23	3	27	2.563	84
	TOTAL	13	68	3.991	30	5	38	3.513	88
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	4	21	4.460	34	3	75	2.879	65
	Total procedimiento negociado sin publicidad	15	79	8.667	66	3	20	2.563	30
	TOTAL	19	100	13.127	100	6	32	5.442	41

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
81	14.092
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
52	13.316

IV.3.5. FONDO DE EXPLOTACION CRIA CABALLAR Y REMONTA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	5	83	1.394	62	2	40	951	68
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	17	837	38				
	TOTAL	6	100	2.231	100	2	33	951	43
TOTALES	Total abierto criterio precio	5	83	1.394	62	2	40	951	68
	Total procedimiento negociado sin publicidad	1	17	837	38				
	TOTAL	6	100	2.231	100	2	33	951	43

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
35	5.608
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
25	4.838

IV.3.6. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	50	5.900	97	1	100	5.900	100
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	50	162	3				
	TOTAL	2	100	6.062	100	1	50	5.900	97
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	1	50	5.900	97	1	100	5.900	100
	Total procedimiento negociado sin publicidad	1	50	162	3				
	TOTAL	2	100	6.062	100	1	50	5.900	97

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
2	6.662
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
8	5.698

IV.3.7. CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	1	100	843	100	1	100	843	100
	TOTAL	1	33,33	843	18,38	1	33,33	843	18,38
Servicios	Abierto criterio precio								
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	2	100	3.744	100	2	100	3.744	100
	TOTAL	2	66,67	3.744	81,62	2	66,67	3.744	81,62
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	3	100	4.587	100	3	100	4.587	100
	TOTAL	3	100	4.587	100	3	100	4.587	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
156	23.008
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	2	100,00%	2.968	100,00%	1	50,00%	1.866	62,87%
	TOTAL	2	5,71%	2.968	11,34%	1	50,00%	1.866	62,87%
Servicios	Abierto criterios múltiples	26	86,67%	20.732	94,02%	9	34,62%	15.062	72,65%
	Procedimiento negociado con publicidad	1	3,33%	271	1,23%	0	0,00%	0	0,00%
	Procedimiento negociado sin publicidad	3	10,00%	1.047	4,75%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	30	85,71%	22.050	84,23%	9	30,00%	15.062	68,31%
Suministro	Abierto criterio precio	1	33,33%	181	15,60%	1	100,00%	181	100,00%
	Abierto criterios múltiples	2	66,67%	979	84,40%	0	0,00%		0,00%
	TOTAL	3	8,57%	1.160	4,43%	1	33,33%	181	15,60%
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	2,86%	181	0,69%	1	100,00%	181	100,00%
	Total abierto criterios múltiples	30	85,71%	24.679	94,27%	10	33,33%	16.928	68,59%
	Total procedimiento negociado con publicidad	1	2,86%	271	1,04%	0	0,00%	0	0,00%
	Total procedimiento negociado sin publicidad	3	8,57%	1.047	4,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	35	100,00%	26.178	100,00%	11	31,43%	17.109	65,36%

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
5495	705.482
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.4.1. COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterios múltiples	5	83,33	607	26,04	2	40	318	52,39
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	16,67	1.724	73,96	1	100	1.724	100
	TOTAL	6	100	2.331	100	3	50	2.042	87,60
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	5	83,33	607	26,04	2	40	318	52,39
	Total procedimiento negociado sin publicidad	1	16,67	1.724	73,96	1	100	1.724	100
	TOTAL	6	100	2.331	100	3	50	2.042	87,60

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
6	2.331
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
7	863

IV.4.3. INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterios múltiples	4	100	659	100	1	25,00	378	57,36
	TOTAL	4	80	659	72,10	1	25,00	378	57,36
Suministro	Abierto criterio precio	1	100	305	100	1	100	305	100
	TOTAL	1	20	305	33,37	1	100	305	100
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	20	305	33,37	1	100	305	100
	Total abierto criterios múltiples	4	80	609	66,63	1	25,00	378	62,07
	TOTAL	5	100	914	100	2	40	683	74,73

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
24	1.694
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
15	1.681

IV.4.4. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	1	4,17	316	1,04	1	100	316	100
	Abierto criterios múltiples	17	70,83	28.025	92,23	2	11,76	4.770	17,02
	Procedimiento negociado sin publicidad	6	25,00	2.044	6,73	1	16,67	195	9,54
	TOTAL	24	92,31	30.385	96,14	4	16,67	5.281	17,38
Suministro	Procedimiento negociado sin publicidad	2	100	1.221	100	1	50	668	54,71
	TOTAL	2	7,69	1.221	3,86	1	50	668	54,71
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	3,85	316	1,00	1	100	316	100
	Total abierto criterios múltiples	17	65,38	28.025	88,67	2	11,76	4.770	17,02
	Total procedimiento negociado sin publicidad	8	30,77	3.265	10,33	2	25,00	863	26,43
	TOTAL	26	100	31.606	100	5	19,23	5.949	18,82

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
86	35.874
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
90	37.094

IV.4.5. PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterios múltiples	1	50	416	37,78	1	100	416	100
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	50	685	62,22	0	0	0	0
	TOTAL	2	66,67	1.101	52,11	1	50	416	37,78
Suministro	Contratación centralizada	1	100	1.012	47,89	1	100	1.012	100
	TOTAL	1	33,33	1.012	47,89	1	100	1.012	100
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	1	33,33	416	19,69	1	100	416	100
	Total procedimiento negociado sin publicidad	1	33,33	685	32,42	0	0	0	0
	Total contratación centralizada	1	33,33	1.012	47,89	1	100	1.012	100
	TOTAL	3	100	2.113	100	2	66,67	1.428	67,58

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
27	2.842
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
14	2.862

IV.4.7. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	1	100	1.050	100	1	100	1.050	100
	TOTAL	1	1,47	1.050	1,65	1	7,14	1.050	4,55
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	44	83,02	36.456	78	7	70	11.145	58,61
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	9	16,98	10.280	22	3	30	7.872	41,4
	TOTAL	53	77,94	46.736	73,48	10	71,43	19.016	82,48
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	14	100	15.817	100	3	100	2.989	100
	TOTAL	14	20,59	15.817	24,87	3	21,43	2.989	12,96
TOTALES	Total Abierto criterio precio	1	1,47	1.050	1,65	1	7,14	1.050	4,55
	Total Abierto criterios múltiples	58	85,29	52.273	82,19	10	71,43	14.134	61,31
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	9	13,24	10.280	16,16	3	21,43	7.872	34,14
	TOTAL	68	100	63.603	100	14	21	23.055	36

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
251	102.200
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.4.8. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	3	75	537	91,95	3	75	537	91,95
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	1	25	47	8,05	1	25	47	8,05
	TOTAL	4	100	584	100	4	100	584	100
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Abierto criterios múltiples	3	75	537	91,95	3	75	537	91,95
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	1	25	47	8,05	1	25	47	8,05
	TOTAL	4	100	584	100	4	100	584	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
21	1.944
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.4.9. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	6	66,67	2.948	68,32	5	71,43	2.581	73,53
	Restringido criterios múltiples	1	11,11	454	10,52	1	14,29	454	12,93
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	2	22,22	913	21,16	1	14,29	475	13,53
	TOTAL	9	100	4.315	100	7	100	3.510	100
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Abierto criterios múltiples	6	66,67	2.948	68,32	5	71,43	2.581	73,53
	Total Restringido criterios múltiples	1	11,11	454	10,52	1	14,29	454	12,93
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	2	22,22	913	21,16	1	14,29	475	13,53
	TOTAL	9	100	4.315	100	7	78	3.510	81

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
22	5.087
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.5. MINISTERIO DEL INTERIOR

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	10	4	14.213	3	5	2	8.207	2
	Abierto criterios múltiples	15	5	38.217	8	12	4	26.619	5
	Procedimiento negociado con publicidad	1		811					
	Procedimiento negociado sin publicidad	4	1	18.059	3	2	1	16.530	3
	TOTAL	30	10	71.300	14	19	7	51.356	10
Servicios	Abierto criterio precio	4	1	1.058					
	Abierto criterios múltiples	90	31	150.187	28	37	13	61.416	12
	Procedimiento negociado sin publicidad	72	25	143.754	27	21	7	49.221	9
	TOTAL	166	57	294.999	55	58	20	110.637	21
Suministro	Abierto criterio precio	5	2	21.760	4				
	Abierto criterios múltiples	31	11	89.178	17	17	6	45.277	8
	Procedimiento negociado sin publicidad	30	11	47.938	9	11	4	18.425	3
	Contratación centralizada	25	9	7.127	1	14	5	4.050	1
	TOTAL	91	33	166.003	31	42	15	67.752	12
Administrativos especiales	Abierto criterio precio								
	Procedimiento negociado sin publicidad	1		771					
	TOTAL	1		771					

IV.5. MINISTERIO DEL INTERIOR

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
TOTALES	Total abierto criterio precio	19	7	37.030	7	5	1	8.207	2
	Total abierto criterios múltiples	136	47	277.582	52	66	23	133.312	25
	Total procedimiento negociado con publicidad	1		811					
	Total procedimiento negociado sin publicidad	107	37	210.522	40	34	12	84.176	15
	Total contratación centralizada	25	9	7.127	1	14	5	4.050	1
	TOTAL	288	100	533.072	100	119	41	229.745	43

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
977	761.000
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
578	448.928

IV.5.1. DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	4	3	5.753	3				
	Abierto criterios múltiples	14	12	37.501	18	12	86	26.619	71
	TOTAL	18	15	43.254	21	12	67	26.619	62
Servicios	Abierto criterio precio	3	3	752					
	Abierto criterios múltiples	36	31	91.458	44	12	33	29.701	32
	Procedimiento negociado sin publicidad	41	34	29.856	15	10	24	6.107	21
	TOTAL	80	68	122.066	59	22	28	35.808	29
Suministro	Abierto criterio precio	2	2	2.358	1				
	Abierto criterios múltiples	6	5	20.610	10	2	33	6.500	32
	Procedimiento negociado sin publicidad	12	10	17.894	9	6	50	13.000	73
	TOTAL	20	17	40.862	20	8	40	19.500	48
TOTALES	Total abierto criterio precio	9	8	8.863	4				
	Total abierto criterios múltiples	56	47	149.569	73	26	46	62.820	42
	Total procedimiento negociado sin publicidad	53	45	47.750	23	16	30	19.107	40
	TOTAL	118	100	206.182	100	42	36	81.927	40

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.5.2. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	4	67	6.872	29				
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	33	16.530	71	2	100	16.530	100
	TOTAL	6	100	23.402	100	2	33	16.530	71
TOTALES	Total abierto criterio precio	4	67	6.872	29				
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	33	16.530	71	2	100	16.530	100
	TOTAL	6	100	23.402	100	2	33	16.530	71

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
20	29.715
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
14	9.386

IV.5.3. TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACION PARA EL EMPLEO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	100	4.428	100	1	25	2.532	57
	TOTAL	4	100	4.428	100	1	25	2.532	57
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	4	100	4.428	100	1	25	2.532	57
	TOTAL	4	100	4.428	100	1	25	2.532	57

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
385	183.920
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
210	261.346

IV.6. MINISTERIO DE FOMENTO

ADMINISTRACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	49	23,44	179.338	10,56	22	44,90	126.995	70,81
	Restringido criterio precio	6	2,87	47.042	2,77	6	100	47.042	100
	Abierto criterios múltiples	138	66,03	1.354.472	79,73	30	21,74	1.008.355	74,45
	Procedimiento negociado sin publicidad	16	7,66	117.987	6,95	6	37,50	81.886	69,40
	TOTAL	209	68,98	1.698.839	96,15	64	30,62	1.264.278	74,42
Servicios	Abierto criterios múltiples	84	93,33	64.165	97,00	33	39,29	37.772	58,87
	Procedimiento negociado sin publicidad	6	6,67	1.982	3,00	2	33,33	1.060	53,48
	TOTAL	90	29,70	66.147	3,74	35	38,89	38.832	58,71
Suministro	Abierto criterios múltiples	2	50	1.183	64,93	1	50	812	68,64
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	25,00	463	25,41	1	100	463	100
	Contratación centralizada	1	25,00	176	9,66	1	100	176	100
	TOTAL	4	1,32	1.822	0,10	3	75,00	1.451	79,64
TOTALES	Total abierto criterio precio	49	16,17	179.338	10,15	22	44,90	126.995	70,81
	Total restringido criterio precio	6	1,98	47.042	2,66	6	100	47.042	100
	Total abierto criterios múltiples	224	73,93	1.419.820	80,36	64	28,57	1.046.939	73,74
	Total procedimiento negociado sin publicidad	23	7,59	120.432	6,82	9	39,13	83.409	69,26
	Total contratación centralizada	1	0,33	176	0,01	1	100	176	100
	TOTAL	303	100	1.766.808	100	102	33,66	1.304.561	73,84

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
693	2.334.347

IV.6.1. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Procedimiento negociado sin publicidad	1	100	736	100	1	100	736	100
	TOTAL	1	16,67	736	25,42	1	100	736	100
Servicios	Abierto criterios múltiples	4	80	1.992	92,26	1	25,00	160	8,03
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	20	167	7,74	0	0	0	0
	TOTAL	5	83,33	2.159	74,58	1	20	160	7,41
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	4	66,67	1.992	68,81	1	25,00	160	8,03
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	33,33	903	31,19	1	50	736	81,51
	TOTAL	6	100	2.895	100	2	33,33	896	30,95

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
96	9.873

IV.6.3. AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Suministro	Abierto criterios múltiples	1	100	417	100	1	100	417	100
	TOTAL	1	100	417	100	1	100	417	100
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	1	100	417	100	1	100	417	100
	TOTAL	1	100	417	100	1	100	417	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
35	3.809

IV.7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	1	3	866		1	3	866	3
	Abierto criterios múltiples	1	3	5.370	27				
	Procedimiento negociado sin publicidad	4	11	2.079		2	6	1.500	5
	TOTAL	6	17	8.315		3	9	2.366	8
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	13	36	11.481		8	22	7.055	24
	Procedimiento negociado sin publicidad	12	35	7.355		6	18	3.766	13
	TOTAL	25	71	18.836		14	40	10.821	37
Administrativos especiales	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	18	1.939	10				
	TOTAL	4	18	1.939	10				
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	3	866		1	3	866	3
	Total abierto criterios múltiples	18	51	18.790		8	23	7.055	24
	Total procedimiento negociado sin publicidad	16	46	9.434		8	23	5.266	15
	TOTAL	35	100	29.090	100	17	49	13.187	42

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
172	36.688
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
75	19.923

IV.7.1. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	1	8	866	9	1	100	866	100
	Procedimiento negociado sin publicidad	4	34	2.079	23				
	TOTAL	5	42	2.945	32	1	20	866	29
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	5	42	4.104	45	3	60	2.549	62
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	16	2.096	23				
	TOTAL	7	58	6.200	68	3	43	2.549	41
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	8	866	9	1	100	866	100
	Total abierto criterios múltiples	5	42	4.104	45	3	60	2.549	62
	Total procedimiento negociado sin publicidad	6	50	4.175	46				
	TOTAL	12	100	9.145	100	4	25	3.415	37

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
42	10.145
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
39	5.008

IV.8. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	21	95	26.361	93	21	100	26.361	100
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	5	1.879	7	1	100	1.879	100
	Total	22	92	28.240	90	22	100	28.240	100
Suministro	Abierto criterio precio (AP)	1	50	375	12	1	100	375	100
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	50	2.868	88	1	100	2.868	100
	Total	2	8	3.243	10	2	100	3.243	100
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterio precio (AP)	1	4	375	1	1	100	375	100
	Total abierto criterios múltiples (AM)	21	88	26.361	84	21	100	26.361	100
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	2	8	4.747	15	2	100	4.747	100
	Total	24	100	31.483	100	24	100	31.483	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
109	38.601
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
59	19.299

IV.8.1. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio (AP)	1	100	1.672	100	1	100	1.672	100
	Abierto criterios múltiples (AM)								
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	1	4	1.672	8	1	100	1.672	100
Servicios	Abierto criterio precio (AP)	1	6	4.174	33	1	100	4.174	100
	Abierto criterios múltiples (AM)	15	88	7.804	63	15	100	7.804	100
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)								
	Contratación centralizada (CC)	1	6	473	4	1	100	473	100
	Total	17	74	12.451	57	16	100	8.277	100
Suministro	Abierto criterio precio (AP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)								
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	2	40	3.763	48	2	100	3.763	100
	Contratación centralizada (CC)	3	60	4.056	52	3	100	4.056	100
	Total	5	22	7.819	35	5	100	7.819	100
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterio precio (AP)	2	9	5.846	27	2	100	5.846	100
	Total abierto criterios múltiples (AM)	15	65	7.804	35	15	100	7.804	100
	Total procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	2	9	3.763	17	2	100	3.763	100
	Total contratación centralizada (CC)	4	17	4.529	21	4	100	4.529	100
	Total	23	100	21.942	100	23	100	21.942	100

IV.8.2. FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	100	512	100	1	100	512	100
	Total	1	100	512	100	1	100	512	100
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	100	512	100	1	100	512	100
	Total	1	100	512	100	1	100	512	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
7	820
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
11	1.959

IV.8.3. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	5	83	4.255	91	3	60	3.057	72
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	17	431	9	1	100	431	100
	Total	6	100	4.686	100	4	67	3.488	74
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterios múltiples (AM)	5	83	4.255	91	3	60	3.057	72
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	17	431	9	1	100	431	100
	Total	6	100	4.686	100	4	67	3.488	74

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
24	5.848
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
22	5.378

IV.8.4. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio (AP)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	3	100	595	100	3	100	595	100
	Diálogo competitivo (DC)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	3	100	595	100	3	100	595	100
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	3	100	595	100	3	100	595	100
	Total	3	100	595	100	3	100	595	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
6	741
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.9. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

ADMINISTRACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	2	100	1.627	100	1	50	943	57,96
	TOTAL	2	7,41	1.627	4,46	1	50	943	57,96
Servicios	Abierto criterio precio	1	7,14	130	0,43	0	0	0	0
	Abierto criterios múltiples	14	70	28.563	93,90	4	28,57	18.803	65,83
	Procedimiento negociado sin publicidad	5	25,00	1.726	5,67	1	20	782	45,31
	TOTAL	20	74,07	30.419	83,32	5	25,00	19.585	64,38
Suministro	Abierto criterios múltiples	5	100	4.461	100	2	40	3.047	68,30
	TOTAL	5	18,52	4.461	12,22	2	40	3.047	68,30
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	3,70	130	0,36	0	0	0	0
	Total abierto criterios múltiples	21	77,78	34.651	94,92	7	33,33	22.793	65,78
	Total procedimiento negociado sin publicidad	5	18,52	1.726	4,73	1	20	782	45,31
	TOTAL	27	100	36.507	100	8	29,63	23.575	64,58

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
68	1.932
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.9.1. CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterios múltiples	2	100	699	100	1	50	387	55,36
	TOTAL	2	100	699	100	1	50	387	55,36
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	2	100	699	100	1	50	387	55,36
	TOTAL	2	100	699	100	1	50	387	55,36

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
24	2.483
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.9.2. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	1	33,33	10.010	44,90	1	100	10.010	100
	Abierto criterios múltiples	1	33,33	9.589	43,01	0	0	0	0
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	33,33	2.694	12,08	0	0	0	0
	TOTAL	3	14,29	22.293	28,30	1	33,33	10.010	44,90
Servicios	Abierto criterios múltiples	15	88,24	12.510	22,52	4	26,67	4.215	33,69
	Restringido criterios múltiples	2	11,76	43.043	77,48	1	50	6.405	14,88
	TOTAL	17	80,95	55.553	70,51	5	29,41	10.620	19,12
Suministro	Procedimiento negociado sin publicidad	1	100	938	100	1	100	938	100
	TOTAL	1	4,76	938	1,19	1	100	938	100
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	4,76	10.010	12,71	1	100	10.010	100
	Total abierto criterios múltiples	16	76,19	22.099	28,05	4	25,00	4.215	19,07
	Total restringido criterios múltiples	2	9,52	43.043	54,63	1	50	6.405	14,88
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	9,52	3.632	4,61	1	50	938	25,83
	TOTAL	21	100	78.784	100	7	33,33	21.568	27,38

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
154	98.045
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.9.3. INSTITUTO PARA LA RESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
Servicios	Abierto criterios múltiples	1	100	2.009	100	1	100	2.009	100
	TOTAL	1	100	2.009	100	1	100	2.009	100
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	1	100	2.009	100	1	100	2.009	100
	TOTAL	1	100	2.009	100	1	100	2.009	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
6	2.114
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
4	2.130

IV.9.4. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	4	36,36	1.920	29,68	0	0	0	0
	Abierto criterios múltiples	6	54,55	4.212	65,10	1	16,67	1.342	31,86
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	9,09	338	5,22	0	0	0	0
	TOTAL	11	84,62	6.470	82,62	1	9,09	1.342	20,74
Suministro	Abierto criterio precio	1	50	853	62,67	0	0	0	0
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	50	508	37,33	1	1000	508	100
	TOTAL	2	15,38	1.361	17,38	1	50	508	37,33
TOTALES	Total abierto criterio precio	5	38,46	2.773	35,41	0	0	0	0
	Total abierto criterios múltiples	6	46,15	4.212	53,79	1	16,67	1.342	31,86
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	15,38	846	10,80	1	50	508	60,05
	TOTAL	13	100	7.831	100	2	15,38	1.850	23,62

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
68	12.034
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.9.5. COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Procedimiento Negociado con Publicidad	1	100	685	100	1	100	685	100
	TOTAL	1	16,67	685	29,39	1	16,67	685	29,39
	Abierto criterios múltiples	4	80	1.346	81,77	4	80	1.346	81,77
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	1	20	300	18,23	1	20	300	18,23
	TOTAL	5	83,33	1.646	70,61	5	83,33	1.646	70,61
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Abierto criterios múltiples	4	66,67	1.346	57,74	4	66,67	1.346	57,74
	Total Procedimiento Negociado con Publicidad	1	16,67	685	29,39	1	16,67	685	29,39
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	1	16,67	300	12,87	1	16,67	300	12,87
	TOTAL	6	100	2.331	100	6	100	2.331	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
33	4.190
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.9.6. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	33,33	252	24,71	1	33,33	252	24,71
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	2	66,67	768	75,29	2	66,67	768	75,29
	TOTAL	3	50	1.020	64,35	3	50	1.020	64,35
Suministro	Abierto criterio precio	1	33,33	155	27,43	1	33,33	155	27,43
	Abierto criterios múltiples	1	33,33	366	64,78	1	33,33	366	64,78
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	1	33,33	45	7,96	1	33,33	45	7,96
	TOTAL	3	50	565	35,65	3	50	565	35,65
TOTALES	Total Abierto criterio precio	1	16,67	155	9,78	1	16,67	155	9,78
	Total Abierto criterios múltiples	2	33,33	618	38,99	2	33,33	618	38,99
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	3	50	813	51,29	3	50	813	51,29
	TOTAL	6	100	1.585	100	6	100	1.585	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
57	6.175
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.9.7. CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	5	71,43	2.927	74,78	5	71,43	2.927	74,78
	Restringido criterios múltiples	1	14,29	854	21,82	1	14,29	854	21,82
	Procedimiento Negociado sin Publicidad	1	14,29	133	3,4	1	14,29	133	3,4
	TOTAL	7	100	3.914	100	7	100	3.914	100
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Abierto criterios múltiples	5	71,43	2.927	74,78	5	71,43	2.927	74,78
	Total Restringido criterios múltiples	1	14,29	854	21,82	1	14,29	854	21,82
	Total Procedimiento Negociado sin Publicidad	1	14,29	133	3,4	1	14,29	133	3,4
	TOTAL	7	100	3.914	100	7	100	3.914	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
60	8.957
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.10. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

ADMINISTRACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	9	8,33	10.987	3,55	5	55,56	9.024	82,13
	Abierto criterios múltiples	83	76,85	283.701	91,78	35	42,17	223.554	78,80
	Procedimiento negociado con publicidad	1	0,93	471	0,15	1	100	471	100
	Procedimiento negociado sin publicidad	15	13,89	13.939	4,51	2	13,33	3.330	23,89
	TOTAL	108	36,74	309.098	71,67	43	39,81	236.379	76,47
Servicios	Abierto criterio precio	1	0,61	541	0,48	1	100	541	100
	Abierto criterios múltiples	132	80,49	108.448	95,26	50	37,88	79.678	73,47
	Procedimiento negociado con publicidad	1	0,61	25	0,02	0	0	0	0
	Procedimiento negociado sin publicidad	30	18,29	4.826	4,24	5	16,67	3.398	70,41
	TOTAL	164	55,78	113.840	26,40	56	34,15	83.617	73,45
Suministro	Abierto criterios múltiples	2	9,09	682	8,18	1	50	661	96,92
	Procedimiento negociado sin publicidad	9	40,914	6.909	82,91	4	44,44	2.952	42,73
	Contratación centralizada	11	50	742	8,90	0	0	0	0
	TOTAL	22	7,48	8.333	1,93	5	2,69	3.613	43,36
TOTALES	Total abierto criterio precio	10	3,40	11.528	2,67	6	60	9.565	82,97
	Total abierto criterios múltiples	217	73,81	392.831	91,09	86	39,63	303.893	77,36
	Total procedimiento negociado con publicidad	2	0,68	496	0,12	1	50	471	94,96
	Total procedimiento negociado sin publicidad	54	18,37	25.674	5,95	11	20,37	9.680	37,70
	Total contratación centralizada	11	3,74	742	0,17	0	0	0	0
	TOTAL	294	100	431.271	100	104	35,37	323.609	75,04

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
475	1.373.178
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.10.1. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTABRICO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	1	14,29	1.707	6,08	1	100	1.707	100
	Abierto criterios múltiples	5	71,43	23.017	82,00	1	20	14.072	61,14
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	14,29	3.347	11,92	0	0	0	0
	TOTAL	7	50	28.071	93,73	2	28,57	15.779	56,21
Servicios	Abierto criterios múltiples	7	100	1.877	100	2	28,57	1.029	54,82
	TOTAL	7	50	1.877	6,27	2	28,57	1.029	54,82
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	7,14	1.707	5,70	1	100	1.707	100
	Total abierto criterios múltiples	12	85,71	24.894	83,12	3	25,00	15.101	60,66
	Total procedimiento negociado sin publicidad	1	7,14	3.347	11,18	0	0	0	0
	TOTAL	14	100	29.948	100	4	28,57	16.808	56,12

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
21	30.279
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
14	17.993

IV.10.2. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	5	100	5.442	100	1	20	3.033	55,73
	TOTAL	5	62,50	5.442	84,93	1	20	3.033	55,73
Servicios	Abierto criterios múltiples	3	100	966	100	1	33,33	206	21,33
	TOTAL	3	37,50	966	15,07	1	33,33	206	21,33
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	8	100	6.408	100	2	25,00	3.239	50,55
	TOTAL	8	100	6.408	100	2	25,00	3.239	50,55

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
60	11.204
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
74	15.004

IV.10.3. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	10	100	11.152	100	3	33,33	5.804	52,04
	TOTAL	10	100	11.152	100	3	33,33	5.804	52,04
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	10	100	11.152	100	3	33,33	5.804	52,04
	TOTAL	10	100	11.152	100	3	33,33	5.804	52,04

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
234	32.267
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
207	36.757

IV.10.4. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	8	88,89	24.820	97,04	2	25,00	12.346	49,74
	Procedimiento negociado con publicidad	1	11,11	758	2,96	0	0	0	0
	TOTAL	9	69,23	25.578	94,95	2	22,22	12.346	48,27
Servicios	Abierto criterios múltiples	4	100	1.359	100	0	0	0	0
	TOTAL	4	30,77	1.359	5,05	0	0	0	0
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	12	92,31	26.179	97,19	2	16,67	12.346	47,16
	Total procedimiento negociado con publicidad	1	7,69	758	2,81	0	0	0	0
	TOTAL	13	100	26.937	100	2	15,38	12.346	45,83

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
44	36.605
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
48	49.878

IV.10.5. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	1	8,33	1.900	6,03	1	100	1.900	100
	Abierto criterios múltiples	9	75,00	28.034	88,97	2	22,22	22.883	81,63
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	16,67	1.577	5,00	0	0	0	0
	TOTAL	12	54,55	31.511	55,98	3	25,00	24.783	78,65
Servicios	Abierto criterios múltiples	7	100	2.899	100	1	14,29	688	23,73
	TOTAL	7	31,82	2.899	5,15	1	14,29	688	23,73
Suministro	Abierto criterios múltiples	1	100	1.540	100	0	0	0	0
	TOTAL	1	4,55	1.540	2,74	0	0	0	0
Administrativos especiales	Abierto criterios múltiples	2	100	20.340	100	1	50	10.298	50,63
	TOTAL	2	9,09	20.340	36,13	1	50	10.298	50,63
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	4,55	1.900	3,38	1	100	1.900	100
	Total abierto criterios múltiples	19	86,36	52.813	93,82	4	21,05	33.869	64,13
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	9,09	1.577	2,80	0	0	0	0
	TOTAL	22	100	56.290	100	5	22,73	35.769	63,54

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
303	77.998
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
2	10.733

IV.10.6. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	10	90,91	13.608	95,37	1	10	2.215	16,28
	Procedimiento negociado con publicidad	1	9,09	660	4,63	1	100	660	100
	TOTAL	11	42,31	14.268	64,36	2	18,18	2.875	20,15
Servicios	Abierto criterios múltiples	13	86,67	6.831	86,45	4	30,77	3.769	55,17
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	13,33	1.071	13,55	1	50	828	77,31
	TOTAL	15	57,69	7.902	35,64	5	33,33	4.597	58,18
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	23	88,46	20.439	92,19	5	21,74	5.984	29,28
	Total procedimiento negociado con publicidad	1	3,85	660	2,98	1	100	660	100
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	7,69	1.071	4,83	1	50	828	77,31
	TOTAL	26	100	22.170	100	7	26,92	7.472	33,70

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
119	32.223
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
113	46.426

IV.10.7. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	1	25,00	582	8,19	0	0	0	0
	Abierto criterios múltiples	2	50	6.224	87,59	0	0	0	0
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	25,00	300	4,22	0	0	0	0
	TOTAL	4	33,33	7.106	79,07	0	0	0	0
Servicios	Abierto criterios múltiples	8	100	1.881	100	1	12,50	270	14,35
	TOTAL	8	66,67	1.881	20,93	1	12,50	270	14,35
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	8,33	582	6,48	0	0	0	0
	Total abierto criterios múltiples	10	83,33	8.105	90,19	1	10	270	3,33
	Total procedimiento negociado sin publicidad	1	8,33	300	3,34	0	0	0	0
	TOTAL	12	100	8.987	100	1	8,33	270	3,00

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
19	9.286
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
13	10.508

IV.10.8. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	5	27,78	9.196	43,15	3	60	6.474	70,40
	Procedimiento negociado sin publicidad	13	72,22	12.116	56,85	7	53,85	7.147	58,99
	TOTAL	18	56,25	21.312	43,84	10	55,56	13.621	63,91
Servicios	Abierto criterios múltiples	11	100	3.494	100	3	27,27	1.805	51,66
	TOTAL	11	34,38	3.494	7,19	3	27,27	1.805	51,66
Suministro	Abierto criterios múltiples	2	66,67	19.041	79,97	0	0	0	0
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	33,33	4.769	20,03	0	0	0	0
	TOTAL	3	9,38	23.810	48,98	0	0	0	0
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	18	56,25	31.731	65,27	6	33,33	8.279	26,09
	Total procedimiento negociado sin publicidad	14	43,75	16.885	34,73	7	50	7.147	42,33
	TOTAL	32	100	48.616	100	13	40,63	15.426	31,73

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
114	31.734
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
101	57.168

IV.10.9. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	13	100	20.607	100	8	61,54	16.118	78,22
	TOTAL	13	76,47	20.607	91,36	8	61,54	16.118	78,22
Servicios	Abierto criterios múltiples	3	75,00	1.561	80,05	1	33,33	693	44,39
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	25,00	389	19,95	0	0	0	0
	TOTAL	4	23,53	1.950	8,64	1	25,00	693	35,54
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	16	94,12	22.168	98,28	9	56,25	16.811	75,83
	Total procedimiento negociado sin publicidad	1	5,88	389	1,72	0	0	0	0
	TOTAL	17	100	22.557	100	9	52,94	16.811	74,53

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
102	31.514
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
98	43.199

IV.10.10. ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterios múltiples	1	100	293	100	1	100	293	100
	TOTAL	1	100	293	100	1	100	293	100
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	1	100	293	100	1	100	293	100
	TOTAL	1	100	293	100	1	100	293	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
12	814
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.10.12. FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y CULTIVOS MARINOS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterios múltiples	7	77,78	10.126	89,16	2	28,57	7.192	71,03
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	22,22	1.231	10,84	0	0	0	0
	TOTAL	9	100	11.357	100	2	22,22	7.192	63,33
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	7	77,78	10.126	89,16	2	28,57	7.192	71,03
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	22,22	1.231	10,84	0	0	0	0
	TOTAL	9	100	11.357	100	2	22,22	7.192	63,33

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
22	11.947
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
19	12.416

IV.10.13. MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	1	100	1.040	100	0	0	0	0
	TOTAL	1	6,67	1.040	10,55	0	0	0	0
Servicios	Abierto criterios múltiples	11	91,67	5.340	96,95	4	36,36	999	18,71
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	8,33	168	3,05	1	100	168	100
	TOTAL	12	80	5.508	55,90	5	41,67	1.167	21,19
Suministro	Abierto criterios múltiples	2	100	3.306	100	1	50	1.688	51,06
	TOTAL	2	13,33	3.306	33,55	1	50	1.688	51,06
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	14	93,33	9.686	98,30	5	35,71	2.687	27,74
	Total procedimiento negociado sin publicidad	1	6,67	168	1,70	1	100	168	100
	TOTAL	15	100	9.854	100	6	40	2.855	28,97

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
70	14.404
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
75	97.357

IV.10.14. PARQUE DE MAQUINARIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterios múltiples	1	100	874	100	0	0	0	0
	TOTAL	1	33,33	874	29,89	0	0	0	0
Suministro	Abierto criterio precio	1	50	1.100	53,66	1	100	1.100	100
	Abierto criterios múltiples	1	50	950	46,34	0	0	0	0
	TOTAL	2	66,67	2.050	70,11	1	50	1.100	53,66%
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	33,33	1.100	37,62	1	100	1.100	100
	Total abierto criterios múltiples	2	66,67	1.824	62,38	0	0	0	0
	TOTAL	3	100	2.924	100	1	33,33%	1.100	37,62%

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
29	4.985
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
-	-

IV.10.15. PARQUES NACIONALES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterios múltiples	4	100	921	100	2	50	510	55,37
	TOTAL	4	80	921	27,35	2	50	510	55,37
Suministro	Abierto criterios múltiples	1	100	2.446	100	0	0	0	0
	TOTAL	1	20	2.446	72,65	0	0	0	0
TOTALES	Total abierto criterios múltiples	5	100	3.367	100	2	40	510	15,15
	TOTAL	5	100	3.367	100	2	40	510	15,15

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
99	13.834
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
5	678

IV.11. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	1	1	696	1	1	1	696	1
	Abierto criterios múltiples	38	59	29.474	55	18	28	16.420	31
	Procedimiento negociado sin publicidad	23	36	22.257	42	13	21	15.730	
	TOTAL	62	97	52.427	99	32	50	33.016	59
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	1	700	1				
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	1	24					
	TOTAL	2	2	724	1				
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	1	696	1	1	1	696	1
	Total abierto criterios múltiples	39	59	30.174	56	18	28	16.420	31
	Total procedimiento negociado sin publicidad	24	40	22.282	43	13	21	15.730	30
	TOTAL	64	100	53.152	100	32	50	33.016	62

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
254	122.054
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.11.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	17	77	21.065	62	8	47	13.886	66
	Procedimiento negociado sin publicidad	5	23	13.007	38				
	TOTAL	22	100	34.072	100	8	36	13.886	41
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	17	77	21.065	62	8	47	13.886	66
	Total procedimiento negociado sin publicidad	5	23	13.007	38				
	TOTAL	22	100	34.072	100	8	36	13.886	41

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
94	51.110
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.11.2. AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	1	100	696	100	1	100	696	100
	TOTAL	1	100	696	100	1	100	696	100
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	100	696	100	1	100	696	100
	TOTAL	1	100	696	100	1	100	696	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
21	2.125
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.12. MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	5	71	15.747	96	1	14	14.865	91
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	29	638	4				
	TOTAL	7	100	16.385	100	1	14	14.865	91
	TOTAL								
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	5	71	15.747	96	1	14	14.865	91
	Total procedimiento negociado sin publicidad	2	29	638	4				
	TOTAL	7	100	16.385	100	1	14	14.865	91

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
65	5.866
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
124	45.356

IV.12 2. MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios									
	Abierto criterios múltiples (AM)	6	60	2.795	61	6	100	2.795	100
	Contratación centralizada (CC)	4	40	1.772	39	4	100	1.772	100
	Total	10	100	4.567	100	10	100	4.567	100
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterios múltiples (AM)	6	60	2.795	61	6	100	2.795	100
	Total contratación centralizada (CC)	4	40	1.772	39	4	100	1.772	4
	Total	10	100	4.567	100	10	100	4.567	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
116	946.948
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
47	943.414

IV.13. MINISTERIO DE CULTURA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio	2	2	2.538	2				
	Abierto criterios múltiples	12	11	59.739	43	7	6	32.545	24
	Procedimiento negociado con publicidad	1	1	609		1	1	609	
	Procedimiento negociado sin publicidad	5	4	1.372	1	2	3	750	1
	TOTAL	20	18	64.258	46	10	11	33.904	25
Servicios	Abierto criterio precio	7	6	2.531	2	2	3	1.037	1
	Abierto criterios múltiples	34	31	35.097	26	15	14	11.435	8
	Procedimiento negociado sin publicidad	23	21	11.524	8	9	8	5.050	4
	Contratación centralizada	1	1	206					
	TOTAL	65	59	49.358	36	26	24	17.522	13
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	6	5	6.904	5	3	3	3.495	3
	Procedimiento negociado sin publicidad	15	14	13.819	11	8	7	6.945	5
	Contratación centralizada	4	4	3.354	2				
	TOTAL	25	23	24.077	18	11	10	10.440	8

IV.13. MINISTERIO DE CULTURA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
TOTALES	Total abierto criterio precio	9	8	5.069	4	2	2	1.037	1
	Total abierto criterios múltiples	46	42	94.836	69	25	23	47.475	34
	Total restringido criterios múltiples	6	5	6.904	5				
	Total procedimiento negociado con publicidad	1	1	609		1		609	
	Total procedimiento negociado sin publicidad	43	40	26.715	19	19	17	12.745	10
	Total contratación centralizada	5	4	3.560	3				
	TOTAL	110	100	137.693	100	47	43	61.866	45
RELACIONES DE CONTRATOS									
Nº EXPEDIENTES		IMPORTE							
596		146.862							
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN									
Nº EXPEDIENTES		IMPORTE							
576		188.122							

IV.13.1. BIBLIOTECA NACIONAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	3	30	1.337	42	2	67	1.037	78
	Procedimiento negociado sin publicidad	6	60	1.303	42	2	33	880	68
	TOTAL	9	90	2.640	84	4	44	1.917	73
Suministro	Abierto criterio precio								
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	10	499	16				
	TOTAL	1	10	499	16	0	0	0	0
TOTALES	Total abierto criterio precio	3	30	1.337	43	2	67	1.037	78
	Total procedimiento negociado sin publicidad	7	70	1.802	57	2	29	880	49
	TOTAL	10	100	3.139	100	4	40	1.917	61

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
92	11.422
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
62	11.781

IV.13.2. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE CULTURA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	8	38	54.315	80	2	25	18.425	34
	TOTAL	8	38	54.315	80	2	25	18.425	34
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	3	14	1.600	2	1	33	591	37
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	10	1.381	2				
	TOTAL	5	24	2.981	4	1	20	591	20
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	3	14	3.620	6	2	67	1.762	49
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	5	3.224	5	1	100	3.224	100
	Contratación centralizada	4	19	3.354	5				
	TOTAL	8	38	10.198	16	3	38	4.986	49

IV.13.2. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE CULTURA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	14	67	59.535	88	5	36	20.778	35
	Total procedimiento negociado sin publicidad	3	14	4.605	7	1	33	3.224	70
	Total contratación centralizada	4	19	3.354	5				
	TOTAL	21	100	67.494	100	6	29	24.002	36

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
155	74.439
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
66	81.784

IV.13.3. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	7	2.947	15	1	100	2.947	100
	TOTAL	1	7	2.947	15	1	100	2.947	100
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	29	8.572	44	2	50	4.256	50
	Procedimiento negociado sin publicidad	3	21	3.309	17	3	100	3.309	100
	TOTAL	7	50	11.881	61	5	71	7.565	64
Suministro	Abierto criterio precio								
	Procedimiento negociado sin publicidad	6	43	4.580	24				
	TOTAL	6	43	4.580	24	0	0	0	0
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	5	36	11.519	59	3	60	7.203	63
	Total procedimiento negociado sin publicidad	9	64	7.889	41	3	33	3.309	42
	TOTAL	14	100	19.408	100	6	43	10.512	54

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
120	25.243

IV.13.4. INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	2	29	562	16				
	Abierto criterios múltiples	4	57	1.213	35	1	25	389	32
	TOTAL	6	86	1.775	51	1	17	389	22
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	14	1.733	49	1	100	1.733	100
	TOTAL	1	14	1.773	49	1	100	1.733	100
TOTALES	Total abierto criterio precio	2	29	562	15				
	Total abierto criterios múltiples	5	71	2.986	85	2	40	2.122	71
	TOTAL	7	100	3.508	100	2	29	2.122	60

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
57	6.766
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
119	11.403

IV.13.5. INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	2	22	1.407	39	2	100	1.407	100
	Procedimiento negociado sin publicidad	6	67	2.025	56				
	Contratación centralizada	1	11	206	5				
	TOTAL	9	100	3.638	100	2	22	1.407	39
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	2	22	1.407	39	2	100	1.407	100
	Total procedimiento negociado sin publicidad	6	67	2.025	56				
	Total contratación centralizada	1	11	206	5				
	TOTAL	9	100	3.638	100	2	22	1.407	39

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
26	4.801
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
11	1.915

IV.13.6. MUSEO NACIONAL DEL PRADO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	100	790	100	1	100	790	100
	TOTAL	1	16,67	790	20,7	1	16,67	790	20,7
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	100	1.549	100	4	100	1.549	100
	TOTAL	4	66,67	1.549	40,59	4	66,67	1.549	40,59
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	100	1.477	100	1	100	1.477	100
	TOTAL	1	16,67	1.477	38,71	1	16,67	1.477	38,71
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Abierto criterios múltiples	6	100	3.816	100	6	100	3.816	100
	TOTAL	6	100	3.816	100	6	100	3.816	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
62	13.071
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.13.7. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	50	7.966	92,79	1	50	7.966	92,79
	Procedimiento Negociado con Publicidad	1	50	619	7,21	1	50	619	7,21
	TOTAL	2	28,57	8.585	71,97	2	28,57	8.585	71,97
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	100	3.081	100	4	100	3.081	100
	TOTAL	4	57,14	3.081	25,83	4	57,14	3.081	25,83
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	100	263	100	1	100	263	100
	TOTAL	1	14,29	263	2,2	1	14,29	263	2,2
TOTALES	Total Abierto criterio precio								
	Total Abierto criterios múltiples	6	85,71	11.310	94,81	6	85,71	11.310	94,81
	Total Procedimiento Negociado con Publicidad	1	14,29	619	5,19	1	14,29	619	5,19
	TOTAL	7	100	11.929	100	7	100	11.929	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
143	27.589
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.13.8. CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Procedimiento negociado con publicidad	1	100	609	100	1	100	609	100
	TOTAL	1	100	609	100	1	100	609	100
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total procedimiento negociado con publicidad	1	100	609	100	1	100	609	100
	TOTAL	1	100	609	100	1	100	609	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
1	609
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.14. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio (AP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	1	100,00	1.749	100	1	100	1.749	100
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	1	5	1.749	12	1	100	1.749	100
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	16	84	10.993	96	15	94	10.489	95
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	3	16	515	4	3	100	515	100
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	19	86	11.508	81	18	95	11.004	96
Suministro	Abierto criterio precio (AP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	2	100	998	100	2	100	998	100
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	2	9	998	7	2	100	998	100

IV.14. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterio precio (AP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterios múltiples (AM)	19	86	13.740	96	18	95	13.236	96
	Total procedimiento negociado con publicidad (NC)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	3	14	515	4	3	100	515	100
	Total contratación centralizada (CC)								
	Total	22	100	14.255	100	21	95	13.751	96

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
122	19.525
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
105	18.235

IV.14.2. AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Restringido criterio precio (RP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	1	50	200	55	1	100	200	100
	Restringido criterios múltiples (RM)								
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	50	164	45	1	100	164	100
	Diálogo competitivo (DC)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	2	100	364	100	2	100	364	100
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterio precio (AP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total restringido criterio precio (RP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterios múltiples (AM)	1	50	200	55	1	100	200	100
	Total restringido criterios múltiples (RM)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado con publicidad (NC)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	50	164	45	1	100	164	100
	Total diálogo competitivo (DC)								
	Total contratación centralizada (CC)								
	Total	2	100	364	100	2	100	364	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
53	2.439
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
27	1.650

IV.14.3. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	8	1.011	13				
	TOTAL	1	8	1.011	13	0	0	0	0
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	6	50	1.919	24	4	67	1.561	81
	Procedimiento negociado sin publicidad	2	18	1.919	24				
	TOTAL	8	68	3.838	48	4	50	1.561	41
Suministro	Abierto criterio precio	1	8	377	5				
	Abierto criterios múltiples	1	8	2.200	28	1	100	2.200	100
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	8	463	6				
	TOTAL	3	24	3.040	39	1	33	2.200	72
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	8	377	5				
	Total abierto criterios múltiples	8	68	5.130	65	5	63	3.761	73
	Total procedimiento negociado sin publicidad	3	24	2.382	30				
	TOTAL	12	100	7.889	100	5	42	3.761	48

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
93	17.520
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
66	10.205

IV.14.4. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Restringido criterio precio (RP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	9	90	4.942	95	8	89	4.075	82
	Restringido criterios múltiples (RM)								
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	10	259	5	1	100	259	100
	Diálogo competitivo (DC)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	10	100	5.201	100	9	90	4.334	83
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterio precio (AP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total restringido criterio precio (RP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterios múltiples (AM)	9	90	4.942	95	8	89	4.075	82
	Total restringido criterios múltiples (RM)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado con publicidad (NC)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	1	10	259	4,98	1	100	259	100
	Total diálogo competitivo (DC)								
	Total contratación centralizada (CC)								
	Total	10	100	5.201	100	9	90	4.334	83

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
43	6.733

IV.16. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	9	10	60.854	45	3	3	31.263	21
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	1	975	1				
	TOTAL	10	11	61.829	46	3	3	31.263	21
Servicios	Abierto criterio precio	12	12	12.552	8	7	7	9.198	6
	Abierto criterios múltiples	46	52	25.276	19	20	20	8.841	5
	Procedimiento negociado sin publicidad	11	13	22.953	17	5	5	11.261	8
	TOTAL	69	70	60.781	41	32	32	29.300	20
Suministro	Abierto criterio precio	1	1	377					
	Abierto criterios múltiples	14	16	19.603	14	9	9	12.850	9
	Procedimiento negociado sin publicidad	5	6	5.083	4	2	2	1.261	1
	TOTAL	20	23	25.063	18	11	11	14.111	10
TOTALES	Total abierto criterio precio	13	13	12.929	9	7	7	9.198	6
	Total abierto criterios múltiples	69	69	105.733	78	22	22	52.954	36
	Total procedimiento negociado sin publicidad	17	17	29.011	21	7	7	12.522	8
	TOTAL	99	100	147.673	100	35	35	74.674	51

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
1.351	1.813.052
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
235	48.516

IV.16.1. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	1	100	8.949	100	1	100	8.949	100
	TOTAL	1	100	8.949	100	1	100	8.949	100
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	100	8.949	100	1	100	8.949	100
	TOTAL	1	100	8.949	100	1	100	8.949	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
33	17.520
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.16.2. INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	100	546	100	1	100	546	100
	TOTAL	1	100	546	100	1	100	546	100
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	1	100	546	100	1	100	546	100
	TOTAL	1	100	546	100	1	100	546	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
55	3.712
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
46	3.025

IV.16.3. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	2	15	3.151	22	1	50	2.427	77
	TOTAL	2	15	3.151	22	1	50	2.427	77
Servicios	Abierto criterio precio	1	8	474	3				
	Restringido criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	31	2.959	21	4	100	2.959	100
	Procedimiento negociado sin publicidad	3	23	1.433	10	1	33	261	18
	TOTAL	8	62	4.866	34	5	63	3.220	66
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	3	23	6.131	44				
	TOTAL	3	23	6.131	44	0	0	0	0
Concesión de obras públicas	Abierto criterio precio								

IV.16.3. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
TOTALES	Total abierto criterio precio	1	8	474	3				
	Total abierto criterios múltiples	9	69	12.241	87	5	56	5.386	44
	Total procedimiento negociado sin publicidad	3	23	1.433	10	1	33	261	18
	TOTAL	13	100	14.148	100	6	46	5.647	40

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
225	1.591.182
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.16.4. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Restringido criterios múltiples	2	50	1.168	26	1	50	995	85
	TOTAL	2	50	1.168	26	1	50	995	85
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	2	50	3.249	74	1	50	650	20
	TOTAL	2	50	3.249	74	1	50	650	20
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	4	100	4.417	100	2	50	1.645	37
	TOTAL	4	100	4.417	100	2	50	1.645	37

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
38	3.576
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
11	3.300

IV.16.5. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	3	100	3.595	100	1	33	1.270	35
	TOTAL	3	100	3.595	100	1	33	1.270	35
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	3	100	3.595	100	1	33	1.270	35
	TOTAL	3	100	3.595	100	1	33	1.270	35

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
38	5576
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
75	10.955

IV.16.6. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio	10	100	3.129	100	1	10	249	8
	TOTAL	10	100	3.129	100	1	10	249	8
TOTALES	Total abierto criterio precio	10	100	3.129	100	1	10	249	8
	TOTAL	10	100	3.129	100	1	10	249	8

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
60	5.227
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.16.7. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACION	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NUMERO	%	IMPORTE	%	NUMERO	%	IMPORTE	%
Obras	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	4	16	48.387	80	1	25	26.832	55
	TOTAL	5	20	49.362	82	1	25	26.832	54
Servicios	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	15	60	8.046	13	10	67	2.056	26
	Procedimiento negociado sin publicidad	3	12	1.447	3				
	TOTAL	18	72	9.493	16	10	56	2.056	22
Suministro	Abierto criterio precio								
	Abierto criterios múltiples	1	4	580	1				
	Procedimiento negociado sin publicidad	1	4	750	1				
	TOTAL	2	8	1.330	2	0	0	0	0
TOTALES	Total abierto criterio precio								
	Total abierto criterios múltiples	20	80	57.013	95				
	Total procedimiento negociado sin publicidad	5	20	3.172	5				
	TOTAL	25	100	60.185	100	11	44	28.888	48

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
741	142.948
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
0	0

IV.17. MINISTERIO DE IGUALDAD

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN	EXPEDIENTES REMITIDOS				EXPEDIENTES FISCALIZADOS			
		NÚMERO	%	IMPORTE	%	NÚMERO	%	IMPORTE	%
Servicios	Abierto criterio precio (AP)								
	Restringido criterio precio (RP)								
	Abierto criterios múltiples (AM)	5	100	3.663	100	5	100	3.663	100
	Restringido criterios múltiples (RM)								
	Procedimiento negociado con publicidad (NC)								
	Procedimiento negociado sin publicidad (NS)								
	Diálogo competitivo (DC)								
	Contratación centralizada (CC)								
	Total	5	100	3.663	100	5	100	3.663	100
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterio precio (AP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total restringido criterio precio (RP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total abierto criterios múltiples (AM)	5	100	3.663	100	5	100	3.663	100
	Total restringido criterios múltiples (RM)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado con publicidad (NC)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total procedimiento negociado sin publicidad (NS)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total diálogo competitivo (DC)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total contratación centralizada (CC)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	5	100	3.663	100	5	100	3.663	100

RELACIONES DE CONTRATOS	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
20	2.527
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	
Nº EXPEDIENTES	IMPORTE
5	2.099

- 1.- Estudio de viabilidad de la obra pública (art. 112 LCSP).
- 2.- Documentación preparatoria en la que se determinen la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (art. 22 LCSP).
- 3.- Documento de evaluación previa (art. 118 LCSP).
- 4.- En caso de cofinanciación de contrato, acreditación de la plena disponibilidad de las distintas aportaciones, de la orden de su abono y de la inclusión de garantías para su efectividad (art. 93.5 LCSP).
- 5.- Justificación del procedimiento y de los criterios de adjudicación elegidos (art. 93.4 LCSP).
- 6.- Declaración, si procede, del carácter secreto o reservado del contrato o relativa a la necesidad de medidas de seguridad especiales o a la existencia de protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado (art. 154 f) LCSP).
- 7.- Resolución motivada, en su caso, que establezca la improcedencia de la revisión de precios (art. 77.2 LCSP).
- 8.- Justificación, en su caso, del fraccionamiento del objeto del contrato, con la previsión de la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes (art. 74.3 LCSP).
- 9.- Autorización, en su caso, del Consejo de Ministros (art. 292 LCSP).
- 10.- Autorización, en su caso, del titular del Departamento Ministerial.
- 11.- Declaración motivada de urgencia (art. 96.1 LCSP).
- 12.- Dación de cuenta al Consejo de Ministros de la orden de ejecución (art. 97.1.b) LCSP).
- 13.- Aprobación del anteproyecto de explotación y de las obras precisas, en su caso (arts. 114 y 117 LCSP).
- 14.- Informe del proyecto por la Oficina de Supervisión de Proyectos (arts. 105.1, 114 y 117 LCSP).
- 15.- Aprobación del proyecto por el órgano de contratación (arts. 105.1, 114 y 117 LCSP).
- 16.- Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de contratación (arts. 93.3 y 99 LCSP).
- 17.- Documento descriptivo que sustituye a los pliegos.
- 18.- Pliego de prescripciones técnicas particulares aprobado por el órgano de contratación (arts. 93.3 y 100 LCSP).
- 19.- Informe del Consejo Superior de Administración Electrónica o, en su caso, de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica respectiva, si la contratación se refiere a equipos y sistemas para el tratamiento de la información (R.D. 589/2005, de 20 de mayo).
- 20.- Acta de replanteo del proyecto (art. 105 LCSP).
- 21.- Bases del concurso (art. 169 LCSP).
- 22.- Programa funcional (art. 119 LCSP).
- 23.- Certificado de existencia de crédito o documento que legalmente lo sustituya (art. 93.3 LCSP).

- 24.- Fiscalización previa de la Intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre (art. 93.3 LCSP).
- 25.- Resolución motivada aprobando el expediente de contratación y el gasto, en su caso, y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación (art. 94.1 LCSP).
- 26.- Anuncios de la licitación publicados en diarios oficiales (arts. 126 y 161 LCSP).
- 27.- Documento descriptivo que sustituye a los pliegos (arts. 93.3 y 165.1 LCSP).
- 28.- Certificado del Registro del órgano de contratación relativo a las proposiciones recibidas (art. 80.5 LCSP).
- 29.- Escritos de invitación, a todos los admitidos, a presentar sus proposiciones (arts. 149 y 150 LCSP).
- 30.- Copia de las solicitudes de ofertas a empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato (art. 162 LCSP).
- 31.- Invitaciones remitidas para tomar parte en el diálogo competitivo (165.3 LCSP).
- 32.- Acuerdo motivado del órgano de contratación relativo a la selección de los empresarios concurrentes (arts 147, 148 y 149 LCSP) e informe de los servicios técnicos en que se fundamente.
- 33.- Propositiones económicas de los licitadores.
- 34.- Actas de la Mesa de Contratación y propuesta de adjudicación al órgano de contratación con la copia, en su caso, de los informes técnicos en los que se basa dicha propuesta (art. 134 LCSP).
- 35.- Escritos de reclamaciones, de solicitud de medidas provisionales o recursos interpuestos, en su caso, por los licitadores y documentación de los ulteriores trámites administrativos relacionados con los mismos.
- 36.- Evaluación previa de las ofertas (art. 132.5 LCSP).
- 37.- Informe del jurado en el que conste la clasificación de los proyectos (art. 172.5 LCSP).
- 38.- Documentación en la que se recoja la evaluación llevada a cabo respecto de las ofertas presentadas, en función de los criterios preestablecidos (art. 167 LCSP).
- 39.- Si existen ofertas con valores anormales o desproporcionados: a) Solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en la baja, b) Alegaciones de dichos licitadores, c) informe técnico del servicio correspondiente (art. 136 LCSP).
- 40.- Acuerdo de adjudicación provisional, así como, en su caso, la motivación con referencia a los criterios de adjudicación que figuren en el pliego (art. 135.3 LCSP).
- 41.- Acreditación, en su caso, de la clasificación del adjudicatario (art. 54 LCSP).
- 42.- Documentos acreditativos de hallarse el adjudicatario al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestos por las disposiciones vigentes (art. 135.4 LCSP).
- 43.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del adjudicatario de no estar incurso en prohibición de contratar, conforme a los arts. 49 y 50 LCSP (art. 62 LCSP).
- 44.- Justificación aportada, en su caso, por el adjudicatario de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, según los medio de acreditación que el órgano de contratación haya precisado en el anuncio, de entre los reseñados en los arts. 63 a 68 LCSP (arts. 51 a 53 LCSP).

- 45.- Resguardo acreditativo de la constitución de garantía definitiva por parte del adjudicatario provisional y, en su caso, de la complementaria que se hubiese establecido en el pliego (arts. 83, 84, 86 y 87 LCSP).
- 46.- Acreditación, en su caso, de la formalización en escritura pública de la unión temporal de empresas adjudicataria (art. 135.4 LCSP).
- 47.- Resolución de adjudicación definitiva.
- 48.- Documentos contables de disposición del gasto.
- 49.- Retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación en contratos de carácter plurianual (art. 47.2 LGP, según redacción dada por la disposición final segunda de la LCSP).
- 50- Documento administrativo de formalización del contrato (art. 140 LCSP).
- 51.- Notificación de la adjudicación a los licitadores (art 137 LCSP) y, en su caso, copia de las peticiones, aclaraciones y contestaciones a los licitadores no seleccionados.
- 52- Anuncios publicados en los diarios oficiales donde se da cuenta de la adjudicación (art. 138 LCSP).